

UNIVERSIDAD DE MADRID
FACULTAD DE DERECHO



TESIS DOCTORAL

Constitución política de Colombia

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR
PRESENTADA POR

Francisco Carrillo Guerrero

Madrid, 2015

*Caja 102
Fol 2*

62+

CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE
COLOMBIA.

TESIS presentada para aspirar al grado de Doctor
en Derecho Civil y Canónico por FRANCISCO CARRILLO GUERRERO.

---000---

Esta monografía tiende primordialmente a indicar un método para estudiar la vida constitucional de un país en relación con la de otros Estados y tomando como fundamento el examen crítico de su historia, trabajo que no se había intentado aún en lo referente a la evolución política de cada una de las Repúblicas hispano-americanas.

Fué iniciada esta labor en la cátedra de "HISTORIA DE LAS INSTITUCIONES POLITICAS Y CIVILES DE AMERICA", de la Universidad Central, a cargo del ilustre americanista D. Rafael Altamira y Crevea, cuyas explicaciones suministraron los materiales básicos.

En la investigación se ha procurado llegar, en lo posible, a las propias fuentes, comprobando, y rectificando en muchas ocasiones, los textos contenidos en las compilaciones publicadas hasta hoy. Excede de dos mil el número de papeletas coordinadas y sintetizadas para este estudio, y cuya redacción y ordenamiento se ha hecho con la mayor fidelidad.

Conste la gratitud del autor al querido Maestro, así como también a las demás personas y entidades que facilitaron el prelijo acopio de datos, muy especialmente a la Sociedad Unión Ibero-Americana, al Instituto de Reformas sociales y al Consulado de Colombia en Madrid.

I N D I C E.

	Folios.
PROLEGOMENOS.....	27
I.- De la Nación y el territorio.....	107
II.- De los habitantes.	32.
III.- Derechos civiles y garantías sociales	35.
IV.- La Iglesia y el Estado.	46.
V.- Poderes nacionales.....	57.
VI.- El Congreso.	60.
VII.- Organos del Poder Ejecutivo.....	79.
VIII.- Administración de Justicia.....	92.
IX.- Organización departamental y municipal.....	100.
X.- Defensa nacional.....	105.
XI.- Reforma constitucional.	116.
APENDICE NUMERO 1.- Relación cronológica de los principales hechos y documentos que expresan el proceso histórico de las instituciones políticas de Colombia.....	119.
APENDICE NUMERO 2.- Ultima Constitución federal de Colombia, o sea la de 8 de mayo de 1863.....	142.
APENDICE NUMERO 3.- Texto original de la "Constitución de la República de Colombia" de 5 de agosto de 1886.....	179.
APENDICE NUMERO 4.- Reformas que ha experimentado la vigen- te Constitución política de la República de Colombia.....	235.
APENDICE NUMERO 5.- Texto vigente de la Constitución políti- ca de Colombia, una vez incorporadas al original de 5 de agosto de 1886, las reformas posteriores no derogadas....	283.
APENDICE NUMERO 6.- Tratado de 6 de abril de 1914 entre Co- lombia y los Estados Unidos, sobre independencia de Pana- má.	332.
APENDICE NUMERO 7.- Repertorio bibliográfico.	346.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA.

---oo---

Prolegómeno.

Colombia es el país sud-americano en que se conserva con más pureza e integridad el espíritu hidalgo de la raza ibera.

Se ha dicho que si España dejase alguna vez de existir como nación, su alma podría encontrarse en América, y bien puede afirmarse que esto acaecería con mayor culminación en Colombia. El alma nacional de Colombia es alma española.

Mas Colombia que heredó de la Metrópoli todas sus virtudes y supo acrisolarlas y esclarascerlas con su propio valer, heredó también los defectos; mejor dicho, excesos, porque son extralimitaciones de las propias virtudes nacionales. Así la lealtad, la caballerosa lealtad característica de la raza española, ha conducido a los colombianos, como condujo en más de una ocasión a los españoles, hacia el exceso del apasionamiento personal, origen y principio en Colombia de cruentas luchas

civiles entre los partidarios de uno u otro caudillo político. De igual modo el sentimiento de dignidad nacional, el confiar demasiado en las propias fuerzas, ha llevado a Colombia, como en muchas ocasiones llevó a España, al aislamiento y a hacer frente con gallardía a fuerzas cien veces mayores.

Y es de notar que no sólo en los principios sino también en las consecuencias, o sea en los hechos que la realidad ofrece, puede observarse la misma modalidad en la historia de Colombia que en la historia de España, siendo curioso que sus choques internacionales más duros hayansido con la misma potencia que tomó pretexto en la explosión del "Maine" para declarar la guerra a España: la insurrección de Panamá y su independencia obedecieron análogas instigaciones y tuvieron el mismo apoyo que la insurrección e independencia cubanas.

Al considerar, pues, en conjunto, las relaciones de la Metrópoli con las nuevas Repúblicas de habla española, que viven nuestro derecho y que hoy continúan en una relación filial respecto a España, no puede

menos de destacarse entre todos los países sud-americanos, el Estado de Colombia, a cuyas instituciones políticas habrá de concretarse esta monografía, limitada a ligeros comentarios sobre el texto vigente de la Constitución colombiana.

La última Constitución federal de Colombia tiene fecha 8 de mayo de 1863. La vigente de 1886 es unitaria, por lo que, a primera vista, pudiera imaginarse como una antítesis de la anterior.

Sin embargo, no sucede así, pues la lucha mantenida entre los principios federal y unitario no representa otra cosa, en la mayor parte de los países de América, sino la disputa entre partidos que pretenden alcanzar y ejercer el poder. No son, en realidad, las doctrinas lo que se disputa, sino las personas. A lo sumo hay choque entre el sentimiento tradicional y el sentido progresista; mas por lo general es lucha de partidos y su característica el caudillaje.

En Colombia cuando triunfaba el partido federalista, las ~~prácticas~~ ^{deber-}

~~estas~~ ^{también} se llamaban Estados soberanos e independientes; y al imponerse el régimen unitario, los llamados Estados soberanos e independientes, vuelven a denominarse Departamentos ~~e provincias~~. Todo se reduce, por lo general, a cambios de personas y de nombres, y esto se revela examinando el texto de las distintas Constituciones que se sucedieron en Colombia desde la época del Libertador hasta nuestros días.(a)

Así es que la Constitución de 1886 no ha de ser considerada como representativa de un cambio radical respecto a las que la precedieron, sino como resultado de una evolución, casi siempre turbulenta y apasionada, pero constantemente gradual y progresiva, hasta que fragua en el

(a) A raíz de la emancipación se ensayó la forma federal; durante la época de la Gran Colombia (1.821 a 1.831) prevaleció la forma central unitaria, que siguió, en la Nueva Granada, hasta 1853, fecha en que se dió una Constitución federal. Federales fueron también las Constituciones de 1858 y 1863. La época federal, propiamente dicha, se extiende, pues, desde 1853 hasta 1886, fecha en que terminó, definitivamente quizás, el federalismo, con la Constitución unitaria de la República de Colombia.

texto legal cuyo examen intentamos.

Comienza la Constitución vigente invocando el nombre de Dios, "fuente suprema de toda autoridad". Esta invocación refleja el triunfo de las ideas conservadoras frente al extremo demagógico que solían representar los partidarios del federalismo, porque es de notar que, como anteriormente queda indicado, más que la idea del federalismo y centralismo, movía a las gentes, en el flujo y reflujo que se nota en la evolución política de Colombia, de una parte, los sentimientos tradicionales, y de otra los impulsos progresistas y transformadores.

Esta es la diferencia real y efectiva entre lo que representaban los hombres que suscribían la Constitución federalista de 8 de mayo de 1863, hablando y obrando "en nombre y por autorización del pueblo y de los Estados Unidos colombianos", y los de 1886 que redactan su Constitución "en nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad".

La única cuestión de principios que se dilucidaba, por consiguiente-

te, en las luchas políticas colombianas, es si la potestad viene de arriba a abajo, o si no hay más poder que el ejercido por virtud de la voluntad del pueblo. Por éste los unitarios invocan el nombre de Dios al ejercer la más alta prerrogativa del Poder, o sea la facultad de hacer las leyes, y los federalistas lo hacen en nombre y representación del pueblo.

Claro es que, aun siendo ésta, en realidad, la única cuestión de principios que dividía en Colombia a federalistas y unitarios, es también cierto que pocas veces la conducta se acomodaba fielmente a los principios sustentados.

Afortunadamente aquellas luchas despiadadas, luchas de partidismos, cesaron ya mediante esta Constitución que, aunque mantiene y afirma uno de los ^{dos} principios que aparecían en pugna, respeta o tolera en su articulado las conquistas realizadas por la libertad y el progreso.

Por esto, a continuación de invocar el nombre de Dios, "fuente suprema de toda autoridad", va otra afirmación, que es la aceptación del prin

cipio que reconoce la soberanía nacional, diciendo: "Vista la aprobación que impartieron las Municipalidades de Colombia a las bases de Constitución expedidas el día 1° de diciembre de 1885".

Y por último, en esta tendencia ecléctica de la Constitución que analizamos, que acoge y ampara toda ~~separación~~ ^{separación} que, aun cuando al parecer contraría al principio fundamental, se acomode a las exigencias de lo justo y del bien público, termina el corte preámbulo especificando como fines de la Constitución "afianzar la unidad nacional y asegurar los bienes de la justicia, la libertad y la paz."

Vemos, pues, cómo de aquellas encarnizadas luchas a que se ha aludido anteriormente, surge una ley que puede considerarse como síntesis armonizadora de todas las tendencias y como copulación de las ideas y sentimientos que hasta entonces habían agitado constantemente al país.

La Constitución de 5 de agosto de 1886, es una de las Constituciones más voluminosas y más desarrolladas que se conocen, pues comprende

- 9 -

210 artículos, distribuidos en 20 títulos, y además un título ~~añadido~~ adicional con 15 disposiciones transitorias. Es muy sistemática, pero peca de prolija, ya que no sólo comprende los principios correspondientes a la materia constitucional, sino también disposiciones que ordinariamente suelen llevarse a leyes orgánicas y a reglamentos.

I.- De la Nación y el territorio.

La Constitución declara que la nación colombiana se reconstituye en forma de República unitaria. Y a continuación acepta el principio de la soberanía nacional considerándolo compatible con aquella primera invocación que reconoce en Dios la fuente suprema de toda autoridad.

Afirma que de la Nación emanan los Poderes públicos. Es decir, que la potestad viene de abajo a arriba, cosa que, aun cuando parezca contradictoria, nos revela el sentido coléctico en que fragua la Constitución política de Colombia, ya que ^{se nota} ~~aparece~~ bien claramente el deseo de armonizar dos principios que a primera vista aparecen como antitéticos, aunque en realidad no lo son.

Ataca inmediatamente la cuestión de límites, aunque dejando en pie este secular problema que tantas luchas y tantos conflictos internacionales originó. "Las líneas divisorias de Colombia con las naciones limi-
tre-

tes -dice- se fijarán definitivamente por tratados públicos, pudiendo éstos separarse del principio del "uti possidetis" de derecho de 1810". Es lástima que en una Constitución que tenía todos los caracteres de definitiva, y que lo ha sido y viene siéndolo durante largo lapso de tiempo, no se consiguiese dejar de una vez salvado este escollo; bien es verdad que, afectando el problema a lo internacional, no resultaba hacedero para los legisladores de la época el resolver esta cuestión.

Pero aun las divisiones interiores no resultaron determinadas, y de una manera vaga se dice que "las secciones que componían la Unión Colombiana, denominados Estados y Territorios nacionales, continuarán siendo partes territoriales de la República de Colombia, conservando los mismos límites actuales y bajo la denominación de Departamentos." "Las líneas divisorias -añade la Constitución- serán determinadas por comisiones demarcadoras nombradas por el Senado."

Es más, parece como si hubiese deliberado propósito en el legislador de que no se concretase en la Constitución la división territorial,

pues transcurridos muchos años, por Ato reformatorio núm. 3 de 1905, fecha 30 de marzo, se dispone "que la ley podrá alterar la división territorial de ~~la~~ toda la República, formando el número de Departamentos que estime conveniente para la Administración pública". Y añade el art. 2° de dicho Ato reformatorio: "Podrá también (la ley) segregar Distritos municipales de los Departamentos existentes o de los que se formen, para organizarlos o administrarlos con arreglo a leyes especiales."

Este deliberado propósito de no dejar definida de una manera absoluta y permanente la división territorial se revela en varios artículos de la Constitución y en otros Atos reformativos del mismo año de 1905. En efecto, el art. 5° de la Constitución determina la forma y condiciones a que debe sujetarse el reconocimiento de nuevos Departamentos por desmembración de los existentes, y el citado Ato Legislativo de 30 de marzo de 1905 admite la posibilidad de que estos nuevos Distritos, formados por segregación, puedan ser organizados y administrados con arre-

gle a leyes especiales.

Bien es verdad que por Acto Legislativo número 3 de 1910 quedaron casi restablecidas en esta parte las restricciones del texto original de la Constitución, y aun en cierto modo aumentadas, aunque dejando siempre a salvo el sentido unitario y centralista.

Pero volvamos a la cuestión de límites propiamente dicha, o sea a la fijación de la extensión territorial de Colombia, problema capitalísimo para aquel país y que aun queda en pie con serio peligro de originar conflictos internacionales. Merece esto detenido estudio y aunque procuraremos reducirlo a los sucintos términos que permite esta monografía, no puede menos de concedérsele la importancia que realmente tiene, sobre todo en vista de que la Constitución no sólo soslaya la dificultad, sino que declara expresamente que las líneas divisorias de Colombia con las naciones limítrofes se fijarán en definitiva por tratados públicos que podrán separarse del uti possidetis de derecho de 1810.

En todas las Repúblicas americanas, las cuestiones de límites se

resolvieron casi siempre recurriendo a antecedentes históricos que se remontan a la época del descubrimiento y conquista de América. Así toda cuestión de límites entre Repúblicas hispanoamericanas es, en realidad, una cuestión de historia colonial española, toda vez que al constituirse cada nueva nacionalidad, se establecieron sus límites de acuerdo con las antiguas divisiones de los virreinos españoles. El dilucidar estas cuestiones compete, por tanto, más al historiador que al juriscónsulto o al político, y quizás sea ésta la causa a que obedece esa vaguedad que se observa en la Constitución del 86.

Antes de entrar en vigor dicha Ley Fundamental, y posteriormente a su publicación, hasta nuestros días, las cuestiones de límites fueron frecuentes, y solían resolverse, como en la mayor parte de los países hispanoamericanos, previa una compilación de datos históricos que, en más de una ocasión, exigió la venida a España de comisionados americanos para hacer o completar estas investigaciones históricas en los archivos españoles. Otras veces, reconociéndose la superior competencia histórica

de España, se ha estimado que la compilación de documentos sobre cuestiones de límites, debía ser encomendada a España, aunque erróneamente la confiaron a jurisconsultos y no a historiadores.

En alguna ocasión el Rey de España o alguna entidad española, ejercieron de árbitros. Así por ejemplo, los límites entre Colombia y Venezuela fueron fijados, después de varios años de discusiones diplomáticas ineficaces, por el laudo arbitral que dictó la Reina Regente de España, Doña María Cristina, en 1891, decisión a que se sometieron los Gobiernos de Colombia y Venezuela, quedando así terminada la enconada disputa entre estos dos Estados.

Las cuestiones de límites más frecuentes que ha sostenido Colombia fueron con el Ecuador y Perú, aunque también sostuvo varias con Venezuela y Brasil. Panamá, en la época en que se declaró vigente la Constitución que comentamos, formaba parte integrante del territorio nacional de Colombia, y su independencia originó series conflictos de carácter internacional.

La fijación de fronteras con el Ecuador ha ocasionado conflictos que se han venido resolviendo principalmente por las armas. Desde que se deshizo la Unión realizada por Bolívar, surgieron cuestiones de límites entre el Ecuador y Colombia por adjudicarse ambos Estados un determinado territorio. El Ecuador retuvo varias provincias del Sur, que fueron reconquistadas en 1833 por el ejército colombiano y reincorporadas a la soberanía de Nueva Granada, en el mismo año, por el Tratado de 8 de diciembre. Este convenio ha sido reformado en varias ocasiones, y como la dificultad de fijar la frontera no pudo orillarse de un modo totalmente satisfactorio, los límites demarcados han continuado considerándose provisionales, y con este carácter se expresan en las Constituciones de 1858, 1863 y 1886. Esta última fijaba respecto al Ecuador, con dicho carácter provisional, los designados en el Tratado de 9 de julio de 1856, que reformó el de 8 de diciembre de 1833. Finalmente el Ato Legislativo número 3 de 1910, incorporado a la Constitución vigente, en sustitución del artículo 3° de la misma, restablece,

provisionalmente, los fijados en Ley colombiana de 25 de junio de 1824.

La delimitación de fronteras con el Perú ha sido también muy discutida. Hoy mismo se da el caso curioso de que, estando además indecisa la cuestión de límites entre el Perú y el Brasil, resulta que Colombia tiene la misma frontera con ambas repúblicas, precisamente en la parte disputada, con lo que la controversia se hace más ardua y difícil.

Mediante dos tratados, uno de 1823 y otro de 1829, se pretendió resolver este litigio, y además, mediante el Protocolo Mosquera-Pedemonte de 1830; pero este Pacto que tendía a definir lo referente a la posesión de la región amazónica del Caquetá y del Putumayo, origen principal de estas disensiones internacionales, no ha sido reconocido aún por el Perú, alegando, para aumentar su territorio a expensas de Colombia, que una Real cédula de 1802 cambió los límites de los antiguos virreinos de la Nueva Granada y del Perú, argumento especioso, toda vez que dicha Real Cédula no cambió la jurisdicción civil, sino

que se refería solamente a lo militar y eclesiástico, como lo prueba el hecho de que, después de expedida dicha Real cédula, el territorio que reclama el Perú continuó gobernado por el Virrey de Santafé.

El Acto Legislativo número 3 de 1910, incorporado, como queda dicho, a la Constitución vigente, determina, respecto al Perú, los mismos límites adoptados en el Protocolo Mosquera-Pedemonte, en cumplimiento del Tratado de 22 de septiembre de 1829.

El problema, sin embargo, subsiste aún. El Presidente Restrepo, en su Mensaje al Congreso de 1913, manifiesta bien claramente que todas las negociaciones para llegar a un acuerdo con el Perú habían resultado estériles, pues dice textualmente: "También se han hecho esfuerzos incesantes para llegar a una inteligencia amistosa con el Perú, prefiriendo francamente mi Gobierno la vía del arbitraje, así para continuar la civilizadora tradición de la Cancillería colombiana, como por el convencimiento íntimo de ^{que} éste es el único remedio eficaz para llegar a una solución que satisfaga a las dos naciones. Como se ha

tenido conocimiento de algunos hechos que afectan a la soberanía colombiana en las regiones del Caquetá y del Putumayo, en oportunidad se han presentado ante el Gobierno del Perú las debidas protestas en guarda del buen nombre y de los derechos de Colombia."

Tampoco está bien definida la frontera con el Brasil, pues aun cuando en 1908 se firmó un tratado entre ambas potencias acerca de la navegación del Amazonas, quedan aún otros puntos litigiosos.

Antes de esa fecha, el 24 de abril de 1907, se había firmado un Tratado disponiendo la demarcación de fronteras; pero el Presidente Restrepo, en el citado Mensaje de 20 de julio de 1913, reconoce que dicho Tratado no se cumplió, diciendo: "Mi Gobierno ha insistido con el del Brasil en que se verifique la demarcación de fronteras prevista en el Tratado de 24 de abril de 1907." Y el mismo Restrepo, en el Mensaje al Congreso del siguiente año, reproduce, casi literalmente, la misma afirmación: "El Gobierno -dice- se ha dado cuenta de la necesidad que hay de demarcar con el Brasil la línea estipulada en el

Tratado de 1907, y ha continuado haciendo gestiones diplomáticas ante aquél Gobierno para llegar a este resultado." En 1910, el Acta Legislativa número 5 determinó los expresados límites de acuerdo con el Tratado de 1907 y con el uti possidetis de 1810 ~~xxxx~~ referente a las posesiones portuguesas.

Las fronteras con Venezuela fueron fijadas definitivamente en 1891, mediante un laudo del Rey de España, suscrito por la Reina Regente, de conformidad con la propuesta formulada por una Comisión que había estudiado a fondo la materia y previos poderes otorgados por las Repúblicas contendientes; pero este laudo no fué aceptado sin reservas por Venezuela, no obstante el compromiso contraído, quedando la cuestión en pie, por lo menos hasta el año 1917 en que el Presidente Concha anunciaba al Congreso el hecho de haberse canjeado los Tratados con el Ecuador y Venezuela y de estar ambos en vía de ejecución.

Pero el problema de límites alcanzó sus mayores dificultades por la parte de Panamá, al separarse este Departamento de la República

de Colombia.

El territorio de Panamá perteneció al Virreinato de Nueva Granada, luego a la Gran Colombia y por último a la República de Colombia, hasta el 3 de noviembre de 1903, fecha en que, con el apoyo de los norteamericanos, proclamó su independencia, erigiéndose en República soberana.

Son de gran interés por esto las relaciones diplomáticas entre Colombia y los Estados Unidos. El primer documento, expresión de estas relaciones, es un Tratado de paz y amistad entre ambos países y está firmado en Bogotá con fecha 12 de diciembre de 1846. El artículo 35 de este Tratado establece que los ciudadanos y los buques de los Estados Unidos gozarán en Panamá de los mismos privilegios que corresponden a los buques y ciudadanos colombianos. Y como esto era una concesión que hacía Nueva Granada, implica el reconocimiento, por parte de los Estados Unidos, de la soberanía del Estado colombiano sobre todo el territorio de Panamá. Así, pues, los Estados Unidos reconocían expresa y solemnemente en ese documento el derecho de propiedad y la soberanía de

Nueva Granada sobre el Istmo.*

Sin embargo los Estados Unidos de América no perdían de vista su propósito de alcanzar la hegemonía sobre el futuro canal de Panamá, y mientras Nueva Granada se debilitaba en funestas luchas civiles, continuaban alentando tales disturbios, principalmente en el territorio panameño.

El 10 de septiembre de 1857, los Estados Unidos hicieron firmar a Colombia un nuevo Tratado, el de Washington, por virtud del cual le impusieron, entre otras condiciones leoninas, las siguientes: 1ª. Declaración de neutralidad de todos los puertos de Panamá; 2ª, indemnización metálica a los Estados Unidos por supuestos perjuicios comerciales, y 3ª, concesión de una estación carbonera en Panamá a Norteamérica. Los Estados Unidos exigieron estas condiciones a Colombia, con infracción del Tratado de 1846, tomando como pretexto la intervención en el territorio de Panamá con motivo de las discordias interiores; pero en los mismos términos de las condiciones impuestas, resplandeció el reconocimiento que hacen los Estados Unidos de la soberanía de Colombia

sobre Panamá.

Más tarde una compañía francesa proyectó la construcción del canal, y los Estados Unidos hicieron fracasar el intento. En 1873 impidieron al Poder Central de Colombia ejercer la prerrogativa de contener por la fuerza una rebelión que estalló en Panamá, después de haber encendido el fuego de la discordia, y no se limitaron a éste, sino que efectuaron un desembarco de fuerzas en aquel país. Nuevamente intervinieron los Estados Unidos el año 1884, en el territorio de Panamá, tomando como pretexto el incendio de la ciudad de Colón durante la lucha entre el Presidente Núñez y el partido liberal panameño.

Colombia no podía oponerse por la fuerza a las intervenciones de tan poderosa nación, y además le faltó todo apoyo exterior, por lo que, viéndose aislada frente a Norteamérica, tuvo al fin que soportar de hecho la separación de Panamá que se consumó definitivamente, como queda dicho, en 3 de noviembre de 1903. Todas las noticias coinciden en que, en esta última ocasión, como en las anteriores, un envío de fuerzas del Poder Central hubiera bastado para reprimir la rebelión panameña; pero

los Estados Unidos se opusieron al ejercicio de la facultad soberana de Colombia, se pretexto de evitar derramamiento de sangre, y consiguieron su objetivo, pues, mediante concesiones de gratitud de Panamá, lograron que el Canal se hiciese con capitales ^{norte}americanos, y que en vez de ser obra internacional, sea una empresa realizada principalmente para el particular interés de Norteamérica.

El Presidente ~~Roosevelt~~ Roosevelt fué el principal instigador de las rebeliones panameñas, con la agravante de que, después de haber conculcado los principios de la justicia y del mutuo respeto internacional para la consecución de su propósito, trató despiadadamente a Colombia, ~~manipulando~~ falseando la historia en sus discursos de propaganda.

Sin embargo, la tendencia del ex-Presidente Roosevelt, exageradamente imperialista, se vió contrarrestada por un sector de la opinión pública que protestaba contra la intervención armada de Norteamérica en el caso de Panamá. Chamberland, en un folleto titulado "Un capítulo de deshonor nacional", califica muy duramente este hecho.

Por efecto de esta reacción en favor de Colombia, se llegó a la redacción de un Tratado, fechado el 6 de abril de 1914, por virtud del cual los Estados Unidos ofrecían una excusa (satisfacción de palabra) a Colombia por el atropello de su soberanía, y, además, una indemnización en metálico por los perjuicios de índole material. Por su parte Colombia reconoce en este Tratado la independencia de Panamá y determina sus límites, poniendo término a la situación anómala que suponía el seguir considerando como límite de su territorio nacional la frontera de Panamá con Costa Rica, mientras los demás países del mundo venían reconociendo la independencia de Panamá.

Colombia, sometién dose a la fuerza de los hechos, y hallándose sola contra los Estados Unidos, aceptaba la excusa y la indemnización, y en reciprocidad, hacía el susodicho reconocimiento; pero este Tratado tardó mucho en ser aprobado por el Senado de los Estados Unidos a causa de la campaña de Roosevelt, cuyo pensamiento sobre esta cuestión se sintetiza en la siguiente frase pronunciada en San Francisco de California,

en una conferencia dada en 1915 con motivo de la Exposición del Pacífico y que recogió y comentó un ilustre americanista español: "Ni una palabra de excusa, ni un centavo de indemnización". Y a tal extremo llegó en sus efectos la labor imperialista de Roosevelt que, no obstante, los nobles esfuerzos realizados por Wilson y otros hombres de buena voluntad, el Tratado salió modificado en lo esencial del Senado norteamericano, ~~suprimida~~ que lo tuvo pendiente de aprobación más de siete años.

La satisfacción explícita de los Estados Unidos a Colombia, lejos de haber sido una humillación para el pueblo norteamericano, como sostenía Roosevelt, habría sido interpretada por la conciencia universal como un rasgo de nobleza de la poderosa nación. Por esto puede afirmarse que la supresión hecha de la cláusula que contenía la excusa o satisfacción de palabra por los acontecimientos de Panamá solo ha dañado a los Estados Unidos. Con sobrada razón dice la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Colombia en el "Informe" publicado en Bogotá en 1921, con motivo de la discusión ~~exist~~ de las modificaciones al

Tratado: "Para los fines morales y para la historia, en defecto de aquella cláusula, subsisten, en toda su fuerza, proclamando elocuentemente, ante Dios y ante los hombres, ante las generaciones actuales y futuras, ante el mundo entero, la injusticia con que un Gobierno de la gran democracia americana arrebató a Colombia la mejor porción de su territorio; subsisten, repetimos, en todo su vigor, el memorándum del Ministro Plenipotenciario señor Du Bois, presentado en 1913, en nombre del Gobierno republicano del Sr. Taft; la nota inicial del Ministro Plenipotenciario Sr. Thomson, en octubre del mismo año 1913, presentada en nombre del Gobierno demócrata del Sr. Wilson; las cartas, declaraciones y mensajes, por todo extremo expresivos, del mismo egregio Presidente Wilson; las manifestaciones, en igual sentido, del eminente Senador Stone, quien, por su ilustración, rectitud y sabiduría, presidió honrosamente la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, y subsistirá también el texto primitivo del Tratado de 6 de abril, con su valor de hecho cumplido e irrevocable. Además, los derechos preferenciales que se nos reconocen, cual

si fuésemos condueños en el Canal y en el ferrocarril de Panamá, y la indemnización de 25 millones de pesos oro, están proclamando, y proclamarán siempre en aquel Pacto ^{mejor}able que los Poderes públicos de la más grande y poderosa nación del Nuevo Mundo, inclinándose ante la evidencia, rindieran, de modo solemne, tributo a la justicia de la causa de una nación débil, como Colombia, y que han querido, en nombre del pueblo que representan, darle las reparaciones y compensaciones posibles por el grande e innerecido agravio que algunos de sus hombres le infirieron."

Aprobado ya por ambas partes el Tratado, y reconocida como consecuencia, por la República de Colombia, la independencia de Panamá, los límites entre ambos Estados son los que se fijan en el artículo III de dicho Tratado.

La situación actual de los demás litigios territoriales de Colombia, puede considerarse expresada ~~en~~, con ligeras variantes, por los siguientes párrafos del Mensaje del Presidente D. Marcos Fidel Suárez

al Congreso de 1919, fechado el 20 de julio. Dicen así: "

"Los negocios territoriales han seguido conduciéndose hacia soluciones de derecho o de equidad, por medio de arbitrajes o de arreglos directos. El Tratado que terminó la controversia de límites con el Ecuador está ya ejecutado por medio de la demarcación de la frontera, cuya última operación se efectúa en estos días en la ciudad de Cartagena, donde la Comisión mixta firmará o habrá firmado ya, el acta que declare terminada la demarcación.

"El arreglo de la frontera con el Perú ha seguido preparándose, y en estos días se activaba de modo que podía esperarse una convención que condujera definitivamente a la fijación de los límites entre los dos Estados.

"La Convención de noviembre de 1916 con Venezuela, sigue produciendo algunos de sus resultados. Ella comprende, ante todo, la completa demarcación de la línea fijada por el laudo de España, por medio de la solución arbitral que el Consejo Federal de Suiza dará a las diferencias

suscitadas sobre la interpretación del laudo en algunas de sus secciones geográficas. Comprende también la promesa de negociaciones, ya iniciadas y que llegaron a cierto punto, con el fin de procurar un arreglo sobre la navegación y comercio fronterizos, del cual pueden resultar algunas modificaciones de la línea, modificaciones que se comunicarían al árbitro demarcador antes de empezar la demarcación o durante ella, como lo indique la fecha del posible arreglo.

"El tratado de límites con el Brasil, ajustado en 1900, es muy probable que reciba pronta ejecución, habiendo el Gobierno de Rio Janeiro solicitado ya del Congreso la apropiación del dinero necesario a la demarcación de la línea que se extiende de la Piedra del Cocuy al Apoporis.

"La controversia con Nicaragua, referente a la propiedad de las Islas Mangles, versa especialmente sobre el título que nos confiere a ese dominio el laudo del Presidente de Francia que dirimió la controversia territorial entre Colombia y Costa Rica, salvando el ~~xx~~ laudo, como es

- 51 -

costumbre, los derechos de terceros. De esta salvedad pretende Nicaragua deducir derechos a las Mangles, y novisimamente al Archipiélago Colombiano, poseído jurídica y permanentemente por la República. De resto, las relaciones entre los dos Estados, no han tenido alteración y se cultivan por nuestra parte por medio de una Legación acreditada recientemente en Managua."

II. De los habitantes.

En esta parte, la Constitución de Colombia se ajusta a las normas generales de las demás Constituciones modernas.

Sin embargo, es de señalar el hecho de que distingue entre extranjeros e hispanoamericanos, al clasificar los medios de adquirir la nacionalidad colombiana: es decir que, para los colombianos el concepto de hispano americano, es distinto, en cierto modo, del de extranjero. A los extranjeros se les exige para ser considerados nacionales colombianos, que soliciten y obtengan carta de ciudadanía; mientras que cualquier hispanoamericano puede conseguirlo sin otro requisito que solicitar su inscripción como colombiano ante la Municipalidad del lugar donde se estableciere.

Para los colombianos, la antigua metrópoli es la "Madre Patria". De las nuevas Repúblicas americanas, es Colombia la que ha conservado más puro y fervoroso el amor filial a España. Y este amor que se revela tan efusivamente en la literatura colombiana y que se manifiesta

en cuantos actos se relacionan con nuestro país, ha encarnado también en la Constitución Fundamental de aquel Estado, pues el legislador llevó a ella el criterio de considerar como hermanos a todos los países de raza ibera, separándolos, en cierto modo, como queda dicho, del concepto general de extranjeros.

Respecto a los extranjeros se acepta el principio de la reciprocidad, declarando que aquéllos disfrutarán en Colombia "de los mismos derechos que se concedían a los colombianos por las leyes de la nación a que el extranjero pertenece", salvo lo que se estipule en los tratados públicos."

Para gozar de la consideración y de los derechos de ciudadano se exige ser varón, colombiano, mayor de 21 años y ejercer profesión, arte u oficio, o tener ocupación lícita y otro medio legítimo y conocido de subsistencia. Estas son las condiciones que la vigente Constitución exige; pero en otras anteriores se exigía además ser casado, y saber leer y escribir.

Se pierde de hecho la ciudadanía con la pérdida de la nacionali-

dad, o bien por una de las siguientes causas: 1ª, haberse comprometido a servir a una nación enemiga de Colombia; 2ª, haber pertenecido a una fracción alzada contra el Gobierno de una nación amiga; 3ª, condena afflictiva; 4ª, destitución del ejercicio de funciones públicas, previo juicio criminal o de responsabilidad, y 5ª, ejecutar actos de violencia, falsedad o corrupción en elecciones.

La notoria enajenación mental, la interdicción judicial, la bebez habitual y el ser objeto de ~~de~~ un auto judicial de prisión, por causa criminal pendiente, son circunstancias que suspenden temporalmente el ejercicio de la ciudadanía.

Compete al Senado la rehabilitación de los ciudadanos que hubieren perdido su condición de tales por las expresadas causas.

Para ejercer funciones electorales y poder desempeñar empleos públicos que lleven aneja autoridad o jurisdicción, se requiere la calidad de ciudadano.

La Constitución unitaria vigente es más restrictiva, en cuanto a

los derechos de ciudadanía que lo habían sido en las Constituciones federales precedentes.

III. Derechos civiles y garantías sociales.

Las autoridades de la República tienen la obligación constitucional de proteger a todas las personas residentes en el país, amparando sus vidas, honra y bienes, y de asegurar el respeto recíproco de los derechos naturales previniendo y castigando los delitos.

A su vez los particulares están obligados, como los funcionarios públicos, a respetar y cumplir la Constitución y las leyes.

Se robustece la personalidad jurídica de los individuos, hasta el extremo de declarar que el mandato superior no exime de responsabilidad al agente que lo ejecuta, en caso de infracción manifiesta de un precepto constitucional en detrimento de alguna persona. Los militares en servicio quedan exceptuados de esta disposición, recayendo la responsabilidad únicamente en el superior que da la orden.

En realidad, no constituye este principio de responsabilidad del agente una novedad respecto al derecho español, pues si bien entre las eximentes que especifica el art. 8° de nuestro Código Penal, figura el obrar en virtud de obediencia debida, es bien notorio que no hay obediencia debida fuera de la ley, como expresamente lo declaró una sentencia del Tribunal Supremo de fecha 10 de enero de 1879.

Se confirma la abolición de la esclavitud, hasta el extremo de declarar que quedará libre, quien, siendo esclavo, pise el territorio de la República.

Aunque la Constitución vigente no llega a términos tan liberales como los admitidos por la federalista de 1863, no puede negarse que al determinar los derechos individuales y establecer las garantías sociales, se inspira en un amplio criterio de libertad y tolerancia. Según la Constitución vigente, nadie podrá ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad compe-

tente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en las leyes; así como tampoco podrá nadie ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se impute, ante Tribunal competente y observando la plenitud de las formas propias de cada juicio.

En materia criminal, se adopta el principio generalmente admitido en las legislaciones europeas, incluso en la española, de la no retroactividad de las leyes, salvo en cuanto puedan favorecer al reo.

Se restablece la pena de muerte, que había sido abolida en absoluto en la Constitución federalista de 1863, aunque sólo ~~existía~~ ~~existía~~ para casos graves, jurídicamente comprobados, a saber: traición a la Patria en guerra extranjera, parricidio, asesinato, incendio, asalto en cuadrilla de malhechores, piratería y ciertos delitos militares definidos por las leyes del ejército. Los arts. 29 y 30 declaran expresamente que no podrá aplicarse la pena capital fuera de los casos anteriormente especificados. Ultimamente, por Acto Legislativo de 1910, volvió a abolirse en absoluto dicha pena.

Garantiza la Constitución los derechos adquiridos con justo tí-

tulo, con arreglo a las leyes civiles, por personas naturales o jurídicas, preceptuando que, cuando el interés privado deba ceder al interés público, con motivo de la aplicación de una Ley dictada por causa de utilidad pública, se pagará indemnización por las expropiaciones que sea preciso hacer.

Por Acto Legislativo núm. 3 de 1910 se aplicó concretamente esta doctrina al caso de la concesión de monopolios, decretando que ninguna ley que lo establezca podrá aplicarse antes de que hayan sido plenamente indemnizados los individuos que, en virtud de ella, deban quedar privados del ejercicio de una industria lícita.

Está excluida en absoluto la pena de confiscación, y se reduce a casos muy limitados la expropiación forzosa.

Después de algunas normas referentes a la propiedad literaria y artística, a las donaciones intervivos o testamentarias, hechas conforme a las leyes, para objetos de beneficencia o de instrucción pública, y a la libre enajenación y a la redención de obligaciones, en-

pasa la Constitución a definir otros derechos y a establecer otros principios de carácter más elevado.

Declara que la Religión católica, apostólica, romana, es la de la Nación y ordena a los poderes públicos que la protejan y que hagan que sea respetada "como esencial elemento del orden social." Sin embargo, nadie podrá ser molestado por razón de sus opiniones religiosas, ni compelido por las autoridades a profesar creencias ni a observar prácticas contrarias a su conciencia, permitiéndose el ejercicio de todos los cultos que no sean contrarios a la moral cristiana ni a las leyes." Los actos contrarios a la moral cristiana o subversivos del orden público, que se ejecuten con ocasión o pretexto del ejercicio de un culto, quedan sometidos al derecho común. Además se ordena que la educación pública sea organizada y dirigida en concordancia con la Religión católica, y que la instrucción primaria costeada con fondos públicos sea gratuita, pero no obligatoria.

Resulta, pues, que se establece una situación de privilegio

en favor de la Religión católica, mientras se garantiza la libertad de conciencia y la tolerancia de cultos.

En este aspecto, como en otros muchos, la Constitución colombiana refleja la influencia de nuestro derecho, al propio tiempo que se observa también en ella la sugestión de la literatura política francesa en lo referente a la libertad de conciencia, sugestión que se sobrepone a la influencia de las leyes constitucionales inglesas, tomadas varias veces como modelo en la Ley Fundamental colombiana.

Es muy interesante insistir en el análisis de esta cuestión, estudiándola sin perder de vista lo que sucede en otros países.

La Constitución federal del 63, nada decía sobre la materia, lo que se explica teniendo en cuenta que el texto primitivo de la Constitución norteamericana, de la que aquélla es fiel reflejo, calla absolutamente sobre este particular, y que su primer artículo adicional, declarado vigente en 15 de diciembre de 1791, prohíbe al Congreso norteamericano hacer leyes respecto al establecimiento de Religión ni oponiéndose a su libre ejercicio.

La Constitución española dice sobre esto lo siguiente: "La Religión católica, apóstolica, romana, es la del Estado. La Nación se obliga a mantener el culto y sus ministros.- Nadie será molestado en el territorio español por sus opiniones religiosas ni por el ejercicio de su respectivo culto, salvo el respeto debido a la moral cristiana.- No se permitirán, sin embargo, otras ceremonias ni manifestaciones públicas que las de la Religión del Estado."

En Inglaterra nadie puede ser perseguido por razón de sus opiniones religiosas, en tanto que su manifestación pública no lesione la moral o el orden establecido. La observancia de los domingos y de las fiestas se considera de orden público, y en su virtud, es obligatoria para todo individuo residente en territorio británico.

Vemos, pues, cómo la Constitución de Colombia resuelve el delicadísimo problema de la libertad de conciencia en un sentido ecléctico, basado en la herencia jurídico-religiosa de España, en

las prácticas constitucionales inglesas y en las orientaciones ultra-liberales de la literatura política de Francia.

Sin embargo, quedan en pie la dificultad de armonizar la libertad de conciencia con el carácter confesional católico de la educación pública. Quizás para salvar este escollo, la Constitución no declara obligatoria la enseñanza costeada con fondos públicos. De todos modos dicha dificultad es más bien técnica que efectiva, pues la gran masa del país profesa la Religión católica y son escasísimas las excepciones.

La libertad de imprenta es otro de los derechos que ampara la Constitución. Esta libertad ha sido absoluta en varios períodos de la vida constitucional de Colombia, y tuvo restricciones en 1821, 1830, 1832, 1845 y en la Constitución actual, estableciendo la responsabilidad de la imprenta, con arreglo a las leyes, ante autoridad competente, sobre todo cuanto atente a la honra de las personas, al orden social o a la tranquilidad pública.

Al adoptar este criterio respecto a la libertad de imprenta, la Constitución colombiana coincide con la generalidad de las Constituciones modernas. En Inglaterra, toda persona tiene derecho a manifestar su pensamiento de palabra, por escrito, impreso, dibujo o mediante cualquier otro modo de publicidad, sin necesidad de autorización ni previa censura de ninguna especie, y se determinan los casos en que la ley puede reprimir los abusos de la libertad de la palabra y de la prensa, correspondiendo al Jefe de Gobierno declarar la existencia de los delitos de difamación; pero ninguna publicación puede ser recogida sin que haya sido declarada culpable en la forma establecida por la ley. En Bélgica, la libertad para la emisión del pensamiento va unida a la libertad de cultos. En España es también libre la imprenta, sin sujeción a la previa censura; De modo análogo resuelven esta cuestión los demás países de Europa y América; pero al lado de la libertad para la emisión del pensamiento, se suelen establecer garantías sufi-

cientos para la honra de las personas y la seguridad del Estado.

Ampara también la Constitución la ~~taxita~~ inviolabilidad de la correspondencia, la libertad del trabajo, el derecho de petición, el de reunión y el de Asociación.

Respecto a la libertad del trabajo hay una nota curiosa, tomada al parecer de la legislación inglesa. Dice el art. 44 de la Constitución colombiana: "Toda persona podrá abrazar cualquier oficio u ocupación honesta sin necesidad de pertenecer a gremio de maestros o doctores.- Las autoridades inspeccionarán las industrias y profesiones en lo relativo a la moralidad, la seguridad y la salubridad públicas.- La ley podrá exigir títulos de idoneidad para el ejercicio de las profesiones Médicas y de sus auxiliares." Es decir, que lo que merece más cuidado y para lo único que el Estado se arroga el derecho de exigir título que garantice especial competencia, es para el ejercicio de las profesiones médicas y de sus auxiliares. Otro tanto sucede en Inglaterra, aunque en sentido más restringido, respecto a la libertad

de profesión, pues aun cuando se hace mención especial de los médicos y cirujanos, a quienes en todo caso debe exigírseles título que acredite su capacidad y aptitud y su inscripción en una Lista oficial, donde constan los que se hallan provistos de este requisito (Ley de 2 de agosto de 1848), se atribuye al Parlamento, y a las autoridades en quienes la ley delegue su poder a este efecto, reglamentar, con sujeción a las exigencias del orden público, el ejercicio de otras profesiones e industrias.

Se reserva al Gobierno de Colombia la facultad exclusiva de introducir, fabricar y poseer armas y municiones de guerra, lo que ofrece una novedad importante respecto a la Constitución federal de 1863, ya que ésta había consagrado, entre los derechos individuales, la libertad de tener armas y municiones y de hacer el comercio de ellas en tiempo de paz.

Se reconoce personalidad jurídica a las Corporaciones legítimas y públicas, pudiendo éstas, por tanto, ejecutar actos civiles y gozar

de las garantías establecidas en favor de los ciudadanos, con las limitaciones que establezcan las leyes por razones de utilidad común.

Por último la Constitución declara que los funcionarios públicos de todas clases tienen el deber de respetar los derechos garantizados en la misma, dejando a las leyes la determinación de las responsabilidades en que dichos funcionarios puedan incurrir.

IV.- La Iglesia y el Estado.

Tan vivamente afecta a la vida social de Colombia el sentimiento religioso y la influencia de la Iglesia católica, que el legislador de 1886, no conforme con la declaración contenida en el Título III de la Constitución respecto a la libertad de conciencia dentro de una situación privilegiada de la Iglesia católica, dedica además un Título especial a reglamentar las relaciones entre la Iglesia y el Estado.

La Iglesia católica ha ejercido siempre una poderosa influencia

en el país. Por lo general, las normas constitucionales anteriores a 1853, no sólo declaraban que la Religión católica era la del Estado sino que obligaban a éste al sostenimiento del culto. Desde 1853 hasta 1886, estuvieron, sin embargo, separadas las dos potestades, civil y eclesiástica, y hubo una época, la correspondiente a la Constitución de 1863 en que no se reconoció a la Iglesia católica ningún derecho especial ni privilegio alguno.

Según la Constitución vigente la Iglesia católica puede administrar libremente en Colombia sus asuntos interiores y ejercer actos de autoridad espiritual y de jurisdicción eclesiástica, sin necesidad de autorización del Poder civil, así como también puede ejercer actos civiles por derecho propio que le reconoce. Los edificios destinados al culto católico, los seminarios conciliares y las casas episcopales y curales, no podrán ser gravados con contribuciones ni aplicados a otros servicios. El Gobierno puede convénir con la Sede apostólica todo lo necesario para establecer y definir las relaciones entre la po-

testad civil y la eclesiástica

Lo primero que salta a la vista al observar la insistencia del Código fundamental colombiano en esta materia es la existencia de un problema que afecta al concepto del Estado y a la influencia de la Iglesia y que el Legislador intentó resolver. Por esto conviene ahondar en la cuestión, examinando sus antecedentes y estudiando los preceptos y prácticas constitucionales de los países cuyas tendencias hayan podido ser tenidas en cuenta por los legisladores colombianos de 1886.

Sin necesidad de remontarnos a la época colonial, es bien sabido y notorio que la Iglesia católica ha tenido parte muy importante en la organización política y civil de los pueblos americanos. Mas al aparecer el Estado, en el concepto moderno de organización suprema en cada país, encargada de definir el Derecho, llegó el momento de que la Iglesia cediese al Estado el ejercicio de las funciones de dirección política y civil que circunstancialmente había tenido o compartido hasta

entonces, quedando, como consecuencia, el Estado en la plenitud de sus poderes legislativos, ejecutivo y judicial, y continuando la Iglesia la labor evangelizadora, esencialmente espiritual, que le corresponde.

La Constitución de 8 de mayo de 1863, como antes se ha indicado, había cometido la injusticia de equiparar en absoluto la Religión católica, profesada por casi la totalidad de los colombianos, a todas las demás creencias, incurriendo en notorio desconocimiento de la realidad y ocasionando una reacción profunda en los sentimientos católicos del país. La Constitución unitaria del 86, por el contrario, al mismo tiempo que respeta la libertad de conciencia, trata con gran consideración a la Iglesia católica, teniendo en cuenta seguramente lo mucho que hizo en pro de la civilización del país y lo arraigadas que están las creencias católicas en la inmensa mayoría de los colombianos.

Esta fué sin duda la razón de colocar a la Iglesia en una situación de privilegio; pero conviene esclarecer si Colombia obedeció única y exclusivamente a una situación de ánimo en el país, y obró, por

consiguiente, por cuenta propia o si también fueron parte en sus disposiciones las influencias extrañas.

A tal efecto pasamos a examinar someramente la situación constitucional de la Iglesia en otros países más o menos relacionados con Colombia.

ESPAÑA.- El Estado profesa la Religión católica, apostólica, romana. La Nación mantiene el culto y sus ministros. Los demás cultos son tolerados.

INGLATERRA.- Los ministros del culto pertenecientes a la Iglesia católica romana o a cualquier otra Religión diversa de la del Estado, no son reconocidos por la Ley bajo este concepto, ni tienen acción en derecho para perseguir el pago de los emolumentos que les sean debidos por razón de su ministerio. La Ley no reconoce las Asociaciones o Corporaciones religiosas constituidas fuera de la Iglesia establecida, o sea la Anglicana. Prohíbe asimismo la celebración de ceremonias religiosas que no sean las de la Iglesia Establecida, particularmente

las procesiones y predicaciones, excepto en los edificios privados o dedicados a los cultos disidentes.

FRANCIA.- Funcionan ~~una~~ independientemente el Estado y la Iglesia.

ESTADOS UNIDOS.- Es absoluta la separación de la Iglesia y el Estado, hasta el extremo de que se prohíbe al Congreso legislar sobre materia religiosa.

REPUBLICA ARGENTINA.- El artículo 2° de la Constitución de 25 de septiembre de 1860 dice : "El Gobierno federal sostiene el culto católico, apostólico romano."

BOLIVIA.- El artículo 2° de la Constitución de 28 de octubre de 1880 dice así: "El Estado reconoce y sostiene la Religión católica, apostólica romana, prohibiendo el ejercicio público de todo otro culto."

BRASIL.- Su constitución vigente no pudo influir en el ánimo de la Asamblea constitucional de Colombia de 1886, pues tiene fecha 24 de febrero de 1891. Esta inspirada en ideas volterianas: somete a la Iglesia al derecho común, reconoce sólo el ~~trata~~ casamiento civil,

establece la secularización de los cementerios,, declara libre la práctica de todos los cultos religiosos y dispone que sea laica la enseñanza suministrada en los establecimientos públicos.

CHILE.- Su Constitución vigente tiene fecha 25 de mayo de 1833. No fué reformada hasta 1888, y por lo tanto era el texto ~~original~~ original el que estaba en vigor al redactarse la Constitución colombiana de que venimos ocupándonos. El Capítulo II se titula, "De la Religión", y contiene un sólo artículo, que dice así: "La Religión de la República de Chile es la católica apostólica romana, con exclusión del ejercicio público de cualquiera otra." La ley de 27 de julio de 1865, interpretativa de este artículo, dice así: "Artículo 1°. Se declara que por el Artículo 5° de la Constitución, se permite a los que no profesan la Religión católica, apostólica romana, el culto que practican dentro del recinto de edificios de propiedad particular.- Artículo 2°. Es permitido a los disidentes fundar y sostener Escuelas privadas para la enseñanza de sus propios hijos, en las doctrinas de sus religiones."

COSTA RICA.- La Constitución vigente es de 7 de diciembre de 1861, revisada en 7 de diciembre de 1871. El Título IV se titula "De la Religión", lo mismo que en la Constitución de Chile, y contiene un solo artículo, que dice así: "La Religión Católica, Apostólica, Romana, es la del Estado, el cual contribuirá a su mantenimiento, sin impedir el libre ejercicio en la República, de ningún otro culto que no se oponga a la moral universal ni a las buenas costumbres."

ECUADOR.- Su Constitución política es de fecha 23 de diciembre de ~~1902~~ 1906. Por consiguiente, muy posterior a la de Colombia. Nada dice sobre relaciones de la Iglesia y del Estado, y entre los derechos y garantías individuales establece la libertad de conciencia en todos sus aspectos y manifestaciones, en tanto que éstas no sean contrarias a la moral y al orden público. La enseñanza oficial es laica, y la primaria, obligatoria y gratuita.

GUATEMALA.- Su Constitución fue decretada en 11 de diciembre de 1879. Su artículo 24 garantiza el ejercicio de todas las religio-

nes, sin preeminencia alguna, en el interior de los templos; pero sin que ese libre ejercicio pueda extenderse hasta ejecutar actos subversivos o prácticas incompatibles con la paz y el orden público ni oponerse al cumplimiento de las obligaciones civiles o políticas.

HONDURAS.- Su Constitución es muy posterior a la de Colombia, pues tiene fecha 14 de octubre de 1894. En materia religiosa es análoga a la del Brasil, pues somete a igual consideración todas las religiones y garantiza por igual el libre ejercicio de todas ellas, sin más límite que el trazado por la moral y el orden público.

MEXICO.- Con fecha 12 de febrero de 1857 se promulgó la Constitución vigente, en la que no se establece privilegio alguno en favor de la Iglesia católica ni de ninguna otra religión.

NICARAGUA.- "El Estado no tiene ni protege religión alguna, pero permite todos los cultos en el interior de los templos". (Artº 52 de la Constitución de 30 de marzo de 1905.)

República oriental del

URUGUAY.- ~~"La Religión del Estado es la Católica Apostólica Romana"~~
"Entre los cultos religiosos son libres en el Uruguay. El Estado no sostiene religión alguna."

Así lo declara el artículo 5° de su Constitución vigente, ~~que tiene fecha 10 de septiembre de 1829.~~ *promulgada con fecha 3 de enero de 1918.*

PANAMA.- "Es libre la profesión de todas las religiones, así como el ejercicio de todos los cultos, sin otra limitación que el respeto a la moral cristiana y al orden público. Se reconoce que la Religión Católica es la de la mayoría de los habitantes de la República, y la ley dispondrá que se le auxilie para fundar un Seminario conciliar en la Capital y para misiones a las tribus indígenas." (Artículo 26 de la Constitución, fecha 15 de febrero de 1904.)

PARAGUAY.- "La Religión del Estado es la Católica, Apostólica, Romana, quedando expedito el ejercicio de cualquiera otra Religión en todo el territorio de la República. Así lo previene el art. 39 de la Constitución de 25 de noviembre de 1870.

PERU.- "La Nación profesa la Religión Católica, Apostólica, Romana: el Estado la protege, y no permite el ejercicio público de otra alguna." (Artículo 4° de la Constitución de 23 de noviembre de 1860.)

SAN SALVADOR.- Según el art. 12 de la vigente Constitución que fué promulgada en 13 de agosto de 1886, o sea el mismo mes y año que la Constitución colombiana, "se garantiza el libre ejercicio de todas las religiones, sin más límite que el trazado por la moral y el orden público."

VENEZUELA.- Su Constitución es de fecha 4 de agosto de 1909 y no confiere ningún privilegio a la Iglesia Católica, sino que establece la libertad religiosa, atribuyendo a la República el derecho de Patronato y la inspección suprema sobre todo culto establecido o que se establezca en el país.

Este sucinto examen sobre la situación jurídica de la Iglesia en los Estados que tienen alguna conexión con Colombia, o que han podido ejercer sobre ella alguna influencia espiritual, nos revela que Colombia pertenece al grupo de los países hispanoamericanos que en materia religiosa siguen la tradición de la antigua Metrópoli.

Otros países de la América Latina ~~hispanoamericanos~~, aceptaron los

principios revolucionarios franceses, rompiendo bruscamente sus tradiciones con la consiguiente solución de continuidad en la evolución de su derecho, mientras que Colombia, tanto en el aspecto últimamente examinado, como en los demás de su vida constitucional, se aparta de lo exótico o pegadizo y desarrolla internamente las ideas y los principios que constituyen la esencia del alma nacional, sin dejar por esto de ponerse a tono con las exigencias y modalidades de los tiempos modernos.

V. Poderes nacionales.

La Constitución colombiana se inspira en el criterio de la división y limitación de los poderes nacionales, admitiendo que el Estado tiene tres modos diferentes de manifestar su actividad para el cumplimiento de sus fines, y reconociéndole, por tanto, tres Poderes distintos, a saber: El Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial.

El Poder Legislativo formula normas jurídicas, en forma de ley o de Código; el Ejecutivo desenvuelve y aplica dichas normas en relación

con los fines de la vida, cumpliendo y haciendo cumplir la ley; y el Judicial, relaciona los hechos concretos con la ley preexistente para declarar si hay la debida conformidad y restablecer, caso necesario, el derecho perturbado.

Cada uno de estos Poderes se ejercen mediante los correspondientes órganos, cuya naturaleza y composición ofrece escasas variantes en los Estados modernos.

En Colombia, la facultad de hacer las leyes, reside en el Congreso, compuesto de dos Cámaras, a saber: el Senado y la Cámara de Representantes.

La más alta representación del Poder Ejecutivo es el Presidente de la República, que ejerce sus funciones con la cooperación de los Ministros. El Presidente y los Ministros, y en cada negocio particular el Presidente con el Ministro del respectivo ramo, constituyen el Gobierno.

Órganos del Poder Judicial son la Corte Suprema, los Tribunales

Superiores de Distrito y los demás Tribunales y Juzgados que establezca la Ley. El Senado# ejerce también funciones judiciales en determinados casos.

Toda esta organización referente a los Poderes del Estado y a sus respectivos órganos, parece inspirarse ~~XXXXXXXXXXXXX~~ en la Constitución de los Estados Unidos de América, pues hasta la nomenclatura de esta última se ha llevado a las de Colombia. En los Estados Unidos de Norteamérica como en Colombia, la facultad legislativa reside en el Congreso, compuesto de un Senado y de una Cámara de Representantes; órgano supremo del Poder Ejecutivo es, en ambas naciones, el Presidente de la República, y el Poder Judicial reside en una Corte Suprema y en otros tribunales inferiores. Sin embargo, es en España donde puede hallarse la fuente primera, lo mismo de la organización que de la nomenclatura.

Lo dicho no supone que los legisladores colombianos hayan copiado, ni aun siquiera en esta parte, lo de otros países, superponiendo a

su propio derecho normas ajenas, sin realidad alguna en la nación. La división de los Poderes del Estado en las tres ramas susodichas, es corriente en las leyes constitucionales, y la aceptación de la nomenclatura, y aun de la organización de los Estados Unidos, lejos de oponerse a la vida constitucional de Colombia, se ajusta y acomoda al desenvolvimiento jurídico del país.

VI. El Congreso.

Organización General
~~El sistema de~~ El régimen político colombiano en el principio de la soberanía nacional, es notorio que la República estriba en una base electiva. Esta base tiene una doble modalidad: la elección es directa y amplia (todos los ciudadanos pueden votar) para la formación de los Consejos municipales, y tiene ciertas restricciones para la ~~antiguísima~~ designación de Representantes y Senadores.

Durante la época comprendida entre 1853 y 1863, no se exigía ningún requisito especial para ser miembro del Congreso: para esta libera-

substitución lidad de la Constitución tuvo como consecuencia el que la más alta función del Estado, o sea la de formular las leyes, estuviese vinculada en personas que no ofrecían las suficientes garantías de ~~maxima~~ inteligencia, moralidad y acierto. Por esto las demás constituciones exigieron ciertas cualidades, generalmente relativas a la edad, a la cultura y a la renta. La Constitución de 1886, en su artículo 100, exige para ser Representante las circunstancias de ser ciudadano en ejercicio, no haber sido condenado por delito que merezca pena corporal y tener más de 25 años.

El artículo 68 de la misma, determinaba la época, lugar y duración de las legislaturas ordinarias, disponiendo que las Cámaras legislativas se reuniesen ordinariamente, por derecho propio, cada dos años, el día 20 de julio, en la Capital de la República, debiendo durar las sesiones ordinarias 120 días; pero el Ato Legislativo número 2 de 1906, fecha 28 de marzo, introdujo la modificación de que dichas Cá-

maras se habrían de reunir cada dos años, el día 1º de febrero. Por último, el Ato Legislativo núm. 3 de 1910 dispuso que la reunión sea cada año, el día 20 de julio.

Las Cámaras se abren y clausuran pública y simultáneamente, y necesitan para deliberar la asistencia de la tercera parte de sus miembros por lo menos. El Presidente de la República, en persona, o por medio de los Ministros, abre y cierra las Cámaras. Pero esta ceremonia no es esencial para que el Congreso ejerza legítimamente sus funciones. La Constitución fija los ^{casos} en que las Cámaras pueden trasladarse a otro lugar y las formalidades que se requieren para ello.

Para dar posesión al Presidente de la República y para elegir Designados, se reúnen ambas Cámaras en un solo Cuerpo. En tales casos el Presidente del Senado y el de la Cámara de Representantes pasan a ser, respectivamente, Presidente y Vicepresidente del Congreso. Son ilegales las reuniones de miembros del Congreso que se efectúen fuera de

las condiciones constitucionales, incurriendo en responsabilidad penal los individuos que tomen parte en dichas deliberaciones.

Corresponde por igual a Cada Cámara dictar su propio reglamento, crear y proveer los empleos necesarios para el despacho de sus trabajos; organizar, caso ~~preciso~~, la ^{policía} ~~particular~~ interior del local en que celebran sus sesiones; examinar la legitimidad de las credenciales que cada miembro ha de presentar al tomar posesión del cargo; contestar o no a los mensajes del Gobierno; pedir a los Ministros informes escritos o verbales, siempre que los juzguen necesarios para conocer los actos de la administración; nombrar comisiones que la representen en actos oficiales, designar oradores para que actúen en la otra Cámara en caso de desacuerdo al formar una ley, y, por último, aprobar todas las resoluciones de orden interior que estime conveniente.

No puede el Congreso exigir al Gobierno comunicación de las instrucciones dadas a Ministros diplomáticos, o informes sobre negociaciones que tengan carácter reservado, entendiéndose restringida así la facul-

dad que se confiere a cada Cámara de pedir informes verbales o escritos a los Ministros.

Las sesiones del Congreso son públicas, aunque no de una manera absoluta y para todos los casos y circunstancias, ya que dicha publicidad puede tener limitaciones en virtud de los respectivos reglamentos.

Los miembros de ambas Cámaras son ~~inviolables~~ inviolables, aunque sólo respecto a sus opiniones y votos en el ejercicio del cargo: ante la Cámara son responsables y podrán ser llamados al orden por el que preside la sesión y penados conforme al Reglamento por las faltas que cometan. Además, según establece el Decreto Legislativo núm 3. de 1910, ningún miembro del Congreso podrá ser aprehendido ni llamado a juicio civil o criminal sin permiso de la Cámara a que pertenezca, durante el período de las sesiones ni cuarenta días antes y veinte días después de éstas.

La incompatibilidad para los cargos de Senador o Representante alcanza al Presidente de la República, a los Ministros del Despacho,

a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, al Procurador general de la Nación y a los Gobernadores, quienes no podrán ser elegidos miembros del Congreso sino tres meses después de haber cesado en el ejercicio de sus funciones, según previene el art. 22 del Acto Legislativo núm. 3 de 1910. El mismo artículo ~~maximamente~~ prohíbe que pueda ser Senador o Representante un individuo por Departamento o Circunscripción electoral donde tres meses antes de las elecciones hubiere ejercido jurisdicción o autoridad civil, política o militar.

Los Senadores y Representantes no pueden ~~maximamente~~ ser nombrados por el Presidente de la República para ningún empleo, salvo para los cargos de Ministro del Despacho, Gobernador, Agente diplomático y Jefe militar en tiempo de guerra. Tampoco puede el Presidente de la República conferir empleos, que no sean los mencionados, a los individuos que hubieren sido ~~Representantes~~ Representantes o Senadores durante su respectivo período presidencial ~~maximamente~~

La aceptación de los empleos especificados anteriormente ,

produce vacante absoluta en la respectiva Cámara, excepto la del cargo de Ministro del Despacho, que es transitoria, durante el tiempo en que el Senador o Representante que la hubiere aceptado la desempeñe.

Ningún miembro del Congreso puede contratar directa ni indirectamente con la administración pública, ni admitir poder para gestionar negocios que tengan relación con el Gobierno de Colombia.

Vemos, pues, que la Constitución prevé todo lo conveniente para procurar que los Senadores y Representantes ejerzan sus funciones "consultando únicamente la justicia y el bien común", como ingenuamente se preceptúa en el art. 105.

Los Senadores y Representantes disfrutan de ciertas indemnizaciones pecuniarias; pero se previene que ningún aumento de dietas ni de viáticos decretado por el Congreso se hará efectivo sino después que hayan cesado en sus funciones los miembros de la legislatura en que dicho aumento hubiere sido votado.

Composición del Senado.

Examinadas ya las disposiciones orgánicas comunes a ambas Cámaras,

Veamos las peculiaridades de cada una de ellas.

El Senado se compone de cierto número de individuos que representan una entidad política o una porción del territorio. Las Constituciones de 1858 y 1865 fijaban, como la actual, tres Senadores por cada Estado o Departamento; las de 1830 y 1855 asignaban un Senador ~~tan solo~~ por cada Provincia. Otras veces se ha tomado por base para fijar el número de Senadores, el de habitantes, y así las Constituciones de 1832 y 1845 señalaban ~~un~~ un Senador por cada ^{60.000} ~~60~~ y 70.000 almas respectivamente. Finalmente el art. 11 del Acto Legislativo núm. 3 de 1910, que vino a sustituir al art. 93 de la vigente Constitución, dispone que el Senado se compondrá de tantos miembros cuantos correspondan a la población de la República, a razón de uno por cada 120.000 habitantes y uno más por toda fracción no menor de 50.000

El Legislador de 1886 se mostró más exigente al determinar las condiciones necesarias para ser Senador, que las Constituciones de 1853, 1858 y 1865, ya que éstas exigieron sólo el ejercicio de la ciudadanía.

Hay se requiere para ser Senador "ser colombiano de nacimiento y ciudadano no suspendido, tener más de 30 años de edad, y disfrutar de 1.200 pesos, por lo menos, de renta anual, como rendimiento de propiedades o fruto de honrada ocupación." (Art. 94.)

La duración del cargo de Senador ha variado mucho según las distintas Constituciones: las de la Gran Colombia fijaban el período senatorial de 8 años; las dos primeras de la Nueva Granada, señalaban cuatro años y la Constitución actual fijó el período de seis, reducido otra vez a cuatro por Acto Legislativo núm. 3 de 1910.

Composición de la Cámara de Representantes.-

La Cámara de Representantes, como su nombre lo indica, representa directamente a los habitantes de la República.

El número de Representantes se fija en relación con la población, a razón de uno por cada 50.000 habitantes. Por cada Representante se eligen dos suplentes. La proporcionalidad entre el número de Representantes y la población de la República es la misma que establece, para España el art. 27 de su Constitución.

Para ser elegido Representante se requiere ser ciudadano en ejercicio, no haber sido condenado por delito que merezca pena corporal y tener más de 25 años de edad. La duración del cargo es de dos años, según determina el art. 19 del Acto Legislativo núm. 3 de 1910, que vino a sustituir al art. 101 de la Constitución.

Atribuciones generales del Congreso.-

Pasemos ahora a la exposición de las atribuciones generales del Congreso y de las particulares del Senado y de la Cámara de Representantes, siguiendo el mismo orden adoptado respecto a la organización de dichas instituciones políticas.

La facultad de hacer las leyes corresponde al Congreso, y en su virtud ejerce éste las siguientes atribuciones: Interpretar, reformar y derogar las leyes preexistentes, modificar la división territorial, conferir poderes a las Asambleas departamentales, variar en casos extraordinarios la residencia de los altos Poderes nacionales, fijar el cupe permanente de mar y tierra, crear y dotar empleos públicos y reglamentar los servicios, autorizar al Gobierno para ejercer funciones extraordinarias dentro de la órbita constitucional, conferir faculta-

- 75 -

des especiales al Presidente de la República, caso de necesidad, acordar el presupuesto general de ingresos y gastos, arreglar todo lo concerniente a la deuda nacional, ~~promover~~ decretar impuestos extraordinarios, y otras que afectan al crédito público, al fomento de las obras y de las empresas útiles, a la aprobación de los Tratados, a la concesión de amnistías e indultos por delitos políticos y a la adjudicación de tierras baldías. Como se ve estas atribuciones son las generalmente establecidas en casi todas las constituciones modernas para las Cámaras legislativas.

Sin embargo conviene hacer alguna observación respecto a varias de dichas atribuciones.

La interpretación de las leyes se atribuye al Congreso, y esto parece natural que sea función del Poder Ejecutivo y, en su caso, del Judicial. La interpretación de las leyes ha de ir necesariamente emparejada con su aplicación, y cuando una duda origina colisión de derechos, es en unos casos al Poder Ejecutivo y en otros el Judicial, el

encargado de resolver la discordia, interpretando para ello el verdadero sentido de la ley. Esto sucede de hecho en todos los países, y es de advertir que sucede también por lo general en Colombia, aunque la Constitución haya reservado esta facultad al Congreso. Tal vez el legislador de 1886 procuró evitar el peligro de que, so pretexto de interpretar una ley, el Poder Ejecutivo, lejos de atenerse a ella, la mutila o desvirtúa, y si fué éste su propósito, bien se explica el temor, pues los hechos nos demuestran que en todos los países ha sido frecuente que los Reglamentos, lejos de ser aplicación pura y fiel de las leyes, envuelven en muchas ocasiones su modificación o reforma.

Respecto a la atribución sobre división general del territorio, es de advertir que según el texto primitivo de la Constitución las modificaciones de la división territorial han de hacerse siempre con arreglo a los artículos 5°, 6° y 7° de la misma, los cuales fueron reformados primero por el Acto Legislativo n° 3 de 1905, fecha 30 de marzo, en sentido eminentemente centralizador, hasta el extremo de no

exigirse las circunstancias restrictivas que taxativamente señalaban los susodichos artículos 5° y 6° y más tarde por el Acto Legislativo núm. 3 de 1910, restableciendo dichas restricciones.

Es de notar, finalmente, la orientación sociológica que revela el encargo que se hace al Congreso de limitar o regular la apropiación o adjudicación de tierras baldías.

Facultades exclusivas del Senado.- En todo tiempo ~~fué~~ fué de su competencia el ejercer ciertas funciones judiciales, para juzgar y sentenciar a los altos funcionarios públicos, previa acusación de la ~~Cámara~~ Cámara de Representantes. Según el artículo 96 de la vigente Constitución, en relación con el art. 102 de la misma, (sustituido este último por el art. 20 del Acto Legislativo núm. 3 de 1910), compete al Senado conocer de las acusaciones formuladas contra el Presidente y el Vicepresidente de la República, Ministros del Despacho, Consejeros de Estado, Procurador general de la Nación y Magistrados de la Corte Suprema.

La Constitución de 1830 atribuía al Senado la facultad de proponer ternas al Presidente de la República para el nombramiento de los Magistrados de la Alta Corte de Justicia y de los Arzobispos y Obispos, la de ~~y~~ aprobar los nombramientos de Generales en Jefe. Según la de 1863 correspondía al Senado aprobar los nombramientos hechos por el Presidente de la República para Secretarios de Estado y otros altos funcionarios. La vigente Constitución confiere al Senado, además de la función judicial a que anteriormente se hizo referencia, las siguientes facultades: Rehabilitar a los que hubieren perdido la ciudadanía, nombrar dos Consejeros de Estado (hoy puede nombrar tres, según ley 60 de 1914), admitir o no las renunciaciones que hagan de sus empleos el Presidente y Vicepresidente de la República y el Designado, aprobar o desaprobado las altas graduaciones militares que confiera el Gobierno, conceder licencia al Presidente de la República, permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional, nombrar comisiones demarcadoras y autorizar al Gobierno para declarar la guerra a otra na-

ción.

Por último el Ato Legislativo núm. 3 de 1910, en su art. 17, señala como atribución especial del Senado, además de las últimamente citadas, elegir cuatro Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y sus suplentes, de ternas presentadas por el Presidente de la República.

Atribuciones peculiares de la Cámara de Representantes.- Se hallaban expresadas en el artículo 102 de la Constitución vigente, que fue sustituido por el art. 20 del Ato Legislativo núm. 3 de 1910. Según esta última disposición, compete a dicha Cámara examinar y fenecer definitivamente la cuenta general del Tesoro, iniciar las leyes que establezcan contribuciones o afecten al Ministerio público, elegir cinco Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y sus suplentes, acusar ante el Senado a los más elevados funcionarios públicos y conocer de las denuncias y quejas que contra los expresados funcionarios se formulen.

La Constitución Federal de 8 de mayo de 1863 atribuía también a la Cámara de Representantes el ~~atribución~~ cuidar de que los funcionarios

y empleados públicos desempeñen cumplidamente sus deberes; pero con muy buen acierto el legislador de 1886 restringió esta atribución limitándola a los casos de denuncias y quejas contra el Presidente de la República, Ministros del Despacho, Procurador general de la Nación y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Formación de las leyes.- La iniciativa de las leyes corresponde por igual a las dos Cámaras, a propuesta de sus respectivos miembros o de los Ministros del Despacho, excepto algunas cuya iniciativa se reserva taxativamente a la Cámara de Representantes, a las Comisiones permanentes especiales y a los Ministros del Despacho.

Para que pueda tener eficacia legal un Acto Legislativo, se requiere que haya sido aprobado en cada Cámara en tres debates, en distintos días, por mayoría absoluta de votos y ~~habérsela~~ obtenido la sanción del Gobierno. La votación en el tercer debate no es válida sino con la asistencia de la mayoría absoluta de los individuos que componen la Cámara.

La intervención del Gobierno en la formación de las leyes se efectúa con una doble actuación: primero, tomando parte en la discusión de los proyectos de ley por medio de los Ministros, quienes pueden también, según queda dicho, ejercer el derecho de iniciativa; y segundo, aprobando el proyecto, después de votado definitivamente por ambas Cámaras, y disponiendo que se promulgue como Ley, o bien devolviéndolo con objeciones a la Cámara en que tuvo origen, caso de no merecer su aprobación. La Constitución fija distintos periodos de tiempo, según la extensión de los proyectos, para que el Presidente de la República pueda devolverlos con objeciones, y previene que, una vez transcurridos los indicados términos, según el caso, sin haber recaído resolución, el Presidente no podrá dejar ya de sancionar y promulgar el proyecto. Caso de disolución de las Cámaras, dentro de dichos términos, el Presidente tiene el deber de publicar el proyecto, sancionado u objetado, dentro de los diez días siguientes a aquél en que el Congreso hubiere cerrado sus sesiones. Cuando el Congreso, después de deliberar sobre las objeciones presentadas por el Presidente, insista

en la aprobación de un proyecto de ley, por dos tercios de los votos en una u otra Cámara, el Presidente de la Cámara deberá sancionarlo, pues de lo contrario, o si el Gobierno no cumpliera el deber de sancionar o de objetar en los plazos señalados y con arreglo a las condiciones establecidas, podrá sancionar y promulgar la ley el Presidente del Congreso, salvo el caso en que el proyecto hubiere sido objetado por inconstitucional: dada esta circunstancia, si las Cámaras insisten, interviene la Corte Suprema para decidir la cuestión. El fallo afirmativo de la Corte obliga al Presidente a sancionar la ley; y se archivará el proyecto, si fuere negativo.

Con excelente sentido y comprensión de los problemas legislativos que pueden plantearse, la Constitución ordena que los Magistrados de la Corte Suprema tengan voz en el debate de las leyes sobre materia civil y procedimiento judicial.

Al texto de las leyes ha de preceder esta fórmula: "El Congreso de Colombia decreta:". Con esta frase se confirma y ratifica que la

facultad legislativa corresponde esencialmente al Congreso, sin que pueda desvirtuar este concepto la intervención que se atribuye al Presidente de la República y a la Corte Suprema.

Sí queremos buscar el antecedente de las disposiciones constitucionales colombianas sobre formación de las leyes, podremos hallarlo en la Constitución de los Estados Unidos, artículo 1º, sección séptima, núm. 2, que dice así: "Todo proyecto de Ley aprobado por la Cámara de Representantes y el Senado, antes de ser ley, será presentado al Presidente de los Estados Unidos. Si lo ~~aprueba~~ aprueba, lo firmará, pero si no lo aprueba, lo devolverá, con sus objeciones a la Cámara donde tuvo origen, la que hará sentar por extenso en su diario, las objeciones, y procederá a reconsiderarlo. Si después de tal reconsideración, dos terceras partes de aquella Cámara convinieran en el Proyecto de Ley, se enviará éste, con las objeciones, a la otra Cámara, por la cual será también reconsiderado; y si fuera aprobado por las dos terceras partes de ella, tendrá fuerza de ley. En todos estos casos, los votos de ambas

Cámaras serán determinados por sí o por no, y los nombres de las personas que voten en pro o en contra del proyecto de ley se harán constar en el diario de cada Cámara respectivamente. Si algún proyecto de ley no fuese devuelto por el Presidente dentro de 10 días (exceptuando los domingos) después de haberle sido presentado, dicho proyecto será ley, de la misma manera que si lo hubiese firmado, a menos que el Congreso haya impedido su devolución por la suspensión de sus sesiones, en cuyo caso no será ley."

VII.-Organos del Poder Ejecutivo.
Presidencia de la República.-

En el Presidente de la República encarna la más alta representación del Poder Ejecutivo. Sus atribuciones están metódicamente detalladas en los artículos 118 a 121 de la Constitución, modificados en parte por el Acto Legislativo núm. 10 de 1905 y el número 3 de 1910.

Respecto a la elección para esta alta Magistratura, disponía el Artº 114 que el Presidente de la República fuese elegido por las Asam-

bleas electorales, en un mismo día y en la forma que determine la ley, para un período de seis años. Dicho artículo fué derogado expresamente, al comenzarse el período presidencial del General Reyes, por el art. 5° del Aoto Legislativo núm. 8 de 1905 y sustituido por los arts. 5° del Aoto Legislativo núm. 5 y 3° del número ~~8~~ del mismo año. El citado art. 5° del Aoto Legislativo núm. 5, ofrece la particularidad inusitada de incorporar al texto constitucional el nombre de una determinada persona, disponiendo que "el período presidencial en curso, y solamente mientras esté a la cabeza del Gobierno el señor General Reyes, durará una década que se contará del 1° de enero de 1905 al 31 de diciembre de 1914". El Aoto Legislativo núm. 8 citado, ~~encomienda~~ encomienda, en su art. 3°, a la ley el determinar la forma de elección para el cargo de Presidente de la República. Hoy está en vigor sobre esta materia el art. 25 del Aoto Legislativo núm. 3 de 1910, según el cual el Presidente de la República será elegido en un mismo día, por el voto directo de los ciudadanos que tienen derecho a elegir Representantes, y

para un periodo de cuatro años, en la forma que determine la ley.

Por lo general, se han exigido siempre para el cargo de Presidente de la República las mismas condiciones que para el de Senador.

Las facultades presidenciales han sido más amplias con arreglo a las Constituciones unitarias que en los periodos federales. Unas hacen relación al Poder Legislativo, otras al Poder Judicial y otras a la genuina significación del Presidente como suprema autoridad administrativa.

Entre las primeras, son las más importantes el abrir y cerrar las sesiones ordinarias del Congreso, convocarlo a sesiones extraordinarias, proponerle el presupuesto de ingresos y gastos, y cooperar a la formación de las leyes presentando proyectos, objetándolos si lo cree pertinente y sancionando las leyes.

Respecto al poder Judicial, el Presidente de la República está facultado para conceder indultos por delitos políticos y rebajas de penas por los comunes, con arreglo a la ley.

Como suprema autoridad administrativa nombra y separa libremente a los ministros, promulga las leyes sancionadas y dicta las disposi-

ciones necesarias para su ~~ejecución~~ ejecución, nombra y separa libremente a los Gobernadores; designa a las personas que deban desempeñar los cargos públicos, cuya provisión no corresponda a otros funcionarios o corporaciones; dispone de la fuerza pública, vela por el orden público, previene a la seguridad interior y exterior del país, administra la Hacienda pública, dirige las relaciones diplomáticas, comerciales con las demás potencias y ejerce las demás funciones que le corresponden como suprema autoridad ejecutiva de la Nación.

En casos excepcionales puede quedar revestido además de facultades extraordinarias, según determinan casi todas las constituciones, pero siempre con responsabilidad que puede hacerse efectiva mediante acusación del Congreso. La Constitución de 1886 concreta estos casos de responsabilidad en su art. 122, sustituido por Acto Legislativo número 3 de 1910.

La Constitución prevé los casos de ausencia o imposibilidad temporal o definitiva del Presidente. Para ^{sustituirle} ~~este efecto~~ se estableció y ~~manti-~~

- 83 -

ya de antiguo el cargo de Vicepresidente de la República. También en la Constitución vigente se disponía que, por falta accidental del Presidente de la República, habría de ejercer el Poder Ejecutivo el Vicepresidente, quien estaba llamado a reemplazar asimismo al Presidente en los casos de muerte o de renuncia aceptada, hasta la terminación del período en curso. En defecto del ^{Vice}Presidente, en los casos antes expresados, se llama a ejercer la presidencia al Designado, elegido por el Congreso para cada bienio, y a falta de Vicepresidente y Designado, debían sustituir al Presidente los Ministros y los Gobernadores, ~~para el caso de falta accidental del Presidente, el Vicepresidente, el Designado, los Ministros y los Gobernadores, en el orden de proximidad de su residencia a la Capital de la República.~~ siguiendo estos últimos el orden de proximidad de su residencia a la Capital de la República.

Estas disposiciones fueron expresamente derogadas por el ~~Acto~~ ^{Acto} Legislativo núm. 8 de 1905, según el cual, el Presidente de la República es reemplazado, ~~por~~ en caso de falta temporal, por el Ministro que designa el mismo Presidente, y cuando no hay Ministros

en quienes pueda recaer esta designación, por el Gobernador del Departamento que se halle más próximo a la Capital de la República. Según el mismo Acto Legislativo, en caso de falta absoluta del Presidente corresponde la Designación de sustituto al Consejo de Ministros, por Mayoría absoluta de votos, debiendo recaer la elección en uno de los miembros de dicho Consejo; y si faltaren los Ministros, será sustituto del Presidente el Gobernador del Departamento más cercano a la Capital.

Finalmente, por Acto Legislativo número 3 de 1910, arts. 26 y 27, quedaron establecidos los preceptos que están vigentes en la actualidad, sobre sustitución del Presidente de la República. En caso de falta temporal, y en el de falta absoluta mientras se verifica nueva elección, debe ejercer el Poder Ejecutivo, por su orden, el primero o el segundo Designado. La elección de Designados para este efecto debe efectuarse por el Congreso cada año, y cuando por cualquier causa no hubiere hecho el Congreso elección de Designados, conservarán el

carácter de tales los últimamente elegidos. El Art. 26 del citado Acto Legislativo nú. 3 de 1910 determina los casos de falta absoluta especificando del Presidente, ~~terminando~~ los siguientes: Muerte, renuncia aceptada, destitución decretada por sentencia, incapacidad física permanente y abandono del puesto, debiendo proceder, en estos dos últimos casos la correspondiente declaración del Senado.

El encargado del Poder Ejecutivo ejerce las mismas atribuciones que el Presidente, cuyas veces desempeña.

Departamentos administrativos Centrales.— Organos centrales del Poder Ejecutivo son los Ministros del Despacho, cuya jurisdicción se extiende, dentro de su respectiva competencia, a todo el territorio.

Los actos de los Ministros han de ajustarse a leyes preexistentes, so pena de incurrir en responsabilidad. En Colombia esta responsabilidad se hace efectiva por el sistema legislativo o inglés, esto es, atribuyendo al Senado la facultad de juzgar a los Ministros, previa acusación de la Cámara de Representantes.

El número y nomenclatura de los Departamentos Ministeriales han variado mucho. Según el art. 136 de la Constitución de 1821, era de cinco el número de Secretarios de Estado; este número se redujo a cuatro en las Constituciones de 1830 y 1853; en las de 1832 y 1858, quedaron reducidos a tres. Las demás Constituciones, incluso la que comentamos, confieren a la ley el fijar el número, nomenclatura y precedencia de los distintos Ministerios o Departamentos administrativos. Para ser Ministro se requieren las mismas condiciones que para ser Representante, y su designación y remoción ha sido siempre atribución del Presidente de la República. Unicamente la Constitución de 1863, que tanto debilitaba el Poder Central, impuso al Presidente el requisito previo de someter el nombramiento de Ministros a la aprobación del Senado.

Los Ministros son órganos de comunicación del Gobierno con el Congreso, y en este concepto, presentan a las Cámaras proyectos de ley, intervienen en los debates y aconsejan al Presidente ~~la sanción~~ de la República la sanción u objeción de los Actos Legislativos. Tienen el

deber de informar al Congreso del estado de los asuntos correspondientes al respectivo Departamento y sobre las reformas legislativas que la experiencia aconseje. Por último, como Jefes superiores de Administración, anulan, reforman o suspenden, bajo su propia responsabilidad, las providencias de los Agentes inferiores.

Como puede observarse en las notas precedentes, la naturaleza, calidades, funciones y facultades que la Constitución colombiana atribuye a los Ministros del Despacho, no ofrecen diferencias notables respecto a lo establecido en los demás países.

Cuerpo consultivo supremo.— La importancia y trascendencia de las altas funciones encomendadas al Gobierno, exige la existencia de un Cuerpo Consultivo central a cuya deliberación e informe sean sometidas las cuestiones graves de Estado.

Respondiendo a esta necesidad, ^{la Constitución de 6 de agosto de 1821} ~~esta Constitución de 6 de agosto de 1821~~ establecieron ya un "Consejo de Gobierno", compuesto del Vicepresidente de la República, de los Secretarios del Despacho y de un

Ministro de la Alta Corte de Justicia , para que emitiese dictamen en los asuntos que la misma Constitución especificaba. Con ligeras variantes subsistió el Consejo ~~del~~ de Gobierno en las Constituciones de 1832, 1843 y 1853.

En 1830 aparece la institución del "Consejo de Estado", compuesto del Vicepresidente de la República, Ministros de Despacho, Procurador general de la Nación y otros ~~seis~~ Consejeros. En 1832 subsiste el Consejo de Estado en la "Constitución del Estado de la Nueva Granada" dada por la Convención constituyente de dicho año, pero reduciéndose su composición a siete Consejeros nombrados por el Congreso, ~~sin que se prescribiera para el Vicepresidente de la República~~ En esta última Constitución se conserva al propio tiempo el Consejo de Gobierno, también como organismo consultivo, presidido por el Vicepresidente de la República. En la Constitución vigente figura también el Consejo de Estado, pero fue suprimido por el Acto Legislativo núm.10 de 1905 que encomendó a la ley determinar los empleados que deberían ejer-

cer las funciones que tenía a su cargo el suprimido Cuerpo Consultivo. Nuevamente fué restablecido el Consejo de Estado por Ato Legislativo núm. 1 de 1914, vigente en la actualidad.

Se compone hoy el Consejo de Estado de siete individuos, a saber: el primer Designado para ejercer el Poder Ejecutivo, que lo preside, y seis vocales. Los Ministros del Despacho tienen voz, y no voto, en el Consejo. Sus atribuciones se detallan en el art. 6° del citado Ato Legislativo en el que se conserva el carácter fundamental de dicho Consejo como Cuerpo consultivo Supremo, debiendo ser oído necesariamente en todos aquellos casos que la Constitución y las leyes determinen, aunque sin ser obligatorios para el Gobierno sus dictámenes. Se encomienda también al Consejo de Estado la preparación de los proyectos de Ley y de Códigos que deban presentarse a las Cámaras Colegisladoras y la propuesta de reformas convenientes en todos los ramos de la legislación. Desempeña además el Consejo de Estado las funciones de Tribunal Supremo de lo contencioso administrativo.

Ministerio Público.- Para promover la observancia de las leyes, defender los intereses de la Nación, vigilar la conducta oficial de los empleados públicos y ~~xxx~~ perseguir los delitos y contravenciones que turben el orden social, existe de antiguo una institución que, correspondiendo a la esfera del Poder Ejecutivo sirve de nexo entre éste y el Judicial: es el Ministerio público.

Las constituciones de 1830, 1858, 1863 y 1886 dedican a esta institución un capítulo especial. La de 1853 solo conserva el cargo de Procurador General de la Nación, citándolo en el art. 45 que corresponde al Capítulo referente al Poder Judicial.

El ejercicio del Ministerio público está actualmente encomendado al Procurador General de la Nación, a los fiscales de los Tribunales Superiores de Distrito y a los demás funcionarios designados por la ley. La Cámara de Representantes, como se dijo en el lugar oportuno, ejerce también determinadas funciones fiscales.

Al cargo de Procurador general de la Nación se ha reconocido siempre gran importancia en Colombia. Según la Constitución de 1853, se

proveía mediante elección popular; las constituciones de 1858 y 1863 encomendaron a la Cámara de Representantes la designación de Procurador General, ~~quien~~ atribución que hoy corresponde al Presidente de la República.

El periodo de duración del cargo de Procurador general de la Nación, es de 3 años. Sus atribuciones principales son: cuidar que los funcionarios públicos desempeñen cumplidamente sus deberes, acusar ante la Corte Suprema a los altos funcionarios cuyo enjuiciamiento corresponde a la misma y cuidar de que los demás representantes del Ministerio público desempeñen fielmente su encargo.

El carácter que da la Constitución colombiana de 1886 al Ministerio Público, coincide por ~~su~~ tanto con la definición de dicha institución contenida en el art. 763 de nuestra ley Orgánica del Poder Judicial, promulgada en 15 de septiembre de 1870. Dice así este artículo: "El Ministerio fiscal velará por la observancia de esta ley y de las demás que se refieran a la organización de los Juzgados y Tribunales,

promoverá la acción de la justicia en cuanto concierne al interés público, y tendrá la representación del Gobierno en sus relaciones con el Poder judicial."

VIII. Administración de Justicia.

Corte Suprema de Justicia.— La más elevada representación del Poder Judicial es la Corte Suprema, instituida por el Presidente Bolívar, en 1817, usando de las amplias facultades que se le habían conferido. Más tarde, la Constitución de 1821 estableció la "Alta Corte de Justicia", compuesta de cinco ministros nombrados por el Congreso a propuesta del Poder Ejecutivo. Las Constituciones de 1830 y 1852 instituyeron una "Corte Suprema de Justicia", organismo que ha sido respetado y conservado en todas las constituciones posteriores.

La vigente de 1886 reorganizó este Alto Tribunal disponiendo que se compusiera de siete Magistrados, pero el Acto Legislativo núm. 3 de 1910, en su art. 35 elevó a nueve el número de Magistrados y confirió

a la ley el encargo de dividir en Salas dicha entidad, señalar a cada una de ellas los asuntos de que deba conocer separadamente y determinar aquellos en que deba intervenir en pleno la Corte Suprema.

Los Magistrados son elegidos por el Congreso a propuesta del ~~mandatario~~ Presidente de la República, para un período de cinco años según preceptúa el art. 36 del citado Acto Legislativo núm. 3 de 1910 que modificó el 147 de la Constitución por virtud del cual era vitalicio el cargo.

Algunas Constituciones (las federales de 1853, 1859 y 1863) no exigieron calidades especiales para el cargo de Magistrado de la Corte Suprema. La vigente de 1886 dispone que para dicho cargo se requiere ser colombiano de nacimiento y en el ejercicio de la ciudadanía, haber cumplido treinta y cinco años de edad y haber sido Magistrado de alguno de los Tribunales Superiores de Distrito o de los antiguos Estados, o haber ejercido con buen crédito, por cinco años a lo menos, la profesión de abogado o el profesorado en Jurisprudencia en algún establecimiento público.

En igual forma que los nombramientos de los Magistrados de la Corte, se hacen los de sus respectivos suplentes, esto es, eligiendo el Senado cuatro y la Cámara de Representantes cinco, de sendas ternas que presente el Presidente de la República. Los suplentes sólo pueden llenar las faltas temporales de los Magistrados principales, pues si ocurre falta absoluta de alguno, de éstos, se procede a nuevo nombramiento.

Entre las atribuciones ^{que la Constitución vigente confiere a} ~~la~~ Corte Suprema son las más importantes el conocer de los recursos de casación; dirimir las competencias que se susciten entre los Tribunales de Distrito; conocer de los asuntos contenciosos que afecten a la nación o que constituyan litigio entre dos o más ~~departamentos~~ Departamentos; declarar la validez o nulidad de las ordenanzas Departamentales que hubieren sido suspendidas por el Gobierno, o denunciadas ante los Tribunales, por los interesados, como lesivas de los derechos civiles; juzgar a los altos funcionarios nacionales, en los casos en que el Senado pase tanto de culpa;

conocer de las causas que por motivos de responsabilidad, por infracción de la Constitución o leyes, o por mal desempeño de sus funciones, se promuevan contra los Agentes diplomáticos y consulares de la República, los Gobernadores, los Magistrados de los Tribunales de Justicia, los Comandantes o Generales en Jefe de las fuerzas nacionales y los Jefes Superiores de las Oficinas principales de Hacienda de la Nación; conocer de los negocios contenciosos de los agentes diplomáticos acreditados ante el Gobierno de la Nación, en los casos previstos por el Derecho internacional, y conocer de las causas relativas a navegación marítima o fluvial.

Las funciones de Tribunal Supremo de lo contencioso-administrativo pasaron a ser desempeñadas por el Consejo de Estado en virtud del Acto Legislativo núm. 1° de 1914.

En cambio, por virtud del art. 41 del Acto Legislativo núm. 3 de 1910, se confirió a la Corte Suprema de Justicia la alta función de decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los Actos Legislati-

vos objetados como inconstitucionales por el Gobierno y de todas las leyes o decretos ~~gousados~~ ante la Corte por cualquier ciudadano, como inconstitucionales, previa audiencia del Procurador general de la Nación.

Tribunales y Juzgados.- El territorio nacional, para los efectos de la Administración de Justicia, se divide en Distritos judiciales, en cada uno de los cuales hay un Tribunal Superior.

La Constitución no fija ni el número de Distritos judiciales ni la composición ~~ya~~ atribuciones de los Tribunales Superiores, sino que encomienda su determinación a la ley. También encomienda a la ley la organización de los ~~ext~~ Juzgados inferiores, así como fijar las atribuciones de éstos y la duración de los jueces.

Los Magistrados de los Tribunales Superiores y los suplentes respectivos son nombrados por la Corte Suprema, de ternas que presentan las respectivas Asambleas Departamentales, según el art. 33 del Acto Legislativo núm. 3 de 1910.

Para ser Magistrado de los Tribunales Superiores se requiere ser ciudadano, tener 30 años de edad y haber desempeñado durante tres años por lo menos, funciones judiciales o ejercido la abogacía con buen crédito o enseñado Derecho en un establecimiento público.

Para ser Juez se requiere ser ciudadano en ejercicio, estar versado en la ciencia del Derecho y gozar de buena reputación. La segunda de estas calidades no exige como indispensable respecto a los jueces municipales.

Garantías de los Magistrados y Jueces.— La cuestión tan debatida de la inamovilidad de los Jueces y Magistrados, la resolvía la Constitución vigente en el sentido de concederla; mas por virtud de las reformas constitucionales de 1905 y 1910 hubo en esto algunas variaciones.

En efecto el art. 147 de la Constitución de 1886 declaraba vitalicio el empleo de Magistrado de la Corte Suprema, según antes se indicó, salvo el caso de destitución por mala conducta, encomendando a

la ley definir los casos de mala conducta y los trámites y formalidades que debían observarse para declararlos por sentencia judicial, y el art. 155 hacía extensivos los beneficios de la inamovilidad a los Magistrados de los Tribunales Superiores, estableciendo que estos funcionarios serán responsables ante la Corte Suprema por el mal desempeño de sus funciones y por las faltas que comprometan la dignidad del cargo. Por último, el artículo 160 generaliza más aun la aplicación del criterio de la inamovilidad, ordenando que los Magistrados y Jueces no puedan ser suspendidos en el ejercicio de sus destinos, sino en los casos y con las formalidades que determinen las leyes, ni depuestos sino en virtud de sentencia judicial. Tampoco pueden suprimirse ni disminuirse los sueldos de esos funcionarios de manera que la supresión o disminución perjudique a los que estén ejerciendo dichos empleos. Y colocando siempre el principio de la responsabilidad como término correlativo al de la inamovilidad, la Constitución dispone que la responsabilidad de los Jueces inferiores se haga efectiva an-

te el respectivo superior.

La modificación del criterio de la inamovilidad se encuentra primeramente en el Ato Legislativo núm. 1 de 1905, que fija en cinco años el período de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y en cuatro el de los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito judicial; pero esta modificación de criterio no fué absoluta, pues si bien se limitó la duración de los expresados cargos, un párrafo adicional al art. 2° del mismo Ato Legislativo declaró que los Magistrados pueden ser reelegidos indefinidamente. De este modo se dejaba subsistente, aunque sólo en parte, la inamovilidad, como garantía de independencia, y, por consiguiente, de imparcialidad en la Administración de justicia, y al propio tiempo se huía del peligro que señala Comte de que la inamovilidad pueda convertirse en la permanencia de la ineptitud, de la penalidad o del fanatismo. El susodicho Ato Legislativo, si bien revocó el carácter vitalicio de los cargos de la Magistratura, dejó en pie las demás normas constitucionales

que se oponen a toda arbitrariedad perturbadora de la imparcialidad y serenidad de juicio indispensables en el ejercicio de las funciones judiciales. El Acto Legislativo núm. 3 de 1910, en su artº 26 ratifica lo dispuesto sobre duración de los cargos judiciales en el susodicho Acto Legislativo núm. 1 de 1905.

IX.- Organización Departamental y Municipal.

División territorial.- Ante todo procede examinar los principales cambios constitucionales que, en el transcurso del tiempo y según el flujo y reflujo de las tendencias federalistas y unitarias, han venido operándose en la división política y administrativa del territorio, hasta llegar al estado actual, completando así el estudio que se inició sobre la materia al comentar el Capítulo primero de la Constitución vigente.

La ley fundamental de 1819 no estableció divisiones interiores, sino que se limitó a consagrar la unión de las naciones hermanas, dividiendo a Colombia en tres grandes Departamentos, a saber: Venezue-

la, Nueva Granada y Ecuador.

La "Constitución de la República de Colombia" sancionada por Bolívar en 6 de octubre de 1821, ordenó en su art. 8° que el territorio fuese dividido en Departamentos, éstos en Provincias, éstas en cantones y los cantones en Parroquias, criterio que fué mantenido en la Constitución de 1830. Ya anteriormente habían sido demarcados los Departamentos que en número de siete se designan en la Ley de 2 de octubre de 1821 con los nombres de Guinoco, Venezuela, Zulía, Boyacá, Cauca, Cundinamarca y Magdalena. En la Constitución de 1832 se suprimió la división departamental, quedando dividida la República en Provincias, éstas en cantones y éstos en Distritos. Poco tiempo después una Ley fijó en 15 el número de provincias.

Con el Régimen federal se excluyó de las Constituciones generales de Colombia lo referente a división del territorio, que naturalmente quedó reservada a las Constituciones particulares de los Estados federados. Estos, en la Confederación granadina, eran ocho, a saber:

Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá, y Santander. En la Constitución de los Estados Unidos de Colombia, fecha 8 de mayo de 1863, aparece además un nuevo Estado, el de Tolima, que había sido creado por decreto del Gobierno provisorio en 1861

Las Secciones que componían la Unión Colombiana, denominadas Estados y territorios nacionales, al promulgarse la Constitución unitaria de 1886 continuaron siendo partes territoriales de la República de Colombia, con sus propios límites y bajo la denominación de Departamentos. Dicha Constitución ~~autorizó~~ ^{reservó} a la ley la facultad de formar nuevos Departamentos con sujeción a determinadas condiciones. Por virtud de esta autorización, ampliada más ~~xx~~ tarde por Ato Legislativo n.º 3 de 1905, se crearon numerosos departamentos, ocasionándose una verdadera confusión tanto por las múltiples divisiones y subdivisiones que se hacían, como por la variedad de nombres con que unas y otras se designaban.

Hoy rigen sobre la materia las disposiciones del Ato Legislati-

vo nú. 3 de 1910, cuyos arts. 47 y 49 determinan la división en Departamentos y la de éstos en Distritos municipales, quedando excluidas las provincias del concepto de entidades territoriales para los efectos de la Administración pública.

Régimen departamental, provincial y local.-

Antiguamente los Departamentos eran regidos por Intendentes o Prefectos nombrados por el Presidente de la República para un período de cuatro años y sujetos directamente a la autoridad del Jefe supremo del Estado. Al frente de cada Provincia había un Gobernador, que dependía del Intendente departamental y ejercía a su vez autoridad sobre los Gobernadores de los cantones. ~~Además~~ Al lado de estas autoridades estaban las Cámaras de Distrito, establecidas por la Constitución de 1830 para deliberar y resolver en todos los asuntos de carácter municipal y local de los Departamentos, y los Concejos municipales establecidos en las capitales de provincias y de cantón.

El nombre y las atribuciones de estas autoridades y corporacio-

nes no han var~~ado~~ tanto en la evolución de la historia constitucio-
nal de Colombia como la significación y representación de las mismas.
En síntesis puede decirse que durante el régimen federal las autori-
dades departamentales, provinciales y locales representaban al pue-
blo siendo elegidas directamente por los ci~~udadanos~~, mientras que
durante el régimen unitario dichas autoridades son nombradas por el
Poder Ejecutivo Central, a quien representan y en cuyo nombre ejer-
cen sus respectivas funciones.

Hoy rigen sobre la materia los arts. ~~xxxxxxx~~ 47 a 65 del Acto
Legislativo núm. 3 de 1910, los cuales vinieron a sustituir a los
Arts. 182 a 201 de la Constitución vigente. Según lo dispuesto en es-
te Acto Legislativo, cada Departamento está regido por un Gobernador,
que representa al Poder Ejecutivo y es Jefe de la Administración sec-
cional. En cada Departamento hay una Corporación administrativa denomina-
da Asamblea departamental, compuesta de los Diputados que correspon-
dan a la población del Departamento, designados, mediante elección po-
pular, a razón de uno por cada 12.000 habitantes o fracción que pase

de 6.000. Además se establece que en cada Distrito municipal haya una Corporación de elección popular designada con el nombre de Concejo municipal para la administración del Distrito y velar por los intereses locales. Finalmente se dispone que en todo municipio haya un Alcalde para ejercer las funciones de Agente del Gobernador y ser al propio tiempo Jefe de la Administración municipal. El mencionado Acto legislativo, enumera y especifica las atribuciones correspondientes a las Asambleas Departamentales, a los Gobernadores y a los Concejos municipales.

X. Defensa nacional.

Cuando las necesidades públicas lo exijan, los colombianos están obligados, por precepto constitucional, a tomar las armas para defender la independencia nacional y las instituciones patrias; pero no hay ningún precepto constitucional que ordene de una manera terminante y absoluta el servicio militar obligatorio. Corresponde

a la ley, dentro siempre de estos principios, determinar las condiciones que en todo tiempo eximen del servicio militar, así como también establecer el sistema de reemplazos del ejército y declarar los derechos y obligaciones de los militares.

Sin embargo, el art. 165 de la Constitución, cuyo texto puede verse en el Apéndice número 5, ha sido interpretado como declaración del servicio militar obligatorio, y así lo estableció el Congreso en la ley 167 del año 1896, preceptuando que todo ciudadano colombiano de 21 a 40 años de edad está obligado a prestar el servicio de defensa de la patria. Es de notar que esta ley no fué reglamentada hasta 1911, por decreto número 2.144.

El lapso de tiempo transcurrido desde la promulgación de la Ley hasta su reglamentación, y otros indicios no menos elocuentes, demuestran que los principios a que ha de ajustarse la organización del ejército han venido siendo muy debatidos en todo momento y constituyen para Colombia una cuestión ardua, no resuelta aún definitiva-

mente en las costumbres públicas, sobre todo en lo que afecta al servicio militar obligatorio. Bien notoriamente nos lo revelan diversas campañas periodísticas, apasionados debates parlamentarios sobre la materia, y principalmente los informes ministeriales y los mensajes de los Presidentes de la República al Congreso nacional.

El Presidente Restrepo juzga la situación en tonos optimistas, y hace en su Mensaje de 1913 las siguientes afirmaciones: "Contra lo que era de esperarse en un país donde no había escuela sobre el particular, y si motivos para temer a la rotación de los ciudadanos por las unidades del ejército, el funcionamiento del servicio militar obligatorio no ha encontrado entre nosotros ningún obstáculo insuperable, lo que habla muy alto en favor del patriotismo colombiano. Para el logro de este feliz resultado, el Gobierno se ha visto secundado por la eficiente intervención del clero.

"Para inculcar de modo progresivo en nuestro pueblo el hábito de cumplir con el deber de la defensa nacional, primero fueron llamados

- 1 08 -

sucesivamente al servicio, para periodos de seis meses, dos contingentes, los cuales acudieron regularmente al llamamiento y cumplieron su cometido de modo recomendable.

"El llamamiento del tercer contingente, cuya presentación en los cuarteles debe efectuarse el 1° de agosto próximo, fija ya su permanencia en el Ejército por el tiempo de un año, que entre nosotros se considera técnicamente que basta para convertir a los ciudadanos en soldados aptos para la defensa de la Patria.

"El personal de oficiales de reclutamiento está muy lejos de ser suficiente para atender a los trabajos imprescindibles que trae consigo el servicio militar obligatorio."

Continúa el Presidente Restrepo, en el mencionado documento, haciendo consideraciones acerca de los elementos materiales que se requieren "como base indispensable del servicio militar de que se está hablando," y por último, bajo el epígrafe "Leyes militares", dice:

-109 -

"Precisa hacer un esfuerzo serio para dotar al país de las leyes indispensables sobre organización y funcionamiento del ejército.

"En los proyectos que cursen sobre el particular, debemos librarnos del exceso de detalle en la reglamentación, que si pueden ser aceptables en países donde las cuestiones militares han pasado al dominio de las resoluciones positivas, en el nuestro no hacen más que impedir el perfeccionamiento del Ejército, porque todavía tenemos que estar sometidos a estudios y tanteos, que deben dejarse para resolver según los casos particulares que van ocurriendo."

Resulta de este informe, no obstante el optimismo presidencial, que en 1913 no se hallaba aún consolidada la organización del Ejército, y se discutía sobre el alcance del precepto constitucional, aunque con tendencia cada vez más pronunciada al servicio militar obligatorio.

El Presidente Concha, en su Mensaje ~~anual~~ al Congreso nacional de 1917, después de lamentarse en tonos pesimis-

tas de la falta de los elementos indispensables para el Ejército y de la insuficiencia de los recursos públicos para suministrárselos, en la forma y cuantía que la solución del problema requiere, ~~mas~~ ~~se~~ ~~dice~~ respecto a cómo se realiza el servicio militar obligatorio:

"Obtenidos cuantos elementos necesita indispensablemente el Ejército, vendría en pos de ello la creación de un sistema de servicio militar que ahora sólo vive en el nombre. Decir que existe hoy en el país el sistema de servicio obligatorio, sería por lo menos un error. A los cuarteles no han ido antes, ni van hoy, a formar en la tropa, individuos de todas las condiciones sociales, dentro de los límites de edad que señala la ley, sino que la conscripción, en el hecho, se limita a los jóvenes de situación social inferior, que no han dispuesto de los medios ideados para eximirse de esta obligación. Se han ensayado varios métodos de reclutamiento: se suprimió la redención del servicio por dinero, que creaba un odioso privilegio, y se continúan los esfuerzos para que sea acatada la ley y atendida la equidad, pe-

ro no se logra modificar en un día las costumbres con sólo leyes u órdenes gubernativas, y pasarán años sin que el servicio obligatorio se implante en el hecho con toda verdad, para lo cual no será uno de los menores obstáculos la consideración de las circunstancias materiales en que va a hallarse el conscripto al ingresar en el cuartel, y la falta de censos verdaderos formados sobre un Registro civil exacto del movimiento de la población. No ha desaparecido, pues, sino en las apariencias, el reclutamiento de otros días, y así seguirá sucediendo mientras el sorteo no se haga de manera rigurosa y sus resultados no se hagan efectivos de modo equitativo; pero no sería imposible que al llegar a este extremo surgieran observaciones sobre la compatibilidad del sistema del servicio obligatorio, en tiempo de paz, con los principios consagrados a tal respecto en la Constitución nacional, cuya reforma habría de preceder, en tal caso, a la rigurosa implantación del sistema.

"Esto hace ver que el orden lógico de ciertas reformas ha de comenzar siempre por las bases, como se emprende una construcción por los cimientos, y que no es acertado pretender que se adopte, súbitamente teorías y prácticas de otros pueblos, ni sus mismas leyes y reglamentos, por dignos que sean de imitación, mientras no se haya estudiado la compatibilidad de ellos con las instituciones, necesidades y condiciones del país en que se van a acoger."

Que la institución del servicio militar obligatorio no ha tenido realidad en Colombia, a pesar de lo ordenado por la ley de 1896 y por el Reglamento de 1911, nos lo demuestra, además otro mensaje presidencial más reciente, suscrito por D. Fidel Marco Suárez y dirigido al Congreso nacional de 1919, en el que se dice lo siguiente: "También será tema de un proyecto de ley el servicio militar obligatorio, a fin de que progresivamente se vayan alcanzando los verdaderos fines de la reforma."

De una serie de interrogantes contenidos en el Mensaje últimamen-

te citado, bajo el epigrafe "Servicio militar obligatorio", se infiere que en el año en que fué suscripto no podía considerarse efectiva la reforma, por no alcanzar sus efectos a todas las clases y condiciones sociales, y porque la instrucción militar no es otra cosa que un ligero barniz obtenido en pocos meses y sin la debida preparación.

Hay que proclamar, sin embargo, el patriotismo y la disciplina del Ejército colombiano, así como es justo reconocer también los buenos deseos de los Gobiernos para llegar a la más perfecta organización del Ejército, pues, si no en la medida necesaria, han dedicado especial atención a la instrucción militar, enviando jóvenes al extranjero, principalmente a Chile, para estudiar la organización del ramo de guerra en otros países, y encomendando la enseñanza de los reclutas en el interior a la dirección de misiones militares extranjeras.

Examinemos ahora la cuestión del servicio militar obligatorio, aunque sea someramente, a través de la Historia constitucional del país.

La primera Constitución de Cundinamarca, promulgada en 4 de abril

de 1811, impone a los ciudadanos, sin distinción la obligación del servicio militar "en las graves urgencias del Estado, cuando peligra la Patria". Este criterio se sostiene en casi todas las Constituciones colombianas, en algunas de las cuales se ordena expresamente, no el servicio militar obligatorio en tiempo de paz, sino la obligación de todo ciudadano de instruirse en el manejo de las armas y en las principales evoluciones militares para que pueda cumplir el deber de defender a la patria cuando el Estado peligre: así lo previno, por ejemplo, la Constitución de Tunja de 1811, y también la de Antioquia de 1815.

Otras Constituciones, como la de 1830 y la de 1832, aunque dedican un Título a lo referente al ejército, nada definen sobre la obligación de los ciudadanos en relación con el servicio militar. La de 1853 sólo hace una ligera referencia al Ejército y a la Marina al tratar de las facultades del Gobierno de la República, al que atribuye el derecho de resolver sobre la paz y la guerra "y la consiguiente fa-

cultad de tener ejército y marina y estatuir lo conveniente a su organización y administración." Otro tanto hacen la Constitución de la Confederación Granadina de 22 de mayo de 1858 y la de los Estados Unidos de Colombia de 8 de mayo de 1863.

Resulta de todo lo expuesto que no es todavía cuestión resuelta ni en el texto constitucional ni en la realidad del país la institución del servicio militar obligatorio.

Lo que sí ordena la Constitución vigente, como lo habían hecho también las anteriores, es que la nación tenga para su defensa un ejército permanente y confiere a la ley el determinar el sistema de reemplazos, así como los ascensos, derechos y obligaciones de los militares. Declara que la fuerza pública no es deliberante. Prohíbe a los militares el reunirse sin orden de la autoridad legítima, así como también dirigir peticiones, a no ser sobre asuntos que se relacionen con el buen servicio y con la moralidad del ejército, y siempre con arreglo a las leyes. Establece una jurisdicción especial para conocer

de los delitos cometidos por los militares en servicio activo y en relación con el mismo servicio, instituyendo las cortes marciales o Tribunales militares y previene que sólo en los casos y en el modo que determine la ley podrá privarse a los militares de los grados, honores y pensiones que disfruten. Por último la Constitución confiere a la ley la facultad de organizar y establecer una milicia nacional.

XI.- Reforma de la Constitución.

La Constitución vigente, después de consagrar un título, que no requiere comentario especial, a la Hacienda pública, establece el procedimiento para la reforma constitucional.

La previsión de la reforma, aparece en la mayor parte de las Constituciones colombianas, indicando el procedimiento a seguir. La de 1886 exigía un Ato Legislativo, discutido primeramente y aprobado en tres debates, por el Congreso, en la forma ordinaria; examinado nueva-

mente en la siguiente legislatura, y aprobado por ésta, previo nuevo debate, por dos tercios de los votos en ambas Cámaras. Este procedimiento ha sido reformado.

Lo vigente en la actualidad es lo preceptuado en el art. 70 del Acto Legislativo núm. 3 de 1910 que exige la mayoría absoluta de votos en ambas Cámaras para la aprobación del proyecto en la segunda legislatura.

Las restricciones impuestas para la reforma Constitucional no siempre fueron respetadas, como debieran serlo.

Colombia, pueblo joven, inteligente, plétórico de vida, careció en ocasiones del suficiente dominio reflexivo para contener en sus justos límites los impulsos renovadores. Obedeció, más que a las normas estatutarias, al dinamismo de su propia energía.

Por esto las constituciones colombianas se sucedieron con demasiada rapidez, hasta que las distintas tendencias políticas cristala-

lizaron, armonizándose, en la de 1886.

No siempre se tuvo en cuenta que las formalidades y los plazos exigidos para la reforma constitucional son la mejor garantía de permanencia relativa de las normas fundamentales del país, requisito esencial para que la vida política se desenvuelva gradualmente, como corresponde a un racional progreso, y no impulsada por movimientos apasionados o por sacudidas revolucionarias.

A P É N D I C E N Ú M E R O 1.

RELACIÓN CRONOLÓGICA de los principales hechos y documentos que expresan el proceso histórico de las instituciones políticas de Colombia.

-----0000-----

AÑO 1780.

Insurrección de los Comuneros.

1794.

D. Antonio Naríño traduce de la Historia de la Asamblea Constituyente francesa de 1789 la "Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano."

1809.

Septiembre, 14.- El Virrey Amar convoca una reunión de notables para consultarles su opinión sobre lo que debía hacerse con motivo de la formación de una Junta Suprema en Quito con tendencia separatista.

Noviembre, 20.- "Representación del Cabildo de Santafé a la Suprema Junta Central de España", pidiendo igualdad de derechos políticos para los ciudadanos de todos los dominios españoles.

1810.

Mayo.- La Junta de Regencia, reunida en Cádiz, invita a las colonias para que concurren a las Cortes, fijándoles para su representación el número de veintoseis diputados.

Julio, 20.- Acta de Independencia de la Ciudad de Bogotá.

Octubre, 26.- Bando promulgado por la Junta Suprema de Santafé sobre organización del Gobierno.

Diciembre 22.- Acta de instalación del Congreso general del Reino Nuevo Reino de Granada.

1811.

Enero, 25.- La Junta Suprema de Santafé forma una Comisión de miembros de su seno y otros ciudadanos ilustres, para que redacte el Primer Proyecto de Constitución, erigiéndose así en "Colegio Constituyente de Cundinamarca."

Febrero, 19.- La Junta Suprema de Santafé convoca a los vecinos de cada Parroquia para la elección de Diputados al Colegio Electoral Constituyente.

Febrero, 27.- Se reúnen los Señores del Serenísimo Colegio Constituyente en la Sala Consistorial del Palacio de Gobierno, convocados por la Junta Suprema y prestan juramento de "sostener y defender en toda su pureza la Santa Religión Católica, Apostólica, Romana, única y exclusivamente verdadera, hasta derramar la última gota de sangre por la conservación, exaltación y esplendor de la fé que profesan nuestra Santa Madre la Iglesia; defender el misterio de la Concepción Inmaculada de María Santísima; defender y sostener los derechos que a la Corona tiene, por los votos de la Nación, el señor don Fernando VII, siempre que pueda gobernar libre de todo influjo de la Francia o de cualquiera otro poder que lo tiranice, y siempre que lo haga arreglado a la Constitución que establezcan las Cortes generales del Reino, sin deprimir los derechos y la representación de este Nuevo Reino de Granada; defender y sostener los de la libertad e independencia de este mismo Reino, y particularmente los de esta Provincia, sin reconocer la pretendida autoridad del Consejo titulado de Regencia, ni la de las Cortes figuradas por el Consejo mismo de la Isla de León o en Cádiz, ni ninguna otra que no sea libremente constituida por los pueblos con la igualdad que inspira la naturaleza y prescribe el Derecho de Gentes; dedicarse con todo esfuerzo a desempeñar cumplidamente la representación conferida por los pueblos de esta Provincia, dándoles una Constitución capaz, en cuanto lo permita el entendimiento humano, de asegurar su libertad y felicidad, estableciendo el mejor orden posible en todas las cosas, según las actuales circunstancias; y recibida, adoptada y sancionada la Constitución, proceder con

arreglo a ella imparcialmente, sin respetos de familia o amistad y sin interés alguno, a la elección de los ciudadanos que en conciencia parezcan más capaces de ejercer con utilidad pública las altas funciones de Legislatura, Gobierno y Judicatura de esta Provincia".

Marzo, 6. El Colegio Constituyente empieza la discusión del proyecto de Constitución política, el cual se acomodaba a dos principios fundamentales, a saber: La profesión solemne de la Fé Católica, Apostólica, Romana, y el reconocimiento de Fernando VII para que, con el título de "Rey de los Cundinamarqueses", entrara a ejercer vitaliciamente el Poder Ejecutivo "bajo pacto y juramento de observar inviolablemente la Constitución, debiendo ser el Gobierno constitucional y representativo y aceptándose la división de los Poderes en Legislativo, Ejecutivo y Judicial."

Abril, 4. Promulgación de la Primera Constitución de Cundinamarca, establecida, aprobada y sancionada por el Colegio Constituyente y Electoral de dicha Provincia, en Santafé de Bogotá a treinta de marzo anterior.

Abril, 24. Da por terminadas sus sesiones el Colegio Electoral y Constituyente de Cundinamarca.

Noviembre, 11. "Acta de la Independencia de la Provincia de Cartagena en la Nueva Granada".

Noviembre, 27. Acta de Federación de las Provincias Unidas de Nueva Granada. Este documento se acomodó a las siguientes bases: Conservación de la Religión Católica; reconocimiento de las autoridades españolas en el sólo caso de que éstas hayan sido establecidas por el pueblo; igualdad de independencia de las Provincias confederadas conservando éstas su autonomía; y conferir al Congreso la defensa nacional, las cuestiones internacionales y la imposición de contribuciones generales, además de las funciones legislativas. Firmaron su conformidad con el contenido de este documento los representantes de las provincias de Antioquia, Cartagena, Neiva, Pamplona y

Tunja, y se negaron a firmar los Diputados por Cundinamarca y Chocó, alegando no ser partidarios del sistema federal adoptado, actitud a la que no era ajeno el Presidente Marín, partidario del sistema unitario.

Diciembre, 9.- "Constitución de la República de Tunja, sancionada en plena Asamblea de los Representantes de toda la Provincia, en sesiones continuas desde 21 de noviembre hasta 9 de diciembre de 1811, año 2° de la transformación política del Nuevo Reino de Granada." El texto de esta Constitución es muy parecido al de la de Cundinamarca, aunque, según frase del comentador Samper "se echa de ver que en el tiempo transcurrido de marzo a diciembre de 1811, las ideas republicanas habían tomado cuerpo, y se pensaba menos en los derechos de Fernando VII que en los de la Patria."

Diciembre, 23.- Comienza sus sesiones el Serenísimo Colegio Revisor y Electoral de Cundinamarca.

1812.

Marzo, 21.- Se firma en la ciudad de Santiago de Rionegro, por los Diputados al Colegio Constituyente y Electoral, la "Constitución del Estado de Antioquia."

Abril, 17.- Se firma la "Constitución de la República de Cundinamarca, reformada por el Serenísimo Colegio Revisor y Electoral en sesiones tenidas desde veinte y tres de diciembre de mil ochocientos once, hasta diez y siete de abril de ~~1812~~ mil ochocientos doce."

Mayo, 3.- El Pueblo acepta solemnemente la "Constitución del Estado de Antioquia sancionada por los representantes de toda la Provincia." Es de notar que esta Constitución no tiene la sanción del Ejecutivo y que es el Pueblo quien le otorga su asentimiento. Esta Constitución es más clara y precisa que las de Cundinamarca y Tunja, de 1811, sobre todo al determinar la forma de Gobierno y clasificar los Poderes públicos. Por lo demás, en lo fundamental, coe-

ciado con aquéllas.

Mayo, 18.- "Tratado entre el Supremo Poder Ejecutivo de Cundinamarca y los Comisionados que nombró la Diputación general de las provincias residente en Ibagué."

Junio, 14.- "Constitución del Estado de Cartagena de Indias sancionada por la Convención General en 14 de junio de 1812, 2ª de la Independencia."

Octubre, 4.- Acta de instalación del Primer Congreso de las Provincias Unidas de Nueva Granada.

1813.

Julio, 16.- El Serenísimo Colegio Electoral y Revisor de Cundinamarca sanciona y decreta la segunda declaración de independencia, que fué publicada tres días después por el Presidente Mariño mediante el correspondiente decreto.

1814.

Septiembre, 25.- "Reforma del Acta Federal hecha por el Congreso de las Provincias Unidas de la Nueva Granada". Por esta reforma queda excluida Cundinamarca de la Federación.

Octubre, 21.- "Reglamento para el ejercicio de las facultades y atribuciones del Gobierno General de la Nueva Granada sobre las bases de Reforma acordadas por el Congreso y en virtud de la concentración de los ramos de ~~la~~ Hacienda y Guerra que han hecho las Provincias Unidas en el mismo Congreso.

1815.

Junio, 21.- "Constitución o Forma de Gobierno acordada por los Delegados del Pueblo reunidos en Convención Constituyente y Electoral del Estado de Mariquita".

Julio, 10.- Promulgación de la "Constitución provisional de la Provincia de Antioquia, revisada en Convención de 1815".

185.

- Julio, 13.- Se aprueba el "Plan de Reforma o revisión de la Constitución de la provincia de Cundinamarca del año de 1812, sancionado por el Serenísimo Colegio Revisor y Electoral de la misma, en sesiones tenidas desde el mes de Junio hasta el 13 de julio de 1815."
- Julio, 19.- Promulgación de la Constitución Reformada de la Provincia de Cundinamarca.
- Noviembre, 15.- "Reforma del Gobierno General de las Provincias Unidas de la Nueva Granada."

1817.

- Octubre, 6.- Decreto de Bolívar sobre organización y atribuciones del Poder Judicial.
- Octubre, 30.- Decreto de Bolívar sobre organización provisional del Consejo de Estado.
- Noviembre, 5.- Decreto de Bolívar estableciendo y nombrando un Consejo de Gobierno, para dotar al país de un Centro fijo gubernativo y administrativo durante la campaña, a cuya dirección atendía el mismo ~~Supremo Poder~~ Bolívar como "Jefe Supremo de ~~la República~~ la República de Venezuela y Capitán General de sus Ejércitos y de los de Nueva Granada."
- Noviembre, 7.- Decreto de Bolívar creando un "Tribunal de Consulado" para conocer de los pleitos y diferencias entre los negociantes y promover el fomento del comercio y de la agricultura.

1819.

- Febrero, 15.- Solemne apertura del Congreso de Angostura, abriendo las sesiones Bolívar con un hermosísimo mensaje, al que unió un proyecto de Constitución que había redactado en colaboración con D. Francisco Antonio Zea. El discurso de Bolívar al Congreso de Angostura es uno de los documentos parlamentarios más notables que existen.

Febrero, 18.- El Congreso de Angostura expide un decreto estableciendo las facultades que corresponden al Jefe del Estado, como Representante Supremo del Poder Ejecutivo.

Febrero, 25.- El Congreso Nacional de Angostura dicta un Decreto reglamentando el Poder Judicial.

Febrero, 26.- El Congreso de Angostura aprueba el "Reglamento sobre Gobierno del Estado", confiriendo facultades extraordinarias, durante la campaña, al Presidente Bolívar, y determinando las que se atribuyen al Vicepresidente de la República.

Septiembre, 11.- El Presidente de la República Simón Bolívar expide un decreto estableciendo un Gobierno provisional para las Provincias libres de Nueva Granada.

Diciembre, 17.- El Congreso de Angostura aprueba ~~la~~ la "Ley Fundamental de la República de Colombia". Por esta ley quedaron reunidas en una sola República las Provincias de Venezuela y de la Nueva Granada, comprendiendo su territorio todo el que estaba asignado a la antigua Capitanía general de Venezuela y al Virreinato del Nuevo Reino de Granada. El artículo 1° de esta Ley Fundamental dice así: "Las Repúblicas de Venezuela y la Nueva Granada quedan desde este día reunidas en una sola bajo el título glorioso de REPUBLICA DE COLOMBIA."

1821.

Julio, 12.- Es aprobada y sancionada por el Congreso General de Colombia, en la villa de Rosario Cúcuta, la "Ley Fundamental de la unión de los pueblos de Colombia", ratificando la "Ley Fundamental de la República de Colombia" y declarando que los pueblos de la Nueva Granada y Venezuela "quedan reunidos en un solo cuerpo de Nación, bajo el pacto expreso de que su Gobierno será ahora y siempre popular, representativo" y que el nuevo Estado será conocido y denominado con el título de "República de Colombia."

Julio, 19.- Ley sobre abolición del tráfico de esclavos.
Septiembre, 14.- Ley sobre libertad de imprenta.
Octubre, 4.- Ley "designando las armas de la República".
Octubre, 6.- Simón Bolívar sanciona la "Constitución de la República de Colombia", cuyo territorio comprendía todo el antiguo Virreinato de la Nueva Granada y la Capitanía General de Venezuela. Esta ~~esta~~ Constitución comprende 191 Artículos, distribuidos en 10 Títulos, ~~Esta Ley Fundamental~~ ~~fuera~~ dada por el primer Congreso General de Colombia, y firmada por todos los Diputados presentes, en la Villa de Rosario de Cúcuta.

1823.

Abril, 19.- Se reúne en Bogotá, ciudad designada para Capital de la República, el primer Congreso constitucional de Colombia.

1824.

Abril, 5.- Se reúne el segundo Congreso constitucional de la República de Colombia.

1826.

Mayo, 25.- Simón Bolívar presenta al Congreso constituyente de Bolivia un proyecto de Constitución que más tarde trató de implantar también en Colombia para sustituir la de 1821, aunque sin conseguirlo.

1827.

Mayo, 2.- Se reúne el Congreso en Tunja y acuerda, después de muy acaloradas discusiones, no aceptar las renunciaciones que los Generales Bolívar y Santander habían presentado de la Presidencia y Vicepresidencia de la República respectivamente.
Agosto, 7.- El Congreso acuerda convocar una Gran Convención Nacional, que había de reunirse el 2 de marzo de 1828 en la Ciudad de Ocaña, como punto más céntrico de país.

1828.

Abril, 9.- Se reúne la Gran Convención Nacional convocada por el Congreso mediante Ley de fecha 7 de agosto anterior. (No pudo reunirse en la fecha fijada ~~para el día 7 de agosto~~ en la convocatoria, por falta de quorum.) El primer acuerdo de esta Convención fué reconocer la necesidad y urgencia de reformar la Constitución de la República, único extremo en que estuvieron unánimes los Diputados; mas no pudieron armonizarse las tendencias opuestas de centralistas y federalistas, y habiéndose retirado los veintinueve Diputados centralistas del seno de la Convención, no pudo ésta continuar sus sesiones por no contar con las dos terceras partes de sus miembros que formaban el quorum, según la Constitución.

Junio, 13.- Pedro A. Herrán, Intendente de Cundinamarca, ~~mandó~~ reúne en Bogotá una Junta de personas notables, y se acuerda en esta Asamblea anular las credenciales de los Diputados de Bogotá a la Convención y conferir a Bolívar el carácter de Dictador con facultades omnímodas.

Agosto, 27.- Simón Bolívar expide el "Decreto que debe servir de Ley Constitucional del Estado hasta el año 1830", con el propósito de consolidar la unión del Estado y restablecer la paz interior.

Septiembre, 25.- Estalla y fracasa una conjuración de los partidarios del General Santander contra el Gobierno dictatorial y contra la persona de Bolívar.

Septiembre 26.- Bolívar deroga el Decreto orgánico dictatorial de 27 de agosto anterior, asume la dictadura sin restricciones y nombra un Tribunal especial para juzgar a los conspiradores.

1830.

Enero, 20.- Simón Bolívar preside la apertura del Congreso Constituyente, al que presentó la renuncia irrevocable de la Presidencia de la República.

Mayo, 5.- Es sancionada por el encargado del Poder Ejecutivo la ~~Nueva~~ "Constitución de la República de Colombia", obra del Congreso que mereció el renombre de "Admirable", de la cual dice Samper que era seguramente la más sabia y completa que hasta entonces se había conocido en la América española.

Mayo, 8.- Bolívar, una vez aceptada su renuncia de la Presidencia de la República, sale definitivamente de Bogotá.

Diciembre, 17.- ~~Muere Bolívar~~ Muere Bolívar después de dictar su última proclama, que termina así: "¡Colombianos! mis últimos votos son por la felicidad de la Patria: si mi muerte contribuye para que cesen los partidos y se consolide la unión yo bajaré tranquilo al sepulcro."

1831.

Mayo, 7.- El Vicepresidente Caicedo, en funciones de Presidente ~~de~~ Presidente de la República, convoca una Convención de Diputados de los Departamentos de Antioquia, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, ~~San~~ Istmo y Magdalena para formar una nueva Constitución de la República.

Octubre, 20.- Se reúne en Bogotá la Convención convocada por Caicedo, cuyo fin principal fue organizar las Provincias del Centro de Colombia en un nuevo Estado con el nombre de Nueva Granada, en vista de la separación de Venezuela que se había erigido en Estado independiente.

Noviembre, 21.- El Vicepresidente Caicedo sanciona la "Ley Fundamental del Estado de Nueva Granada" acordada y suscrita por la Convención el día 17 del mismo mes de noviembre.

Diciembre, 17.- Es sancionado el Decreto legislativo ~~dado~~ dado por la Convención con fecha 15 del mismo mes, sobre Gobierno provisional de la Nueva Granada.

1832.

Marzo, 1.- El Vicepresidente de la República Obando, ~~encargado~~ *encargado* del Poder

Ejecutivo, sanciona la "Constitución del Estado de la Nueva Granada, dada por la Convención Constituyente" presidida por el Obispo de Santa-Marta, y firmada por los Diputados de dicha Convención en Bogotá a 29 de febrero anterior.

Marzo, 10.- Se encarga del Poder Ejecutivo, ante la Convención, el Dr. Márquez, elegido Vicepresidente de la República, por la misma Convención. La elección de Presidente de la República había recaído en el General Santander, que a la sazón se hallaba ausente.

Octubre, 7.- Regresa al país el General Santander y se encarga del Poder Ejecutivo como Presidente de la República.

1834.

Marzo, 7.- El Congreso acuerda una Ley estableciendo el pabellón y escudo de armas de la Nueva Granada; ~~en~~

1843.

Abril, 20.- Se promulga la "Constitución política de la República de la Nueva Granada reformada por el Congreso en sus sesiones de 1842 y 1843." Esta Constitución tiene tendencia conservadora.

1851.

Abril, 25.- Ato Legislativo adicionando y reformando la Constitución de la República en la parte que reglamenta la reforma constitucional.

1853.

Marzo, 7.- Ato Legislativo que sanciona el de 25 de abril de 1851 sobre el procedimiento para reformar la Constitución. Tanto este Ato Legislativo como el anterior obedecen al propósito de modificar radicalmente el texto constitucional.

Mayo, 21.- Queda sancionada la "Constitución política de la Nueva Granada expedida por el Congreso" y firmada con fecha 20 del mismo mes de mayo por los Presidentes y Vicepresidentes del Senado y de la Cámara

de Representantes y por los Senadores y Representantes de todas las provincias. Esta Constitución es de tendencia diametralmente opuesta a la de 1843, pues debilitando el Poder Central llegó a comprometer seriamente, como afirma Samper, la unidad política del país. Sus artículos 48 y 51 facultó a las provincias "para disponer lo que juzgasen conveniente a su organización, administración y régimen interior", lo que dió base para que cada provincia acordara su propia Constitución, poco después de promulgada la nacional.

1855.

Febrero, 27.- Ato adicional de la Constitución por el cual se crea el Estado de Panamá, asignándole "el territorio que comprende las provincias del Istmo de Panamá, a saber: Panamá, Azuero, Veraguas y Chiriquí". El Estado de Panamá creado por este Ato Legislativo era federal, soberano, pero sin dejar de formar parte integrante de la Nueva Granada.

Abril, 1º.- Comienza a ejercer el Poder Ejecutivo el Dr. Mallarino, quien formó su Ministerio con las personas más cultas del país, consiguiendo poner término por entonces al período de enconadas luchas políticas que tanto daño ocasionó a la nación colombiana.

Junio, 4.- Ley que adiciona y reforma lo dispuesto en el art. 16 de la Constitución de 1853, referente al número de Senadores.

1856.

Junio, 11.- Ley erigiendo en Estado federal la Provincia de Antioquia, de conformidad con la doctrina establecida por el Ato adicional a la Constitución expedido en 27 de febrero del año anterior. En virtud de esta Ley quedó la República dividida en dos Estados soberanos y veinte Provincias que a su vez pretendían erigirse en otros Estados independientes, con lo que se caminaba hacia una Constitución francamente federal.

1857.

- Abril, 1°.- Se encarga del Gobierno de la República el Dr. D. Mariano Ospina, habiendo terminado su período presidencial el Dr. Maellarino.
- Mayo, 13.- Decreta el Congreso la creación del Estado federal de Santander, en condiciones análogas al de Panamá: Comprenderá el territorio de este nuevo Estado las provincias de Pamplona y Socorro.
- Junio, 15.- Ley en relación con el art. 12 del Ato adicional de la Constitución, fecha 27 de febrero de 1855, creando los Estados federales de Cauca, Cundinamarca, Boyacá, Bolívar y Magdalena. Estos nuevos Estados, como los anteriormente creados de Panamá, Antioquia y Santander, quedaren sujetos a la Nueva Granada en lo concerniente a política internacional, guerra y marina, hacienda nacional, pabellón y armas nacionales y pesos y medidas; en todo lo demás podían obrar libremente obedeciendo a su Constitución respectiva.

1858.

- Febrero, 10.- Ato Legislativo adicionando y reformando el art. 57 de la Constitución, en el sentido de que ésta pueda adicionarse o reformarse en todo o en parte, de la misma manera que se adiciona o reforma una simple ley, sin que el ato o los atos que se expidan por el Congreso con el fin de adicionar o reformar la Constitución, puedan ser objetados por el Poder Ejecutivo.
- Mayo, 22.- Se sanciona y promulga la "Constitución política para la Confederación Granadina". Esta Constitución organiza la República en sentido federal. Su Artículo 1° define este carácter así: "Los Estados de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá y Santander se confederan a perpetuidad; forman una Nación soberana, libre e independiente, bajo la denominación de Confederación Granadina, y se someten a las decisiones del Gobierno general en los términos que se establecen en esta Constitución".

1861. 1861.

- Febrero, 3.- El Gobierno provisional de la República, tratando de poner

términe a las guerras civiles que venían asolando al país, convoca ~~una Convención Nacional~~ un Congreso de Plenipotenciarios.

Septiembre, 10.- Se reúne en Bogotá el Congreso de Plenipotenciarios nombrados por los Jefes civiles y militares de los Estados soberanos, con la abstención de Antioquia y Panamá, cuyos Gobiernos habían rehusado su asistencia.

Septiembre, 20.- Los Plenipotenciarios de los Estados Soberanos de Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Santander y Tolima firman y sellan el "Pacto de Unión", por virtud del cual los ~~anexados~~ Estados "se unen, ligan y confederan para siempre, y formen una Nación libre, soberana e independiente, que se denominará "Estados Unidos de Colombia".

Septiembre, 20.- "Pacto Transitorio" reconociendo al General Mosquera como Presidente provisional de los Estados Unidos de Colombia en ejercicio del Poder Ejecutivo nacional y al General Juan José Nieto como Designado para ejercer el mismo Poder Ejecutivo en los casos de falta absoluta o temporal del General Mosquera. Establase también este Pacto, ~~expedida~~ acordado asimismo por el Congreso de Plenipotenciarios, un Consejo de Gobierno cuyos miembros serán nombrados por los Estados y del cual formarán parte además el Presidente de la Corte Suprema y el Procurador de la Nación. x

1862.

Agosto, 25.- El Gobierno Provisional de la República convoca una Convención nacional.

1863.

Febrero, 4.- Se reúne en Rionegro del Estado de Antioquia la Convención nacional.

Febrero, 9.- "Ley que organiza provisoriamente el Gobierno de la Unión Colombiana". En esta Ley, expedida para regir "mientras se expide la

Constitución política de la Unión Colombiana," se dispuso que el Gobierno esté a cargo de un Ministerio compuesto de cinco Ministros, a saber: del Interior, de Relaciones exteriores, de Hacienda, del Tesoro y Crédito Nacional y de Guerra. Deroga el Pacto Transitorio de Unión de 20 de septiembre de 1861, con excepción del art. 5°.

Mayo, 8.- "Constitución política de los Estados Unidos de Colombia, sancionada por la Convención nacional". Es la última Constitución federal de Colombia y está inspirada en un sentido radical y descentralizador. Consta de 92 artículos distribuidos en 15 Capítulos. Con la misma fecha ratifican esta Constitución las Diputaciones a la Convención Nacional por los Estados soberanos de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá, Santander y Tolima. Finalmente, el mismo día 8 de mayo de 1863 se acordó un "Acto constitucional transitorio" determinando la época de las elecciones populares y regulando las funciones de Gobierno hasta la implantación definitiva de la nueva organización.

1867.

Mayo, 23.- Las demasías del Presidente Mosquera, quien llegó hasta a romper definitivamente con el Congreso, cerrando sus sesiones y reduciendo a prisión a varios de sus miembros; el espíritu de tiranía que le llevó a declarar en estado de sitio a toda la República; la violenta persecución de que hizo objeto a la Religión católica, hasta el punto de desterrar al Arzobispo de Bogotá y a los Obispos de Pasto y Santamarta, y la conculcación de varios preceptos constitucionales, ocasionaron el acuerdo de la guarnición de Bogotá y de los ciudadanos notables de dicha Capital, acompañando al Presidente "en nombre de la Constitución y de las leyes". El General Mosquera fue reducida a prisión, depuesto por el Senado y ~~sancionado~~ condenado a sufrir otras sanciones penales. El mismo día asumió el

125.

~~1874~~

Poder el General Santos Acosta, segundo Designado elegido por el Congreso.

1876.

Mayo, 30.- Acto reformativo de la Constitución decretando que "la votación para elegir Presidente de la Unión y la declaratoria del voto en cada Estado se verificarán en todos ellos, respectivamente, en unos mismos días, los cuales serán señalados por una Ley nacional."

1884.

Agosto, 11.- Ocupa el cargo de Presidente de la Unión el Dr. Núñez, partidario de una amplia reforma constitucional.

1885.

Septiembre, 10.- El Presidente Núñez expide un Decreto ordenando a los Jefes de los distintos Estados de la Unión el envío de Delegatarios al Consejo nacional que debía resolver sobre la reforma constitucional.

Noviembre, 11.- Inaugura solemnemente sus sesiones en Bogotá el Consejo nacional de Delegatarios, compuesto de diez y ocho miembros (dos por cada Estado) divididos por mitad en conservadores e independientes. En esta Asamblea dominaba el espíritu de la unión pues el sistema federal se consideraba fracasado por completo. Los representantes habían sido escogidos entre lo más selecto y culto de la nación e iniciaron desde luego el estudio de una nueva Constitución en la que, estableciéndose sólidas instituciones políticas, robusteciéndose el Poder Central y asegurando el mantenimiento del orden y las prácticas de justicia, ofreciese garantías suficientes a los ciudadanos, y, poniendo término a las pasadas luchas, asegurase la paz en el país. En la misma sesión inaugural leyó el Presidente Núñez una exposición o mensaje sobre la reforma constitucional, documento verdaderamente admirable porque contiene los principios básicos de las instituciones políticas convenientes al país

saturados de sana doctrina y en forma irreprochable.

Noviembre, 30.—"Acuerdo sobre reforma constitucional". Contiene este importante documento las bases de la reforma, ajustadas a una tendencia centralista, y además las reglas de tramitación de dicha reforma constitucional.

1886.

Mayo, 11.— la Comisión designada al efecto presenta al Consejo Nacional de Delegatarios un proyecto de Constitución elaborado durante seis meses de labor diaria. En este proyecto se tuvo sólo en cuenta el interés del país y se huyó de toda influencia extranjera, para que la Carta fundamental fuese un producto de evolución interna de las instituciones políticas connaturalizadas en la nación. Dicha Comisión estuvo formada por los Delegatarios D. Miguel Antonio Caro, D. Carlos Calderón, D. José Domingo Ospina Camacho, D. Antonio Rolán, D. Jesús Casas Rojas y D. Felipe F. Paul, siendo ponente en el seno de la Comisión el Sr. Caro.

Agosto, 5.— Es sancionada por el Poder Ejecutivo la "Constitución de la República de Colombia", firmada en Bogotá por los Delegatarios del Consejo Nacional, con fecha del día anterior. Esta Constitución condensa, ampara y sostiene todas las instituciones políticas que habían tenido su arraigo en el país: en ella fraguan los justos anhelos de los colombianos, como lo demuestra el hecho de su larga vigencia, pues aun cuando ha sido reformada en varias ocasiones, lo fue sólo en algunos detalles o aspectos, quedando siempre subsistentes los principios fundamentales que establece.

Agosto, 7.—"Alocución del Presidente del Consejo Nacional" a los colombianos, con motivo de la promulgación de la nueva "Constitución de la República de Colombia". En este precioso documento se hace notar principalmente que la Constitución a que se refiere representa que la Nación había llegado a la completa madurez de juicio y acomete, no sólo la obra de su perfeccionamiento interior, sino también la de las

"grandes reconciliaciones a que aspiraba el patriotismo". "El Estado y la Iglesia -se dice en esta alocución- reconocen y deslindan amigablemente los títulos de la autoridad que en sus respectivas esferas recibieron de Dios para el bien temporal y espiritual de los pueblos, y las dos espadas místicas resplandecen como símbolos inseparables de justicia.-La hija y la madre, Colombia y España, se abrazan, y como gloriosas divisas de una misma familia, enlazan a perpetuidad sus pabellones .- Los Estados integrantes de la República renuncian a toda tendencia dissociadora, buscan el principio legítimo de la soberanía en la Nación y en ella se reincorporan como miembros vivos y concordes de un organismo perfecto.- Y en fin nuestros grandes partidos históricos ostentan en la labor común la sabiduría del dolor, porque supieron sentir como propios los dolores de la Patria, y tan íntimamente fraternizan, que no dudan borrar sus antiguas denominaciones para confundirse indisolublemente con la Nación misma." Suscribe este documento, como Presidente del Consejo, D. Juan de Dios Ulloa.

1894.

La Ley 41 del Congreso de este año incorpora el Departamento de Panamá a la legislación común de la República, derogando el art. 201 y el ordinal 4º del art. 76 de la Constitución.

1898.

La Ley 24ª de este año vino a sustituir al art. 205 de la vigente Constitución, sobre alzas y bajas en la tarifa de aduanas y formalidades y términos para ponerlas en vigor.

1903.

Noviembre, 3.- Separación del Departamento de Panamá, erigiéndose en República autónoma, merced al apoyo de los Estados Unidos de América.

1904.

Agosto, 7.- El Congreso da posesión al Presidente electo de la República General D. Rafael Reyes, cuya actuación como Jefe del Estado ha sido muy discutida. En su tiempo la Constitución sufrió profundas reformas que acentuaron hasta la exageración su sentido centralizador.

1905.

Febrero, 1.- El Presidente Reyes, en uso de facultades extraordinarias, convoca una Asamblea nacional, decretando que, en cada Departamento, una Junta presidida por el respectivo Gobernador, designase tres diputados para dicha Asamblea. Alude el general Reyes en esta convocatoria a las revueltas políticas que a la sazón intranquilizaban al país, a los esfuerzos realizados para salvar de la anarquía a la administración pública, y a falta de precepto constitucional en que fundar la preterición del Congreso y la formación de la Asamblea, invoca la suprema ley de la necesidad, dado el desconcierto del organismo político del país.

Marzo, 15.- Comienzan sus sesiones la Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa, asistiendo a la sesión inaugural el Gobierno, el Cuerpo Diplomático y los Gobernadores Departamentales.

Abril, 30.- Se firma en Bogotá por los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa y se sanciona por el General Reyes, como Representante del Poder Ejecutivo Nacional, firmando también los Ministros, el "Acto general adicional y Reformatorio de la Constitución Nacional". Este instrumento oficial reúne en sí todos los Actos parciales de reformas constitucionales decretados desde ~~la instalación~~ su instalación por la susodicha Asamblea. Los Actos parciales, compilados en dicho Acto general son diez, y llevan fechas 27, ~~28 y 30~~ 28 y 30 de marzo, y 5, 8, 13, 17 y 27 de abril. (Tres de ellos llevan la misma fecha 30 de marzo.)- Cierra sus sesiones la mencionada Asamblea.

1907.

Abril, 1º.- La Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa convocada por el Presidente Reyes, reanuda sus tareas y acomete una nueva reforma de la Constitución.

Junio, 15.- Cierra las sesiones de este periodo Constituyente y Legislativo la Asamblea Nacional, suscribiendo un "Acto General que adiciona y reforma la Constitución Nacional". Comprende este Acto General dos Actos Legislativos parciales: uno que lleva fecha 15 de abril de 1907 y otro con fecha 27 del mismo mes y año; el 1º se refiere a la reunión de las Cámaras Legislativas y al funcionamiento de las mismas y el 2º establece y organiza los Consejos Departamentales.

1908.

Julio, 20.- Se reúne nuevamente la Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa, con objeto de proseguir la reforma de la Constitución.

Agosto, 22.- "Acto General Adicional y Reformatorio de la Constitución Nacional". Comprende tres Actos Legislativos parciales, a saber: uno de 6 de agosto de 1908 sobre elección de Senadores y Representantes; otro de fecha 12 del mismo mes y año sobre Gobierno de los Departamentos y de los Distritos municipales; y otro de fecha 14 del susodicho mes determinando la fecha de reunión de las Cámaras Legislativas.

1909.

Febrero, 22.- Nuevamente se reúne la Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa, previa convocatoria del Presidente Reyes.

Abril, 14.- "Acto General Adicional y Reformatorio de la Constitución nacional". En él se compilan cinco Actos Legislativos parciales, a saber: Uno de 29 de marzo de 1909, por el cual se crean los "Consejos administrativos Departamentales"; otro del 31 del mismo mes de marzo sustituyendo los art.s 108 y 109 de la Constitución referentes a la prohibición impuesta al Presidente y Vicepresidente de la

República y a otras altas autoridades de la Nación en cuanto a la elección para miembros del Congreso y a la atribución de empleo a Senadores y Representantes; otro del 2 de abril, por el cual se sustituye el art. 3° de la Constitución que establece los límites de la República; otro del 7 del mismo mes, por el cual se determina el período de duración de las sesiones ordinarias del Congreso nacional, y otro del 8 de abril por el cual se reforma el señalado con el núm. 5 de 1905, sobre sustitución del Presidente de la República en el caso de falta temporal o absoluta. Tanto en estos Actos Legislativos como en los anteriormente dictados durante el período de Gobierno del General Reyes puede observarse de una parte la confianza plena de la Asamblea en el Presidente de la República y el asentimiento incondicional de aquélla a todas las iniciativas de éste, y de otra parte el espíritu resuelto, emprendedor y quizás altivo y absorbente del General Reyes. La Constitución de 1886 quedó profundamente alterada, para conferir poderes cada vez más amplios al Presidente y suprimir cuantas limitaciones pudiera tener su autoridad.

Julio, 20.- Se reúne el Congreso constituido por elección popular, después de la renuncia definitiva del Presidente de la República General Reyes.

1910.

Mayo, 15.- Comienza sus sesiones una Asamblea Nacional, convocada por el nuevo Presidente de la República, General D. Ramón González Valencia, ~~preaguardante~~ que había sido elegido por el Congreso para el año que faltaba del sexenio constitucional en curso. Esta Asamblea dictó varios Actos Legislativos y, cuando terminó el período presidencial del Sr. González Valencia eligió Presidente de la República al Dr. D. Carlos E. Restrepo para el cuatrienio que terminaba en 1914.

Mayo, 28.- "Acto Legislativo número 1° de 1910", sobre atribuciones de la Asamblea Nacional.

Junio, 6.- "Acto Legislativo número 2 de 1910, reformatorio de la Constitución nacional", sobre sustitución del Presidente de la República en los casos de falta accidental y absoluta.

Octubre, 31.- "Acto Legislativo número 3 de 1910, reformatorio de la Constitución nacional." Este Acto Legislativo es el más importante de cuantos se dictaron a partir de la Constitución de 1886, ya que recopila todas las reformas constitucionales que habían venido a satisfacer exigencias naturales de la evolución política del país, y anula y deroga todos aquellos Actos legislativos que no obedecieron a un interés nacional permanente, reponiendo en este último caso, con toda pureza, el primitivo texto constitucional. Comprende 70 artículos, distribuidos en 20 Títulos, y además siete disposiciones transitorias, por lo que puede considerarse, atendiendo a su extensión y a su contenido, como una Constitución adicional y complementaria de la de 1886.

1914.

ACTO LEGISLATIVO restableciendo el Consejo de Estado que había sido suprimido por el Acto legislativo número 10 de 1903.

APÉNDICE NÚMERO 2.
:+++++:

ÚLTIMA CONSTITUCIÓN FEDERAL DE COLOMBIA, O SEA LA
DE 8 DE MAYO DE 1863. (a)

---0000---

(a).-- Se reproduce íntegramente en esta monografía para que, de modo más fácil, pueda hacerse la comparación entre los principios federalistas que sustenta y los centralizadores y unitarios contenidos en el texto constitucional de 1886, reproducido literalmente en el Apéndice número 3.)

La Convención nacional, en nombre y por autorización del pueblo y de los Estados-Unidos colombianos que representa, ha venido en decretar la siguiente

CONSTITUCIÓN POLÍTICA.,

----- CAPÍTULO PRIMERO.

--- LA NACIÓN.

Artículo 1º Los Estados soberanos de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá, Santander y Tolima, creados respectivamente por los actos de 27 de Febrero de 1855, 11 de Junio de 1856, 13 de Mayo de 1857, 15 de Junio del mismo año, 12 de Abril de 1861 y 3 de Septiembre del mismo año, se unen y confederan á perpetuidad consultando su seguridad exterior y recíproco auxilio, y forman una nación libre, soberana é independiente bajo el nombre de "Estados-Unidos de Colombia."

Art. 2º Los dichos Estados se obligan a auxiliarse y defenderse mutuamente contra toda violencia que dañe la soberanía de la Nación ó la de los Estados.

Art. 3º Los límites del territorio de los Estados-Unidos de Colombia son los mismos que en el año 1810 dividían el territorio del virreinato de Nueva Granada del de las capitanías generales de Venezuela y Guatemala, y del de las posesiones portuguesas del Brasil: por la parte meridional son, provisionalmente, los designados en el tratado celebrado con el Gobierno del Ecuador en 9 de Julio de 1856, y los demás que la separan hoy de aquella República y de la del Perú.

Art. 4º Harán también parte de la misma nacionalidad de los Estados soberanos en que se dividen alguno ó algunos de los existentes, conforme al artículo que sigue, y los que siendo del todo independientes quieran agregarse á la Unión por tratados debidamente concluidos.

Art. 5º La ley federal puede decretar la creación de nuevos Estados, desmembrando la población y el territorio de los existentes, cuando esto sea solicitado por la Legislatura o las Legislaturas del Estado ó de los Estados de cuya población y de cuyo territorio deba formarse el nuevo Estado, con tal que cada uno de los Estados de nueva creación tenga 100.000 habitantes por lo menos, y aquellos de los que fueren segregados no queden con menos de 150.000 habitantes cada uno.

Los límites de los Estados reconocidos en el artº 1º no podrán alterarse ni variarse sino de acuerdo y por consentimiento de los Estados interesados en ellos y con aprobación del Gobierno general.

CAPÍTULO II.

BASES DE LA UNIÓN.

----- Sección primera.

-- Derechos y deberes de los Estados.

Art. 6º Los Estados convienen en consignar en sus Constituciones y en su legislación civil el principio de incapacidad de las comunidades, corporaciones, asociaciones y entidades religiosas para adquirir bienes raíces, y en consagrar, por punto general, que la propiedad raíz no puede adquirirse con otro carácter que el de enajenable y divisible a voluntad exclusiva del propietario, y de transmisible a los herederos conforme al derecho común.

Art. 7º Igualmente convienen los dichos Estados en prohibir a perpetuidad las fundaciones, mandas, legados, fideicomisos y toda clase de establecimientos semejantes con que se pretenda sacar una finca raíz de la libre circulación.

Asimismo convienen y declaran que en lo sucesivo no se podrán imponer censos a perpetuidad de otro modo que sobre el Tesoro público, y de ninguna manera sobre fincas raíces.

Art. 8º En obsequio de la integridad nacional, de la marcha expedita de la Unión y de las relaciones pacíficas entre los Estados, éstos se comprometen:

1º A organizarse conforme a los principios del gobierno popular, electivo, representativo, alternativo y responsable.

2º A no enajenar a potencia extranjera parte alguna de su territorio.

3º A no restringir con impuestos, ni de otro modo, la navegación de los ríos y demás aguas navegables que no hayan exigido canalización artificial.

4º A no gravar con impuestos, antes de haberse ofrecido al consumo, los objetos que sean ya materia de impuestos nacionales, aun cuando se hayan declarado libres de los derechos de importación, ni los productos destinados a la exportación, cuya libertad mantendrá el Gobierno General.

5º A no imponer contribuciones sobre los objetos que transiten por el Estado, sin destinarse a su propio consumo.

6º A no imponer deberes a los empleados nacionales sino en su calidad de miembros del Estado, y en cuanto esos deberes no sean incompatibles con el servicio público nacional.

7º A no gravar con impuestos los efectos y propiedades de la Unión colombiana.

8º A deferir y someterse a la decisión del Gobierno general en todas las controversias que se susciten en dos o más Estados cuando no puedan avenirse pacíficamente, sin que en ningún caso ni por ningún motivo pueda un Estado declarar ni hacer guerra a otro Estado; y

9º A guardar estricta neutralidad en las contiendas que lleguen a suscitarse entre los habitantes y el Gobierno de otro Estado.

Art. 9º Las autoridades de cada uno de los Estados tienen el deber de cumplir y hacer que se cumplan y ejecuten la Constitución y las leyes de la Unión, los decretos y órdenes del Presidente de ella y los mandamientos de los tribunales y Juzgados nacionales.

En cada uno de los Estados se dará entera fé y crédito a los registros, actos, sentencias y procedimientos judiciales de los otros Estados.

Art. 10. Es obligatorio para las autoridades de cada Estado entregar á las autoridades de aquél en que se haya cometido un delito común la persona que se reclame, y contra la cual se haya librado orden de prisión no violatoria de los derechos individuales enumerados en el artº 15 de esta Constitución; lo que se comprobará con los necesarios documentos adjuntos á la orden de prisión.

Art. 11. Los Gobiernos de los Estados en cuyo territorio se asilen individuos responsables de hechos punibles, ejecutados contra el Gobierno de algún Estado limítrofe, tienen, si éste lo solicita, el deber de internarlos y mantenerlos á una distancia de la frontera que no les permita continuar hostilizándolos.

Art. 12. No habrá esclavos en los Estados-Unidos de Colombia.

Art. 13. No se permitirá en ninguno de los Estados de la Unión enganches ó levas que tengan ó puedan tener por objeto atacar la libertad, la independencia, ó perturbar el orden público de otro Estado ó de otra nación.

Art. 14. Los actos legislativos de las Asambleas de los Estados que salgan evidentemente de su esfera de acción constitucional, se hallan sujetos a suspensión y anulación, conforme a lo dispuesto en esta Constitución; pero nunca atraerán al Estado responsabilidad de ningún género cuando no se hayan ejecutado y surtido sus naturales efectos.

Sección segunda.

Garantías de los derechos individuales.

Art. 15. Es base esencial é invariable de la Unión entre los Estados el reconocimiento y garantía, por parte del Gobierno general y de los Gobiernos de todos y cada uno de los Estados, de los derechos individuales que pertenecen a los habitantes y transeuntes en los Estados-Unidos de Colombia a saber:

1º La inviolabilidad de la vida humana, en virtud de la cual el Gobierno

general y el de los Estados se comprometen a no decretar en sus leyes la pena de muerte.

2º No ser condenados a pena corporal por más de diez años.

3º La libertad individual, que no tiene más límites que la libertad de otro individuo; es decir, la facultad de hacer ó emitir todo aquello de cuya ejecución ó omisión no resulte daño á otro individuo ó la comunidad.

4º La seguridad personal, de manera que no sea atacada impunemente por otro individuo ó por la autoridad pública, ni ser presos ó detenidos sino por motivo criminal ó por vía de pena correccional, ni juzgados por comisiones ó tribunales extraordinarios, ni penados sin ser oídos y vencidos en juicios, y todo esto en virtud de leyes preexistentes.

5º La propiedad, no pudiendo ser privados de ella sino por pena ó contribución general, con arreglo á las leyes ó cuando así lo exija algún grave motivo de necesidad pública, judicialmente declarado y previa indemnización. En caso de guerra, la indemnización puede no ser previa y la necesidad de la expropiación puede ser declarada por autoridades que no sean del orden judicial.

Lo dispuesto en este inciso no autoriza para imponer pena de confiscación en ningún caso.

6º La libertad absoluta de imprenta y circulación de los impresos, así nacionales como extranjeros.

7º La libertad de expresar sus pensamientos, de palabra ó por escrito, sin limitación alguna.

8º La libertad de viajar en el territorio de los Estados-Unidos, y de salir de él sin necesidad de pasaporte ni permiso de ninguna autoridad en tiempo de paz, siempre que la autoridad judicial no haya decretado el arraigo del individuo.

En tiempo de guerra, el Gobierno podrá exigir pasaporte á los individuos que viajen por los lugares que sean teatro de operaciones militares.

9. La libertad de ejercer toda industria y de trabajar sin usurpar la industria de otro cuya propiedad hayan garantizado temporalmente las leyes á los autores de inventos útiles, ni las que se reserven la Unión ó los Estados como arbitrios rentísticos, y sin embarazar las vías de comunicación ni atacar la seguridad y la salubridad.

10. La igualdad, y en consecuencia, no es lícito conceder privilegios ó distinciones legales que cedan en puro favor ó beneficio de los agraciados, ni imponer obligaciones especiales que hagan, á los individuos á ellas sujetos, de peor condición que los demás.

11. La libertad de dar ó recibir la instrucción que á bien tengan en los Establecimientos que no sean costeados con fondos públicos.

12. El derecho de obtener pronta resolución en las peticiones que por escrito dirájan á las corporaciones, autoridades ó funcionarios públicos sobre cualquier asunto de interés general ó particular.

13. La inviolabilidad del domicilio ó de los escritos privados; de manera que aquél no podrá ser allanado ni los escritos interceptados ó registrados sino por la autoridad competente, para efectos y con las formalidades que determine la ley.

14. La libertad de asociarse sin armas.

15. La libertad de tener armas y municiones y de hacer el comercio de ellas en tiempo de paz.

16. La profesión libre, pública y privada de cualquier religión, con tal que no se ejecuten hechos incompatibles con la soberanía nacional, ó que tengan por objeto turbar la paz pública.

Sección tercera.

----- Delegación de funciones.

Art. 16. Todos los asuntos de gobierno, cuyo ejercicio no deleguen los Estados expresa, especial y claramente al Gobierno general, son de la ex-

clusiva competencia de los mismos Estados.

Art. 17. Los Estados-Unidos de Colombia convienen en establecer un Gobierno general, que será popular, electivo, representativo, alternativo y responsable, á cuya autoridad se someten en los negocios que pasan á expresarse:

1º Las relaciones exteriores, la defensa exterior y el derecho de declarar y dirigir la guerra y hacer la paz.

2º La organización y sostenimiento de la fuerza pública al servicio del Gobierno general.

3º El establecimiento, la organización, administración del crédito público y de las rentas nacionales.

4º La fijación del pie de ejército en paz y guerra, y la determinación de los gastos públicos á cargo del Tesoro de la Unión.

5º El régimen y administración del comercio exterior, de cabotaje y costanero; de las fortalezas, puertos marítimos, fluviales y secos en las fronteras; arsenales, diques y demás establecimientos públicos y bienes pertenecientes á la Unión.

6º El arreglo de las vías interoceánicas que existen ó que se abran en el territorio de la Unión, y la navegación de los ríos que bañan el territorio de más de un Estado, ó que pasan al de una nación limitrofe.

7º La formación del censo general.

8º El deslinde y la demarcación territorial de primer orden con las naciones limitrofes.

9º La determinación del pabellón y escudo de armas nacionales.

10. Todo lo concerniente a naturalización de extranjeros.

11. El derecho de decidir las cuestiones y diferencias que ocurran entre los Estados, con audiencia de los interesados.

12. La acuñación de moneda, determinando su ley, peso, tipo, forma y denominación.

13. El arreglo de los pesos, pesas y medidas oficiales.

14. La legislación y el procedimiento judicial en los casos de presas,

represas, piraterías ó otros crímenes, y en general, de los hechos ocurridos en alta mar, cuya jurisdicción corresponda á la Nación conforme al derecho internacional.

15. La legislación judicial y penal en los casos de violación del derecho internacional; y

16. La facultad de expedir leyes, decretos y resoluciones civiles y penales respecto de los negocios ó materias que, conforme á este artículo y al siguiente, son de competencia del Gobierno general.

Art. 18. Son de la competencia, aunque no exclusiva, del Gobierno general los objetos siguientes:

- 1º El fomento de la instrucción pública.
- 2º El servicio de correos.
- 3º La estadística y carta, ó cartas geográficas ó topográficas de los pueblos y territorios de los Estados-Unidos; y
- 4º La civilización de los indígenas.

Sección cuarta.

----- Condiciones generales.

Art. 19. El Gobierno de los Estados-Unidos no podrá declarar ni hacer guerra á los Estados sin expresa autorización del Congreso, y sin haber agotado antes todos los medios de conciliación que la paz nacional y la conveniencia pública exijan.

Art. 20. Con excepción del Congreso nacional, Corte Suprema federal y Poder ejecutivo de la Nación, no habrá en ningún Estado empleados federales que tengan jurisdicción ordinaria ó autoridad en tiempo de paz.

Los agentes del Gobierno de la Unión, en materia de Hacienda, militar ó cualquiera otra, ejercerán ordinariamente sus funciones bajo la inspección de autoridades propias de los Estados, según su categoría.

Dichas autoridades lo son también del orden federal en todo lo que requiera mando ó jurisdicción; y deben, por tanto, cumplir, bajo estricta responsabilidad que les exigirán los altos poderes federales conforme á

esta Constitución y las leyes de la materia, los deberes que aquellos les impongan según sus facultades.

Art. 21. El Poder judicial de los Estados es independiente. Las causas por ellos iniciadas conforme a su legislación especial, y en asuntos de su exclusiva competencia, terminarán en los mismos Estados, sin sujeción al examen de ninguna autoridad extraña.

Las indemnizaciones que tenga que acordar la Unión por actos violatorios de las garantías individuales reconocidas en el artículo 15, ejecutadas por funcionarios de los Estados, se imputarán al Estado respectivo, quien quedará responsable al Tesoro federal por el importe pecuniario de la indemnización acordada.

Art. 22. Los miembros de las Legislaturas de los Estados son inmunes por el tiempo que su respectiva Constitución determine, y no serán jamás responsables por los votos ni por las opiniones que emitan en desempeño de sus funciones.

Art. 23. Para sostener la soberanía nacional y mantener la seguridad y tranquilidad públicas, el Gobierno nacional y los de los Estados en su caso, ejercerán el derecho de suprema inspección sobre los cultos religiosos, según lo determine la ley.

Para los gastos de los cultos establecidos o que se establezcan en los Estados-Unidos, no podrán imponerse contribuciones. Todo culto se sostendrá con lo que los respectivos religionarios suministren voluntariamente.

Art. 24. Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo en el Gobierno general ni en el de los Estados, excepte en materia penal, cuando la ley posterior imponga menor pena.

Art. 25. Todo acto del Congreso nacional o del Poder ejecutivo de los Estados-Unidos que viole los derechos garantizados en el art. 15, o ataque la soberanía de los Estados, es anulable por el voto de éstos, expresado por la mayoría de sus respectivas Legislaturas.

Art. 26. La fuerza pública de los Estados-Unidos se divide en naval y terrestre, á cargo de la Unión, y se compondrá también de la milicia nacio-

nal que organicen los Estados según sus leyes.

La fuerza a cargo de la Unión se formará con individuos voluntarios, ó por contingente proporcional que dará cada Estado.

En caso de guerra se podrá aumentar el contingente con los cuerpos de la milicia nacional hasta el número de hombres necesarios para llenar el contingente que pida el Gobierno general.

Art. 27. El Gobierno general no podrá variar los jefes de la fuerza pública que suministren los Estados, sino en los casos y con las formalidades que la ley determine.

CAPÍTULO III.

Bienes y cargas de la Unión.

Art. 28. Los Estados-Unidos de Colombia reconocen como deuda propia las deudas interior y exterior reconocidas por los Gobiernos de la extinguida Confederación granadina y de los Estados-Unidos de Nueva Granada, en la proporción que corresponda á los Estados que se unen por la presente Constitución, ó que se unan en lo sucesivo, según la población y riqueza de los mismos Estados, los cuales comprometen solemnemente su fé pública para la autorización de dichas deudas y el pago de sus intereses.

Art. 29. Igualmente reconocen los Estados de Colombia los créditos provenientes de empréstitos, suministros, sueldos, pensiones é indemnizaciones en el interior, y los gastos que el sostenimiento de esta Constitución exija. La fe pública de los Estados queda empeñada para la cancelación de dichos créditos.

Art. 30. Los bienes, derechos y acciones, las rentas y contribuciones que pertenecieron por cualquier título al Gobierno de la extinguida Confederación granadina, y últimamente al de los Estados-Unidos de Nueva Granada, co-

responden al Gobierno de los Estados Unidos de Colombia con las alteraciones hechas ó que se hagan por actos legislativos especiales.

Las tierras baldías de la Nación, hipotecadas para el pago de la Deuda pública, no podrán aplicarse sino a este objeto, ó cederse á nuevos pobladores, ó darse como compensación y auxilio á las empresas para la apertura de nuevas vías de comunicación.

CAPÍTULO IV.

Colombianos y extranjeros.

Art. 31. Son colombianos:

1º Todas las personas nacidas ó que nazcan en el territorio de los Estados-Unidos de Colombia, aunque sea de padres extranjeros transeuntes, si vinieren á domiciliarse en el país.

2º Los hijos de padre ó madre colombianos, hayan ó no nacido en el territorio de los Estados-Unidos de Colombia, si en el último caso vinieren á domiciliarse en éste.

3º Los extranjeros que hayan obtenido carta de naturaleza.

4º Los nacidos en cualesquiera de las Repúblicas hispano-americanas, siempre que hayan fijado su residencia en el territorio de la Unión, y declarado ante la autoridad competente que quieren ser colombianos.

Art. 32. Pierden el carácter de colombianos los que fijen su domicilio y adquieran su nacionalidad en país extranjero.

Art. 33. Son elegibles para los puestos públicos del Gobierno general de los Estados-Unidos, los colombianos varones, mayores de 21 años, ó que sean ó hayan sido casados, con excepción de los ministros de cualquiera religión.

Art. 34. Todos los colombianos tienen el deber de servir a la Nación, conforme lo disponen las leyes, haciendo el sacrificio de su vida,

si fuere necesario, para defender la independencia nacional. Hallándose en el territorio de cualquier Estado, tendrán en él los mismos deberes y derechos que los domiciliados.

Art. 35. Una ley especial definirá la condición de los extranjeros domiciliados, y determinará los derechos y deberes anexos á dicha condición.

CAPÍTULO V.

Gobierno general.

Art. 36. El Gobierno general de los Estados-Unidos de Colombia será, por la naturaleza de sus principios constitutivos, republicano, federal, electivo, alternativo y responsable; dividiéndose para su ejercicio en Poder legislativo, Poder ejecutivo y Poder judicial.

CAPÍTULO VI.

Sección primera.

Disposiciones generales.

Art. 37. El poder legislativo residirá en dos Cámaras con el nombre de Cámara de Representantes la una, y Senado de Plenipotenciarios la otra.

Art. 38. La Cámara de Representantes representará al pueblo colombiano y la compondrán los Representantes que correspondan á cada Estado, en razón de uno por cada 50.000 almas, y uno más por un residuo que no baje de 20.000.

Art. 39. El Senado de Plenipotenciarios representará los Estados como entidades políticas de la Unión, y se compondrá de tres Senadores Plenipotenciarios por cada Estado.

Art. 40. Corresponde á los Estados la manera de hacer el nombramiento de sus Senadores y Representantes.

Art. 41. El Congreso se reunirá ordinariamente, sin necesidad de convocatoria, cada año el 1º de Febrero en la capital de la Unión.

Podrá reunirse también en otro lugar, ó trasladar a él temporalmente sus sesiones, y prorrogar éstas, cuando por algún grave motivo así lo disponga el mismo Congreso. Se necesita el consentimiento mutuo de las dos Cámaras para trasladar temporalmente sus sesiones á otro lugar y suspenderlas por más de dos días.

Las sesiones ordinarias durarán hasta noventa días.

Art. 42. El Congreso se reunirá extraordinariamente por acuerdo de ambas Cámaras, ó por convocatoria del Poder ejecutivo.

Art. 43. Para que el Congreso pueda abrir y continuar sus sesiones, se necesita en cada Cámara la concurrencia de la mayoría absoluta de los miembros que le correspondan. Una de las Cámaras no podrá abrir sus sesiones en distinto día que la otra, ni continuarlas estando la otra en receso.

Art. 44. Los Senadores y Representantes gozan de inmunidad en sus personas y propiedades desde que principien ó deban principiar las sesiones, durante el tiempo de éstas, y mientras van á ellas y vuelven á sus casas.

La ley fijará el tiempo que se supone empleado en tales viajes para los efectos de este artículo.

Art. 45. Los Senadores y Representantes son irresponsables por votos y por las opiniones que emitan.

Ninguna autoridad puede, en ningún tiempo, hacerles cargo alguno por dichos votos y opiniones, con ningún motivo ni pretexto.

Art. 46. Los Senadores y Representantes no pueden aceptar empleo de libre nombramiento del Presidente de la Unión colombiana, con excepción de los Secretarios de Estado, Agentes diplomáticos y jefes militares en

tiempo de guerra.

La admisión de estos empleos deja vacante el puesto en la respectiva Cámara.

Art. 47. Los Senadores y Representantes no pueden, mientras que conserven el carácter de tales, hacer por sí ~~án~~ ó por interpuesta persona ninguna clase de contratos con el Gobierno general.

Tampoco podrán admitir de ningún Gobierno, compañía ó individuo, poder para gestionar negocios que tengan relación con el Gobierno de la Unión colombiana.

Sección segunda.

CONGRESO.

Art. 48. La Cámara de Representantes, y el Senado de Plenipotenciarios, tomarán colectivamente el nombre de Congreso de los Estados-Unidos de Colombia.

Art. 49. Son atribuciones exclusivas del Congreso:

1º Apropiar anualmente las cantidades que del Tesoro de la Unión hayan de extraerse para los gastos nacionales.

2º Decretar la enajenación de los bienes de la Unión y su aplicación á usos públicos.

3º Fijar anualmente la fuerza pública de mar y tierra para el servicio de la Unión.

4º Permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la Unión.

5º Autorizar al Presidente de la Unión para declarar la guerra á otra nación.

6º Autorizar al Poder ejecutivo para permitir la estación de buques de guerra extranjeros en puertos de la República.

7º Conceder amnistías é indultos generales y particulares por grave motivo de conveniencia nacional.

8º Conceder privilegios y auxilios para la navegación por vapor en aquellos ríos y aguas que sirvan de canal para el comercio de más de un Estado, ó que pasen al territorio de nación limítrofe.

9º Designar la capital de la Unión colombiana.

10. Hacer, en Cámaras reunidas, el escrutinio de votos en las elecciones de Presidente de los Estados-Unidos y Magistrados de la Corte Suprema federal, declarar y comunicar la elección.

11. Nombrar anualmente y en Cámaras reunidas y por mayoría absoluta de votos, tres Designados para ejercer el poder ejecutivo de la Unión y cinco suplentes de los Magistrados de la Corte Suprema federal, determinando el orden en que deben reemplazar á los principales por falta absoluta ó temporal.

12. Resolver sobre los tratados y convenios públicos que el Presidente de la Unión celebre con otras naciones, y sobre los contratos que haga con los Estados y con los particulares, bien sean nacionales ó extranjeros, que deba someter á su consideración.

13. Crear los empleos que demande el servicio público nacional, y establecer las reglas sobre su provisión, salario y desempeño.

14. Pedir al Poder ejecutivo cuenta de todas sus operaciones y cualesquiera informes escritos ó verbales que necesite para la mejor expedición de sus trabajos.

15. Designar de entre los generales de la República hasta ocho disponibles, y de ellos nombrará el Poder ejecutivo el general en jefe del ejército con arreglo á la ley, pudiendo removerlo la Cámara de Representantes cuando lo estime conveniente; y

16. Legislar sobre las materias que son de competencia del Gobierno general.

Art. 50. Ni el Congreso, ni las Cámaras legislativas por separado, podrán delegar ninguna de sus atribuciones.

Sección tercera.

SENADO.

Art. 51. Son atribuciones del Senado:

1º Aprobar el nombramiento de Secretarios de Estado hecho por el Poder ejecutivo, el de los empleados superiores en los diferentes departamentos administrativos, el de los Agentes diplomáticos y el de los jefes militares.

2º Aprobar las instrucciones del Poder ejecutivo á los Agentes diplomáticos para celebrar tratados públicos.

3º Decretar la suspensión del Presidente de los Estados Unidos y de los Secretarios de Estado, y ponerlos á disposición de la Corte Suprema federal, á virtud de acusación de la Cámara de Representantes ó del Procurador general cuando hubiere lugar á formación de causa contra aquellos funcionarios por delitos comunes.

4º Conocer de las causas de responsabilidad contra el Presidente de los Estados-Unidos, los Secretarios de Estado, los Magistrados de la Corte Suprema federal y el Procurador general de la Nación, á virtud de acusación de la Cámara de Representantes por delitos cometidos en el desempeño de sus funciones.

5º Decidir definitivamente sobre la nulidad ó validez de los actos legislativos de las Asambleas de los Estados y que se denuncien como contrarios á la Constitución de la República.

Art. 52. En receso del Senado y exigiéndolo el buen servicio público, se permite al Poder ejecutivo nombrar Secretarios de Estado, Agentes diplomáticos y empleados superiores en los departamentos administrativos, debiendo someter estos nombramientos á la aprobación del Senado en su próxima reunión.

Sección cuarta.

CÁMARA DE REPRESENTANTES.

Art. 53. Son atribuciones de la Cámara de Representantes:

1º Examinar y fenecer definitivamente la cuenta general del Tesoro nacional.

2º Acusar ante el Senado al Presidente de los Estados-Unidos, á los Secretarios de Estado, á los Magistrados de la Corte Suprema federal y al Procurador general de la Nación, en los casos y para los efectos de los incisos 3º y 4º del artº 51.

3º Cuidar de que los funcionarios y empleados públicos al servicio de los Estados-Unidos desempeñen cumplidamente sus deberes, y requerir al Agente respectivo del Ministerio público para que intente la acusación del caso contra los que incurriesen en responsabilidad; y

4º Nombrar anualmente y por mayoría absoluta de votos el Procurador general y dos suplentes.

Sección quinta.

FORMACIÓN DE LAS LEYES.

Art. 54. En las Cámaras del Senado y Representantes, pueden tener origen todos los proyectos de ley que propongan sus miembros, ó los que por medio de comisiones de las mismas Cámaras se presenten á la discusión, excepto los que establezcan contribuciones ó organicen el Ministerio público, los cuales tendrán origen en la Cámara de Representantes.

Art. 55. Ningún proyecto será ley sin haber tenido en cada Cámara tres debates en distintos días y sin haber sido aprobado por la mayo-

ría absoluta de los miembros presentes en las respectivas sesiones.

Art. 56. Todo proyecto legislativo necesita, además de la aprobación de las Cámaras, la sanción del Presidente de la Unión, quien tiene el derecho de devolver el proyecto á la Cámara de su origen para que sea reconsiderado, acompañando las observaciones que motiven la devolución.

Art. 57. Si el proyecto se devuelve por inconstitucional ó por inconveniente en su totalidad, y una de las Cámaras declara fundadas las observaciones hechas por el Presidente de la Unión, se archivará y no podrá tomarse en consideración otra vez en las mismas sesiones.

Si ambas Cámaras declaran infundadas las observaciones, se devolverá el proyecto al Presidente de la Unión, quien en tal caso no podrá negarle su sanción.

Art. 58. Si las observaciones del Presidente de la Unión se contraen solamente á algunas ó algunas de las disposiciones del proyecto, y ambas Cámaras las declaran fundadas en todo ó en parte, se reconsiderará el proyecto y se harán las modificaciones necesarias en la parte ó las partes á que se hayan contraído aquellas observaciones. Si las modificaciones adoptadas son conformes á lo propuesto por el Presidente de la Unión, éste no podrá negar su sanción al proyecto; pero si no lo son ó se introducen disposiciones nuevas, ó se suprime alguna que no haya sido objetada, el Presidente podrá hacer nuevas observaciones al proyecto.

Si una de las Cámaras declara infundadas las observaciones y la otra fundadas, se archivará el proyecto.

En todo caso en que ambas Cámaras declaren infundadas las observaciones, el Presidente de la Unión tiene el deber de sancionar el proyecto.

Quando se introduzcan disposiciones nuevas, al considerar las observaciones del Poder ejecutivo, sufrirán dos debates y en distintos días en cada Cámara.

Art. 59. El Presidente de la Unión tiene el término de seis días para devolver todo proyecto con observaciones, cuando éste no conste de más de cincuenta artículos: si pasa de este número, el término será de diez días.

Todo proyecto no devuelto dentro del término señalado, debe ser sancionado. Pero si el Congreso se pusiese en receso durante el término concedido al Presidente para devolver el proyecto, tendrá éste la precisa obligación de sancionarlo ó objetarlo dentro de los diez días siguientes al en que el Congreso se haya puesto en receso, y además la de publicar por la imprenta el resultado.

Art. 60. Todo proyecto legislativo que, al ponerse en receso las Cámaras quede pendiente, se tendrá como proyecto nuevo cuando se discuta en las sesiones inmediatas.

Art. 61. En las leyes y en los decretos legislativos, se usará esta fórmula: "El Congreso de los Estados-Unidos decreta."

Sección sexta.

DISPOSICIONES COMUNES A LAS DOS CÁMARAS.

Art. 62. Cada Cámara tiene la facultad primitiva de crear los empleados y darse los reglamentos que juzgue necesarios para la dirección y desempeño de sus trabajos y para la policía interior del edificio de sus sesiones. En estos reglamentos pueden establecerse las penas correccionales con que deba castigar á sus propios miembros por las faltas en que incurran y á cualesquiera individuos por los atentados que cometan contra la Cámara ó contra la inmunidad de sus miembros.

Art. 63. Cada Cámara es competente para decidir las cuestiones que se susciten sobre calificación de sus propios miembros, cuando por algún Estado se presente un número de Representantes ó de Senadores mayor que

El que les corresponde y todos exhiban credenciales en debida forma.

CAPÍTULO VII.

DEL PODER EJECUTIVO.

Art. 64. El poder ejecutivo de la Unión será ejercido por un Magistrado, que se denominará Presidente de los Estados-Unidos de Colombia, y que empezará a funcionar el día 1º de abril próximo al de su elección.

Art. 65. En caso de falta absoluta ó temporal del Presidente de la Unión, asumirá este título y ejercerá el poder ejecutivo uno de los tres Designados que, por mayoría absoluta, elija cada año el Congreso, determinando el orden de sustitución.

Pero si por cualquier motivo el Congreso no hubiere elegido Designados, ó si ninguno de ellos se hallare en la Capital de la Unión, ó no pudiere por otra circunstancia encargarse del Poder ejecutivo, quedará este accidentalmente á cargo del Procurador general; y en su defecto, de los Presidentes, Gobernadores ó jefes superiores de los Estados, elegidos popularmente, en el orden de sustitución que cada año señale el Congreso.

La ley determinará cuándo deba procederse á nueva elección de Presidente en caso de falta absoluta de éste.

El período de duración de los Designados para ejercer el poder ejecutivo será un año, contado desde el 1º de abril siguiente á su elección.

Si la reunión del Congreso no pudiere tener efecto en la época que le está señalada, ó en el caso de que se haya omitido la elección de los Designados, el período de duración de éstos continuará hasta que la reunión tenga lugar y se haga nueva designación.

Art. 66. Son atribuciones del Presidente de la Unión:

- 1º Dar las disposiciones convenientes para la cumplida ejecución de leyes.
- 2º Cuidar de la exacta y fiel recaudación de las rentas nacionales.
- 3º Negociar y concluir los tratados y convenios públicos con las naciones extranjeras, ratificarlos y canjearlos, previa la aprobación del Congreso, y cuidar de su puntual observancia.
- 4º Celebrar cualesquiera convenios y contratos relativos á los negocios que son de la competencia del Gobierno de la Unión, sometiénolos á la aprobación del Congreso para llevarlos a efecto, salvo que las estipulaciones en ellos contenidas se hayan prefijado en una ley.
- 5º Declarar la guerra cuando la haya decretado el Congreso y dirigir la defensa del país en caso de una invasión extranjera, pudiendo llamar al servicio activo, si fuere necesario, la milicia de los Estados.
- 6º Dirigir las operaciones de la guerra como jefe superior de los ejércitos y de la marina de la Unión.
- 7º Nombrar para todos los empleos públicos de la Unión las personas que deban servirlos, cuando la Constitución ó las leyes no atribuyan el nombramiento á otra autoridad.
- 8º Remover de sus destinos á los empleados que sean de su nombramiento.
- 9º Presentar á la Cámara de Representantes, en el primer día de sus sesiones anuales, el presupuesto de rentas y gastos de la Unión y la cuenta general del presupuesto y del Tesoro.
10. Cuidar de que la justicia se administre pronta y cumplidamente, promoviendo, por medio de los que ejercen el Ministerio público, el juzgamiento de los delincuentes, y del despacho de los negocios civiles que se ventilen en los tribunales y Juzgados de la Nación.
11. Impedir cualquiera agresión armada de un Estado de la Unión contra otro de la misma, ó contra una nación extranjera.

12. Cuidar de que el Congreso se reúna el día señalado por la Constitución, dando con oportunidad las disposiciones necesarias para que los Senadores y Representantes reciban los auxilios que para su marcha haya señalado la ley.

13. Conceder patentes, garantizando por determinado tiempo la propiedad de las producciones literarias, de las invenciones útiles, aplicables á nuevas operaciones industriales ó la perfección de las existentes.

14. Nombrar, con aprobación del Senado, los Secretarios de Estado, los empleados superiores de los diferentes departamentos administrativos, los Agentes diplomáticos y los jefes militares, cuyo nombramiento le corresponde.

15. Conceder cartas de naturalización con arreglo á la ley.

16. Expedir patentes de corso y de navegación.

17. Presentar al Congreso, en los primeros días de su sesiones ordinarias, un informe escrito acerca del curso que hayan tenido durante el último período los negocios de la Unión, y sobre la situación actual de ellos, acompañando las Memorias, que son de cargo de los Secretarios de Estado.

18. Dar a las Cámaras legislativas los informes especiales que soliciten, siempre que no versen sobre las negociaciones diplomáticas que á su juicio requieran reserva.

19. Velar por la conservación del orden general.

20. Desempeñar las demás funciones que le estén atribuidas por la Constitución y las leyes.

Art. 67. Cuando el Presidente dirija personalmente las operaciones militares fuera de la capital de la Unión, el respectivo designado quedará encargado del poder ejecutivo en los demás ramos de la Administración.

Art. 68. Para el despacho de los negocios de la competencia del Poder ejecutivo de la Unión, tendrá el Presidente los Secretarios de Esta-

de que determine la ley. Todos los actos del Presidente, con excepción de los decretos de nombramiento ó remoción de los Secretarios de Estado, serán autorizados por uno de éstos, sin lo cual no deberán ser obedecidos.

CAPITULO VIII.

PODER JUDICIAL.

Art. 69.- El poder judicial se ejerce por el Senado, por una Corte Suprema federal, por los tribunales y Juzgados de los Estados y por los que se establezcan en los territorios que deban regirse por legislación especial.

Los juicios por delitos y faltas militares de las fuerzas de la Unión, son de competencia del Poder judicial nacional.

Art. 70.- La Corte Suprema federal se compondrá de cinco Magistrados no pudiendo haber en ella á un mismo tiempo más de un Magistrado que sea ciudadano, natural ó vecino de un mismo Estado.

Art. 71.- Son atribuciones de la Corte Suprema federal:

1º Conocer de las causas por delitos comunes contra el Presidente de la Unión y los Secretarios de Estado, previa la suspensión declarada por el Senado cuando decida que hay lugar á formación de causa.

2º Conocer las causas por delitos comunes contra el Procurador general de la Unión, los Magistrados de la misma Corte Suprema, y los Ministros públicos de la Nación en el extranjero.

3º Conocer de las causas de responsabilidad contra los empleados diplomáticos y consulares de la Unión, por el mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.

4º Conocer de las causas de responsabilidad contra los Gobernadores, Presidentes, jefes superiores y Magistrados de los tribunales superiores de los Estados, por infracción de la Constitución y leyes de la

Unión.

5.º Conocer de las causas de responsabilidad contra los generales y comandantes en jefe de las fuerzas nacionales, y contra los jefes superiores de las oficinas principales de Hacienda de la Unión.

6.º Decidir las cuestiones que se susciten entre los Estados ó entre uno ó algunos Estados y el Gobierno general de la Unión, sobre competencia de facultades, propiedades, límites y demás objetos contenciosos.

7.º Conocer de los negocios contenciosos sobre presas marítimas, contravención por buques nacionales ó extranjeros á las disposiciones legales, relativas al comercio exterior de cabotaje y costanero, ó á las formalidades que deben observarse en los puertos nacionales, y sobre las disposiciones relativas á la navegación marítima y de los ríos que bañen el territorio de más de un Estado, ó que pasen al de una nación limítrofe.

8.º Conocer de las controversias que se susciten sobre los contratos y convenios que el Gobierno de la Unión celebre con los Estados ó con los particulares, y en última instancia, en toda cuestión en que deban aplicarse las estipulaciones de los tratados públicos.

9.º Conocer de las controversias que se susciten relativas á las comunicaciones interoceánicas por el territorio de la Unión y á la seguridad del tránsito por ellas.

10. Conocer de todos los negocios contenciosos que se refieran á bienes y rentas de la Unión.

11. Dirimir las competencias que se susciten entre los tribunales y Juzgados de diferentes Estados, entre los tribunales y Juzgados de uno ó más Estados y los tribunales de la Unión ó entre dos ó más de estos últimos.

12. Nombrar los empleados subalternos de la misma Corte y removerlos libremente.

13. Dar todos los informes que las Cámaras legislativas, el Presi-

dente de la Unión y el Procurador general le pidan, respecto de los negocios de que conoce.

14. Declarar cuáles son los actos del Congreso nacional, ó del Poder ejecutivo de la Unión, que han sido anulados por la mayoría de las Legislaturas de los Estados; y

15. Ejercer las demás funciones que la ley determine respecto de los objetos de la competencia del Gobierno general.

Art. 72. Corresponde á la Corte Suprema suspender, por unanimidad de votos, á pedimento del Procurador general ó de cualquier ciudadano, la ejecución de actos legislativos de las Asambleas de los Estados, en cuanto sean contrarios á la Constitución ó á las leyes de la Unión, dando, en todo caso, cuenta al Senado para que éste decida definitivamente sobre la validez ó nulidad de dichos actos.

CAPÍTULO IX.

0-----0

MINISTERIO PÚBLICO.

Art. 73. El ministerio público será ejercido por la Cámara de Representantes, por un funcionario denominado Procurador general de la Nación, y por los demás funcionarios que determine la ley.

Art. 74. Son atribuciones del Ministerio público:

1º Cuidar de que todos los funcionarios públicos al servicio de la Unión desempeñen cumplidamente sus deberes.

2º Acusar ante el Senado ó la Corte Suprema federal á los funcionarios justiciables por estas corporaciones; y

3º Desempeñar las demás funciones que la ley le atribuya.

101.

CAPÍTULO X.

ELECCIONES.

Art. 75. La elección de Presidente de la Unión se hará por el voto de los Estados, teniendo cada Estado un voto, que será el de la mayoría relativa de sus respectivos electores, según su legislación. El Congreso declarará elegido Presidente al ciudadano que obtenga la mayoría absoluta de los votos de los Estados. En caso de que ninguno tenga dicha mayoría, el Congreso elegirá entre los que reunan mayor número de votos.

El ciudadano que hubiere ejercido la presidencia, no podrá ser reelegido para el próximo período.

Art. 76. La elección de Magistrados de la Corte Suprema federal se hará de la manera siguiente:

La Legislatura de cada Estado presentará al Congreso una lista de individuos en número igual al de las plazas que deban proveerse, y el Congreso declarará elegidos los cinco que reunan más votos y satisfagan la condición puesta en el artº 70. Todo empate se decidirá por la suerte.

CAPÍTULO XI.

DISPOSICIONES VARIAS.

Art. 77. Los altos Poderes federales residirán en el lugar ó en los lugares que designe la ley.

Art. 78. Serán regidos por una ley especial los territorios poco poblados, ó ocupados por tribus de indígenas, que el Estado ó los Estados á que pertenezcan consientan en ceder al Gobierno general con el objeto de fomentar colonizaciones y realizar mejoras materiales.

Desde que un territorio cuente población civilizada que pase de 3.000 habitantes, mandará á la Cámara de Representantes un comisario, que tendrá voz y voto en la discusión de las leyes concernientes á los territorios, y voz, pero no voto, en las leyes de interés general. Desde que la población civilizada llegue a 25.000 habitantes, el territorio mandará, en vez de comisario, un Diputado con voz y voto en toda discusión; y de 56.000 habitantes arriba, mandará los Diputados que le correspondan conforme al art. 38 de esta Constitución.

Art. 79. El período de duración del Presidente de los Estados-Unidos y de los Senadores y Representantes será de dos años.

Art. 80. El período de duración de los Magistrados de la Corte Suprema federal será de cuatro años; y el del Procurador general de la Nación será de dos años.

Art. 81. No podrán ser elegidos Senadores ni Representantes, el Presidente de la Unión, sus Secretarios de Estado, el Procurador general y los Magistrados de la Corte Suprema federal.

Art. 82. Los empleados amovibles por el Presidente de la Unión, cesan en sus destinos si admiten el cargo de Senador ó Representante.

Art. 83. Cesan igualmente en sus destinos los empleados amovibles por el Presidente de la Unión, dos meses después de posesionado el elegido conforme á ésta Constitución.

Art. 84. Ninguna renta, contribución ó impuesto nacional será exigible sin que se haya incluido normalmente en el presupuesto que el Congreso deba expedir cada año.

Art. 85. No se hará del Tesoro nacional ningún gasto para el cual no haya sido aplicada expresamente la suma por el Congreso, ni en mayor cantidad que la aplicada.

Art. 86. Los sueldos del Presidente de la Unión, de los ^{Senadores} ~~Senadores~~ y Representantes, del Procurador general de la Nación y de dos Magistrados de la Corte Suprema federal, no podrán aumentarse ni disminuirse durante el período para el cual hayan sido electos los que desempe-

ñen dichos destinos en la época en que se haga el aumento ó la disminución.

Art. 87. Los Magistrados de la Corte Suprema federal, y los jueces de los demás tribunales y Juzgados nacionales, no pueden ser suspensos sino por acusación legalmente intentada y admitida, ni depuestos sino á virtud de sentencia judicial conforme á las leyes.

Art. 88. Es prohibido á los colombianos admitir empleos, condecoraciones, títulos ó rentas de Gobiernos extranjeros sin permiso del Congreso: el que contra esta disposición lo hiciere, perderá la calidad de colombiano.

Art. 89. Es prohibido á todo funcionario ó corporación pública el ejercicio de cualquiera función ó autoridad que claramente no se le haya conferido.

Art. 90. El Poder ejecutivo iniciará negociaciones con los Gobiernos de Venezuela y Ecuador para la unión voluntaria de la antigua Colombia en nacionalidad común, bajo una forma republicana, democrática y federal, análoga a la establecida en la presente Constitución, y especificada, llegado el caso, por una Convención general constituyente.

Art. 91. El derecho de gentes hace parte de la legislación nacional. Sus disposiciones regirán especialmente en los casos de guerra civil. En consecuencia, puede ponerse término á ésta por medio de tratados entre los beligerantes, quienes deberán respetar las prácticas humanitarias de las naciones cristianas y civilizadas.

CAPITULO XII.

REFORMA.

Art. 92. Esta Constitución podrá ser reformada total ó parcialmente con las conformidades siguientes:

1.º Que la reforma sea discutida y aprobada en ambas Cámaras conforme á lo establecido para la expedición de las leyes; y

2º Que la reforma sea ratificada por el voto unánime del Senado de Plenipotenciarios, teniendo un voto cada Estado.

También puede ser reformada por una Convención convocada al efecto por el Congreso, á solicitud de la totalidad de las Legislaturas de los Estados, y compuesta de igual número de Diputados por cada Estado.

CAPÍTULO XIII.

RÉGIMEN DE LA CONSTITUCIÓN.

Art. 93. La presente Constitución regirá desde su publicación oficial, siempre que obtenga la ratificación unánime de las Diputaciones de los Estados reunidos en esta Convención, como representantes de la soberanía de los Estados.

Si la Diputación de algún Estado negare su ratificación, la Constitución no será obligatoria para el Estado que aquélla representa, el cual manifestará en definitiva su voluntad por medio de su Asamblea legislativa.

Si dicha Asamblea no resolviere nada en su más próxima reunión, y si no se reúne dentro de tres meses después de recibida en la capital del Estado la presente Constitución, se tendrá por aceptada como lo hayan hecho los otros Estados.

Dada en Rionegro á 8 de Mayo de 1863.- El Presidente, Diputado por el Estado soberano de Panamá, Justo Arosemena. (Siguen las firmas.)

172.

RATIFICACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN.

La Diputación á la Convención nacional por el Estado soberano de Antioquia;

Visto el art. 93 de la Constitución que acaba de expedirse, en nombre y por autoridad del Estado que representa, ha venido en ratificar, como por la presente ratifica, la Constitución para los Estados-Unidos de Colombia, expedida por la Convención nacional, atendiendo á que dicha Constitución reconoce en sus disposiciones cardinales la autonomía y los intereses del Estado ^{soberano} de Antioquia.

Rionegro, 8 de Mayo de 1863.- (Siguen las firmas.)

La Diputación del Estado soberano de Bolívar, en nombre y por autoridad del pueblo, su comitente

DECLARA: que animada de los más sinceros deseos de afianzar sólida-

mente el sistema federal, que es el sentimiento unánime de los colombianos;

Interesada como todas las demás Diputaciones en el restablecimiento de la paz bajo un sistema de libertad, de orden y de garantías que consulte la felicidad pública y el engrandecimiento nacional;

Convencida de que no ha faltado á los deberes que se le han impuesto por el pueblo soberano á quien representa, como parte del único y legítimo poder constituyente existente por voluntad del pueblo mismo en la Convención nacional;

Y segura de que la Constitución que ha contribuido á sancionar satisface completamente las exigencias de la opinión pública, salvando, como ha salvado, la soberanía é independencia de los Estados, por lo cual es conveniente á la paz y tranquilidad de los mismos que empiece á regir desde su sanción;

Ha venido, por estos poderosos motivos, en ratificar, como expresa y terminantemente ratifica, la expresada Constitución, dada y firmada en

este mismo día.

Rionegro, Mayo 8 de 1863.- (Siguen las firmas.)

Los Diputados á la Convención nacional por el Estado soberano de Boyacá

Aceptamos y ratificamos en todas sus partes, á nombre de nuestro Estado, la Constitución política para los Estados-Unidos de Colombia.

Rionegro, 8 de Mayo de 1863. (Siguen las firmas.)

En nombre de Dios, Autor y Legislador del Universo.

El Estado soberano del Cauca, animado de los más sinceros deseos de poner ^(un) término á las calamidades que produjo la guerra civil, y á fin de afianzar sólidamente el sistema federal, que destruyó una revolución oficial, nombró la Diputación que representara al pueblo y al Estado de Cauca, para que contribuyese con sus votos á revalidar el pacto de la Unión, salvando la soberanía del Estado, sus límites y pre-

rogativas; y la Diputación que lo representa, en uso de los poderes que recibió, ha contribuido á sancionar la Constitución política de los Estados-Unidos de Colombia: y considerando la conveniencia de que empiece desde luego a regir en los Estados de la Unión, cuya autonomía y soberanía interior está reconocida y consagrada en el art. 93 de la misma Constitución; en virtud de él y en uso de las facultades con que está investida, la expresada Diputación de Cauca ha venido en ratificar, y por las presentes ratifica, la dicha Constitución, dada y firmada en este mismo día.

Buenos Aires, 8 de Mayo de 1863. (Siguen las firmas.)

ACTA DE RATIFICACIÓN, POR LA DIPUTACIÓN DEL ESTADO SOBERANO DE CUNDINAMARCA, DE LA CONSTITUCIÓN DE LOS ESTADOS-UNIDOS DE COLOMBIA, EXPEDIDA EL 8 DE MAYO DE 1863.

Nosotros los infrascritos, Diputados por el Estado soberano de Cundinamarca, á la Convención nacional;

Vista la Constitución expedida y firmada el día de hoy por la expresada Convención para los Estados-Unidos de Colombia, hemos venido en aprobarla y ratificarla, como en efecto la aprobamos y ratificamos unánimemente, de conformidad con lo acordado y dispuesto en el art. 93 de la misma Constitución.

Y para los efectos consiguientes, extendemos y firmamos dos ejemplares de la presente acta de ratificación en Rionegro, á ocho de Mayo de mil ochocientos sesenta y tres. (Siguen las firmas.)

La Diputación, á la Convención nacional, por el Estado soberano de Magdalena,

En nombre y por autoridad del Estado que representa;

Visto el art. 93 de la Constitución que acaba de sancionarse por la expresada Convención, ha venido en ratificar, como por la presente ratifica, la Constitución para los Estados-Unidos de Colombia, sancionada hoy por la Convención nacional, en atención á que dicha Constitución

177.

consulta en sus disposiciones esenciales la autonomía y los intereses del Estado soberano de Magdalena.

Rionegro, 8 de Mayo de 1863. (Siguen las firmas.)

En nombre del Estado soberano de Panamá,

La Diputación de dicho Estado en la Convención nacional;

Visto el art. 93 de la Constitución que acaba de sancionarse por la expresada Convención, y

Considerando que la Constitución de que se trata consulta en lo esencial la soberanía y los intereses del Estado soberano que los infrascritos representan, ha venido en ratificar, como por la presente retifica, la Constitución para los Estados-Unidos de Colombia, sancionada el día de hoy.

Rionegro, 8 de Mayo de 1863. (Siguen las firmas.)

Los infrascritos, Diputados a la Convención nacional por el Estado

soberano de Santander, teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 93 de la Constitución política para los Estados-Unidos de Colombia, sancionada por la Convención nacional en este día, declaramos: que aprobamos y ratificamos en todas sus partes, unánime y solemnemente, á nombre del Estado que representamos, la expresada Constitución política para los Estados-Unidos de Colombia.

En fe de lo cual firmamos la presente acta de ratificación en la ciudad de Rionegro, 8 de Mayo de mil ochocientos sesenta y tres. (Siguen las firmas.)

La Diputación del Estado soberano del Tolima, á nombre de su comitente y en cumplimiento de lo prevenido por el artículo 93 de la Constitución, ratifica espontánea, expresa y deliberadamente, la mencionada Constitución para los Estados-Unidos de Colombia, expedida por la Convención nacional en el presente día.

Rionegro, 8 de Mayo de 1863. (Siguen las firmas.)

A P É N D I C E N Ú M E R O 5.
- - - - -

TEXTO ORIGINAL DE LA "CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA" DE
5 DE AGOSTO DE 1886, indicando, mediante notas al pie de página, las me
dificaciones introducidas por los Actos Legislativos de 1905.(a)

--o--

(a) El período de mando del Presidente de la República General Reyes, se inició por una serie de reformas constitucionales, en sentido excesivamente centralizador, contenidas en los susodichos Actos Legislativos de 1905. Por este resulta muy interesante para el estudio de la historia constitucional colombiana hacer indicación especial de dichas modificaciones, aunque la mayor parte de ellas no subsisten ya en el texto vigente, según puede comprobarse en el Apéndice número 5.

En el nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad, los Delegatarios de los Estados colombianos de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá, Santander y Tolima, reunidos en Consejo Nacional Constituyente:

Vista la aprobación que impartieron las Municipalidades de Colombia a las bases de Constitución expedidas el día 1º de diciembre de 1885;

Y con el fin de afianzar la unidad nacional y asegurar los bienes de la justicia, la libertad y la paz, hemos venido en decretar, como decretamos, la siguiente

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA

TÍTULO I

DE LA NACIÓN Y EL TERRITORIO

Sumario.— I. La Nación.— II. Soberanía.— III. Límites.— IV. División territorial general.— V. Modo de variarla.— VI. Otras divisiones.

Art. 1º La Nación colombiana se reconstituye en forma de República unitaria.

Art. 2º La soberanía reside esencial y exclusivamente en la Nación, y de ella emanan los poderes públicos, que se ejercerán en los términos que esta Constitución establece.

Art. 3º Son límites de la República los mismos que en 1810 separaban el Virreinato de Nueva Granada de las Capitanías generales de Venezuela y Guatemala, del Virreinato del Perú y de las posesiones portuguesas del Brasil; y provisionalmente, respecto del Ecuador, los designados en el Tratado de 9 de julio de 1856.

Las líneas divisorias de Colombia con las naciones limítrofes se fijarán definitivamente por tratados públicos, pudiendo éstos separarse del principio del uti possidetis de derecho de 1810.

Art. 4º (1) El Territorio, con los bienes públicos que de él forman parte, pertenece únicamente a la Nación.

Las secciones que componían la Unión Colombiana, denominadas Estados y Territorios nacionales, continuarán siendo partes territoriales de la República de Colombia, conservando los mismos límites actuales y bajo la denominación de Departamentos.

Las líneas divisorias dudosas serán determinadas por comisiones demarcadoras nombradas por el Senado.

Los antiguos Territorios nacionales quedan incorporados en las secciones a que primitivamente pertenecieron.

Artº 5º (2) La ley puede decretar la formación de nuevos Departamentos desmembrando los existentes, cuando haya sido solicitada por las cuatro quintas partes de los Concejos municipales de la comarca que ha de formar el nuevo Departamento, y siempre que se llenen estas condiciones:

- 1º que el nuevo Departamento tenga por lo menos doscientas mil almas;
- 2º que aquel o aquellos de que fuere segregado, queden cada uno con una población de doscientos cincuenta mil habitantes, por lo menos;
- 3º que la creación sea decretada por una ley aprobada en dos Legislaturas ordinarias sucesivas.

Art. 6º (3) Sólo por una ley aprobada en la forma expresada en la parte final del artículo anterior, podrán ser variados los actuales li-

(1) Reformado virtualmente por los artículos 1º y 2º del Acto Legislativo número 3 de 1905.

(2) Reformado expresamente por el Acto Legislativo número 3 de 1905.

(3) Reformado expresamente por el Acto Legislativo número 3 de 1905.

mites de los Departamentos.

Por medio de una ley aprobada en la forma ordinaria y sin la condición antedicha, podrá el Congreso separar de los Departamentos a que ahora se incorporan, o a que han pertenecido, los Territorios a que se refiere el artículo 4º, o las islas, y disponer respecto de unos u otras lo más conveniente.

Art. 7º Fuera de la división general del Territorio habrá otras dentro de los límites de cada Departamento, para arreglar el servicio público.

Las divisiones relativas a lo fiscal, lo militar y la instrucción pública podrán no coincidir con la división general.

TÍTULO II

DE LOS HABITANTES: NACIONALES Y EXTRANJEROS

Sumario.— I. Calidad de nacional colombiano. Definición de ella. Cómo se pierde. Obligaciones generales de nacionales y extranjeros. Extranjeros domiciliados. Limitación recíproca de los derechos que confiere la naturalización. Nacionalización de compañías.— II. Ciudadanía. Definición de ella. Por qué causas se pierde. Por cuáles se suspende. Prerrogativas inherentes a la ciudadanía.

Art. 8º Son nacionales colombianos:

1º Por nacimiento:

Los naturales de Colombia, con una de dos condiciones: que el padre o la madre también lo hayan sido, o que siendo hijos de extranjeros, se hallen domiciliados en la República.

Los hijos legítimos de padre y madre colombianos que hubieren nacido en tierra extranjera y luego se domiciliaren en la República, se considerarán colombianos de nacimiento para

los efectos de las leyes que exijan esta calidad.

2º Por origen y vecindad:

Los que siendo hijos de madre o padre naturales de Colombia, y habiendo nacido en el extranjero, se domiciliaren en la República; y cualesquiera hispanoamericanos que ante la Municipalidad del lugar donde se establecieren pidan ser inscritos como colombianos.

3º Por adopción:

Los extranjeros que soliciten y obtengan carta de ciudadanía.

Art. 9º La calidad de nacional colombiano se pierde por adquirir carta de naturaleza en país extranjero, fijando en el domicilio, y podrá recobrase con arreglo a las leyes.

Art. 10. Es deber de todos los nacionales y extranjeros en Colombia, vivir sometidos a la Constitución y a las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades.

Art. 11. Los extranjeros disfrutaran en Colombia de los mismos derechos que se concedan a los colombianos por las leyes de la Nación a que el extranjero pertenezca, salvo lo que se estipule en los Tratados públicos.

Art. 12. La ley definirá la condición de extranjero domiciliado, y los derechos y obligaciones de los que en tal condición se hallen.

ales Art. 13. El colombiano, aunque haya perdido la calidad de nacional, que fuere cogido con las armas en la mano en guerra contra Colombia, será juzgado y penado como traidor.

Los extranjeros naturalizados y los domiciliados en Colombia no serán obligados a tomar armas contra el país de su origen.

Art. 14. Las sociedades o corporaciones que sean en Colombia reconocidas como personas jurídicas, no tendrán otros derechos que los correspondientes a personas colombianas.

Art. 15. Son ciudadanos los colombianos varones mayores de veintidós años que ejerzan profesión, arte u oficio, o tengan ocupación lícita u

otro medio legítimo y conocido de subsistencia.

Art. 16. La ciudadanía se pierde de hecho cuando se ha perdido la nacionalidad.

También pierde la calidad de ciudadano quien se encuentre en uno de los siguientes casos, judicialmente declarados:

- 1º Haberse comprometido al servicio de una Nación enemiga de Colombia.
- 2º Haber pertenecido a una facción alzada contra el Gobierno de una Nación amiga.
- 3º Haber sido condenado a sufrir pena aflictiva.
- 4º Haber sido destituido del ejercicio de funciones públicas mediante juicio criminal o de responsabilidad.
- 5º Haber ejecutado actos de violencia, falsedad o corrupción en elecciones.

Los que hayan perdido la ciudadanía podrán solicitar rehabilitación del Senado.

Art. 17. El ejercicio de la ciudadanía se suspende:

- 1º Por notoria enajenación mental.
- 2º Por interdicción judicial.
- 3º Por locura habitual.
- 4º Por causa criminal pendiente, desde que el Juez dicte auto de prisión.

Art. 18. La calidad de ciudadano en ejercicio es condición previa indispensable para ejercer funciones electorales y poder desempeñar empleos públicos que lleven anexa autoridad o jurisdicción.

TÍTULO III

DE LOS DERECHOS CIVILES Y GARANTÍAS SOCIALES

Sumario.— I. Principios generales.— II. Libertad, seguridad e inmunidad. Propiedad.— III. Religión. Educación. Imprenta. Correspondencia.— IV. Industria y profesiones.— V. Petición. Reunión. Asocia-

ción.- VI. Disposiciones sobre personas jurídicas y estado civil de las personas.- VII. Responsabilidad por violación de las garantías.- Reproducción de este título en el Código Civil.

Art. 19. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en sus vidas, honra y bienes, y asegurar el respeto recíproco de los derechos naturales, previniendo y castigando los delitos.

Art. 20. Los particulares no son responsables ante las autoridades sino por infracción de la Constitución o de las leyes. Los funcionarios públicos lo son por la misma causa y por extralimitación de funciones, o por omisión en el ejercicio de éstas.

Art. 21. En caso de infracción manifiesta de un precepto constitucional en detrimento de alguna persona, el mandato superior no exime de responsabilidad al agente que lo ejecuta.

Los militares en servicio quedan exceptuados de esta disposición. Respecto de ellos, la responsabilidad recaerá únicamente en el superior que da la orden.

Art. 22. No habrá esclavos en Colombia.

El que, siendo esclavo, pise el territorio de la República, quedará libre.

Art. 23. Nadie podrá ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino a virtud de mandamiento escrito de autoridad competente con las formalidades legales y por motivo previamente definido en las leyes.

En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas u obligaciones puramente civiles, salvo el arraigo judicial.

Art. 24. El delincuente cogido in fraganti podrá ser aprehendido y llevado ante el Juez por cualquiera persona. Si los agentes de la autoridad lo persiguieren, y se refugiare en su propio domicilio, podrán penetrar en él para el acto de la aprehensión; y si se acogiere a de-

micilio ajeno, deberá preceder requerimiento al dueño o marader.

Art. 25. Nadie podrá ser obligado, en asunto criminal, correccional o de policía, a declarar contra sí mismo o contra sus parientes dentro del cuarto grado civil de Consanguinidad o segundo de afinidad.

Art. 26. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se impute, ante el Tribunal competente, y observando la plenitud de las formas propias de cada juicio.

En materia criminal la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.

Art. 27.—La anterior disposición no obsta para que puedan castigar sin juicio previo, en los casos y dentro de los precisos términos que señale la ley:

1º Los funcionarios que ejercen autoridad o jurisdicción, los cuales podrán penar con multas o arrestos a cualquiera que los injurie o les falte al respeto en el acto en que estén desempeñando las funciones de su cargo.

2º Los Jefes militares, los cuales podrán imponer penas incontinenti, para contener una insubordinación o motín militar, o para mantener el orden hallándose en frente del enemigo.

3º Los capitanes de buque, que tienen, no estando en puerto, la misma facultad para reprimir delitos cometidos a bordo.

Art. 28. Aun en tiempo de guerra nadie podrá ser penado ex-post facto, sino con arreglo a la ley, orden o decreto en que previamente se haya prohibido el hecho y determinándose la pena correspondiente.

Esta disposición no impide que aun en tiempo de paz, pero habiendo graves motivos para temer perturbación del orden público, sean aprehendidas y retenidas, de orden del Gobierno y previo dictamen de los Ministros, las personas contra quienes haya graves indicios de que atentan contra la paz pública.

Art. 29. Sólo impondrá el Legislador la pena capital para casti-

gar, en los casos que se definan como más graves, los siguientes delitos, jurídicamente comprobados, a saber: traición a la patria en guerra extranjera, parricidio, asesinato, incendio, asalto en cuadrilla de malhechores, piratería y ciertos delitos militares definidos por las leyes del Ejército.

En ningún tiempo podrá aplicarse la pena capital fuera de los casos en este artículo previstos.

Art. 30. No habrá pena de muerte por delitos políticos. La ley los definirá.

Art. 31. Los derechos adquiridos con justo título con arreglo a las leyes civiles por personas naturales o jurídicas, no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores.

Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública, resultaren en conflicto los derechos de particulares con la necesidad reconocida por la misma ley, el interés privado deberá ceder al interés público. Pero las expropiaciones que sea preciso hacer requieren plena indemnización con arreglo al artículo siguiente.

Art. 32. (4) En tiempo de paz nadie podrá ser privado de su propiedad en todo ni en parte, sino por pena o apremio, o indemnización, o contribución general, con arreglo a las leyes.

Por graves motivos de utilidad pública, definidos por el Legislador, podrá haber lugar a enajenación forzosa, mediante mandamiento judicial, y se indemnizará el valor de la propiedad, antes de verificar la expropiación.

Art. 33. En caso de guerra y sólo para atender al restablecimiento del orden público, la necesidad de una expropiación podrá ser decretada por autoridades que no pertenezcan al orden judicial y no ser previa la indemnización.

(4) Substituido expresamente por el artículo único del Ato Legislativo número 6 de 1905.

En el expresado caso la propiedad inmueble sólo podrá ser temporalmente ocupada, ya para atender a las necesidades de la guerra, ya para destinar a ella sus productos, como pena pecuniaria impuesta a sus dueños conforme a las leyes.

La Nación será siempre responsable por las expropiaciones que el Gobierno haga por sí o por medio de sus agentes.

Art. 34. No se podrá imponer pena de confiscación.

Art. 35. Será protegida la propiedad literaria y artística, como propiedad transferible, por el tiempo de la vida del autor y ochenta años más, mediante las formalidades que prescriba la ley.

Ofrécese la misma garantía a los propietarios de obras publicadas en países de lengua española, siempre que la Nación respectiva consigne en su legislación el principio de reciprocidad, y sin que haya necesidad de celebrar al efecto convenios internacionales.

Art. 36. El destino de las donaciones intervivos o testamentarias hechas conforme a las leyes para objetos de beneficencia o de instrucción pública, no podrá ser variado ni modificado por el Legislador.

Art. 37. No habrá en Colombia bienes raíces que no sean de libre enajenación ni obligaciones irredimibles.

Art. 38. La Religión Católica, Apostólica, Romana es la de la Nación: los poderes públicos la protegerán y harán que sea respetada, como esencial elemento del orden social.

Se entiende que la Iglesia Católica no es ni será oficial, y conservará su independencia.

Art. 39. Nadie será molestado por razón de sus opiniones religiosas, ni compelido por las autoridades a profesar creencias ni a observar prácticas contrarias a su conciencia.

Art. 40. Es permitido el ejercicio de todos los cultos que no sean contrarios a la moral cristiana ni a las leyes.

Los actos contrarios a la moral cristiana o subversivos del orden público, que se ejecuten con ocasión o pretexto del ejercicio de un culto, quedan sometidos al derecho común.

Art. 41. La educación pública será organizada y dirigida en concordancia con la Religión Católica.

La instrucción primaria costeada con fondos públicos, será gratuita y no obligatoria.

Art. 42. La prensa es libre en tiempo de paz, pero responsable con arreglo a las leyes, cuando atente a la honra de las personas, al orden social o a la tranquilidad pública.

Ninguna empresa editorial de periódico podrá, sin permiso del Gobierno, recibir subvención de otros Gobiernos ni de compañías extranjeras.

Art. 43. La correspondencia confiada a los telégrafos y correos es inviolable. Las cartas y papeles privados no podrán ser interceptados ni registrados sino por la autoridad, mediante orden de funcionario competente, en los casos y con las formalidades que establezca la ley, y con el único objeto de buscar pruebas judiciales.

Podrá gravarse, pero nunca prohibirse en tiempo de paz, la circulación de impresos por los correos.

Art. 44. Toda persona podrá abrazar cualquier oficio u ocupación honesta sin necesidad de pertenecer a gremio de maestros o doctores.

Las autoridades inspeccionarán las industrias y profesiones en lo relativo a la moralidad, la seguridad y la salubridad públicas.

La ley podrá exigir títulos de idoneidad para el ejercicio de las profesiones médicas y de sus auxiliares.

Art. 45. Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a las autoridades, ya sea por motivos de interés general, ya de interés particular, y el de obtener pronta resolución.

Art. 46. Toda parte del pueblo puede reunirse o congregarse pacíficamente. La autoridad podrá disolver toda reunión que degenera en asonada o tumulto, o que obstruya las vías públicas.

Art. 47. Es permitido formar compañías o asociaciones públicas o privadas que no sean contrarias a la moralidad ni al orden legal.

Son prohibidas las Juntas políticas populares de carácter permanente. Las asociaciones religiosas deberán presentar a la autoridad civil, para que puedan quedar bajo la protección de las leyes, autorización expedida por la respectiva superioridad eclesiástica.

Art. 48. Sólo el Gobierno puede introducir, fabricar y poseer armas y municiones de guerra.

Nadie podrá dentro de poblado llevar armas consigo, sin permiso de la autoridad. Este permiso no podrá extenderse a los casos de concurrencia a reuniones políticas, a elecciones, o a sesiones de asambleas o corporaciones públicas, ya sea para actuar en ellas o para presenciárlas.

Art. 49. Las corporaciones legítimas y públicas tienen derecho a ser reconocidas como personas jurídicas, y a ejecutar en tal virtud actos civiles y gozar de las garantías aseguradas por este Título, con las limitaciones generales que ~~se~~ establezcan las leyes por razones de utilidad común.

Art. 50. Las leyes determinarán lo relativo al estado civil de las personas, y los consiguientes derechos y deberes.

Art. 51. Las leyes determinarán la responsabilidad a que quedan sometidos los funcionarios públicos de todas clases, que atenten contra los derechos garantizados en este Título.

Art. 52. Las disposiciones del presente Título se incorporarán en el Código Civil como Título preliminar, y no podrán ser alteradas sino por acto reformativo de la Constitución.

TÍTULO IV

DE LAS RELACIONES ENTRE LA IGLESIA Y EL ESTADO

Sumario.-- Derechos generales de la Iglesia.-- Incompetibilidad de funciones eclesiásticas y civiles.-- Exenciones.-- Autorización al Gobierno para celebrar convenios con la Santa Sede.

Art. 53. La Iglesia Católica podrá libremente en Colombia administrar sus asuntos interiores, y ejercer actos de autoridad espiritual y de jurisdicción eclesiástica sin necesidad de autorización del Poder civil; y como persona jurídica, representada en cada Diócesis por el respectivo legítimo Prelado, podrá igualmente ejercer actos civiles, por derecho propio que la presente Constitución le reconoce.

Art. 54. El ministerio sacerdotal es incompatible con el desempeño de cargos públicos. Podrán, sin embargo, los sacerdotes católicos ser empleados en la instrucción o beneficencia públicas.

Art. 55. Los edificios destinados al culto católico, los seminarios conciliares y las casas episcopales y curales no podrán ser gravados con contribuciones ni ocupados para aplicarlos a otros servicios.

Art. 56. El Gobierno podrá celebrar convenios con la Santa Sede Apostólica, a fin de arreglar las cuestiones pendientes, y definir y establecer las relaciones entre la potestad civil y la eclesiástica.

TÍTULO V

DE LOS PODERES NACIONALES Y DEL SERVICIO PÚBLICO

Sumario.— Limitación de los poderes.— Poder Legislativo.— Ejecutivo.— Judicial.— Reglas generales sobre servicio público.

Art. 57. Todos los poderes públicos son limitados, y ejercen separadamente sus respectivas atribuciones.

Art. 58. La potestad de hacer leyes reside en el Congreso.

El Congreso se compone del Senado y la Cámara de Representantes.

Art. 59. El Presidente de la República es el Jefe del Poder Ejecutivo, y lo ejerce con la indispensable cooperación de los Ministros.

El Presidente y los Ministros, y en cada negocio particular el Presidente con el Ministro del respectivo ramo, constituyen el Gobierno.

Art. 60. Ejercen el Poder Judicial la Corte Suprema, los Tribunales superiores de distrito, y demás tribunales y juzgados que establezca la ley.

El Senado ejerce determinadas funciones judiciales.

Art. 61. Ninguna persona o Corporación podrá ejercer simultáneamente, en tiempo de paz, la autoridad política o civil y la judicial o la militar.

Art. 62. La ley determinará los casos particulares de incompatibilidad de funciones; los de responsabilidad de los funcionarios y modo de hacerla efectiva; las calidades y antecedentes necesarios para el desempeño de ciertos empleos, en los casos no previstos por la Constitución; las condiciones de ascenso y de jubilación, y la serie o clase de servicios civiles o militares que dan derecho a pensión del Tesoro público.

Art. 63. No habrá en Colombia ningún empleo que no tenga funciones detalladas en ley o en reglamento.

Art. 64. Nadie podrá recibir dos sueldos del Tesoro público, salvo lo que para casos especiales determinen las leyes.

Art. 65. Ningún funcionario entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de sostener y defender la Constitución y de cumplir con los deberes que le incumben.

Art. 66. Ningún colombiano que esté al servicio de Colombia podrá, sin permiso de su Gobierno, admitir de Gobierno extranjero cargo o merced alguna, so pena de perder el empleo que ejerce.

Art. 67. Ningún colombiano podrá admitir de Gobierno extranjero empleo o comisión cerca del de Colombia, sin haber obtenido previamente del último la necesaria autorización.

TÍTULO VI

DE LA REUNIÓN Y ATRIBUCIONES DEL CONGRESO

Sumario.— I. Época, lugar y duración de las legislaturas ordinarias.— Formalidades necesarias para su apertura, funcionamiento y clausura.— Legislaturas extraordinarias.— Traslación del Congreso.— Reunión del Congreso en un solo cuerpo.— Reuniones ilegales.— II. Atribuciones del Congreso.— Limitaciones del Poder Legislativo.

Art. 68.(5) Las Cámaras legislativas se reunirán ordinariamente por derecho propio cada dos años, el día 20 de julio en la capital de la República.

Las sesiones ordinarias durarán ciento veinte días, pasados los cuales el Gobierno podrá declarar las Cámaras en receso.

Art. 69. Las Cámaras se abrirán y clausurarán pública y simultáneamente.

Art. 70. Las Cámaras no podrán abrir sus sesiones ni deliberar con menos de una tercera parte de sus miembros.

El Presidente de la República, en persona, o por medio de los Ministros, abrirá y cerrará las Cámaras.

Esta ceremonia no es esencial para que el Congreso ejerza legítimamente sus funciones.

Art. 71. Cuando, llegado el día en que ha de reunirse el Congreso, no pudiese verificarse el acto por falta del número de miembros necesario, los individuos concurrentes, en junta preparatoria o provisional, apremiarán a los ausentes con las penas que los respectivos reglamentos establezcan; y se abrirán las sesiones luego que esté completo el número requerido.

(5) Substituido expresamente por el Acto Legislativo número 2 de 1905.

Art. 72. El Congreso podrá reunirse extraordinariamente convesado por el Gobierno. En sesiones extraordinarias sólo podrá ocuparse en los negocios que el Gobierno someta a su consideración.

Art. 73. Por acuerdo mutuo las dos Cámaras podrán trasladarse a otro lugar, y en caso de perturbación del orden público podrán reunirse en el punto que designe el Presidente del Senado.

Art. 74. (6) El Congreso se reunirá en un solo Cuerpo únicamente para el acto de dar posesión de su cargo al Presidente de la República, y para ejercer la atribución determinada en el artº 77.

En tales ocasiones el Presidente del Senado y el de la Cámara de Representantes serán, respectivamente, Presidente y Vicepresidente del Congreso.

Art. 75. Toda reunión de miembros del Congreso que con la mira de ejercer el Poder Legislativo, se efectúe fuera de las condiciones constitucionales, será ilegal, los actos que expida nulos, y los individuos que en las deliberaciones tomen parte, serán castigados conforme a las leyes.

Art. 76. (7) Corresponde al Congreso hacer las leyes.

Por medio de ellas ejerce las siguientes atribuciones:

- 1º Interpretar, reformar y derogar las leyes preexistentes.
- 2º Modificar la división general del Territorio con arreglo a los artículos 5º y 6º, y establecer y reformar, cuando convenga, las otras divisiones territoriales de que trata el artículo 7º
- 3º Conferir atribuciones especiales a las Asambleas departamentales.
- 4º Disponer lo conveniente para la administración de Panamá.

(6) Reformado expresamente por el Ato Legislativo número 5 de 1905.

(7) Reformada virtualmente la atribución 2º de este artículo por el artículo 1º del Ato Legislativo número 3 de 1905, que reformó expresamente los artículos 5º y 6º de la Constitución.

- 5f Variar, en circunstancias extraordinarias y por graves motivos de conveniencia pública, la actual residencia de los altos poderes nacionales.
- 6f Fijar para cada bienio, en sesiones ordinarias, el pie de fuerza.
- 7f Crear todos los empleos que demande el servicio público y fijar sus respectivas dotaciones.
- 8f Regular el servicio público, determinando los puntos de que trata el artº 62.
- 9f Conceder autorizaciones al Gobierno para celebrar contratos, negociar empréstitos, enajenar bienes nacionales y ejercer otras funciones dentro de la órbita constitucional.
10. Revestir, pre tempore, al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias, cuando la necesidad lo exija o las conveniencias públicas lo aconsejen.
11. Establecer las rentas nacionales y fijar los gastos de la administración.
 En cada legislatura se votará el presupuesto general de unas y otros.
 En el presupuesto no podrá incluirse partida alguna que no corresponda a un gasto decretado por ley anterior o a un crédito judicialmente reconocido.
12. Reconocer la deuda nacional y arreglar su servicio.
13. Decretar impuestos extraordinarios cuando la necesidad lo exija.
14. Aprobar o desaprobar los contratos o convenios que celebre el Presidente de la República con particulares, compañías o entidades políticas, en los cuales tenga interés el fisco nacional, si no hubieren sido previamente autorizados, o si no se hubiere llenado en ellos las formalidades prescritas por el Congreso, o si algunas estipulaciones que contengan no estuvieren ajustadas a la respectiva ley de autorizaciones.

15. Fijar la ley, peso, tipo y denominación de la moneda, y arreglar el sistema de pesas y medidas.
16. Organizar el crédito público.
17. Decretar las obras públicas que hayan de emprenderse o continuarse, y monumentos que deban erigirse.
18. Fomentar las empresas útiles o benéficas dignas de estímulo y apoyo.
19. Decretar honores públicos a los ciudadanos que hayan prestado grandes servicios a la Patria.
20. Aprobear o desaprobear los Tratados que el Gobierno celebre con Potencias extranjeras.
21. Conceder, por mayoría de dos tercios de los votos en cada Cámara, y por graves motivos de conveniencia pública, amnistías o indultos generales por delitos políticos. En el caso de que los favorecidos queden eximidos de la responsabilidad civil respecto de particulares, el Gobierno estará obligado a las indemnizaciones a que hubiere lugar.
22. Limitar o regular la aprobación o adjudicación de tierras baldías.

Art. 77. (8) El Congreso elegirá en sus reuniones ordinarias, y para un bienio, el Designado que ha de ejercer el Poder Ejecutivo a falta de Presidente y Vicepresidente.

Art. 78. Es prohibido al Congreso y a cada una de sus Cámaras:

- 1º Dirigir excitaciones a funcionarios públicos.
- 2º Inmiscuirse por medio de resoluciones o de leyes en asuntos que son de la privativa competencia de otros poderes.
- 3º Dar votos de aplauso o censura respecto de actos oficiales.
- 4º Exigir al Gobierno comunicación de las instrucciones dadas a Ministros diplomáticos, e informes sobre negociaciones que tengan carácter reservado.

- 5º Decretar a favor de ninguna persona o entidad, gratificaciones, indemnizaciones, pensiones ni otra erogación que no esté destinada a satisfacer créditos o derechos reconocidos con arreglo a la ley preexistente, salvo lo dispuesto en el artículo 76, inciso 18.
- 6º Decretar actos de prescripción o persecución contra personas o corporaciones.

TÍTULO VII

DE LA FORMACIÓN DE LAS LEYES

Sumario.— I. Iniciativa para la formación de las leyes. Limitaciones del derecho de iniciativa. Requisitos para que un acto del Congreso sea ley.— II. Participación del Gobierno en los debates. Participación de la Corte Suprema. Derechos y deberes del Gobierno en lo tocante a la sanción de las leyes. Trámites que han de observarse para resolver sobre objeciones del Gobierno. Intervención de la Corte Suprema.— III. Fórmula inicial de las leyes.

Art. 79. Las leyes pueden tener origen en cualquiera de las dos Cámaras, a propuesta de sus respectivos miembros o de los Ministros del despacho.

Art. 80. Exceptúanse de lo dispuesto en el artículo anterior:

- 1º Aquellas leyes que deben tener origen únicamente en la Cámara de Representantes (artículo 102, inciso 2º).
- 2º Las leyes sobre materia civil y procedimiento judicial, que no podrán ser modificadas sino en virtud de proyectos presentados por las Comisiones permanentes especiales de una y otra Cámara o por los Ministros del despacho.

Art. 81. Ningún acto legislativo será ley sin los requisitos siguientes:

1º Haber sido aprobado en cada Cámara en tres debates, en distintos días, por mayoría absoluta de votos.

2º Haber obtenido la sanción del Gobierno.

Art. 82. No podrá cerrarse en segundo debate, ni ser vetada una ley en tercero, sin la asistencia de la mayoría absoluta de los individuos que componen la Cámara.

Art. 83. El Gobierno puede tomar parte en la discusión de las leyes por medio de los Ministros.

Art. 84. Los Magistrados de la Corte Suprema tienen voz en el debate de las leyes sobre materia civil y procedimiento judicial.

Art. 85. Aprobado un proyecto de ley por ambas Cámaras, pasará al Gobierno, y si éste lo aprobare también, dispondráse promulgue como ley.

Si no lo aprobare, lo devolverá con objeciones a la Cámara en que tuvo origen.

Art. 86. El Presidente de la República dispone del término de seis días para devolver con objeciones cualquier proyecto, cuando éste no conste de más de cincuenta artículos; de diez días, cuando el proyecto contenga de cincuenta y uno a doscientos artículos, y hasta de quince días, cuando los artículos sean más de doscientos.

Si el Presidente, una vez transcurridos los indicados términos, según el caso, no hubiere devuelto el acto legislativo con objeciones, no podrá dejar de sancionarlo y promulgarlo. Pero si las Cámaras se pusieren en receso dentro de dichos términos, el Presidente tendrá el deber de publicar el proyecto sancionado u objetado, dentro de los diez días siguientes a aquel en que el Congreso haya cerrado sus sesiones.

Art. 87. El proyecto de ley objetado en su conjunto por el Presidente, volverá en las Cámaras a tercer debate. El que fuere objetado sólo en parte, será reconsiderado en segundo debate con el único objeto de tomar en cuenta las observaciones del Gobierno.

Art. 88. El Presidente de la República sancionará, sin poder presentar nuevas objeciones, todo proyecto que, reconsiderado, fuere adoptado

por dos tercios de los votos en una y otra Cámara.

Art. 89. Si el Gobierno no cumpliera el deber que se le impone de sancionar las leyes en los términos y según las condiciones que este Título establece, las sancionará y promulgará el Presidente del Congreso.

Art. 90. Exceptuase de lo dispuesto en el artículo 88 el caso en que el proyecto fuere objetado por inconstitucional. En este caso, si las Cámaras insistieren, el proyecto pasará a la Corte Suprema, para que ella, dentro de seis días, decida sobre su exequibilidad. El fallo afirmativo de la Corte obliga al Presidente a sancionar la ley. Si fuere negativo, se archivará el proyecto.

Art. 91. Los proyectos de ley que queden pendientes en las sesiones de un año, no podrán ser considerados sino como proyectos nuevos, en otra Legislatura.

Art. 92. Al texto de las leyes precederá esta fórmula: El Congreso de Colombia decreta:

TÍTULO VIII

DEL SENADO.

Sumario..- Composición del Senado.- Calidades para ser Senador.- Duración y renovación de los Senadores.- Atribuciones judiciales del Senado.- Otras atribuciones del Senado.

Art. 93. El Senado se compondrá de tantos miembros cuantos Senadores correspondan a los Departamentos, a razón de tres por cada Departamento.

Por cada Senador se elegirán dos suplentes.

Art. 94. Para ser Senador se requiere ser colombiano de nacimiento y ciudadano no suspenso, tener más de treinta años de edad, y disfrutar de mil doscientos pesos, por lo menos, de renta anual, como rendimiento de propiedades o fruto de honrada ocupación.

Art. 95. (9) Los Senadores durarán seis años, y son reelegibles indefinidamente.

El Senado se renovará por terceras partes en la forma que determine la ley.

Art. 96. Corresponde al Senado conocer de las acusaciones que intente la Cámara de Representantes contra los funcionarios de que trata el artículo 102, inciso 4º

Art. 97. En los juicios que se sigan ante el Senado, se observarán estas reglas:

- 1º Siempre que una acusación sea públicamente admitida, el acusado queda de hecho suspendido de su empleo.
- 2º Si la acusación se refiere a delitos cometidos en ejercicio de funciones, o a indignidad por mala conducta, el Senado no podrá imponer otra pena que la de destitución del empleo, o la privación temporal o pérdida absoluta de los derechos políticos; pero se le seguirá juicio criminal al reo ante la Corte Suprema, si los hechos le constituyen responsable de infracción que merezca otra pena.
- 3º Si la acusación se refiere a delitos comunes, el Senado se limitará a declarar si hay o no lugar a seguimiento de causa, y en caso afirmativo pondrá al acusado a disposición de la Corte Suprema.
- 4º El Senado podrá cometer la instrucción de los procesos a una diputación de su seno, reservándose el juicio y sentencia definitiva, que será pronunciada en sesión pública, por los dos tercios, o lo menos, de los votos de los Senadores que concurran al acto.

(9) Derogado expresamente por el artículo 5º y substituido por el artículo 1º del Acto Legislativo número 8 de 1905.

Art. 98. (10) Son también atribuciones del Senado:

- 1º Rehabilitar a los que hubieren perdido la ciudadanía. Esta gracia, según el caso y circunstancia del que la solicite, podrá referirse únicamente al derecho electoral, o también a la incapacidad para desempeñar determinados puestos públicos, o conjuntamente al ejercicio de todos los derechos políticos.
- 2º Nombrar dos miembros del Consejo de Estado.
- 3º Admitir o no las renunciaciones que hagan de sus empleos el Presidente y Vicepresidente de la República, y el designado.
- 4º Aprobar o desaprobar los nombramientos que haga el Presidente de la República para Magistrados de la Corte Suprema.
- 5º Aprobar o desaprobar los grados militares que confiera el Gobierno, desde Teniente Coronel hasta el más alto grado en el Ejército o Armada.
- 6º Conceder licencias al Presidente de la República para separarse temporalmente, no siendo caso de enfermedad, o para ejercer el poder fuera de la capital.
- 7º Permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República.
- 8º Nombrar las comisiones demarcadoras de que trata el artículo 4º
- 9º Autorizar al Gobierno para declarar la guerra a otra Nación.

(10) La atribución 2ª de este artículo ha quedado derogada virtualmente por el Acto Legislativo número 10 de 1905, y la atribución 3ª del mismo ha quedado reformada, también virtualmente, por el artículo 1º del mismo Acto Legislativo número 5 del mismo año.

TÍTULO IX

DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES

Sumario.— Composición de la Cámara.— Calidades para ser Representante, y duración del cargo.— Atribuciones de esta Cámara.

Art. 99. La Cámara de Representantes se compondrá de tantos individuos cuantos correspondan a la población de la República, a razón de uno por cada 50.000 habitantes.

Por cada Representante se elegirán dos suplentes.

Art. 100. Para ser elegido Representante se requiere ser ciudadano en ejercicio, no haber sido condenado por delito que merezca pena corporal, y tener más de veinticinco años de edad.

Art. 101. Los Representantes durarán en el ejercicio de sus funciones por cuatro años, y serán reelegibles indefinidamente.

Art. 102. (11) Son atribuciones de la Cámara de Representantes:

- 1º Examinar y feneceer definitivamente la cuenta general del Tesoro.
- 2º Iniciar la formación de las leyes que establezcan contribuciones u organicen el Ministerio público.
- 3º Nombrar dos Consejeros de Estado.
- 4º Acusar ante el Senado, cuando hubiere justa causa, al Presidente y al Vicepresidente de la República, a los Ministros del Despacho, a los Consejeros de Estado, al Procurador general de la Nación y a los Magistrados de la Corte Suprema.
- 5º Conocer de los denuncios y quejas que ante ella se presenten por el Procurador de la Nación o por particulares, contra los expresados funcionarios, excepto el Presidente y Vicepresidente, y si prestaren mérito, fundar en ellas acusación ante el Senado.

(11) La atribución 3ª de este artículo quedó virtualmente derogada por el Acto Legislativo número 10 de 1905; y las atribuciones 4ª y 5ª fueron reformadas virtualmente por el mismo Acto Legislativo y por el Acto número 5 del mismo año.

TÍTULO X,

DISPOSICIONES COMUNES A AMBAS CÁMARAS Y A LOS MIEMBROS DE ELLAS.

Sumario.- I. Atribuciones comunes a ambas Cámaras. Publicidad de las sesiones.- II. Carácter representativo de los miembros del Congreso. Inviolabilidad por razón de sus votos. Inmunidad personal. Incompatibilidad de funciones. Indemnización pecuniaria. Disposiciones sobre vacantes.

Art. 103. Son facultades de cada Cámara:

- 1º Dictar su propio reglamento y establecer los medios preventivos y coercitivos necesarios para asegurar la concurrencia de los miembros de la Corporación.
- 2º Crear y proveer los empleos necesarios para el despacho de sus trabajos.
- 3º Organizar, en caso necesario, la policía interior del edificio en que celebra sus sesiones.
- 4º Examinar si las credenciales que cada miembro ha de presentar al tomar posesión del puesto, están en la forma prescrita por la ley.
- 5º Contestar, o abstenerse de hacerlo, a los mensajes del Gobierno.
- 6º Pedir a los Ministros los informes escritos o verbales que necesite para el mejor desempeño de sus trabajos o para conocer los actos de la Administración, salvo lo dispuesto en el artículo 78, inciso 4º
- 7º Nombrar comisiones que la representen en actos oficiales.
- 8º Designar oradores ante la otra Cámara en caso de desacuerdo de opiniones en la formación de una ley.
- 9º Aprobar todas las resoluciones que estime convenientes dentro de los límites señalados en el artículo 78.

Art. 104. Las sesiones de las Cámaras serán públicas, con las limitaciones a que haya lugar conforme a sus reglamentos.

Art. 105. Los individuos de una y otra Cámara representan a la Nación entera, y deberán votar consultando únicamente la justicia y el bien común.

Art. 106. Los Senadores y los Representantes son inviolables por sus opiniones y votos en el ejercicio de su cargo. En el uso de la palabra sólo serán responsables ante la Cámara a que pertenezcan; podrán ser llamados al orden por el que presida la sesión, y penados conforme al Reglamento por las faltas que cometan.

Art. 107. Cuarenta días antes de principiar las sesiones y durante ellas, ningún miembro del Congreso podrá ser llamado a juicio civil o criminal, sin permiso de la Cámara a que pertenezca. En caso de flagrante delito, podrá ser detenido el delincuente y será puesto inmediatamente a disposición de la Cámara respectiva.

Art. 108. (12) El Presidente y el Vicepresidente de la República, los Ministros del Despacho y Consejeros de Estado, los Magistrados de la Corte Suprema, el Procurador de la Nación y los Gobernadores no podrán ser elegidos miembros del Congreso sino seis meses después de haber cesado en el ejercicio de sus funciones.

Tampoco podrá ser Senador o Representante ningún individuo, por Departamento o Circunscripción electoral donde tres meses antes de las elecciones haya ejercido jurisdicción o autoridad civil, política o militar.

Art. 109. (13) El Presidente de la República no puede conferir en-

(12) Reformado virtualmente por el artículo 1º del Acto Legislativo número 5 de 1905 y por el artículo 1º del Acto Legislativo número 10 del mismo año.

(13) Reformado virtualmente por el artículo 1º del Acto Legislativo número 10 de 1905.

pleo a los Senadores y Representantes durante el periodo de sus funciones y un año después, con excepción de los de Ministro del Despacho, Consejero de Estado, Gobernador, Agente diplomático y Jefe militar en tiempo de guerra.

La aceptación de cualquiera de estos empleos por un miembro del Congreso produce vacante en la respectiva Cámara.

Art. 110. Los Senadores y Representantes no pueden hacer por sí, ni por interpuesta persona, contrato alguno con la Administración, ni admitir de nadie poder para gestionar negocios que tengan relación con el Gobierno de Colombia.

Art. 111. Cuando algún Senador o Representante se retire de las sesiones y fuere reemplazado por un suplente, corresponderán al primero los viáticos de marcha a la capital, y al segundo los de regreso a su domicilio.

Art. 112. Ningún aumento de dietas ni de viáticos decretado por el Congreso, se hará efectivo sino después que hayan cesado en sus funciones los miembros de la Legislatura en que hubiere sido votado.

Art. 113. En caso de falta de un miembro del Congreso, sea accidental o absoluta, le subrogará el respectivo suplente.

TÍTULO XI

DEL PRESIDENTE Y DEL VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Sumario.- I. Elección del Presidente. Calidades para serlo. Juramento de posesión.- II. Atribuciones del Presidente: a) en relación con el Poder Legislativo; b) con el Judicial; c) como autoridad suprema administrativa. Sus facultades en tiempo de guerra.- III. Responsabilidad del Presidente.- IV. Modo de llenar sus faltas.- V. Del Vicepre-

sidente de la República.- VI. Del Designado.

Art. 114. (14) El Presidente de la República será elegido por las asambleas electorales, en un mismo día y en la forma que determine la ley, para un período de seis años.

Art. 115. Para ser Presidente de la República se requieren las mismas calidades que para ser Senador.

Art. 116. El Presidente de la República electo tomará posesión de su destino ante el Presidente del Congreso, y prestará juramento en estos términos: Juro a Dios cumplir fielmente la Constitución y leyes de Colombia.

Art. 117. Si por cualquier motivo el Presidente no pudiera tomar posesión ante el Presidente del Congreso, lo verificará ante el Presidente de la Corte Suprema, y, en defecto de ésta, ante dos testigos.

Art. 118. (15) Corresponde al Presidente de la República en relación con el Poder Legislativo:

- 1º Abrir y cerrar las sesiones ordinarias del Congreso.
- 2º Convocarlo a sesiones extraordinarias, por graves motivos de conveniencia pública y previo dictamen del Consejo de Estado.
- 3º Presentar al Congreso al principio de cada Legislatura un mensaje sobre los actos de la Administración.
- 4º Enviar por el mismo tiempo a la Cámara de Representantes el Presupuesto de Rentas y Gastos y la cuenta general del Presupuesto y del Tesoro.

(14) Derogado expresamente por el artículo 5º del Ato Legislativo número 8 de 1905, y substituido por los artículos 5º del Ato Legislativo número 5 y 3º del Ato Legislativo número 8 de dicho año.

(15) Reformado virtualmente el ordinal 2º de este artículo por el Ato Legislativo número 10 de 1905, que suprimió el Consejo de Estado.

- 5º Dar a las Cámaras legislativas los informes que soliciten sobre negocios que no demanden reserva.
 - 6º Prestar eficaz apoyo a las Cámaras cuando ellas lo soliciten, poniendo a su disposición, si fuere necesario, la fuerza pública.
 - 7º Concurrir a la formación de las leyes; presentando proyectos por medio de los Ministros, ejerciendo el derecho de objetar los actos legislativos y cumpliendo el deber de sancionarlos, con arreglo a esta Constitución.
 - 8º Dictar en los casos y con las formalidades prescriptas en el artículo 121, decretos que tengan fuerza legislativa.
- Art. 119. (16) Corresponde al Presidente de la República, en relación con el Poder judicial:**
- 1º Nombrar los Magistrados de la Corte Suprema.
 - 2º Nombrar los Magistrados de los Tribunales Superiores, de ternas que presente la Corte Suprema.
 - 3º Nombrar y remover los funcionarios del Ministerio Público.
 - 4º Velar porque en toda la República se administre pronta y cumplida justicia, prestando a los funcionarios judiciales, con arreglo a las leyes, los auxilios necesarios para hacer efectivas sus providencias.
 - 5º Mandar acusar ante el Tribunal competente, por medio del respectivo Agente del Ministerio Público, o de un abogado fiscal, nombrado al efecto, a los Gobernadores de Departamentos y a cualesquiera otros funcionarios nacionales o municipales del orden administrativo o judicial, por infracción de la Constitución o las leyes, o por otros delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.

(16) El ordinal 6º de este artículo quedó virtualmente reformado por el artículo 1º del Acto Legislativo número 10 de 1905.

6º Conmutar, previo dictamen del Consejo de Estado, la pena de muerte por la inmediatamente inferior en la escala penal, y conceder indultos por delitos políticos y rebajas de pena por los comunes, con arreglo a la ley que regule ~~el ejercicio~~ el ejercicio de esta facultad. En ningún caso los indultos ni las rebajas de pena podrán comprender la responsabilidad que tengan los favorecidos respecto de particulares, según las leyes.

No podrá ejercer esta última atribución respecto de los Ministros del Despacho, sino mediante petición de una de las Cámaras legislativas.

Art. 120. (17) Corresponde al Presidente de la República como suprema autoridad administrativa:

- 1º Nombrar y separar libremente los Ministros del Despacho.
 - 2º Promulgar las leyes sancionadas, obedecerlas y velar por su exacto cumplimiento.
 - 3º Ejercer la potestad reglamentaria, expidiendo las órdenes, decretos, y resoluciones necesarias para la cumplida ejecución de las leyes.
 - 4º Nombrar y separar libremente los Gobernadores.
 - 5º Nombrar ~~don~~ Consejeros de Estado.
 - 6º Nombrar las personas que deban desempeñar cualesquiera empleos nacionales, cuya provisión no corresponda a otros funcionarios o corporaciones, según esta Constitución o leyes posteriores.
- En todo caso el Presidente tiene facultad de nombrar y remover libremente sus agentes.

(17) Los ordinales 5º, 10, 12 y 13 de ese artículo están virtualmente reformados por el artículo 1º del Acto Legislativo número 10 de 1905, y el ordinal 9º lo está expresamente por los artículos 1º y 6º del Acto Legislativo número 5 de dicho año.

- 7º Disponer de la fuerza pública y conferir grados militares con las restricciones estatuidas en el inciso 5º del artículo 98, y con las formalidades de la ley que regule el ejercicio de esta facultad.
- 8º Conservar en todo el territorio el orden público, y restablecerlo donde fuere turbado.
- 9º Dirigir, cuando lo estime conveniente, las operaciones de la guerra como Jefe de los Ejércitos de la República. Si ejerciere el mando militar fuera de la capital, quedará el Vicepresidente encargado de los otros ramos de administración.
10. Dirigir las relaciones diplomáticas y comerciales con las demás Potencias o Soberanos; nombrar libremente y recibir los agentes respectivos, y celebrar con Potencias extranjeras tratados y convenios.

Los tratados se someterán a la aprobación del Congreso, y los convenios serán aprobados por el Presidente, en receso de las Cámaras, previo dictamen favorable de los Ministros y del Consejo de Estado.

11. Proveer a la seguridad exterior de la República, defendiendo la independencia y la honra de la Nación y la inviolabilidad del Territorio; declarar la guerra, con permiso del Senado, o hacerla sin tal autorización cuando urgiere repeler una agresión extranjera; y ajustar y ratificar tratados de paz, habiendo de dar después cuenta documentada a la próxima Legislatura.
12. Permitir, en receso del Senado, y previo dictamen del Consejo de Estado, el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República.
13. Permitir, con el dictamen del Consejo de Estado, la estación de buques extranjeros de guerra en aguas de la Nación.
14. Cuidar de la exacta recaudación y administración de las rentas y caudales públicos y decretar su inversión con arreglo a las leyes.

15. Reglamentar, dirigir e inspeccionar la instrucción pública nacional.
16. Celebrar contratos administrativos para la prestación de servicios y ejecución de obras públicas, con arreglo a las leyes fiscales y con la obligación de dar cuenta al Congreso en sus sesiones ordinarias.
17. Organizar el Banco Nacional y ejercer la inspección necesaria sobre los bancos de emisión y demás establecimientos de crédito, conforme a las leyes.
18. Dar permiso a los empleados nacionales que lo soliciten para admitir cargos o mercedes de Gobiernos extranjeros.
19. Expedir cartas de ciudadanía conforme a las leyes.
20. Conceder patentes de privilegio temporal a los autores de invenciones o perfeccionamientos útiles, con arreglo a las leyes.
21. Ejercer el derecho de inspección y vigilancia sobre instituciones de utilidad común, para que sus rentas se conserven y sean debidamente aplicadas, y que en todo lo esencial se cumpla con la voluntad de los fundadores.

Art. 121. (18) En los casos de guerra exterior, o de conmoción interior, podrá el Presidente, previa audiencia del Consejo de Estado y con la firma de todos los Ministros, declarar turbado el orden público y en estado de sitio toda la República o parte de ella.

Mediante tal declaración quedará el Presidente investido de las facultades que le confieran las leyes, y, en su defecto, de las que le da el Derecho de Gentes para defender los derechos de la Nación o reprimir el alzamiento. Las medidas extraordinarias o decretos de carácter provisional legislativo que dentro de dichos límites dicte el Pre-

(18) Reformada virtualmente la primera parte de este artículo por el artículo 1º del Acto Legislativo número 10 de 1905.

sidente, serán obligatorios siempre que lleven la firma de todos los Ministros.

El Gobierno declarará restablecido el orden público luego que haya cesado la perturbación o el peligro exterior; y pasará al Congreso una exposición motivada de sus providencias. Serán responsables cualesquiera autoridades por los abusos que hubieren cometido en el ejercicio de facultades extraordinarias.

Art. 122. El Presidente de la República o el que en su lugar ejerza el Poder Ejecutivo, es responsable únicamente en los casos siguientes, que definirá la ley:

- 1º Por actos de violencia o coacción en elecciones.
- 2º Por actos que impidan la reunión constitucional de las Cámaras legislativas, o estorben a éstas o a las demás Corporaciones o autoridades públicas que establece esta Constitución, el ejercicio de sus funciones; y
- 3º Por delitos de alta traición.

En los dos primeros casos la pena no podrá ser otra que la de destitución, y, si hubiere cesado en el ejercicio de sus funciones el Presidente, la de inhabilitación para ejercer nuevamente la Presidencia.

Ningún acto del Presidente, excepto el de nombramiento o remoción de Ministros, tendrá valor ni fuerza alguna mientras no sea refrendado y comunicado por el Ministro del ramo respectivo, quien por el mismo hecho se constituye responsable.

Art. 123. El Senado concede licencia temporal al Presidente para dejar de ejercer el Poder Ejecutivo.

Por motivo de enfermedad el Presidente puede, por el tiempo necesario, dejar de ejercer el Poder Ejecutivo dando previo aviso al Senado, o, en receso de éste, a la Corte Suprema.

Art. 124. (19) Por falta accidental del Presidente de la República,

(19) Derogado expresamente por el artículo 6º del Acto Legislativo número 5 de 1905.

ejercerá el Poder Ejecutivo el Vicepresidente.

En caso de faltas absolutas del Presidente, lo reemplazará el Vicepresidente hasta la terminación del período en curso.

Son faltas absolutas únicas del Presidente, su muerte o su renuncia aceptada.

Art. 125 (20) Cuando las faltas del Presidente no pudieren, por cualquier motivo, ser llenadas por el Vicepresidente, ejercerá la Presidencia el Designado elegido por el Congreso para cada bienio.

Quando por cualquiera causa no hubiere hecho el Congreso elección de Designado, conservará el carácter de tal el anteriormente elegido.

A falta del Vicepresidente y del Designado, entrarán a ejercer el Poder Ejecutivo los Ministros y los Gobernadores, siguiendo éstos últimos el orden de proximidad de su residencia a la Capital de la República.

El Consejo de Estado señalará el orden en que deben entrar a ejercer la Presidencia los Ministros llegado el caso.

Art. 126. El encargado del Poder Ejecutivo tendrá la misma preeminencia y ejercerá las mismas atribuciones que el Presidente cuyas veces desempeña.

Art. 127. (21) El ciudadano que haya sido elegido Presidente de la República no podrá ser reelegido para el período inmediato, si hubiere ejercido la Presidencia dentro de los diez y ocho meses inmediatamente precedentes a la nueva elección.

El ciudadano que hubiere sido llamado a ejercer la Presidencia y la hubiere ejercido dentro de los seis últimos meses precedentes al día de la elección del nuevo Presidente, tampoco podrá ser elegido para este empleo.

(20) Derogado expresamente por el artículo 6º del Acto Legislativo número 5 de 1905.

(21) Reformado virtualmente por el Acto Legislativo número 5 de 1905.

Art. 128 (22) El Vicepresidente de la República será elegido al mismo tiempo por los mismos electores y para el mismo periodo que el Presidente.

Art. 129 (22) Para ser elegido Vicepresidente se requieren las mismas calidades que para Presidente.

Art. 130.(22) Corresponde al Vicepresidente presidir el Consejo de Estado y ejercer las demás funciones que le atribuya la ley.

Art. 131 (23) Si ocurriere falta absoluta del Vicepresidente, quedará vacante el puesto hasta el fin del periodo constitucional.

TÍTULO XII

DE LOS MINISTROS DEL DESPACHO

Sumario.- Departamentos administrativos.- Calidades para ser Ministro.- Funciones que ejercen.- Facultades delegadas que tienen.

Art. 132. El número, nomenclatura y precedencia de los distintos Ministerios o Departamentos administrativos, serán determinados por la ley.

La distribución de los negocios, según sus afinidades, corresponde al Presidente de la República.

Art. 133. Para ser Ministro se requieren las mismas calidades que para ser Representante.

(22) Derogados expresamente por el artículo 6º del Ato Legislativo número 5 de 1905.

(23) Derogado expresamente por el artículo 6º del Ato Legislativo número 5 de 1905.

Art. 134. Los Ministros son órgano de comunicación del Gobierno con el Congreso; presentan a las Cámaras proyectos de ley, toman parte en los ~~trabajos~~ y aconsejan al Presidente la sanción u objeción de los actos legislativos.

Cada Ministro presentará al Congreso, dentro de los primeros quince días de cada Legislatura, un informe sobre el estado de los negocios adscritos a su Departamento y sobre las reformas que la experiencia aconseje que se introduzcan.

Las Cámaras pueden requerir la asistencia de los Ministros.

Art. 135. Los Ministros, como Jefes superiores de Administración, pueden ejercer en ciertos casos la autoridad presidencial, según lo disponga el Presidente. Bajo su propia responsabilidad anulan, reforman o suspenden las providencias de los agentes inferiores.

TÍTULO XIII (24)

DEL CONSEJO DE ESTADO

Sumario.— Composición del Consejo de Estado.— División del Consejo en secciones.— Suplentes.— Atribuciones del Consejo.

Art. 136. El Consejo de Estado se compondrá de siete individuos, a saber: El Vicepresidente de la República, que lo preside, y seis vocales nombrados con arreglo a esta Constitución.

Los Ministros del Despacho tienen voz y no voto en el Consejo.

Art. 137. El cargo de Consejero es incompatible con cualquier otro efectivo.

Art. 138. Los Consejeros de Estado durarán cuatro años, y se renovarán por mitad cada dos.

(24) Derogado expresamente este Título por el Acto Legislativo número 10 de 1906.

Art. 139. Para el despacho de los negocios de su competencia se dividirá el Consejo en las secciones que la ley o su propio reglamento establezcan.

Art. 140. La ley determinará el número de suplentes que deban tener los Consejeros y las reglas relativas a su nombramiento, servicio y responsabilidad.

Art. 141. Son atribuciones del Consejo de Estado:

- 1º Actuar como Cuerpo supremo consultivo del Gobierno, en asuntos de administración, debiendo ser necesariamente oído en todos aquellos que determinen la Constitución y las leyes. Los dictámenes del Consejo no son obligatorios para el Gobierno, excepto cuando vote la conmutación de la pena de muerte.
- 2º Preparar los proyectos de ley y Códigos que deban presentarse a las Cámaras, y proponer las reformas que juzgue convenientes en todos los ramos de la legislación.
- 3º Decidir, sin ulterior recurso, las cuestiones contencio-administrativas, si la ley estableciere esta jurisdicción, ya deba conocer de ellas en primera y única instancia, o ya en grado de apelación.
En este caso el Consejo tendrá una sección de lo contencio-administrativo con un Fiscal, que serán creados por la ley.
- 4º Llevar un registro formal de sus dictámenes y resoluciones, y pasar copia exacta de él, por conducto del Gobierno, al Congreso en los primeros quince días de sesiones ordinarias, exceptuando lo relativo a negocios reservados mientras haya necesidad de tal reserva.
- 5º Darse su propio reglamento con la obligación de tener en cada mes cuantas sesiones sean necesarias para el despacho de los asuntos que son de su incumbencia.

Y las demás que les señalen las leyes.

TÍTULO XIV

DEL MINISTERIO PÚBLICO

Sumario.- Atribuciones del Ministerio Público.- Del Procurador general.-
Su duración.- Sus funciones.

Art. 142. El Ministerio Público será ejercido, bajo la suprema dirección del Gobierno, por un Procurador general de la Nación, por los Fiscales de los Tribunales Superiores de Distrito y por los demás funcionarios que designe la ley.

La Cámara de Representantes ejerce determinadas funciones fiscales.

Art. 143. Corresponde a los funcionarios del Ministerio Público defender los intereses de la Nación, promover la ejecución de las leyes, sentencias judiciales y disposiciones administrativas, supervigilar la conducta oficial de los empleados públicos, y perseguir los delitos y contravenciones que turben el orden social.

Art. 144. El período de duración del Procurador general de la Nación será de tres años.

Art. 145. Son funciones especiales del Procurador general de la Nación:

- 1º Cuidar de que todos los funcionarios públicos al servicio de la Nación desempeñen cumplidamente sus deberes.
- 2º Acusar ante la Corte Suprema a los funcionarios cuyo juzgamiento corresponda a esta corporación.
- 3º Cuidar de que los demás funcionarios del Ministerio Público desempeñen fielmente su encargo, y promover que se les exija la responsabilidad por las faltas que cometan.
- 4º Nombrar y remover libremente a los empleados de su inmediata dependencia.

Y las demás que le atribuya la ley.

TÍTULO XV

DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Sumario..- I. Corte Suprema de Justicia. Calidades para ser Magistrado de ella, y duración de los Magistrados. Atribuciones de la Corte Suprema.- II. Tribunales Superiores de Distrito. Calidades y duración de sus miembros.- III. Juzgados inferiores. Calidades para ser Juez. IV. Reglas generales.- V. Autorización para establecer el Jurado para causas criminales. Tribunales de Comercio, Contenciosoadministrativos.

Art. 146. La Corte Suprema se compondrá de siete Magistrados.

Art. 147 (25) El empleo de Magistrado de la Corte Suprema será vitalicio, a menos que ocurra el caso de destitución por mala conducta. La ley definirá los casos de mala conducta y los trámites y formalidades que deban observarse para declararlos por sentencia judicial.

El Magistrado que aceptare empleo del Gobierno, dejará vacante su puesto.

Art. 148. El Presidente de la Corte Suprema será elegido por la misma Corte cada cuatro años.

Art. 149. Habrá siete suplentes que llenarán las faltas temporales de los Magistrados principales de la Corte. Cuando ocurra falta absoluta de alguno, por muerte, renuncia aceptada, vacante constitucional o destitución judicial, se procederá a nuevo nombramiento.

Art. 150. Para ser Magistrado de la Corte Suprema se requiere ser colombiano de nacimiento y en ejercicio de la ciudadanía, haber cumplido treinta y cinco años de edad y haber sido Magistrado de alguno de los Tribunales Superiores de Distrito o de los antiguos Estados, o ha-

(25) Reformado por el artículo 1º del Acto Legislativo número 1º de 1905.

ber ejercido con buen crédito, por cinco años a lo menos, la profesión de abogado o el profesorado en Jurisprudencia en algún establecimiento público.

Art. 151. Son atribuciones de la Corte Suprema:

- 1º Conocer de los recursos de casación, conforme a las leyes.
- 2º Dirimir las competencias que se susciten entre dos o más Tribunales de Distrito.
- 3º Conocer de los negocios contenciosos en que tengan parte la Nación o que constituyan litigio entre dos o más Departamentos.
- 4º Decidir definitivamente sobre la exequibilidad de actos legislativos que hayan sido objetados por el Gobierno como inconstitucionales.
- 5º Decidir, de conformidad con las leyes, sobre la validez o nulidad de las ordenanzas departamentales que hubieren sido suspendidas por el Gobierno o denunciadas ante los Tribunales por los interesados como lesivas de derechos civiles.
- 6º Juzgar a los altos funcionarios nacionales que hubieren sido acusados ante el Senado, por el tanto de culpa que corresponda cuando haya lugar conforme al artículo 97.
- 7º Conocer de las causas que por motivos de responsabilidad, por infracción de la Constitución o leyes, o por mal desempeño de sus funciones, se promuevan contra los Agentes diplomáticos y Consulares de la República, los Gobernadores, los Magistrados de los Tribunales de Justicia, los Comandantes o Generales en Jefe de las fuerzas nacionales, y los Jefes superiores de las Oficinas principales de Hacienda de la Nación.
- 8º Conocer de todos los negocios contenciosos, de los Agentes diplomáticos acreditados ante el Gobierno de la Nación, en los casos previstos por el Derecho internacional.

9.º Conocer de las causas relativas a navegación marítima o de ríos navegables que bañen el territorio de la Nación.

Y las demás que le señalen las leyes.

Art. 152. La Corte nombra y remueve libremente sus empleados subalternos.

Art. 153. Para facilitar a los pueblos la pronta administración de justicia, se dividirá el Territorio nacional en Distritos Judiciales, y en cada Distrito habrá un Tribunal Superior, cuya composición y atribuciones determinará la ley.

Art. 154. Para ser Magistrado de los Tribunales Superiores se requiere ser ciudadano en ejercicio, tener treinta años de edad y haber, durante tres años por lo menos, desempeñado funciones judiciales o ejercido la abogacía con buen crédito, o enseñado Derecho en un establecimiento público.

Art. 155 (26) Son comunes a los Magistrados de los Tribunales Superiores las disposiciones del artículo 147. Dichos Magistrados serán responsables ante la Corte Suprema, en la forma que determine la ley, por el mal desempeño de sus funciones, y por las faltas que comprometan la dignidad de su puesto.

Art. 156. La ley organizará los Juzgados inferiores y determinará sus atribuciones y la duración de los Jueces.

Art. 157. Para ser Juez se requiere ser ciudadano en ejercicio, estar versado en la ciencia del Derecho y gozar de buena reputación.

La segunda de estas calidades no es indispensable respecto de los Jueces municipales.

Art. 158. La responsabilidad de los Jueces inferiores se hará efectiva ante el respectivo superior.

(26) Reformado por el artículo 1.º del Acto Legislativo número 1.º de 1906.

Art. 159. Los cargos del orden judicial no son acumulables; y son incompatibles con el ejercicio de cualquiera otro cargo retribuido, y con toda participación en el ejercicio de la abogacía.

Art. 160. Los Magistrados y los Jueces no podrán ser suspendidos en el ejercicio de sus destinos sino en los casos y con las formalidades que determinen las leyes, ni depuestos sino a virtud de sentencia judicial. Tampoco podrán ser trasladados a otros empleos sin dejar vacante su puesto.

No podrán suprimirse ni disminuirse los sueldos de los Magistrados y Jueces, de manera que la supresión o disminución perjudique a los que estén ejerciendo dichos empleos.

Art. 161. Toda sentencia deberá ser motivada.

Art. 162. La ley podrá instituir (~~jurados~~) jurados para causas criminales.

Art. 163. Podrán crearse Tribunales de comercio.

Art. 164. (27) La ley podrá establecer la jurisdicción contencioso-administrativa, instituyendo Tribunales para conocer de las cuestiones litigiosas ocasionadas por las providencias de las autoridades administrativas de los Departamentos, y atribuyendo al Consejo de Estado la resolución de las promovidas por los centros superiores de Administración.

TÍTULO XVI.

DE LA FUERZA PÚBLICA

Sumario.- Servicio militar.- Ejército permanente.- Pie de fuerza.- Obligaciones y derechos de los militares.- Tribunales marciales.- Milicia nacional.

Art. 165. Todos los colombianos están obligados a tomar las armas

(27) Reformado virtualmente por el artículo 1º del Acto Legislativo número 10 de 1905.

cuando las necesidades públicas lo exijan, para defender la independencia nacional y las instituciones patrias.

La ley determinará las condiciones que en todo tiempo eximen del servicio militar.

Art. 166. La Nación tendrá para su defensa un ejército permanente. La ley determinará el sistema de reemplazos del ejército, así como los ascensos, derechos y obligaciones de los militares.

Art. 167. Cuando no se fijare por la ley expresa el pie de fuerza, substituirá la base acordada por el Congreso para el precedente bienio.

Art. 168. La fuerza armada no es deliberante. No podrá reunirse sino por orden de la autoridad legítima, ni dirigir peticiones, sino sobre asuntos que se relacionen con el buen servicio y moralidad del ejército y con arreglo a las leyes de su instituto.

Art. 169. Los militares no pueden ser privados de sus grados, honores y pensiones, sino en los casos y del modo que determine la ley.

Art. 170. De los delitos cometidos por los militares en servicio activo y en relación con el mismo servicio, conocerán las Cortes marciales o Tribunales militares, con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar.

Art. 171. La ley podrá organizar y establecer una milicia nacional.

TÍTULO XVII

DE LAS ELECCIONES

Sumario.— Elección de Consejeros municipales y de Diputados Departamentales; de Electores y Representantes; de Presidente y Vicepresidente.— Reglas para la formación de las Asambleas.— División territorial para elección de Representantes.— Limitaciones del derecho electoral.— Jueces de escrutinio.

Art. 172. Todos los ciudadanos eligen directamente Consejeros muni-

cipales y Diputados a las Asambleas departamentales.

Art. 173. (28) Los ciudadanos que sepan leer y escribir, o tengan una renta anual de quinientos pesos, o propiedad inmueble de mil quinientos, votarán para Electores y elegirán directamente Representantes.

Art. 174. (29) Los Electores votarán para Presidente y Vicepresidente de la República.

Art. 175. (30) Los Senadores serán elegidos por las Asambleas departamentales; pero en ningún caso podrá recaer la elección en miembros de las mismas Asambleas que hayan pertenecido a éstas dentro del año en que se haga la elección.

Art. 176. (31) Habrá un Elector por cada mil individuos de población.

Habrá también un Elector por cada Distrito cuya población no alcance a mil almas.

Art. 177. (32) Las Asambleas electorales se renovarán para cada elección presidencial, y los individuos que fueren declarados miembros legítimos de tales Asambleas, no podrán ser separados del ejercicio de sus funciones sino por fallo judicial que determine pérdida o suspensión de los derechos de ciudadanía.

(28) Derogado expresamente por el artículo 5º del Acto Legislativo número 8 de 1905 y substituido por las disposiciones de los artículos 3º y 4º del mismo.

(29) Derogado expresamente por el artículo 5º del Acto Legislativo número 8 de 1905 y substituido por el artículo 3º del mismo.

(30) Derogado por el artículo 5º y substituido por el artículo 2º del Acto Legislativo número 8 de 1905.

(31) Derogado expresamente por el artículo 5º del Acto Legislativo número 8 de 1905.

(32) Derogado por el artículo 5º del Acto Legislativo número 8 de 1905

Art. 178. (33) Para las elecciones de Representantes cada Departamento se dividirá en tantos Distritos electorales cuantos les correspondan para que cada uno de éstos elija un Representante.

Compete a la ley, o, a falta de ésta, al Gobierno, hacer la demarcación a que se refiere el párrafo anterior.

Los Distritos municipales cuya población exceda de cincuenta mil almas formarán Distritos electorales y votarán por uno o más Representantes con arreglo a su población.

Las fracciones sobrantes de población que sumadas excedan de veinticinco mil habitantes, añadirán un Representante a los que por cada cincuenta mil elige el Departamento. La ley fijará las reglas de esta elección adicional.

Art. 179. El sufragio se ejerce como función constitucional. El que sufragar o elige no impone obligaciones al candidato, ni confiere mandato al funcionario electo.

Art. 180. Habrá Jueces de escrutinio, encargados de decidir, con el carácter de Jueces de derecho, las cuestiones que se susciten de validez o nulidad de las actas, de las elecciones mismas, o de determinados votos.

Estos Jueces son responsables por las decisiones que dicten, y serán nombrados en la forma y por el tiempo que determine la ley.

Art. 181. La ley determinará lo demás concerniente a elecciones y escrutinios, asegurando la independencia de unas y otras funciones; definirá los delitos que menoscaban la verdad y libertad del sufragio, y establecerá la competente sanción penal.

(33) Derogado expresamente por el artículo 5º del Acto Legislativo número 8 de 1906.

TÍTULO XVIII

DE LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL

Sumario.- I. División territorial de los Departamentos.- II. Asambleas departamentales. Su composición. Sus facultades. Bienes de los Departamentos. Presupuestos de Rentas y Gastos departamentales. Revisión de los actos de las Asambleas.- III. Gobernadores. Su duración. Sus atribuciones. Incompatibilidad.- IV. Cabildos y Alcaldes. Sus funciones.- V. Régimen excepcional del Departamento de Panamá.

Art. 182. Los Departamentos, para el servicio administrativo, se dividirán en provincias, y éstas en Distritos municipales.

Art. 183. Habrá en cada Departamento una Corporación administrativa denominada Asamblea departamental, compuesta de los Diputados que correspondan a la población, a razón de uno por cada doce mil habitantes. La ley podrá variar la anterior base numérica de Diputados.

Art. 184. Las Asambleas se reunirán ordinariamente cada dos años en la capital del Departamento.

Art. 185. (34) Corresponde a las Asambleas dirigir y fomentar, por medio de ordenanzas y con los recursos propios del Departamento, la instrucción primaria y la beneficencia, las industrias establecidas y la introducción de otras nuevas. la inmigración, la importación de capitales extranjeros, la colonización de tierras pertenecientes al Departamento, la apertura de caminos y de canales navegables, la construcción de vías férreas, la explotación de bosques de propiedad del Departamento, la canalización de ríos, lo relativo a la policía local, la fiscalización de las rentas y gastos de los Distritos y cuanto se refiera a los intereses seccionales y al adelantamiento interno.

(34) Substituido expresamente por el artículo 1º del Acto Legislativo número 7 de 1905.

Art. 186. Compete también a las Asambleas departamentales crear y suprimir Municipios, con arreglo a la base de población que determina la ley, y segregar y agregar términos municipales consultando los intereses locales. Si de un acto de agregación o segregación se quejare algún vecindario interesado en el asunto, la resolución definitiva corresponde al Congreso.

Art. 187. Las Asambleas departamentales, además de sus atribuciones propias, podrán ejercer otras funciones por autorización del Congreso.

Art. 188. Los bienes, derechos y valores y acciones que por leyes, o por decretos del Gobierno nacional o por cualquier otro título, pertenecieron a los extinguidos Estados soberanos se adjudican a los respectivos Departamentos y les pertenecerán mientras éstos tengan existencia legal.

Exceptuáanse los inmuebles que se especifican en el artículo 202.

Art. 189. Las Asambleas votarán cada dos años el Presupuesto de Rentas y Gastos del respectivo Departamento, y en él apropiarán las partidas necesarias para cubrir los gastos que les correspondan, conforme a la ley.

Art. 190. Las Asambleas departamentales, para cubrir los gastos de administración que les correspondan, podrán establecer contribuciones con las condiciones y dentro de los límites que fije la ley.

Art. 191. Las ordenanzas de las Asambleas son ejecutivas y obligatorias mientras no sean suspendidas por el Gobernador o por la autoridad judicial.

Art. 192. Los particulares agraviados por actos de las Asambleas, pueden recurrir al Tribunal competente; y éste, por pronta providencia, cuando se trate de evitar un grave perjuicio, podrá suspender el acto denunciado.

Art. 193. En cada Departamento habrá un Gobernador que ejercerá las funciones del Poder Ejecutivo, como agente de la Administración central por una parte, y por otra, como Jefe superior de la Administración

departamental.

Art. 194. Los Gobernadores serán nombrados para un período de tres años y pueden continuar en su puesto por nuevo nombramiento.

Art. 195. Son atribuciones del Gobernador:

- 1º Cumplir y hacer que se cumplan en el Departamento las órdenes del Gobierno.
- 2º Dirigir la acción administrativa en el Departamento, nombrando y separando sus agentes, reformando o revocando los actos de éstos y dictando las providencias necesarias en todos los ramos de la administración.
- 3º Llevar la voz del Departamento y representarlo en asuntos políticos y administrativos.
- 4º Auxiliar la justicia en los términos que determine la ley.
- 5º Ejercer el derecho de vigilancia y protección sobre las corporaciones oficiales y establecimientos públicos.
- 6º Sancionar, en los términos que determine la ley, las ordenanzas que expidan las Asambleas departamentales.
- 7º Suspender, de oficio o a petición de parte agraviada por resolución motivada, dentro del término de diez días después de su expedición, las ordenanzas de las Asambleas que no deban correr por razón de incompetencia, infracción de leyes o violación de derechos de tercero, y someter la suspensión decretada al Gobierno para que él la confirme o revoque.
- 8º Revisar los actos de las Municipalidades y los de los Alcaldes, suspender los primeros y revocar los segundos por medio de resoluciones razonadas y únicamente por motivos de incompetencia o ilegalidad.

Y las demás que por la ley le competan.

Art. 196. Los Gobernadores estarán sujetos a responsabilidad administrativa y judicial. Son amovibles por el Gobierno, y responsables ante la Corte Suprema por los delitos que cometieren en el ejercicio

de sus funciones.

Art. 197. El Gobernador podrá requerir el auxilio de la fuerza armada, y el Jefe militar obedecerá sus instrucciones, salvo las disposiciones especiales que diote el Gobierno.

Art. 198. En cada Distrito municipal habrá una Corporación popular que se designará con el nombre de Consejo municipal.

Art. 199. Corresponde a los Consejos municipales ordenar lo conveniente por medio de acuerdos o reglamentos interiores, para la administración del Distrito; votar, en conformidad con las ordenanzas expedidas por las asambleas, las contribuciones y gastos locales; llevar el movimiento anual de la población; formar el censo civil cuando lo determine la ley, y ~~ejecutar~~ las demás funciones que les sean señaladas.

Art. 200. La acción administrativa en el Distrito, corresponde al Alcalde, funcionario que tiene el doble carácter de Agente del Gobernador y mandatario del pueblo.

Art. 201. El Departamento de Panamá está sometido a la autoridad directa del Gobierno, y será administrado con arreglo a leyes especiales.

TÍTULO XIX

DE LA HACIENDA

Sumario.— Bienes y cargas de la Nación.— Reglas generales sobre contribuciones.— Otras sobre presupuestos y gastos.

Art. 202. Pertenecen a la República de Colombia:

- 1º Los bienes, rentas, fincas, valores, derechos y acciones que pertenecían a la Unión Colombiana en 15 de abril de 1886.
- 2º Los baldíos, minas y salinas que pertenecían a los Estados,

cuyo dominio recobra la Nación, sin perjuicio de los derechos constituidos a favor de terceros por dichos Estados, o a favor de éstos por la Nación a título de indemnización.

3º Las minas de oro, de plata, de platino y de piedras preciosas que existan en el territorio nacional, sin perjuicio de los derechos que por leyes anteriores hayan adquirido los descubridores y explotadores sobre algunas de ellas.

Art. 203. Son de cargo de la República las deudas exterior e interior, reconocidas ya, o que en lo sucesivo se reconozcan, y los gastos del servicio público nacional.

La ley determinará el orden y modo de satisfacer estas obligaciones.

Art. 204. (35) Ninguna contribución indirecta ni aumento de impuesto de esta clase empezará a cobrarse sino seis meses después de promulgada la ley que establezca la contribución o el aumento.

Art. 205. Ninguna variación en la tarifa de Aduana comenzará a ser ejecutada sino noventa días después de sancionada la ley que la establezca; y toda alza o baja en los derechos de importación se verificará por décimas partes en los diez meses subsiguientes.

Esta disposición y la del anterior artículo no limitan las facultades extraordinarias del Gobierno cuando de ellas esté revestido.

Art. 206. Cada Ministerio formará cada dos años el Presupuesto de gastos de su servicio, y lo pasará al del Tesoro, por el cual será redactado el general de la Nación, y sometido a la aprobación del Congreso, junto con el de rentas en que se propondrán los medios necesarios para cubrir las obligaciones.

Quando el Congreso no vote la ley de Presupuesto para el correspondiente bienio económico, continuará vigente el Presupuesto del bienio anterior.

(35) Berogado expresamente por el artículo único del Acto Legislativo número 4 de 1905.

Art. 207. No podrá hacerse ningún gasto público que no haya sido decretado por el Congreso, por las Asambleas departamentales, o las Municipalidades; ni transferirse ningún crédito a un objeto no previsto en el respectivo Presupuesto.

Art. 208. (36) Cuando haya necesidad de hacer un gasto imprescindible, a juicio del Gobierno, estando en receso las Cámaras, y no habiendo partida votada o siendo ésta insuficiente, podrá abrirse al respectivo Ministerio un crédito suplemental o extraordinario.

Estos créditos se abrirán por el Consejo de Ministros, instruyendo para ello expediente y previo dictamen del Consejo de Estado.

Corresponde al Congreso legalizar estos créditos.

El Gobierno puede solicitar del Congreso créditos adicionales al Presupuesto de Gastos.

TÍTULO XX

DE LA REFORMA DE ESTA CONSTITUCIÓN Y ABROGACIÓN DE LA ANTERIOR

Art. 209. (37) Esta Constitución podrá ser reformada por un acto legislativo, discutido primeramente y aprobado en tres debates, por el Congreso en la forma ordinaria, transmitido por el Gobierno, para su examen definitivo, a la Legislatura subsiguiente, y por ésta nuevamente debatido, y últimamente aprobado por dos tercios de los votos en ambas Cámaras.

Art. 210. La Constitución de 8 de mayo de 1863, que cesó de regir por razón de hechos consumados, queda abolida; e igualmente derogadas todas las disposiciones de carácter legislativo contrarias a la presente Constitución.

(36) Reformada virtualmente la parte segunda de este artículo por el artículo 1º del Acto Legislativo número 10 de 1905.

(37) Substituido expresamente por el Acto Legislativo número 9 de 1905.

TÍTULO XXI

(Adicional)

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo A. El primer periodo presidencial principiara el día 7 de agosto del presente año.

En la misma fecha comenzará el primer periodo constitucional del Vicepresidente de la República y del Designado.

El día 1º de septiembre comenzará el primer periodo constitucional de los Consejeros de Estado y del Procurador general de la Nación.

Los nuevos Magistrados de la Corte Suprema nacional tomarán posesión de sus empleos el día 1º de septiembre del año en curso.

Art. B. El primer Congreso constitucional se reunirá el día 20 de julio de 1888.

Art. C. Tan luego como sea sancionada la presente Constitución, el Consejo Nacional de Delegatarios asumirá funciones legislativas y las que por la misma Constitución corresponden al Congreso y separadamente al Senado y a la Cámara de Representantes. Entre estas funciones ejercerá inmediatamente la que le atribuye el artículo 77.

Art. D. Antes de la fecha en que debe reunirse el primer Congreso constitucional volverá a ejercer las funciones legislativas el Consejo Nacional Constituyente, cuando sea convocado a reunión extraordinaria por el Gobierno.

Art. E. La elección de miembros del Consejo de Estado que corresponde al Senado y a la Cámara de Representantes, se hará por el Consejo Nacional en dos actos distintos, y votándose en cada uno de ellos por dos individuos. El que en cada acto tuviere mayor número de votos será declarado Consejero con duración de cuatro años, y el que siga en votos, con duración de dos años. En cualquier caso de empate, decidirá la suerte.

Los dos Consejeros cuyo nombramiento corresponde al Gobierno, serán nombrados simultáneamente, y por sorteo se decidirá en seguida, ante el Consejo de Ministros, a quién corresponde la elección por cuatro años, y a quién por dos.

Art. F. Para dar cumplimiento a la atribución 2ª del Consejo de Estado, éste podrá agregar a cada una de sus secciones una o dos personas letradas. Estos Consejeros adjuntos cesarán en sus funciones el día 20 de julio de 1888.

Art. G. Las rentas y contribuciones que tenían establecidas por ley los extinguidos Estados de la Unión, serán las mismas de los respectivos Departamentos, mientras no se disponga otra cosa por el Poder Legislativo.

Exceptúense las rentas que por decretos del Poder Ejecutivo han sido destinadas últimamente al servicio de la Nación.

Art. H. Mientras el Poder Legislativo no disponga otra cosa, continuará rigiendo en cada Departamento la Legislación del respectivo Estado.

El Consejo Nacional Constituyente, una vez que asuma el carácter del Cuerpo Legislativo, se ocupará preferentemente en expedir una ley sobre adopción de Códigos y unificación de la legislación nacional.

Art. I. Las leyes de los extinguidos Estados que fueron denunciadas ante la Corte Suprema Federal y suspendidas por ~~aquella~~ ella, y aquellas sobre las cuales no recayó resolución unánime de la misma Corte, serán pasadas al Consejo de Delegatarios, para que él decida sobre su validez o nulidad definitivas.

Art. J. Si antes de la expedición de la ley a que se refiere el artículo H. hubieren de ser juzgados algunos individuos como responsables de alguno o algunos de los delitos de que trata el artículo 29, los Jueces aplicarán el Código del extinguido Estado de Cundinamarca, sancionado el 16 de octubre del año de 1858.

Art. K. Mientras no se expida la ley de imprenta, el Gobierno queda facultado para prevenir y reprimir los abusos de la prensa.

Art. L. Los actos de carácter legislativo expedidos por el Presidente de la República antes del día en que se sancione esta Constitución, continuarán en vigor, aunque sean contrarios a ella, mientras no sean expresamente derogados por el Cuerpo Legislativo o revocados por el Gobierno.

Art. M. El Presidente de la República nombrará libremente, la primera vez, los Magistrados de la Corte Suprema y de los Tribunales Superiores, y someterá los nombramientos a la aprobación del Consejo Nacional.

Art. N. Las faltas absolutas de los miembros del Consejo Nacional, desde que éste tome el carácter de Cuerpo Legislativo, se llenarán por designaciones hechas por los Gobernadores de los Departamentos.

Art. O. Esta Constitución empezará a regir, para los altos Poderes nacionales, desde el día en que sea sancionada; y para la Nación, treinta días después de su publicación en el Diario Oficial.

Dada en Bogotá, a 4 de agosto de 1886.

Juan de Dios Ulloa, Presidente del Consejo Nacional Constituyente, Delegatario por el Estado de Cauca.

José María Rubio Fradé, Vicepresidente del Consejo Nacional Constituyente, Delegatario por el Estado de Cundinamarca.

Simón de Herrera, Delegatario por el Estado de Antioquia.

José Domingo Ospina Camacho, Delegatario por el Estado de Antioquia.

José M. Samper, Delegatario por el Estado de Bolívar.

Juan Campo Serrano, Delegatario por el Estado de Bolívar.

Carlos Calderón Reyes, Delegatario por el Estado de Boyacá.

Francisco Mendoza Pérez, Delegatario por el Estado de Boyacá.

Rafael Reyes, Delegatario por el Estado de Cauca.
Jesús Casas Rojas, Delegatario por el Estado de Cundinamarca.
Luis M. Robles, Delegatario por el Estado de Magdalena.
Miguel Antonio Caro, Delegatario por el Estado de Panamá.
Felipe F. Paul, Delegatario por el Estado de Panamá.
Guillermo Quintero Calderón, Delegatario por el Estado de Santander.
Antonio Carreño R., Delegatario por el Estado de Santander.
Adolfo Molano, Delegatario por el Estado del Tolima.
Roberto Sarmiento, Delegatario por el Estado del Tolima.
Julio A. Corredor, Secretario.
Victor Mallarino, Secretario.

Poder Ejecutivo Nacional.- Bogotá, 5 de agosto de 1886.- Cum-
 plase y publíquese.- J. M. Campo Serrano.- El Secretario de Gobierno,
Aristides Calderón.- El Secretario de Relaciones Exteriores, Vicente
Restrepo.- El Secretario de Hacienda, Encargado del Despacho de Cue-
 rra, Antonio Roldán.- El Secretario del Tesoro, Jorge Holguín.- El Se-
 cretario de Instrucción Pública, Encargado del Despacho de Fomento, En-
rique Álvarez.

A P É N D I C E N Ú M E R O 4.

REFORMAS QUE HA EXPERIMENTADO LA VIGENTE CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.

ACTO GENERAL

ADICIONAL Y REFORMATARIO DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL

En el nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad, los Diputados a la Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa, por los Departamentos de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Mariño, Santander y Tolima.

Vistos el Decreto de carácter legislativo número 29 de 1905 (1º de febrero), por el cual se convoca a una Asamblea Nacional, y los diversos proyectos de actos reformativos de la Constitución Nacional presentados por el Gobierno Ejecutivo, durante las sesiones de la Asamblea Nacional y acordados por ésta.

Y con el fin de reunir en un sólo acto o instrumento oficial todos los actos parciales de reformas constitucionales, hemos venido en compilar y firmar dichas reformas en el presente

ACTO GENERAL ADICIONAL

Y REFORMATARIO DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL, ASÍ:

ACTO REFORMATARIO NÚMERO I DE 1905.

(27 de marzo)

Artículo 1º El Período de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia será de cinco años, y de cuatro el de los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial.

Art. 2º El primer período de los Magistrados de la Corte Suprema em-

pesará a correr el día 1^º de mayo del presente año, y el de los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito el 1^º de junio del mismo año.

Parágrafo. Dichos Magistrados podrán ser reelegidos indefinidamente.

Art. 3º (transitorio). El Presidente de la República nombrará libremente, la primera vez, los Magistrados de la Corte Suprema y de los Tribunales Superiores, y someterá el nombramiento de aquéllos a la aprobación del Senado.

ACTO REFORMATARIO NÚMERO 2 DE 1906

(28 de marzo)

Art. 1º En lo sucesivo las Cámaras Legislativas se reunirán ordinariamente, por derecho propio, cada dos años, el día 1º de febrero, en la capital de la República.

Art. 2º Las sesiones ordinarias durarán noventa días, pasados los cuales el Gobierno podrá declarar las Cámaras en receso.

Art. 3º Después de expedido este acto reformativo, el primer Congreso Constitucional se reunirá el 1º de febrero de 1908, fecha que será la inicial para las reuniones subsiguientes de dicho Cuerpo.

Art. 4º (transitorio). Mientras se reúne el primer Congreso de que habla el artículo anterior, la presente Asamblea Nacional continuará ejerciendo las funciones legislativas que por la Constitución corresponden, en sesiones extraordinarias, al Congreso y separadamente al Senado y a la Cámara de Representantes.

Art. 5º (transitorio). Antes de la fecha en que debe reunirse el primer Congreso Constitucional, volverá a ejercer las funciones legislativas la Asamblea Nacional, cuando sea convocada a sesiones extraordinarias por el Gobierno.

ACTO REFORMATARIO NUMERO 3 DE 1906

(30 de marzo)

Artículo 1º La ley podrá alterar la división territorial de toda la República, formando el número de Departamentos que estime conveniente para la administración pública.

Art. 2º Podrá también segregar Distritos municipales de los Departamentos existentes o de los que se formen, para organizarlos o administrarlos con arreglo a leyes especiales.

Art. 3º El Legislador determinará la población que corresponda a cada Departamento en la nueva división territorial; distribuirá entre ellos los bienes y cargas, y establecerá el número de Senadores y Representantes, así como la manera de elegirlos.

Art. 4º Quedan reformados los artículos 5º, 6º y 76 de la Constitución de la República.

ACTO REFORMATARIO NUMERO 4 DE 1906

(30 de marzo)

Artículo único. Derógase el artículo 204 de la Constitución.

ACTO REFORMATARIO NUMERO 5 DE 1906

(30 de marzo)

Artículo 1º Suprimense desde la expedición de este Acto los cargos de

Vicepresidente de la República y de Designado para ejercer el Poder Ejecutivo.

Artículo 2º En caso de falta temporal del Presidente de la República, lo reemplazará el Ministro que designe el Presidente, y a falta de Ministros en quienes recaiga esta designación, se encargará del Poder Ejecutivo el Gobernador del Departamento que se halle más próximo a la capital de la República.

Artículo 3º En caso de falta absoluta del Presidente, lo sustituirá el Ministro que designe el Consejo de Ministros, por mayoría absoluta de votos, y si faltaren los Ministros, el Gobernador de Departamento más cercano a la capital de la República.

- § 1º El encargado del Poder Ejecutivo procederá inmediatamente a convocar la Asamblea Nacional, y cuando haya terminado ésta su período, al Congreso para que dentro de los sesenta días siguientes a la convocatoria proceda a elegir al ciudadano que deba reemplazar al Presidente por lo que falte del período constitucional.
- § 2º Cuando falte un año o menos para terminar el período presidencial, el encargado del Poder Ejecutivo continuará ejerciéndolo y convocará a las elecciones ordinarias para Presidente, conforme a la Constitución.
- § 3º En caso de que por cualquier motivo faltare el Ministro que se haya encargado del Poder Ejecutivo, el Consejo de Ministros procederá a hacer nueva designación.
- § 4º El ciudadano que ejerciere provisionalmente la Presidencia en el caso determinado en el art. 3º de este acto reformativo, no podrá ser elegido por la Asamblea Nacional o por el Congreso no, en su caso, para el resto del período.

El ciudadano que hubiere ejercido la Presidencia dentro de los seis últimos meses anteriores al día de la elección del nuevo Presidente, tampoco podrá ser elegido para este empleo.

Artículo 4º Son faltas absolutas, únicas del Presidente de la República, su muerte o su renuncia aceptada.

Art. 5º El período presidencial en curso y solamente mientras esté a la cabeza del Gobierno el señor general Reyes, durará una década que se contará del 1º de enero de 1905 al 31 de diciembre de 1914.

ACTO REFORMATARIO NÚMERO 6 DE 1905

(5 de abril)

Artículo único. En tiempo de paz nadie podrá ser privado de su propiedad, en todo ni en parte, sino en los casos siguientes, con arreglo a leyes expresas:

Por contribución general.

Por motivos de utilidad pública, definidos por el legislador, previa indemnización, salvo el caso de la apertura y construcción de vías de comunicación, en el cual se supone que el beneficio que derivan los predios atravesados es equivalente al precio de la faja de terreno necesaria para la vía; pero si se comprobare que vale más dicha faja, la diferencia será pagada.

ACTO REFORMATARIO NÚMERO 7 DE 1905

(8 de abril)

Artículo 1º Corresponde a las Asambleas Departamentales dirigir y fomentar por medio de ordenanzas y con los recursos propios del Departamento, la instrucción primaria y la beneficencia, las industrias establecidas y la introducción de otras nuevas, la colonización de las tie-

rras baldías que existen en el Departamento, la apertura de caminos y canales navegables dentro del Departamento y la explotación de sus bosques; el arreglo de la policía local y cárceles de Circuito; la fiscalización de las rentas y gastos departamentales y municipales y en cuanto se refiere al adelantamiento interno.

Artículo 2º Por el presente acto reformativo queda substituido el artículo 185 de la Constitución.

ACTO REFORMATIVO NUMERO 8 DE 1906

(13 de abril)

Artículo 1º El Senado se renovará al mismo tiempo que la Cámara de Representantes, y el periodo de los Senadores será igual al de los Representantes.

Art. 2º Los Senadores serán elegidos por los Consejos departamentales, según lo determine la ley.

Art. 3º El Presidente de la República y los Representantes serán elegidos en la forma que la ley determine.

Art. 4º En toda elección popular que tenga por objeto constituir corporaciones públicas y en el nombramiento de Senadores, se reconoce el derecho de representación de las minorías, y la ley determinará la manera y términos de llevarlo a efecto.

Art. 5º Quedan derogados los artículos 95, 114, 173, 174, 175, 176, 177 y 178 de la Constitución.

ACTO REFORMATARIO NUMERO 9 DE 1905

(17 abril-----)

Artículo 1º La Constitución de la República podrá ser reformada por una Asamblea Nacional convocada expresamente para este objeto por el Congreso, o por el Gobierno Ejecutivo previa solicitud de la mayoría de las Municipalidades.

Parágrafo. En la ley o decreto sobre convocatoria de la Asamblea Nacional de que trata este artículo, se señalarán los puntos de reforma y a ellos se concretará la labor de dicha Corporación.

Art. 2º La Asamblea de que trata el artículo anterior se compondrá de tantos Diputados cuantos correspondan a la población, a razón de un Diputado por cada cien mil habitantes.

Parágrafo. Cada Diputado tendrá dos suplentes.

Art. 3º Los Diputados principales y suplentes serán elegidos por las Municipalidades de la respectiva Circunscripción electoral.

Art. 4º Para que la reforma se verifique basta que sea discutida y aprobada conforme a lo establecido para la expedición de las leyes.

Art. 5º Las sesiones de la Asamblea durarán treinta días prerrogables a juicio del Gobierno.

Art. 6º Cuando llegue el caso de reunirse una Asamblea Nacional para reformar la Constitución, cesará el período constitucional del Congreso que haya sido elegido antes, y ejercerá las funciones legislativas de éste la Asamblea Nacional desde la fecha de instalación hasta el fin del período constitucional del Congreso sustituido.

Art. 7º En la elección de Diputados a la Asamblea Nacional regirán las disposiciones legales prescriptas para que tengan representación las minorías.

Art. 8º Si en el tiempo transcurrido desde la clausura de esta Asam-

bles hasta la próxima reunión ordinaria del Congreso en mil novecientos ocho, fuere necesario introducir nuevas reformas a la Constitución de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley, la presente Asamblea será convocada por el Poder Ejecutivo para hacer tales reformas, sin necesidad de que haya previa solicitud de las Municipalidades.

ACTO REFORMATARIO NUMERO 10 DE 1905.

(27 de abril)

reformatorio de la Constitución, por el cual se deroga el Título XIII de la misma.

Art. 1º. Suprímase el Consejo de Estado. La ley determinará los empleados que deban cumplir los deberes o funciones señalados a esta Corporación.

Art. 2º. Queda derogado el Título XIII de la Constitución nacional.

Art. 3º. Esta ley empezará a regir desde su publicación en el "Diario Oficial".

Bogotá, Abril 30 de 1905.

El Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa,
Diputado por el Departamento de Tolima,

HENRIQUE RESTREPO GARCIA.

El Primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa, Diputado por el Departamento de Santander,

BENJAMIN HERRERA.

El Segundo Vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente y

legislativa, Diputado por el Departamento de Bolívar,

F. ÁNGULO.

~~El Departamento por el Diputado por el Departamento de Antioquia, Rufino Gutiérrez.~~
 El Diputado por el Departamento de Antioquia, Baldomero Sanín Cano.
 El Diputado por el Departamento de Antioquia, Daniel Gutiérrez y Arango.
 El Diputado por el Departamento de Bolívar, F. de P. Manotas.
 El Diputado por el Departamento de Bolívar, Dionisio Jiménez.
 El Diputado por el Departamento de Boyacá, Salvador Franco.
 El Diputado por el Departamento de Boyacá, Ignacio R. Piñeros.
 El Diputado por el Departamento del Cauca, Fernando Angulo.
 El Diputado por el Departamento del Cauca, J. M. Juliana Wallis.
 El Diputado por el Departamento del Cauca, Manuel Carvajal V.
 El Diputado por el Departamento de Cundinamarca, Luis Martínez Silva.
 El Diputado por el Departamento de Cundinamarca, Juan E. Manrique.
 El Diputado por el Departamento de Cundinamarca, Gerardo Pulcino.
 El Diputado por el Departamento del Magdalena, J. F. Insignares S.
 El Diputado por el Departamento del Magdalena, José ~~Sanabria~~ ~~Enesco~~ Coronado.
 El Diputado por el Departamento del Magdalena, Severo F. Ceballos P.
 El Diputado por el Departamento de Mariño, Samuel Jorge Delgado.
 El Diputado por el Departamento de Mariño, Bernardo de la Espriella.
 El Diputado por el Departamento de Mariño, Luciano Herrera.
 El Diputado por el Departamento de Santander, Luis Cuervo Márquez.
 El Diputado por el Departamento de Santander, L. F. Uribe Toledo.
 El Diputado por el Departamento del Tolima, Rafael Camacho L.
 El Diputado por el Departamento del Tolima, Maximiliano Neira.
 El Secretario, Luis Felipe Angulo.
 El Secretario, Rafael Espinosa Guzmán.
 El Secretario, Daniel Rubio Paris.

 Poder Ejecutivo Nacional.- Bogotá, Abril 30 de 1905.

Cumplase y ejecutase.- R. RENEZ.

El Ministro de Gobierno.- Bonifacio Vélez.

El Ministro de Relaciones Exteriores, Elímaco Calderón.

El Ministro de Hacienda y Tesoro, Pedro Antonio Molina.
El Ministro de Guerra, D. A. de Castro.
El Ministro de Instrucción Pública, Carlos Cuervo Márquez.
El Ministro de Obras Públicas, Modesto Garcés.

ACTO GENERAL

que adiciona y reforma la Constitución Nacional.

(15 de junio de 1907)

En el nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad,

Los Diputados a la Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa por los Departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Cauca, ~~Valle~~ ^{Quindío}, Cundinamarca, ~~Quindío~~ ^{Quindío}, Huila, Magdalena, Mariño, Santander, ~~Quindío~~ ^{Quindío}

Tolima, Tundama y el Distrito Capital;

Vistos los artículos 1° y 8° del Acto Reformatorio n° 9 de 1905 y el Decreto de carácter legislativo 240 del año en curso "por el cual se convoca a sesiones extraordinarias la Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa."

Y con el objeto de reunir en ~~un~~ ^{un} solo acton o instrumento oficial todos los actos parciales de reformas constitucionales, hemos venido en compilar y firmar dichas reformas en el presente.

ACTO GENERAL QUE ADICIONA Y REFORMA LA

CONSTITUCION NACIONAL.

ACTO LEGISLATIVO NUMERO -I-

(15 de Abril de 1907)

por ~~lo~~ ^{el} cual se sustituye el Acto Legislativo número 2 de 1905.

Art. 1° En lo sucesivo las Cámaras Legislativas se reunirán por derecho propio cada dos años, el día 1° de Febrero, en la capital de la República.

Art. 2° Las sesiones ordinarias durarán noventa días, pasados los cuales el Gobierno podrá declarar las Cámaras en receso.

Art. 3° La fecha inicial para la reunión del primer Congreso Constitucional será el 1° de Febrero de 1910, sin perjuicio de que el Poder Ejecutivo pueda anticiparla, o la Asamblea por medio de una ley- retardarla, si así lo exigen las conveniencias públicas.

Parágrafo. El Decreto que convoca a elecciones para miembros del Congreso lo expedirá el Gobierno con la anticipación debida, para que las Cámaras puedan reunirse en la fecha señalada en el artículo 1°.

Art. 4° (Transitorio) Mientras se reúne el primer Congreso de que habla el artículo anterior, la Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa continuará ejerciendo las funciones legislativas que por la Constitución corresponden en sesiones extraordinarias al Congreso y separadamente al Senado y a la Cámara de Representantes, y las de Constituyente que señala el artículo 8° del Acto reformativo número 9 de 1905.

Parágrafo. El Poder Ejecutivo podrá convocar la Asamblea a sesiones extraordinarias cada vez que lo estime conveniente.

Art. 5° En los términos del presente queda sustituido el Acto Legislativo número 2 de 1905 y el artículo 68 de la Constitución.

Dado en Bogotá, a trece de Abril de mil novecientos siete.

ACTO LEGISLATIVO NUMERO 2 DE 1907.

(27 de abril)

por el cual se sustiyan los artículos 183, 184, y 189 de la Constitución.

Art. 1° Habrá en cada Departamento una Corporación llamada Consejo Administrativo del Departamento, compuesto del número de Consejeros que señale la ley.

Art. 2° Los Consejeros Departamentales serán elegidos por las Municipalidades en la forma que determine la ley.

Art. 3° Los Consejos administrativos departamentales se reuni-

rán ordinariamente cada año en la capital del Departamento, y extraordinariamente cuando el Gobernador, autorizado por el Gobierno, los convoque.

Art. 4° Los Consejeros administrativos departamentales ~~se~~ ~~ejercerán~~ las funciones atribuidas a las Asambleas por los artículos 175, 186, 187 y 190 de la Constitución y el acto reformativo número 7 de 1905.

Parágrafo. Las disposiciones de los artículos 191 y 192 de la Constitución son aplicables a los Acuerdos que dicten los expresados Consejos.

Art. 5° La ley fijará el periodo de duración de los Consejeros Departamentales.

Art. 6° Los Consejeros administrativos Departamentales votarán anualmente los presupuestos de rentas y Gastos del respectivo departamento, y apropiarán las partidas necesarias para cubrir los gastos que les correspondan conforme a la ley.

Art. 7° Por el presente acto quedan sustituidos los artículos 183, 184 y 189 de la Constitución.

Dado en Bogotá, a veintiseis de abril de mil novecientos siete. El Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, y Legislativa, Diputado por el Departamento de Santander, Luis Cuervo Márquez.- El primer Vicepresidente, Diputado por el Departamento del Atlántico, Rogelio García H.- El Segundo Vicepresidente, Diputado por el Distrito Capital, Jorge Vélez.-

Los Diputados por el Departamento de Antioquia, B. Maná Cano, Rufino Gutiérrez, Víctor M. Salazar.- Los Diputados por el Departamento del Atlántico, Jorge N. Abello, Emiliano de J. Gálvez.- Los Diputados por el Departamento de Bolívar, Dionisio Jiménez, Eduardo B. Gerlein, Antonio R. Blanco.- Los Diputados por el Departamento de Boyacá, Ignacio R. Piñeros, Pablo García Medina, Salvador Franco.- Los Diputados por el Departamento

de Caldas, Marcelino Arango, A. J. Restrepo, Antonio Gómez G.- Los Diputados por el Departamento del Cauca, Manuel Carvajal V., Fernando Angulo, Evaristo García.- Los Diputados por el Departamento de Cundinamarca, Eugenio Umaña, Gerardo Pulcino, Juan E. Manrique.- Los Diputados por el Departamento de Galán, Antonio María Rueda G., Luis F. Torres H., Rafael Antonio Ordaz.- Los Diputados por el Departamento del Huila, Celso Noé Quintero, Celisano Dussan Q.- Los Diputados por el Departamento del Magdalena, José Gnecco Coronado, José Gnecco Laborde, Teodosio Goenaga.- Los Diputados por el Departamento de Mariño, Luciano Herrera, Venancio Rueda, Zenón Reyes.- Los Diputados por el Departamento de Santander, L. F. Urbab Toledo, José María Ruiz, Aurelio Mutis.- Los Diputados por el Departamento de Quesada, Carlos Tavera Mayas, José María Pinto V., B. Aldama.- Los Diputados por el Departamento del Tolima, Fabio Lozano T., Justo Vargas, Maximiliano Neira.- Los Diputados por el Departamento de Tundama, Santiago Camargo, Octavio Torres Peña, F. Calderón R.- Los Diputados por el Distrito Capital, F. d. P. Matéus, Nemesio Camacho.- El Secretario Gerardo Arrubla.- El Secretario, Aurelio Rueda A.

Poder Ejecutivo-Bogotá, Abril 27 de 1907.

Publiquese y ejecútese.
(L. S.)

E. REYES.

El Ministro de Gobierno,

D. Euclides de Angulo.

A C T O G E N E R A L

ADICIONAL Y REFORMATARIO DE LA CONSTITUCIONAL NACIONAL.

En el nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad,

Los Diputados a la Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa por los Departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Galán, Huila, Magdalena, Mariño, Santander, Quindío, Tolima, Tundama y el Distrito Capital;

Vistos el Decreto de carácter legislativo número 440 de 1908 (14 de Abril), por el cual se convoca a sesiones extraordinarias a la Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa, cuanto los diversos proyectos de actos reformativos de la Constitución Nacional presentados por el Gobierno Ejecutivo durante las sesiones de la Asamblea Nacional, y por ésta acordados;

Y con el fin de reunir en un sólo y acto o instrumento oficial todos los actos parciales de reformas constitucionales, hemos venido en compilar y firmar dichas reformas en el presente Acto general adicional y reformativo de la Constitución Nacional, así:

ACTO LEGISLATIVO NÚMERO 1º DE 1908.

(6 de Agosto)

por el cual se sustituyen los art.ºs 93, 99 y 178 de la Constitución y el 2º del Acto Legislativo número 8 de 1905.

Art. 1º. El Senado se compondrá de tantos miembros cuantos Senadores correspondan a los Departamentos, a razón de uno por cada Departamento.

Por cada Senador se elegirán dos suplentes.

Art. 2º. Habrá en cada Departamento una Corporación Electoral, que se denominará Consejo Electoral Departamental, elegido por los Consejos Muni-

cipales.

Art. 3°. La reunión de tres Consejos Electorales de Departamentos contiguos forman el Colegio Electoral.

Art. 4°. Los Senadores serán elegidos por los Colegios Electorales de los Departamentos.

Parágrafo. Cada Colegio Electoral elegirá tres Senadores y sus respectivos suplentes.

Art. 5°. Formará también Colegio el Consejo o Consejos Electorales del Departamento o Departamentos que, después de formadas las agrupaciones respectivas, no alcansaren a componer un grupo de tres Consejos Electorales.

Parágrafo. El Colegio así formado elegirá el Senador o Senadores y suplentes que correspondan a tales Departamentos, a razón de uno por cada Departamento.

Art. 6°. La Cámara de Representantes se compondrá de tantos individuos cuantos correspondan a la población de la República, a razón de uno por cada ochenta mil habitantes.

Por cada Representante se elegirán dos suplentes.

Art. 7°. Para las elecciones de Representantes la República se dividirá en tantos Distritos Electorales cuantos les correspondan, para que cada uno de éstos elija un Representante.

Compete a la ley, o a falta de ésta al Gobierno, hacer la demarcación a que se refiere el parágrafo anterior.

Los Distritos Municipales cuya ~~superficie~~ ^{población} exceda de ochenta mil almas formarán Distritos Electorales y votarán por uno o más Representantes con arreglo a su población.

Las fracciones sobrantes de población en los Distritos Electorales que se hallen en el caso previsto en el párrafo anterior, o en el cómputo general de la República, que excedan de treinta mil almas, elegirán cada una un Representante.

Art. 8°. La ley puede autorizar la formación de Circunscripciones electorales compuestas de tres Distritos Electorales, para que cada uno de ellos elija los que les correspondan.

Los Distritos Municipales que se hallen en el caso del artículo anterior no podrán hacer parte de estas Circunscripciones.

Art. 9º La ley reglamentará las disposiciones del presente Acto Legislativo.

Art. 10. Deróganse los artículos 98, 99 y 178 de la Constitución y el 2º del Acto Legislativo número 8 de 1905.

ACTO LEGISLATIVO NUMERO 2 DE 1908
(12 de Agosto.)

por el cual se sustituye el Título XVIII de la Constitución Nacional y se derogan los Actos Legislativos números 7 de 1905 y 2 de 1907.

Art. 1º. Los Departamentos en que se divide la República se subdividirán a su vez para el servicio administrativo en Distritos Municipales.

Art. 2º. En cada Departamento habrá un Gobernador de libre nombramiento y remoción del Poder Ejecutivo Nacional, del cual será Agente inmediato

Parágrafo. La ley señalará las atribuciones de los Gobernadores y su período de duración.

Art. 3º. En cada Distrito habrá una Corporación popular que se denominará Consejo Municipal, elegida por el voto directo y secreto de los ciudadanos vecinos del mismo Distrito.

Art. 4º. Corresponde a los Consejos Municipales ordenar lo conveniente por medio de acuerdos o reglamentos interiores, para la administración del Distrito; votar, en conformidad con la ley, las contribuciones y gastos locales, y ejercer las demás funciones que les sean señaladas por las leyes.

Art. 5º. La acción administrativa en el Distrito corresponde al Alcalde, funcionario que tiene el carácter de Agente del Ejecutivo y manda-

tario del pueblo.

Art. 6°. Derógase el XVIII de la Constitución y los Actos Legislativos números 7 de 1905 y 2 de 1907.

ACTO LEGISLATIVO NUMERO 3 DE 1908.

(14 de agosto)

por el cual se sustituye el artículo 1° del Acto Legislativo número 1° de 1907.

Artículo único. En lo sucesivo las Cámaras Legislativas se reunirán, por derecho propio, cada año, el día 1° de febrero, en la Capital de la República.

Parágrafo. Derógase el artículo 1° del Acto Legislativo número 1° de 1907.

Bogotá, Agosto 22 de 1908.

El Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa, Diputado por el Departamento del Cauca, Alfredo Vasquez Cobos.- El Primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa, Diputado por el Departamento de Antioquia, Carlos de la Cuesta.- El Segundo Vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa, Diputado por el Departamento del Magdalena, Juan Manuel Iguarán.

El Diputado por el Departamento de Antioquia, Rufino Gutierrez. El Diputado por el Departamento de Antioquia, Victor M. Salazar. El Diputado por el Departamento del Atlántico, F. de P. Mancías. El Diputado por el Departamento del Atlántico, Rogelio García H. El Diputado por el Departamento del Atlántico, Emiliano de J. Gálvez.- El Diputado por el Departamento de Bolívar, Dionisio Jiménez. El Diputado por el Departamento de Bolívar, Antonio R. Blanco. El Diputado por el Departamento de Bolívar, Jerónimo Martínez.- El Diputado por el Departamento de Boyacá, Salvador Franco.

El Diputado por el Departamento de Boyacá, Pablo García Medina. El Diputado por el Departamento de Boyacá, Ignacio R. Pifleros.- El Diputado por el Departamento de Caldas, Juan De D. Gutiérrez. El Diputado por el Departamento de Caldas, A. J. Restrepo. El Diputado por el Departamento de Caldas, Isaias Ramírez.- El Diputado por el Departamento del Cauca, Roberto Becerra Delgado. El Diputado por el Departamento del Cauca, J. E. Quijano Wallis.- El Diputado por el Departamento de Cundinamarca, Gerardo Palecio.- El Diputado por el Departamento de Cundinamarca, Alejandro Herrera R. El Diputado por el Departamento de Cundinamarca, A. Dulcey.- El Diputado por el Departamento de Galán, Rafael Antonio Ordaz. El Diputado por el Departamento de Galán, Luis F. Torres E. El Diputado por el Departamento de Galán, Carlos Tirado Macías.- El Diputado por el Departamento del Huila, Daniel E. Pardo. El Diputado por el Departamento del Huila, Celiano Dussán. El Diputado por el Departamento del Huila, Celso Noé Quintero.- El Diputado por el Departamento del Magdalena, José Manuel Goenaga.- El Diputado por el Departamento del Magdalena, José Gnesco Coronado. El Diputado por el Departamento de Nariño, Zenón Reyes. El Diputado por el Departamento de Nariño, Juan B. Pombo. El Diputado por el Departamento de Nariño, Venancio Rueda. El Diputado por el Departamento de Santander, Luis Cuervo Márquez. El Diputado por el Departamento de Santander Francisco Sorsano. El Diputado por el Departamento de Santander, Benito Hernández.- El Diputado por el Departamento de Quesada, Carlos Tavera Navas. El Diputado por el Departamento de Quesada, José M. Pinto V. El Diputado por el Departamento de Quesada, Daniel Aldana.- El Diputado por el Departamento del Tolima, Justo Vargas. El Diputado por el Departamento del Tolima, Fabio Lozano T. El Diputado del Departamento del Tolima, Maximiliano Neira.- El Diputado por el Departamento de Tundama, F. Calderón Rojas. El Diputado por el Departamento de Tundama, Francisco Montano. El Diputado por el Departamento de Tundama, Santiago Camargo.- El Diputado por el Distrito Capital, Julio Silva Silva. El Diputado por el Distrito Capital, Jorge Velez. El Diputado por el Distrito Capital, F. De P. Matéus.- El Secretario Gerardo

Arrubla.-- El Secretario, Fernando E. Baena.

Poder Ejecutivo Nacional - Bogotá, 22 de agosto de 1908.

Cumplase y Ejecútase.

(L. S.)

R. REYES.

El Ministro de Gobierno,

M. Vargas.

El Ministro de Relaciones Exteriores, Francisco José Urrutia.

El Subsecretario encargado del Ministerio de Hacienda y Tesoro, B. Sain Canó.

El Ministro de Guerra, V. Calderón Reyes.

El Ministro de Instrucción Pública, Emiliano Isaza.

El Ministro de Obras Públicas y Fomento, Nemesio Canache.

A C T O G E N E R A L
adecional y reformatorio de la Constitución Nacional.
 (Abril 14 de 1909)

En el nombre de Dios fuente suprema de toda autoridad,

Los Diputados a la Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa por los Departamentos de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Galán, Huila, Magdalena, Narinó, Santander, Quisno, Tolima, Tundana y Distrito Capital;

Vistos el Decreto de carácter legislativo número 143 de 1909 (10 de febrero), por el cual se convoca a sesiones extraordinarias a la Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa, cuanto los diversos proyectos de actos reformativos de la Constitución Nacional presentados por el Gobierno Ejecutivo durante las sesiones de la Asamblea Nacional, y por esta acorados;

Y con el fin de reunir en un solo acto o instrumento oficial todos los actos parciales de reformas constitucionales, hemos venido en compilar y firmar dichas reformas en el presente acto adicional y reformativo de la Constitución Nacional, así:

ACTO LEGISLATIVO NÚMERO 1º DE 1909
 (29 de marzo)

por el cual se crean los Consejos Administrativos Departamentales

Art. 1º Habrá en cada Departamento una Corporación llamada Consejo Administrativo Departamental, compuesta del número de Consejeros que señale la ley.

Art. 2º Los Consejos Departamentales serán elegidos por las Municipalidades en la forma que determine la ley.

Art. 3º Los Consejos Administrativos Departamentales se reunirán ordinariamente cada año en la capital del respectivo Departamento, y extraordinariamente cuando el Gobernador autorizado por el Gobierno, los convoque.

Art. 4º Los Consejos Administrativos Departamentales ejercerán las funciones atribuidas a las Asambleas por los artículos 175, 181, 187 y 190

de la Constitución, y por el Ato Reformativo número 7 de 1905.

Parágrafo. Las disposiciones de los artículos 191 y 192 de la Constitución son aplicables a los acuerdos que dicten los expresados Consejos.

Art. 5°. La ley fijará el período de duración de los Consejos Departamentales.

Art. 6°. Los Consejos Administrativos Departamentales votarán anualmente los Presupuestos de Rentas y Gastos del respectivo Departamento y apropiarán las partidas necesarias para cubrir los gastos que les correspondan conforme a la ley.

Art. 7°. Por el presente Ato queda substituidos los artículos 183, 184 y 189 de la Constitución.

Art. 8°. La ley podrá atribuirles a los Consejos Departamentales otras funciones además de las que se les confieren por el presente Ato Legislativo.

 ACTO LEGISLATIVO NÚMERO 2 DE 1909.

(31 de marzo)

por el cual se substituyen los artículos 108 y 109 de la Constitución.

Art. 1° El Presidente de la República, los Ministros del Despacho, los Magistrados de la Corte Suprema, el Procurador General de la Nación y los Gobernadores no podrán ser elegidos miembros del Congreso sino seis meses después de haber cesado en el ejercicio de sus funciones.

Tampoco podrá ser Senador o Representante ningún ciudadano por Departamento, Circunscripción o Provincia Electoral, donde tres meses antes de las elecciones haya ejercido jurisdicción o autoridad civil, política o militar.

El desempeño de cualquiera de los cargos expresados por un término que no exceda de cinco días dentro de los períodos mencionados no inhabilita a dichos funcionarios para que puedan ser elegidos miembros de la

Cámaras Legislativas.

Art. 2º. El Presidente de la República no puede conferir empleo a los Senadores y Representantes durante el período de sus funciones y un año después, con excepción de los de Ministro del Despacho, Gobernador, Agente Diplomático y Jefe Militar en tiempo de Guerra.

La aceptación de cualquiera de estos empleos por un miembro del Congreso no produce vacante en la respectiva Cámara; pero el Senador o Representante que los hubiere aceptado no podrá ocupar su puesto como tal sino cuando haya cesado en el ejercicio de sus nuevas funciones. Si la cesación ocurriere durante las sesiones de una legislatura, el funcionario cesante no podrá volver al Congreso en ella, sino en la próxima reunión, dentro del respectivo período.

Art. 3º. Quedan, en consecuencia, substituidos los artículos 108 y 109 de la Constitución.

ACTO LEGISLATIVO NÚMERO 3 DE 1909.

(2 de abril.)

por el cual se substituye el artículo 3º de la Constitución Nacional.

Artículo único. El territorio de la República tiene por límites con el de las naciones limítrofes los que se hubieren fijado, o en lo sucesivo se fijaren, por tratados públicos debidamente aprobados y ratificados conforme a la Constitución y leyes de la República o por sentencias arbitrales cumplidas y pasadas en autoridad de cosa juzgada.

ACTO LEGISLATIVO NÚMERO 4 DE 1909.

(7 de abril)

por el cual se determina el período de duración de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional.

Art. 1º. Las sesiones ordinarias de las Cámaras Legislativas durarán

sesenta días, pasados los cuales el Gobierno podrá declararlas en receso o prorrogar sus sesiones como extraordinarias.

Art. 2º Los Senadores durarán tres años, y serán reelegidos indefinidamente.

Art. 3º Los Representantes durarán en el ejercicio de sus funciones por dos años, y serán reelegidos indefinidamente.

Art. 4º Por el presente Acto Legislativo quedan derogados los artículos 2º del Acto Legislativo número 1º de 1907 y los artículos 95 y 101 de la Constitución.

 ACTO LEGISLATIVO NÚMERO 5 DE 1906.
 (8 de abril)

por el cual se reforma el señalado con el número 5 de 1905 (30 marzo)

Art. 1º. En caso de falta temporal o absoluta del Presidente de la República, lo reemplazará el Ministro que para esto haya aquél designado de antemano. A falta de Ministro en quien haya recaído esta designación, se encargará del Poder Ejecutivo otro de los Ministros en el orden de precedencia establecido por la ley; a falta de Ministros, se encargará del Poder Ejecutivo el Gobernador del Distrito Capital o del Departamento que se halle más cercano a la capital de la República, por su orden.

Parágrafo. La designación que haga el Presidente puede revocarla en cualquier tiempo y hacer una nueva.

Art. 2º. En caso de falta absoluta del Presidente de la República, el Ministro o Gobernador que se encargue accidentalmente del Poder Ejecutivo conforme al artículo anterior, convocará el Congreso dentro de los ocho días siguientes para que en el curso de los sesenta días posteriores a la falta del titular proceda a elegir el ciudadano que deba reemplazar al Presidente por el tiempo que falte del periodo constitucional. Si el designado no convocare en el término expresado el Congreso, éste se reunirá por derecho propio con tal objeto.

Si el Congreso estuviere reunido cuando ocurra la falta absoluta del Presidente de la República, procederá inmediatamente a elegir el ciudadano que deba reemplazarlo por lo que falta del período constitucional.

Parágrafo, (transitorio). En caso de ocurrir la falta absoluta del Presidente antes de la instalación del próximo Congreso Nacional, la Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa, por derecho propio, llenará las funciones que por el presente Acto correspondan al Congreso.

Art. 3°. Quedan en toda su fuerza y vigor los arts. 1°, 4°, 5° y 6° del Acto Legislativo número 5 de 1905 (30 de marzo), y derogados los artículos 2° y 3° del mismo Acto.

Bogotá, Abril 14 de 1909.

El Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa, Diputado por el Departamento del Huila, AURELIO MUTIS.

El primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa, Diputado por el Departamento del Cauca, J.M. QUIRANO WALLIS.

El Segundo Vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa, Diputado por el Departamento de Caldas, ESTEBAN JARAMILLO.

El Diputado por el Departamento de Antioquia, Victor M. Salazar.- El Diputado por el Departamento de Antioquia, Rufino Gutiérrez.- El Diputado por el Departamento de Antioquia, Manuel R. del Corral.- El Diputado por el Departamento del Atlántico, F. de O. Manolas.- El Diputado por el Departamento del Atlántico, Enrique Pérez.- El Diputado por el Departamento del Atlántico, Alfredo Vázquez Cobo.- El Diputado por el Departamento de Bolívar, Diego Martínez O.- El Diputado por el Departamento de Bolívar, Pedro Vélez.- El Diputado por el Departamento de Bolívar, Ramón B. Jimeno.- El Diputado por el Departamento de Boyacá, Salvador Franco.- El Diputado por el Departamento de Boyacá, Pablo García Medina.- El Diputado por el Departamento de Boyacá, Ignacio R. Piñeros.- El Diputado por el Departamento de Boyacá, Ignacio R. Piñeros.- El Diputado por el Departamento de Boyacá, Ignacio R. Piñeros.

mento de Caldas, Juan de D. Gutiérrez. El Diputado por el Departamen-
 to de Caldas, Max Grillo- El Diputado por el Departamento del Cauca,
 Fernando Angulo- El Diputado por el Departamento del Cauca, Simón Hurta-
 do- El Diputado por el Departamento de Cundinamarca, Arcadio Dulcey,^{el}
 El Diputado por el Departamento de Cundinamarca, Gerardo Pulecio- El
 Diputado por el Departamento de Cundinamarca, Alejandro Herreza Res-
 trepo- El Diputado por el Departamento de Galán, Luis F. Torres E.- El
 Diputado por el Departamento de Galán, Rafael Antonio Ordaz- El Diputa-
 do por el Departamento de Galán, Carlos Tiradó Macías- El Diputado por el
 Departamento del Huila, Celiano Dussán- El Diputado por el Departamen-
 to del Huila, C. Cuervo Márquez- El Diputado por el Departamento del Mag-
 dalena, José Manuel Goenaga- El Diputado por el Departamento del Magdale-
 na, José Guecco Laborde- El Diputado por el Departamento del Magdalena, ~~J~~
 José D. Dávila- El Diputado por el Departamento de Nariño, Juan B. Pombo
 El Diputado por el Departamento de Nariño, Venancio Rueda- El Diputado por
 el Departamento de Nariño, Jaime Córdoba- El Diputado por el Departamento
 de Santander, Luis Cuervo Márquez- El Diputado por el Departamento de San-
 tander, Carlos Tavera Navas- El Diputado por el Departamento de Santander
 Benito Hernández- El Diputado por el Departamento de Quesada, José María
 Pinto V.- El Diputado por el Departamento de Quesada, Edmundo Cervantes-
 El Diputado por el Departamento de Quesada, D. Aldama- El Diputado por
 el Departamento del Tolima, Justo Vargas- El Diputado por el Departamento
 del Tolima, Maximiliano Neirap El Diputado por el Departamento del
 Tolima, Antonio Olano- El Diputado por el Departamento del Tundama, Fran-
 cisco Montaña- El Diputado por el Departamento de Tundama, F. Calderón R.
 El Diputado por el Departamento de Tundama, Santiago Camargo- El Diputa-
 do por el Distrito Capital, D. Euclides de Angulo- El Diputado por el
 Distrito Capital, F. de P. Matéus- El Diputado por el Distrito Capital,
 Ramón Rebolledo- El Secretario Gerardo Arrubla- El Secretario, Fernando
 E. Baena.

Poder Ejecutivo Nacional-- Bogotá, Abril 14 de 1909.

Cómplase y ejecútese.

(L.S.)

R. Reyes

El Ministro de Gobierno, M. Vargas.- El Ministro de Relaciones Exteriores Francisco José Urrutia.- El Ministro de Hacienda y Tesoro, Nemesio Jaramo.- El Ministro de Guerra, Jorge Holguín.- El Ministro de Instrucción Pública, Antonio Gómez Restrepo.- El Subsecretario de Obras Públicas, Encargado del Despacho, Lorenzo Manrique.

ACTO LEGISLATIVO NÚMERO 1° DE 1910.

(Mayo 28)

por el cual se interpreta el artículo 6° del acto legislativo n° 9° de 17 de Abril de 1905.

La Asamblea Nacional de Colombia

Decreta:

Artículo único. Las funciones que ejercerá la Asamblea Nacional, en sustitución del Congreso y en conformidad con lo dispuesto en el artículo 6° del Acto Legislativo n° 9 de 17 de Abril de 1905, son todas aquellas que por la Constitución y las leyes corresponde ejercer al Congreso y a cada una de sus Cámaras.

Dado en Bogotá, a veinticinco de Mayo de mil novecientos diez.

El Presidente Ramón Arango.

El Secretario, Marcelino Uribe Arango.

Poder Ejecutivo- Bogotá Mayo 28 de 1910.

Públiquese y ejecútese, Ramón González Valencia.- El Ministro de Gobierno, Miguel Abadía Méndez.

ACTO LEGISLATIVO NÚMERO 2 DE 1910
(6 de Junio)

reformatorio de la Constitución Nacional.
La Asamblea Nacional de Colombia
Decreta:

Art. 1° En caso de falta accidental del Presidente de la República y en caso de falta absoluta, mientras se verifica nueva elección, ejercerá el Poder Ejecutivo, por su orden, el primero o el segundo Designado que el Congreso elegirá cada año.

--~~Artículo~~ Parágrafo.- Cuando por cualquier causa no hubieren hecho el Congreso elección de Designados conservarán el carácter de tales los anteriormente elegidos.

Art. 2° A falta de Designados entrarán a ejercer el Poder Ejecutivo los Ministros, en el orden que establezca la ley, y en su defecto, los Gobernadores, siguiendo estos el orden de proximidad de su residencia a la capital de la República.

Art. 3° Son faltas absolutas del Presidente; su muerte, su renuncia aceptada; la destitución decretada por sentencia; la incapacidad física permanente, y el abandono del puesto declaradas estas dos últimas en el Senado.

Art. 4° (transitorio) El periodo de los designados que nombre la Asamblea Nacional en sus presentes sesiones, durará desde el día de la elección hasta el treinta y uno de marzo de mil novecientos once.

Art. 5° Quedan derógadas todas las disposiciones constitucionales y legales que sean contrarias al presente Acto.

Dado en Bogotá, a dos de junio de mil novecientos diez.

El Presidente, Ramón Arango.

El Secretario, Marcelino Uribe Arango.

Poder Ejecutivo - Bogotá, Junio 6 de 1910.

Publíquese y Ejecútase.

(L. B.) Ramón González Valencia.

El Ministro de Gobierno, Miguel Abadía Méndez.

ACTO LEGISLATIVO NÚMERO 3 DE 1910.**(31 de octubre)****reformatorio de la Constitución Nacional.**

**En el nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad, la Asamblea
Nacional de Colombia**

DECRETA:

TÍTULO I.

Art. 1º Son límites de la República con las naciones vecinas los siguientes: con la de Venezuela, los fijados por el Laudo arbitral del Rey de España; con la de Costa Rica, los señalados por el Laudo arbitral del Presidente de la República francesa; con el Brasil, los determinados por el Tratado celebrado con esa República, en la parte delimitada con él, y el resto, los que tenía el Virreinato de la Nueva Granada con las posesiones portuguesas en 1910; con la República del Ecuador, provisionalmente los fijados en la Ley colombiana de 25 de junio de 1824, y con el Perú, los adoptados en el Protocolo Mosquera-Pedemonte, en desarrollo del Tratado de 22 de septiembre de 1829.

Las líneas divisorias de la República con las naciones limítrofes sólo podrán variarse en virtud de tratados públicos debidamente aprobados por ambas Cámaras Legislativas.

Art. 2º El territorio nacional se dividirá en Departamentos, y éstos

en Municipios o Distritos Municipales.

La ley puede decretar la formación de nuevos Departamentos, desmembrando los existentes, cuando haya sido solicitada por las tres cuartas partes de los Concejeros municipales de la comarca que ha de formar el nuevo Departamento, y siempre que se llenen estas condiciones:

1^a Que el nuevo Departamento tenga por lo menos 250.000 habitantes y \$ 250.000 oro de renta anual;

2^a. Que aquél o aquéllos de que fuere segregado quede, cada uno, con una población de 250.000 habitantes, por lo menos, y con una renta anual no menor de \$ 250.000, y

3^a Que la creación sea decretada por una ley aprobada por dos Legislaturas anuales sucesivas.

Para la supresión de cualquier Departamento que se cree con posterioridad al presente Acto Legislativo bastará una ley aprobada en la forma ordinaria, siempre que durante el debate se compruebe que la entidad que va a suprimirse carece de alguna de las condiciones expresadas.

La ley podrá segregar Municipios de un Departamento, o suprimir Intendencias, y agregar éstas y aquéllos a otro ó otros Departamentos limítrofes.

TÍTULO III.

Art. 3^o. El legislador no podrá imponer la pena capital en ningún caso.

Art. 4^o. Ninguna ley que establezca un monopolio podrá aplicarse antes de que hayan sido plenamente indemnizados los individuos que en virtud de ella deban quedar privados del ejercicio de una industria lícita.

Ningún monopolio podrá establecerse sino como arbitrio rentístico y en virtud de ley.

Sólo podrán concederse privilegios que se refieran a inventos útiles y a vías de comunicación.

Art. 5^o. En tiempo de paz nadie podrá ser privado de su propiedad en

total o en parte, sino por pena o apremio, o indemnización, o contribución general, con arreglo a las leyes. Por graves motivos de utilidad pública, definidos por el legislador, podrá haber enajenación forzosa mediante mandamiento judicial, y se indemnizará el valor de la propiedad antes de verificarse la expropiación.

Art. 6° En tiempo de paz solamente el Congreso, las Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales podrán imponer contribuciones.

Art. 7°. Queda prohibida en absoluto toda nueva emisión de papel moneda de curso forzoso.

TÍTULO ~~VI~~ VI.

Art. 8°. Las Cámaras legislativas se reunirán por derecho propio cada año, el día 20 de julio, en la capital de la República. Si por cualquier causa no pudieran hacerlo en la fecha indicada, se reunirán tan pronto como fuere posible dentro del año.

Las sesiones del Congreso durarán noventa días, y podrán prorrogarse hasta por 30 más, si así lo disponen los dos tercios de los votos de una y otra Cámara.

Podrá también reunirse el Congreso por convocación del Gobierno, y entonces se ocupará en primer lugar en los negocios que éste someta a su consideración. En tal caso durará reunido por el tiempo que el mismo Gobierno determine.

Art. 9° El Congreso se reunirá en un solo Cuerpo únicamente para dar posesión al Presidente de la República y para elegir Designados.

En tales casos, el Presidente del Senado y el de la Cámara serán respectivamente Presidente y Vicepresidente del Congreso.

Art. 10.- El Congreso elegirá cada año dos Designados, primero y segundo, quienes ejercerán por su orden el Poder Ejecutivo a falta del Presidente.

TÍTULO VIII.-

Art. 11.- El Senado se compondrá de tantos miembros cuantos correspondan a la población de la República, a razón de uno por cada 120.000 habitantes y uno mas por toda fracción no menor de 50.000 habitantes. Por cada Senador se elegirán dos suplentes.

Art. 12.- Los Senadores serán elegidos por Consejos Electorales.

Art. 13.-Corresponde a las Asambleas Departamentales elegir los miembros de los Consejos Electorales en la proporción de uno por cada 30.000 habitantes del respectivo Departamento.

Art. 14.- La ley dividirá el territorio nacional en Circunscripciones Senatoriales de uno o mas Departamentos, de manera que puedan tener representación las minorías.

Art. 15.- La elección de Senadores no podrá recaer en individuos que pertenezcan al respectivo Consejo Electoral.

Art. 16.- Los Senadores durarán cuatro años en el ejercicio de sus funciones y son reelegibles indefinidamente.

Art. 17.- Es atribución del Senado, además de las que señala el artículo 98 de la Constitución, elegir cuatro Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y sus suplentes, de ternas presentadas por el Presidente de la República.

TÍTULO IX.-

Art. 18.- La Cámara de Representantes se compondrá de tantos individuos cuantos correspondan a la población de la República, a razón de uno por cada 50.000 habitantes.

Por cada representante se elegirán dos suplentes.

Art. 19.- Los Representantes durarán en el ejercicio de sus funciones dos años y serán reelegibles indefinidamente.

Art. 20.- Son atribuciones de la Cámara de Representantes:

- 1ª Examinar y fenecer definitivamente la cuenta General del Tesoro;
- 2ª Iniciar la formación de las leyes que establezcan contribuciones o organicen el Ministerio Público;
- 3ª Elegir cinco Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y sus suplentes, de ternas que represente el Presidente de la República.

4° Acusar ante el Senado, cuando hubiere justas causas, al Presidente de la República, a los Ministros del Despacho, al Procurador General de la Nación y a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

5°.-Conocer de los denuncios y quejas que ante elle se presentan por el Procurador General de la Nación o por particulares, contra los expresados funcionarios, y si prestan mérito, fundar en ellos acusación ante el Senado.

TÍTULO X.

Art. 21.- Ningún miembro del Congreso podrá ser aprehendido ni llamado a juicio civil ni criminal sin permiso de la Cámara a que pertenezca, durante el periodo de las Sesiones, cuarenta días antes y veinte días después de éstas. En caso de flagrante delito podrá ser detenido el delincuente, y será puesto inmediatamente a disposición de la Cámara respectiva.

Art. 22.- El Presidente de la República, los Ministros del Despacho, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Procurador General de la Nación y los Gobernadores no podrán ser elegidos miembros del Congreso sino, tres meses después de haber cesado en el ejercicio de sus funciones.

Tampoco podrá ser Senador o representante ningún individuo por Departamento o Circunscripción Electoral donde tres meses antes de las elecciones haya ejercido jurisdicción o autoridad civil, política o militar.

Art. 23.- El Presidente de la República no podrá conferir empleo a los Senadores o representantes que hubieran ejercido el cargo durante el periodo de sus funciones, con excepción de los de Ministros del Despacho, Gobernador, Agente Diplomático y Jefe Militar en tiempo de guerra.

La infracción de este precepto vicia de nulidad el nombramiento.

La aceptación de cualquiera de aquellos empleos por un miembro del Congreso produce vacante absoluta en la respectiva Cámara, excepto la del cargo de Ministro del Despacho, que no la produce sino transitoria, durante el tiempo en que desempeñe el empleo.

Art. 24. En caso de falta de un miembro del Congreso, sea temporal o absoluta, lo subrogará el respectivo suplente.

TÍTULO XI

Art. 25. El Presidente de la República será elegido en un mismo día por el voto directo de los ciudadanos que tienen derecho a sufragar para Representantes, y para un período de cuatro años, en la forma que determine la ley.

Art. 26. En caso de falta temporal del Presidente de la República, y en caso de falta absoluta mientras se verifica nueva elección, ejercerá el Poder Ejecutivo, por su orden, el primero o el segundo Designado que el Congreso elegirá cada año.

Cuando por cualquier causa no hubiere hecho el Congreso elección de Designados, conservarán el carácter de tales los anteriormente elegidos. A falta de Designados entrarán a ejercer el Poder Ejecutivo los Ministros en el orden que establezca la ley, y en su defecto, los Gobernadores, siguiendo éstos el orden de su proximidad de su residencia a la capital de la República.

Son faltas absolutas del Presidente:

Su muerte, su renuncia aceptada, la destitución aceptada por sentencia, la incapacidad física permanente, y el abandono del puesto, declarados estos dos últimos por el Senado.

Art. 27. En caso de falta absoluta del Presidente de la República, el Encargado del Poder Ejecutivo convocará a elecciones para dentro de los sesenta días siguientes.

El Encargado del Poder Ejecutivo continuará ejerciéndolo cuando fal-

te un año o menos para terminar el período, sin convocar a nuevas elecciones.

Art. 28. El Presidente de la República no es reelegible en ningún caso para el período inmediato.

No podrá tampoco ser elegido Presidente de la República ni Designado el ciudadano que a cualquier título hubiere ejercido el Poder Ejecutivo dentro del año inmediatamente anterior a la elección.

Art. 29. El Presidente de la República, o quien haga sus veces, será responsable por sus actos u omisiones que violen la Constitución o las leyes.

Art. 30. Ningún acto del Presidente, excepte el de nombramiento y remoción de Ministros, tendrá valor ni fuerza alguna mientras no sea refrendado y comunicado por el Ministro del ramo respectivo, quien por el mismo hecho se constituye responsable.

Art. 31. El Presidente de la República, durante el período para que sea elegido, y el que se halle encargado del Poder Ejecutivo, mientras lo ejerza, no podrán ser perseguidos ni juzgados por delitos, sino en virtud de acusación de la Cámara de Representantes y cuando el Senado haya declarado que hay lugar a formación de causa.

Art. 32. El Presidente de la República o quien haga sus veces no podrá salir del territorio de la Nación durante el ejercicio de su cargo y un año después, sin permiso del Senado. La infracción de esta disposición, estando alguno de aquellos en el ejercicio del cargo, implica abandono del puesto.

Art. 33. En caso de guerra exterior o de conmoción interior podrá el Presidente, con la firma de todos los Ministros, declarar turbado el orden público y en estado de sitio toda la República o parte de ella. Mediante tal declaración ~~el Gobierno~~, el Gobierno tendrá, además de las facultades legales, las que, conforme a las reglas aceptadas por el Derecho de Gentes, rigen para la guerra entre naciones.

Los decretos que dentro de estos límites dicte el Presidente ten-

drán carácter obligatorio, siempre que lleven la firma de todos los Ministros.

El Gobierno no puede derogar las leyes por medio de los expresados decretos. Sus facultades se limitan a la suspensión de las que sean incompatibles con el estado de sitio.

El Gobierno declarará restablecido el orden público tan pronto como haya cesado la guerra exterior o se haya reprimido el alzamiento; y dejarán de regir los decretos de carácter extraordinario que haya dictado.

Serán responsables el Presidente y los Ministros cuando declaren turbado el orden público sin haber ocurrido el caso de guerra exterior o de conmoción interior; y lo serán también, lo mismo que los demás funcionarios, por cualquier abuso que hubieren cometido en el ejercicio de las facultades concedidas en el presente artículo.

Restablecido el orden público, el Gobierno convocará el Congreso y le pasará una exposición motivada de sus providencias.

En el caso de guerra exterior el Gobierno convocará el Congreso en el decreto en que declare turbado el orden público y en estado de sitio la República, para que se reúna dentro de los sesenta días siguientes; y si no lo convocare, podrá el Congreso reunirse por derecho propio.

Art. 34. Corresponde al Presidente de la República, como suprema autoridad administrativa, dirigir las relaciones diplomáticas y comerciales con las demás potencias o soberanos; nombrar los Agentes Diplomáticos, recibir los Agentes respectivos y celebrar con potencias extranjeras tratados y convenios, que se someterán a la aprobación del Congreso.

TÍTULO IV

Art. 35. La Corte Suprema de Justicia se compondrá de nueve Magistrados. La ley la dividirá en Salas, señalará a cada una de ellas los asuntos de que debe conocer separadamente y determinará aquellos en que

deba intervenir toda la Corte.

Art. 36.- El período de los Magistrados de la Corte Suprema será de cinco años, y de cuatro el de los Magistrados de los Tribunales Superiores. Unos y otros podrán ser reelegidos indefinidamente.

Art. 37. El Presidente de la Corte Suprema será elegido cada año por la misma Corte.

Art. 38. Los Magistrados de los Tribunales Superiores y los suplentes respectivos serán nombrados por la Corte Suprema, de ternas que presenten las respectivas Asambleas Departamentales.

Art. 39. El Gobierno nombrará los Magistrados interinos de la Corte Suprema de Justicia, y los Gobernadores respectivos nombrarán los de los Tribunales Superiores, cuando las faltas de los principales no puedan ser llenadas por los suplentes.

Art. 40. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley se aplicarán de preferencia las disposiciones constitucionales.

Art. 41. A la Corte Suprema de Justicia se le confía la guarda de la integridad de la Constitución. En consecuencia, además de las facultades que le confieren ésta y las leyes, tendrá las siguientes:

Decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los Actos Legislativos que hayan sido objetados como inconstitucionales por el Gobierno, o sobre todas las leyes o decretos acusados ante ella por cualquier ciudadano como inconstitucionales, previa audiencia del Procurador General de la Nación.

Art. 42. La ley establecerá y organizará la jurisdicción contencioso-administrativa.

TÍTULO XVII

Art. 43. Todos los ciudadanos eligen directamente Concejeros municipales y Diputados de las Asambleas Departamentales.

Art. 44. Los ciudadanos que sepan leer y escribir, o tengan una renta

anual de trescientos pesos, o propiedad raíz de valor de mil pesos, elegirán directamente Presidente de la República y Representantes.

Art. 45. En toda elección en que se vote por más de dos individuos, aquella se hará por el sistema del voto incompleto, o del suociente electoral, o del voto acumulativo, u otro cualquiera que asegure la representación proporcional de los partidos. La ley determinará la manera de hacer efectivo este derecho.

Art. 46. Compete a la ley hacer la demarcación de Distritos Electorales para la elección de Representantes, y a las Asambleas Departamentales hacer la demarcación de Distritos electorales para la elección de Diputados, si el sistema electoral que se adopte exige la formación de Distritos electorales. En tal caso ninguno de éstos podrá elegir menos de tres Representantes o Diputados.

TÍTULO XVIII

Art. 47. El territorio de la República se divide para la Administración pública en Departamentos. Cada uno de éstos será regido por un Gobernador, que será al mismo tiempo Agente del Poder Ejecutivo y Jefe de la Administración Seccional.

Art. 48. Los Departamentos tendrán independencia para la administración de los asuntos seccionales, con las limitaciones que establece la Constitución.

Art. 49. Los Departamentos se dividen en Distritos municipales. Para el mejor servicio administrativo la ley puede establecer divisiones provinciales u otras.

Art. 50. Los bienes y rentas de los Departamentos, así como los de los Municipios, son propiedad exclusiva, respectivamente, de cada uno de ellos, y gozan de las mismas garantías que las propiedades y rentas de los particulares. No podrán ser ocupadas estas propiedades sino en los mismos términos en que lo sean la propiedad privada. El Gobierno Nacional no podrá conceder exenciones de derechos departamentales ni munici-

pales.

Art. 51. Los bienes, derechos, valores y acciones que por leyes o por decretos del Gobierno Nacional o por cualquiera otro título pertenecieron a los extinguidos Estados Soberanos continuarán siendo propiedad de los respectivos Departamentos. Exceptuáanse los inmuebles que se especifican en el art. 202 de la Constitución.

Art. 52. Habrá en cada Departamento una Corporación administrativa denominada Asamblea Departamental, que se reunirá cada año en la capital del Departamento.

Art. 53. Las Asambleas Departamentales serán de elección popular y se compondrán de los Diputados que correspondan a la población de los Departamentos, a razón de uno por cada 12.000 habitantes, y uno por cada fracción que posea ~~por~~ ~~de~~ ~~una~~ 6.000. La ley podrá variar esta base de elección y fijar la época y duración de las sesiones.

Art. 54. Corresponde a las Asambleas:

1º. Reglamentar por medio de ordenanzas, y de acuerdo con los preceptos constitucionales, los establecimientos de instrucción primaria y secundaria y los de beneficencia, cuando fueren costeados con fondos del Departamento;

2º. Dirigir y fomentar por medio de ordenanzas y con los recursos propios del Departamento, las industrias establecidas y la introducción de otras nuevas, la importación de capitales extranjeros, la colonización de tierras pertenecientes al Departamento, la apertura de caminos y de canales navegables, la construcción de vías férreas, la explotación de bosques de propiedad del Departamento, la canalización de ríos, lo relativo a la policía local, la fiscalización de las rentas y gastos de los Distritos y cuanto se refiera a los intereses seccionales y al adelantamiento interno;

3º. Organizar las Contadurías o Tribunales de Cuentas de los Departamentos, nombrar los Contadores o Magistrados correspondientes y presentar sendas ternas para el nombramiento de los Fiscales de los Tribunales

y Juzgados Superiores y de sus respectivos suplentes.

4°. Crear y suprimir Municipios con arreglo a la base de población que determine la ley, y segregar o agregar términos municipales, consultando los intereses locales. Si de un acto de agregación o segregación se quejare algún vecindario interesado en el asunto, la resolución definitiva corresponderá al Congreso.

5°. La creación y supresión de Circuitos de Notaría y de Registro y la fijación del número de empleados departamentales, sus atribuciones y sueldos; y

6°. Llenar las demás funciones que les señalen la Constitución y las leyes.

Art. 55. Las Asambleas votarán anualmente el Presupuesto de Rentas y Gastos del respectivo Departamento.

Art. 56. Las Asambleas Departamentales, para cubrir los gastos de administración que les correspondan, podrán establecer contribuciones con las condiciones y dentro de los límites que fije la ley.

Art. 57. Las ordenanzas de las Asambleas son obligatorias mientras no sean anuladas por la autoridad judicial en la forma que prescriba la ley.

Art. 58. Los particulares agraviados por actos de las Asambleas pueden recurrir al Tribunal competente, y éste, por pronta providencia, cuando se trate de un grave perjuicio, podrá suspender el acto denunciado.

Art. 59. Son atribuciones del Gobernador:

1º Cumplir y hacer que se cumplan en el Departamento las órdenes del Gobierno;

2º Dirigir la acción administrativa en el Departamento, nombrando y separando sus Agentes, reformando o revocando los actos de éstos y dictando las providencias necesarias en todos los ramos de la administración.

3º. Llevar la voz del Departamento y representarlo en asuntos políti-

cos y administrativos.

4º Auxiliar la justicia como lo determine la ley.

5º Ejercer el derecho de vigilancia y protección sobre las corporaciones oficiales y establecimientos públicos.

6º Sancionar en la forma legal las ordenanzas que expidan las Asambleas Departamentales.

7º Revisar los actos de las Municipalidades y los de los Alcaldes por motivos de inconstitucionalidad o de ilegalidad, revocar los últimos y pasar los primeros a la autoridad judicial, para que ésta decida sobre su exequibilidad, y

8º Las demás atribuciones que por la ley le competan.

Art. 60. El Gobernador podrá requerir el auxilio de la fuerza armada, y el Jefe militar obedecerá sus instrucciones, salvo las disposiciones especiales que dicte el Gobierno.

Art. 61. En cada Distrito Municipal habrá una corporación de elección popular, que se designará con el nombre de Concejo Municipal.

Art. 62. Corresponde a los Concejos Municipales ordenar lo conveniente por medio de acuerdos o reglamentos interiores para la Administración del Distrito; votar, en conformidad con la Constitución, la ley y las ordenanzas expedidas por las Asambleas, las contribuciones y gastos locales; llevar el movimiento anual de población; formar el censo civil cuando lo determine la ley; nombrar Jueces, Personeros y Tesoreros municipales, y ejercer las demás funciones que les sean señaladas.

Art. 63. Los acuerdos de los Concejos Municipales son obligatorios mientras no sean anulados por la autoridad judicial.

Art. 64. Los particulares agraviados por actos de los Concejos Municipales podrán ocurrir al Juez, y éste, por pronta providencia, suspenderá el acto denunciado por causa de inconstitucionalidad o ilegalidad.

Art. 65. En todo Municipio habrá un Alcalde que ejercerá las funciones de agente del Gobernador y que será Jefe de la administración muni-

oipal.

TÍTULO XIX

Art. 66. El Poder Ejecutivo formará anualmente el Presupuesto de Rentas y Gastos y lo presentará al Congreso en los primeros diez días de sus sesiones anuales.

Art. 67. En tiempo de paz no se podrá establecer contribución o impuesto que no figure en el Presupuesto de rentas, ni hacer erogación del Tesoro que no se halle incluida en el de Gastos.

Art. 68. El Poder Ejecutivo no podrá abrir los créditos suplementales y extraordinarios de que habla el art. 208 de la Constitución, ni hacer traslaciones dentro del Presupuesto, sino en las condiciones y por los trámites que la ley establezca.

Art. 69. Ninguna contribución indirecta ni aumento de impuesto de esta clase empezará a cobrarse sino seis meses después de promulgada la ley que establezca la contribución o el aumento.

TÍTULO XX

Art. 70. La Constitución sólo podrá ser reformada por un Acto Legislativo discutido primeramente y aprobado por el Congreso en la forma ordinaria; y de igual modo considerado en la reunión anual subsiguiente, y aprobado en ésta por ambas Cámaras, en segundo y tercer debates, por la mayoría absoluta de los individuos que componen cada una de ellas.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

Art. A). Las fechas iniciales de los próximos períodos de las corporaciones y funcionarios de que trata la Constitución y el presente Acto Reformatorio de ella serán las siguientes:

La del Congreso Nacional, el 20 de ~~junio~~ julio de 1911.

La del Presidente de la República, el 7 de agosto de 1914.

La de las Asambleas Departamentales, el 1° de marzo de 1911.

La de la Corte Suprema de Justicia, el 1° de mayo de 1915.

La presente Asamblea elegirá los dos Magistrados que completan el número de nueve, señalado por este Acto, y el período de todos terminará el 30 de abril de 1915.

La de los Tribunales Superiores, el 1° de mayo de 1911.

Art. B). Los delitos castigados con pena de muerte en el Código Penal, lo serán en adelante con veinte años de presidio, mientras la ley dispone otra cosa.

Art. C.) Mientras el Congreso y las Asambleas no hayan dictado las leyes y ordenanzas correspondientes, el Gobierno proveerá lo necesario en materia de división territorial electoral.

Art. D). Derógase el artículo 180 de la Constitución, que establece Jueces de Escrutinio.

Art. E). Quedan derogadas las disposiciones de la Constitución Nacional de 5 de agosto de 1886, que sean contrarias al presente Acto Legislativo, y todos los Actos Legislativos expedidos por la Asamblea anteriores al presente.

Art. F). Mientras se reúne el próximo Congreso, de acuerdo con el presente Acto Reformatorio de la Constitución, la actual Asamblea Nacional continuará en ejercicio de sus funciones para el caso de que el Gobierno juzgue necesario convocarla.

Art. G). El presente Acto Legislativo regará desde su sanción para los altos poderes nacionales, y para la Nación después de treinta días de publicado en el "Diario Oficial".

Dado en Bogotá, a veintisiete de septiembre de mil novecientos diez.

El Presidente de la Asamblea Nacional, Diputado por la Circunscripción Electoral de Santa Rosa, -Luis A. Mesa.- El primer Vicepresidente, Diputado por la Circunscripción Electoral, de Neiva, - José M. Lombana Barreneche.- El segundo Vicepresidente, Diputado por la Circunscripción

Electoral de Bogotá, Eduardo Restrepo Sáenz.-

El Diputado por la Circunscripción Electoral de Antioquia, Ramón Arango- El Diputado por la Circunscripción Electoral de Antioquia, Jesús del Corral- El Diputado por la Circunscripción Electoral de Antioquia, Nicolás Esguerra- El Diputado por la Circunscripción Electoral de Barranquilla, Clemente Sáenz M.- El Diputado por la Circunscripción Electoral de Barranquilla, Julio A. Vengoechea- El Diputado por la Circunscripción Electoral de Bogotá, Emilio Saiz.- El Diputado por la Circunscripción Electoral de Bogotá, Carlos José Espinosa- El Diputado por la Circunscripción Electoral de Bucaramanga, Anibal García Herreros- El Diputado por la Circunscripción Electoral de Bucaramanga, Guillermo Quintana Calderón- El Diputado por la Circunscripción Electoral de Bucaramanga, Nicolás Olarte- El Diputado por la Circunscripción Electoral de Cali, Joaquín A. Collazos- El Diputado por la Circunscripción Electoral de Cartagena, Carmelo Arango- El Diputado por la Circunscripción Electoral de Cartagena, Julio Torrente B.- El Diputado por la Circunscripción Electoral de Cartagena, Lócas Segovia- El Diputado por la Circunscripción Electoral de Cúcuta, Emilio Ferrero- El Diputado por la Circunscripción Electoral de Cúcuta, Hermes García G.- El Diputado por la Circunscripción Electoral de Cúcuta, Augusto H. Samper- El Diputado por la Circunscripción Electoral de Facativá, Juan C. Arbeláez- El Diputado por la Circunscripción Electoral de Facativá, José Gregorio Hernández- El Diputado por la Circunscripción Electoral de Facativá, Gabriel Rosas- El Diputado por la Circunscripción Electoral de Manizales Juan Pínsón- El Diputado por la Circunscripción Electoral de Manizales Aquilino Villegas- El Diputado por la Circunscripción Electoral de Medellín, Roman Gómez- El Diputado por la Circunscripción Electoral de Medellín, Pedro Nel Ospina- El Diputado por la Circunscripción Electoral de Neiva, Julio M. Escobar- El Diputado por la Circunscripción

Electoral de Neiva, Hernando Holguín y Caro- El Diputado por la Circunscripción Electoral de Neiva, Augusto Martínez- El Diputado por la Circunscripción Electoral de Pasto, José A. Llorente- El Diputado por la Circunscripción Electoral de Pasto, Gonzalo Pérez- El Diputado por la Circunscripción Electoral de Pasto, Benjamín Guerrero- El Diputado por la Circunscripción Electoral de Popayán, Euxodio Constaín- El Diputado por la Circunscripción Electoral de Santa Rosa, Pedro M. Carreno- El Diputado por la Circunscripción Electoral de Santa Rosa, Rafael Valderrama- El Diputado por la Circunscripción Electoral de Tunja, Nemésio Dulcey- El Diputado por la Circunscripción Electoral de Tunja, Jesús Perilla V.- El Diputado por la Circunscripción Electoral de Tunja, Bartolomé Rodríguez P.- El Secretario de la Asamblea Nacional, Manuel María Gómez P.

Poder Ejecutivo- Bogotá, Octubre 31 de 1920.-
 Publíquese y cúmplase.-
 (L.S.)

CARLOS F. ANDERREPO.-

El Subsecretario de Gobierno, enarripado del Despacho, Bernardo Escovar- El Ministro de Relaciones Exteriores, Enrique Olaya Herrera- El Ministro de Hacienda, Tomás O. Eastman- El Ministro de Guerra, Mariano Ospina- El Ministro de Instrucción Pública, Pedro M. Carreno- El Ministro de Obras Públicas, Celso Rodríguez O.- El Ministro del Tesoro, G. Martínez A.-

(_____)

ACTO LEGISLATIVO NÚMERO 1° DE 1914.

Art. 1°. Habrá un Consejo de Estado compuesto de siete individuos, a saber: el primer Designado para ejercer el Poder Ejecutivo, que lo preside, y seis Vocales nombrados como lo determine la ley.

Los Ministros del Despacho tienen voz y no voto en el Consejo.

Art. 2°. Para ser Consejero de Estado se requieren las mismas condiciones que para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

Art. 3°. El cargo de Consejero es incompatible con cualquiera otro empleo público efectivo y con el ejercicio de la abogacía.

Art. 4°. Los Consejeros de Estado durarán cuatro años y se renovarán por mitad cada dos.

Art. 5°. La ley determinará el número de suplentes que deben tener los Consejeros, y las reglas relativas a su nombramiento, servicio y responsabilidad.

Art. 6°. Son atribuciones del Consejo de Estado:

1°. Actuar como Cuerpo supremo consultivo del Gobierno, en asuntos de administración, debiendo ser necesariamente oído en todos aquellos que la Constitución y las leyes determinen.

Los dictámenes del Consejo no son obligatorios para el Gobierno,

2°. Preparar los proyectos de ley y de códigos que deban presentarse a las Cámaras Legislativas, y proponer las reformas convenientes en todos los ramos de la legislación.

3°. Desempeñar las funciones de Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, conforme a las reglas que señale la ley.

4°. Darse su propio Reglamento, con la obligación de celebrar por lo menos tres sesiones en cada semana, y las demás que le señalen las leyes.

Art. 7°. En los casos de que tratan el artículo 28 de la Constitución y el 33 del Acto Legislativo número 3 de 1910, el Gobierno debe oír previamente al Consejo de Estado para dictar las providencias de que tratan

dichos artículos.

Art. 8º. Quedan derogadas todas las disposiciones contrarias a las que preceden.

A P E N D I C H N Ú M E R O 5.
+ : + : + : + : + : + : + : + : -

TEXTO VIGENTE DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA, una vez incorporadas al original de 5 de agosto de 1886 las reformas posteriores no derogadas.

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

En el nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad, los Delegatarios de los Estados colombianos de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá, Santander y Tolima, reunidos en Consejo Nacional Constituyente;

Vista la aprobación que impartieron las Municipalidades de Colombia a las bases de Constitución expedidas el día 1º de diciembre de 1885;

Y con el fin de afianzar la unidad nacional y asegurar los bienes de la justicia, la libertad y la paz, hemos venido en decretar, como decretamos, la siguiente

CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA

--- 000 ---

TITULO I

DE LA NACION Y EL TERRITORIO

Art. 1º. La Nación colombiana se reconstituye en forma de República unitaria.

Art. 2º. La soberanía reside esencial y exclusivamente en la Nación, y de ella emanan los poderes públicos, que se establecerán en los términos que esta Constitución establece. *ejercerán*

Art. 3º. Substituido. *

Art. 1º A. L. N° 3, 1910. Son límites de la República con las naciones vecinas los siguientes: con la de Venezuela, los fijados por el Laudo arbitral del Rey de España; con la de Costa Rica, los señalados por el Laudo arbitral del Presidente de la República francesa; con el Brasil, los determinados por el Tratado celebrado con esa República, en la parte delimitada con él, y el resto, los que tenía el Virreinato de la Nueva Granada con las posesiones portuguesas en 1810;

con la República del Ecuador, provisionalmente, los fijados en la Ley colombiana de 25 de junio de 1824, y con el Perú, los adoptados en el Protocolo Mosquera-Pedemonte, en desarrollo del Tratado de 22 de setiembre de 1829.

Las líneas divisorias de la República con las naciones limítrofes ~~no~~ sólo podrán variarse en virtud de Tratados públicos debidamente aprobados por ambas Cámaras Legislativas.

Art. 4º El territorio, con los bienes públicos que de él forman parte, pertenece únicamente a la Nación.

Las secciones que componían la Unión Colombiana, denominadas Estados y Territorios nacionales, continuarán siendo partes territoriales de la República de Colombia, conservando los mismos límites actuales y bajo la denominación de Departamentos.

Las líneas divisorias dudosas serán determinadas por comisiones demarcadoras nombradas por el Senado.

Los antiguos Territorios nacionales quedan incorporados en las secciones a que primitivamente pertenecieron.

Art. 5º Substituido.

Art. 2º A. L. Nº 4, 1910. El territorio nacional se dividirá en Departamentos, y éstos en Municipios o Distritos Municipales.

La ley puede decretar la formación de nuevos Departamentos, desmembrando los existentes, cuando haya sido solicitada por las tres cuartas partes de los Concejeros Municipales de la comarca que ha de formar el nuevo Departamento, y siempre que se llenen estas condiciones:

1ª. Que el nuevo Departamento tenga por lo menos 250.000 habitantes y \$ 250.000 oro de renta anual;

2ª. Que aquél o aquéllos de que fuere segregado quede, cada uno, con una población de 250.000 habitantes, por lo menos, y con una renta anual no menor de \$ 250.000; y

3ª. Que la creación sea decretada por una ley aprobada por dos Legis-

laturas anuales sucesivas.

Para la supresión de cualquier Departamento que se crea con posterioridad al presente Acto legislativo, bastará una ley aprobada en la forma ordinaria, siempre que durante el debate se compruebe que la entidad que va a suprimirse carece de alguna de las condiciones expresadas.

La ley podrá segregar Municipios de un Departamento o suprimir Intendencias, y agregar éstas y aquéllos a otro u otros Departamentos limítrofes.

Art. 6°. Sólo por una ley aprobada en la forma expresada en la parte final del artículo anterior, podrán ser variados los actuales límites de los Departamentos. (1)

Por medio de una ley aprobada en la forma ordinaria y sin la condición antedicha, podrá el Congreso separar de los Departamentos a que ahora se reincorporan, o a que han pertenecido, los territorios a que se refiere el art. 4°, o las islas, y disponer respecto de unos u otras lo más conveniente.

Art. 7°. Fuera de la división general del Territorio habrá otras dentro de los límites de cada Departamento, para arreglar el servicio público.

Las divisiones relativas a lo fiscal, lo militar y la instrucción pública, podrán no coincidir con la división general.

TITULO II

DE LOS HABITANTES: NACIONALES Y EXTRANJEROS.

Art. 8°. Son nacionales colombianos:

(1) V. A. L. número 3, 1910, art. 2°, ord. 3°

1º. Por nacimiento:

Los naturales de Colombia, con una de dos condiciones: que el padre o la madre también lo hayan sido, o que siendo hijos de extranjeros, se hallen domiciliados en la República.

Los hijos legítimos de padre y madre colombianos que hubieran nacido en tierra extranjera y luego se domiciliaren en la República, se considerarán colombianos de nacimiento para los efectos de las leyes que exijan esta calidad.

2º. Por origen y vecindad:

Los que siendo hijos de madre o padre naturales de Colombia y habiendo nacido en el extranjero, se domiciliaren en la República; y cualesquiera hispanoamericanos que ante la Municipalidad del lugar donde se establecieren, pidan ser inscritos como colombianos.

~~Extranjeros~~

3º. Por adopción:

Los extranjeros que soliciten y obtengan carta de ciudadanía.

Art. 9º. La calidad de nacional colombiano se pierde por adquirir carta de naturaleza en país extranjero, fijando en el domicilio, y podrá recobrase con arreglo a las leyes.

Art. 10. Es deber de todos los nacionales y extranjeros en Colombia, vivir sometidos a la Constitución y a las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades.

Art. 11. Los extranjeros disfrutarán en Colombia de los mismos derechos que se concedan a los colombianos por las leyes de la Nación a que el extranjero pertenezca, salvo lo que se estipule en los Tratados públicos.

Art. 12. La ley definirá la condición de extranjero domiciliado, y los especiales derechos y obligaciones de los que en tal condición se hallen.

Art. 13. El colombiano, aunque haya perdido la calidad de nacional, que fuere cogido con las armas en la mano, en guerra contra Colombia será juzgado y penado como traidor.

Los extranjeros naturalizados y domiciliados en Colombia, no serán obli

gados a tomar armas contra el país de su origen.

Art. 14.- Las sociedades o corporaciones que sean en Colombia reconocidas como personas jurídicas, no tendrán otros derechos que los correspondientes a personas colombianas.

Art. 15. Son ciudadanos los colombianos varones mayores de veintidós años que ejerzan profesión, arte u oficio, o tengan ocupación lícita u otro medio legítimo y conocido de subsistencia.

Art. 16. La ciudadanía se pierde de hecho cuando se ha perdido la nacionalidad.

También pierde la calidad de ciudadano quien se encuentre en uno de los siguientes casos, judicialmente declarados:

- 1°. Haberse comprometido al servicio de una Nación enemiga de Colombia.
- 2°. Haber pertenecido a una fracción armada contra el Gobierno de una Nación amiga.
- 3°. Haber sido condenado a sufrir pena afflictiva.
- 4°. Haber sido destituido del ejercicio de funciones públicas, mediante juicio criminal o de responsabilidad.
- 5°. Haber ejecutado actos de violencia, falsedad o corrupción en elecciones.

Los que hayan perdido la ciudadanía podrán solicitar rehabilitación del Senado.

Art. 17. El ejercicio de la ciudadanía se suspende:

- 1°. Por notoria enajenación mental.
- 2°. Por interdicción judicial.
- 3°. Por beodez habitual.
- 4°. Por causa criminal pendiente, desde que el juez diere auto de prisión.

Art. 18. La calidad de ciudadano en ejercicio es condición previa indispensable para ejercer funciones electorales, y poder desempeñar empleos públicos que lleven anexa autoridad o jurisdicción.

TITULO III

DE LOS DERECHOS CIVILES Y GARANTIAS SOCIALES.

Art. 19. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en sus vidas, honra y bienes, y asegurar el respeto recíproco de los derechos naturales, previniendo y castigando los delitos.

Art. 20. Los particulares no son responsables ante las autoridades sino por infracción de la Constitución o de las leyes. Los funcionarios públicos lo son por la misma causa y por extralimitación de funciones, o por omisión en el ejercicio de éstas.

Art. 21. En caso de infracción manifiesta de un precepto constitucional en detrimento de alguna persona, el mandato superior no exime de responsabilidad al agente que lo ejecuta.

Los militares en servicio quedan exceptuados de esta disposición. Respecto de ellos, la responsabilidad recaerá únicamente en el superior que da la orden.

Art. 22. No habrá esclavos en Colombia.

El que, siendo esclavo, pise el territorio de la República, quedará libre.

Art. 23. Nadie podrá ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino a virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en las leyes.

En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas u obligaciones puramente civiles, salvo el arraigo judicial.

Art. 24. El delincuente cogido in flagranti, podrá ser aprehendido y llevado ante el Juez por cualquiera persona. Si los agentes de la autoridad lo persiguieren, y se refugiare en su propio domicilio, podrán penetrar en él para el acto de la aprehensión; y si se acogiere a domicilio ajeno, deberá proceder requerimiento al dueño o morador.

Art. 25. Nadie podrá ser obligado en asunto criminal, correccional o de policía, a declarar contra sí mismo o contra sus parientes dentro del cuarto grado civil de consanguinidad o segundo de afinidad.

Art. 26. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se impute, ante Tribunal competente, y observando la plenitud de las formas propias de cada juicio.

En materia criminal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.

Art. 27. La anterior disposición no obsta para que puedan castigar, sin juicio previo, en los casos y dentro de los precisos términos que señale la ley:

1°. Los funcionarios que ejercen autoridad o jurisdicción, los cuales podrán penar con multas o arresto a cualquiera que los injurie o les falte al respeto en el acto en que estén desempeñando las funciones de su cargo.

2°. Los Jefes militares, los cuales podrán imponer penas incontinenti, para contener una insubordinación o motín militar, o para mantener el orden hallándose enfrente del enemigo.

3°. Los Capitanes de buque, que tienen, no estando en puerto, la misma facultad para reprimir delitos cometidos a bordo.

Art. 28. Aun en tiempo de guerra, nadie podrá ser penado ex-post facto, sino con arreglo a la ley, orden o decreto en que previamente se haya prohibido el hecho y determinándose la pena correspondiente.

Esta disposición no impide que aun en tiempo de paz, pero habiendo graves motivos para temer perturbación del orden público, sean aprehendidas y retenidas, de orden del Gobierno y- previo dictamen de los Ministros, las personas contra quienes haya graves indicios de que atentan contra la paz pública. *

Arts. 29 y 30. Substituidos.

Art. 3°. A. L. N° 3, 1910. El legislador no podrá imponer la pena capital en ningún caso.

Art. 31. Los derechos adquiridos con justo título con arreglo a las leyes civiles por personas naturales o jurídicas, no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores.

Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública, resultaren en conflicto los derechos de particulares con la necesidad reconocida por la misma ley, el interés privado deberá ceder al interés público. Pero las expropiaciones que sea preciso hacer requieren plena indemnización con arreglo al artículo siguiente. (2)

Art. 42, A. L. N° 3, 1910. Ninguna ley que establezca un monopolio podrá aplicarse antes de que hayan sido plenamente indemnizados los individuos que en virtud de ella deban quedar privados del ejercicio de una industria lícita.

Ningún monopolio podrá establecerse sino como arbitrio rentístico y en virtud de ley.

Sólo podrán concederse privilegios que se refieran a inventos útiles y a vías de comunicación.

Art. 32. Substituido.

Art. 52, A. L. N° 3, 1910. En tiempo de paz nadie podrá ser privado de su propiedad en todo o en parte, sino por ~~pena~~ pena o apremio, o indemnización o contribución general, con arreglo a las leyes. Por graves motivos de utilidad pública, definidos por el legislador, podrá haber enajenación forzosa mediante mandamiento judicial, y se indemnizará el valor de la propiedad antes de verificarse la expropiación.

Art. 33. En caso de guerra y sólo para atender al restablecimiento del orden público, la necesidad de una expropiación podrá ser decretada por autoridades que no pertenezcan al orden judicial y no ser previa la indemnización.

En el expresado caso la propiedad inmueble sólo podrá ser temporalmente ocupada, ya para atender a las necesidades de la guerra, ya para

(2) V. A. L. N° 3, 1910, art. 5°. que lo substituye.

destinar a ella sus productos, como pena pecuniaria impuesta a sus dueños conforme a las leyes.

La Nación será siempre responsable por las expropiaciones que el Gobierno haga por sí o por medio de sus agentes.

Art. 6º A.L.Nº. 7, 1910. En tiempo de paz solamente el Congreso, las Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales podrán imponer contribuciones.

Art. 7º, ibídem. Queda prohibida en absoluto toda nueva emisión de papel moneda de curso forzoso.

Art. 34. No se podrá imponer pena de confiscación.

Art. 35. Será protegida la propiedad literaria y artística, como propiedad transferible, por el tiempo de la vida del autor y ochenta años más, mediante las formalidades que prescriba la ley.

Ofrécese la misma garantía a los propietarios de obras publicadas en países de lengua española, siempre que la Nación respectiva consigne en su legislación el principio de reciprocidad, y sin que haya necesidad de celebrar al efecto convenios internacionales.

Art. 36. El destino de las donaciones intervivos o testamentarias hechas conforme a las leyes para objetos de Beneficencia o de Instrucción pública no podrá ser variado ni modificado por el Legislador.

Art. 37. No habrá en Colombia bienes raíces que no sean de libre enajenación, ni obligaciones irredimibles.

Art. 38. La Religión Católica, Apostólica, Romana, es la de la Nación; los Poderes públicos la protegerán y harán que sea respetada como esencial elemento del orden social.

Se entiende que la Iglesia Católica no es ni será oficial, y conservará su independencia.

Art. 39. Nadie será molestado por razón de sus opiniones religiosas, ni compelido por las autoridades a profesar creencias ni observar prácticas contrarias a su conciencia.

Art. 40. Es permitido el ejercicio de todos los cultos que no sean contrarios a la moral cristiana ni a las leyes.

Los actos contrarios a la moral cristiana o subversivos del orden público, que se ejecuten con ocasión o pretexto del ejercicio de un culto, quedan sometidos al derecho común.

Art. 41. La educación pública será organizada y dirigida en concordancia con la Religión Católica.

La instrucción primaria costada con fondos públicos será gratuita y no obligatoria.

Art. 42. La prensa es libre en tiempo de paz pero responsable, con arreglo a las leyes, cuando atente a la honra de las personas, al orden social o a la tranquilidad pública.

Ninguna empresa editorial de periódicos podrá, sin permiso del Gobierno, recibir subvención de otros Gobiernos ni de compañías extranjeras.

Art. 43. La correspondencia confiada a los telégrafos y correos es inviolable. Las cartas ~~personales~~ y papeles privados no podrán ser interceptados ni registrados, sino por la autoridad, mediante orden de funcionario competente, en los casos y con las formalidades que establezca la ley, y con el único objeto de buscar pruebas judiciales.

Podrá gravarse, pero nunca prohibirse en tiempo de paz, la circulación de impresos por los correos.

Art. 44. Toda persona podrá abrazar cualquier oficio u ocupación honesta sin necesidad de pertenecer a gremio de maestros o doctores.

Las autoridades inspeccionarán las industrias y profesiones en lo relativo a la moralidad, la seguridad y la salubridad públicas.

La ley podrá exigir títulos de idoneidad para el ejercicio de ~~una~~ las profesiones médicas y de sus auxiliares.

Art. 45. Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a las autoridades, ya sea por motivo de interés general, ya de inte-

rés particular, y el de obtener pronta resolución.

Art. 46. Toda parte del pueblo puede reunirse o congregarse pacíficamente. La autoridad podrá disolver toda reunión que degenera en asonada o tumulto, o que obstruya las vías públicas.

Art. 47. Es permitido formar compañías o asociaciones públicas o privadas que no sean contrarias a la moralidad ni al orden legal.

Son prohibidas las juntas políticas populares de carácter permanente.

Las asociaciones religiosas deberán presentar a la autoridad civil, para que puedan quedar bajo la protección de las leyes, autorización expedida por la respectiva superioridad eclesiástica.

Art. 48. Sólo el Gobierno puede introducir, fabricar y poseer armas y municiones de guerra.

Nadie podrá dentro de poblado llevar armas consigo, sin permiso de la autoridad. Este permiso no podrá extenderse a los casos de concurrencia a reuniones políticas, a elecciones, o a sesiones de asambleas o corporaciones públicas, ya sea para actuar en ellas o para presenciárlas.

Art. 49. Las corporaciones legítimas y públicas tienen derecho a ser reconocidas como personas jurídicas, y a ejecutar en tal virtud actos civiles y gozar de las garantías aseguradas por este Título, con las limitaciones generales que establezcan las leyes, por razones de utilidad común.

Art. 50. Las leyes determinarán lo relativo al estado civil de las personas, y los consiguientes derechos y deberes.

Art. 51. Las leyes determinarán la responsabilidad a que quedan sometidos los funcionarios públicos de todas clases, que atenten contra los derechos garantizados en este Título.

Art. 52. Las disposiciones del presente Título se incorporarán en el Código Civil como Título preliminar, y no podrán ser alteradas sino por acto reformativo de la Constitución.

Art. 40. A.L.N.º 3, 1910. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley, se aplicarán de preferencia las disposiciones

constitucionales.

TITULO IV

DE LAS RELACIONES ENTRE LA IGLESIA Y EL ESTADO.

Art. 53. La Iglesia Católica podrá libremente en Colombia administrar sus asuntos interiores y ejercer actos de autoridad espiritual y de jurisdicción eclesiástica, sin necesidad de autorización del Poder civil; y como persona jurídica, representada en cada Diócesis por el respectivo legítimo Prelado, podrá igualmente ejercer actos civiles, por derecho propio que la presente Constitución le reconoce.

Art. 54. El Ministerio sacerdotal es incompatible con el desempeño de cargos públicos. Podrán, sin embargo, los sacerdotes católicos ser empleados en la Instrucción o Beneficencia públicas.

Art. 55. Los edificios destinados al culto católico, los seminarios conciliares y las casas episcopales y curales, no podrán ser gravados con contribuciones ni ocupados para aplicarlos a otros servicios.

Art. 56. El Gobierno podrá celebrar convenios con la Santa Sede Apostólica a fin de arreglar las cuestiones pendientes y definir y establecer las relaciones entre la potestad civil y la eclesiástica.

TITULO V.

DE LOS PODERES NACIONALES Y DEL SERVICIO PUBLICO

Art. 57. Todos los Poderes públicos son limitados, y ejercen separadamente sus respectivas atribuciones.

Art. 58. La potestad de hacer leyes reside en el Congreso.

El Congreso se compone del Senado y la Cámara de Representantes.

Art. 59. El Presidente de la República es el Jefe del Poder Ejecutivo,

y lo ejerce con la indispensable cooperación de los Ministros. El Presidente y los Ministros, y en cada negocio particular el Presidente con el Ministro del respectivo ramo, constituyen el Gobierno.

Art. 60. Ejercen el Poder Judicial la Corte Suprema, los Tribunales Superiores de Distrito, y demás Tribunales y Juzgados que establezca la ley.

El Senado ejerce determinadas funciones judiciales. (3)

Art. 61. Ninguna persona o corporación podrá ejercer simultáneamente, en tiempo de paz, la autoridad política o civil y la judicial o la militar.

Art. 62. La ley determinará los casos particulares de incompatibilidad de funciones; los de responsabilidad de los funcionarios y modo de hacerla efectiva; las calidades y antecedentes necesarios para el desempeño de ciertos empleos, en los casos no previstos por la Constitución; las condiciones de ascenso y de jubilación; y la serie o clase de servicios civiles o militares que den derecho a pensión del Tesoro público.

Art. 63. No habrá en Colombia ningún empleo que no tenga funciones detalladas en ley o en reglamento.

Art. 64. Nadie podrá recibir dos sueldos del Tesoro público, salvo lo que para casos especiales determinen las leyes.

Art. 65. Ningún funcionario entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de sostener y defender la Constitución, y de cumplir con los deberes que le incumben.

Art. 66. Ningún colombiano que esté al servicio de Colombia, podrá, sin permiso de su Gobierno, admitir de Gobierno extranjero cargo o merced alguna, so pena de perder el empleo que ejerce.

Art. 67. Ningún colombiano podrá admitir de Gobierno extranjero empleo o comisión cerca del de Colombia, sin haber obtenido previamente del último la necesaria autorización.

TITULO VI

DE LA REUNION Y ATRIBUCIONES DEL CONGRESO

Art. 68. Substituido. //

Art. 69. A.L.N° 3, 1910. Las Cámaras Legislativas se reunirán por derecho propio cada año, el día 20 de julio, en la capital de la República. Si por cualquier causa no pudieren hacerlo en la fecha indicada, se reunirán tan pronto como fuere posible dentro del año.

Las sesiones del Congreso durarán noventa días, y podrán prorrogarse hasta por treinta más, si así lo disponen los dos tercios de los votos de una y otra Cámara.

Podrá también reunirse el Congreso por convocatoria del Gobierno, y entonces se ocupará en primer lugar en los negocios que éste someta a su consideración. En tal caso durará reunido por el tiempo que el mismo Gobierno determine.

Art. 69. Las Cámaras se abrirán y clausurarán pública y simultáneamente.

Art. 70. Las Cámaras no podrán abrir sus sesiones ni deliberar, con menos de una tercera parte de sus miembros.

El Presidente de la República en persona, o por medio de los Ministros, abrirá y cerrará las Cámaras.

Esta ceremonia no es esencial para que el Congreso ejerza legítimamente sus funciones.

Art. 71. Cuando llegado el día en que ha de reunirse el Congreso, no pudiese verificarse el acto por falta del número de miembros necesario, los individuos concurrentes, en Junta preparatoria o provisional, apremiarán a los ausentes con las penas que los respectivos Reglamentos establezcan; y se abrirán las sesiones luego que esté completo el número requerido.

Art. 72. Substituido. (4)

(4) V. A.L.N° 3, 1910, art. 8°, incorporado.

Art. 73. Por acuerdo mutuo las dos Cámaras podrán trasladarse a otro lugar, y en caso de perturbación del orden público podrán reunirse en el punto que ~~mayor~~ designe el Presidente del Senado.

Art. 74. Substituido.

Art. 9º, A.L.Nº 3, 1910. El Congreso se reunirá en un solo Cuerpo únicamente para dar posesión al Presidente de la República y para elegir Designados.

En tales casos el Presidente del Senado y el de la Cámara serán, respectivamente, Presidente y Vicepresidente del Congreso.

Art. 75. Toda reunión de miembros del Congreso que, con la mira de ejercer el Poder Legislativo, se efectúe fuera de las condiciones constitucionales, será ilegal; los actos que expida, nulos; y los individuos que en las deliberaciones tomen parte, serán castigados conforme a las leyes.

Art. 76. Corresponde al Congreso hacer las leyes.

Por medio de ellas ejerce las siguientes atribuciones:

- 1º. Interpretar, reformar y derogar las leyes preexistentes.
- 2º. Modificar la división general del territorio con arreglo a los artículos 5º. y 6º, y establecer y reformar, cuando convenga, las otras divisiones territoriales de que trata el artículo 7º. (5)
- 3º. Conferir atribuciones a las Asambleas departamentales.
- 4º. Derogada. (6)
- 5º. Variar, en circunstancias extraordinarias y por graves motivos de conveniencia pública, la actual residencia de los altos Poderes nacionales.
- 6º. Fijar para cada bienio, en sesiones ordinarias, el pie de fuerza.
- 7º. Crear todos los empleos que demande el servicio público, y fijar sus respectivas dotaciones.
- 8º. Regular el servicio público, determinando los puntos de que tra-

(5) V. art. 2º., A.L.Nº 3, 1910.

(6) Ley 41 de 1894.

ta el artículo 62.

9°. Conceder autorizaciones al Gobierno para celebrar contratos, negociar empréstitos, enajenar bienes nacionales y ejercer otras funciones dentro de la órbita constitucional.

10°. Revestir, pro tempore, al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias, cuando la necesidad lo exija o las conveniencias públicas lo aconsejen.

11°. Establecer las rentas nacionales y fijar los gastos de la administración.

En cada legislatura se votará el Presupuesto general de unas y otros.

En el Presupuesto no podrá incluirse partida alguna que no corresponda a un gasto decretado por ley anterior o a un crédito judicialmente reconocido.

12°. Reconocer la deuda nacional y arreglar su servicio.

13°. Decretar impuestos extraordinarios cuando la necesidad lo exija.

14°. Aprobar o desaprobar los contratos o convenios que celebre el Presidente de la República con particulares, compañías o entidades políticas, en los cuales tenga interés el fisco nacional, si no hubieren sido previamente autorizados, o si no se hubieren llenado en ellos las formalidades prescritas por el Congreso, o si algunas estipulaciones que contengan no estuvieren ajustadas a la respectiva ley de autorizaciones.

15°. Fijar la ley, peso, tipo y denominación de la moneda, y arreglar el sistema de pesas y medidas.

16°. Organizar el crédito público.

17°. Decretar las obras públicas que hayan de emprenderse o continuarse, y monumentos que deban erigirse.

18°. Fomentar las empresas útiles o benéficas dignas de estímulo y apoyo.

19°. Decretar honores públicos a los ciudadanos que hayan prestado grandes servicios a la Patria.

20°. Aprobar o desaprobar los Tratados que el Gobierno celebre con potencias extranjeras. (7)

21º. Conceder, por mayoría de dos tercios de los votos en cada Cámara, y por graves motivos de conveniencia pública, amnistías o indultos generales por delitos políticos. En el caso de que los favorecidos queden eximidos de la responsabilidad civil respecto de particulares, el Gobierno estará obligado a las indemnizaciones a que hubiere lugar.

22º. Limitar o regular la apropiación o adjudicación de tierras baldías.

Art. 77. Substituido.

Art. 10, A.L.Nº 3, 1910. El Congreso elegirá cada año dos Designados, primero y segundo, quienes ejercerán por su orden el Poder Ejecutivo a falta del Presidente.

Art. 78. Es prohibido al Congreso y a cada una de sus Cámaras:

- 1º. Dirigir excitaciones a funcionarios públicos.
- 2º. Inmiscuirse por medio de resoluciones o de leyes en asuntos que son de la privativa competencia de otros poderes.
- 3º. Dar votos de aplauso o censura respecto de actos oficiales.
- 4º. Exigir al Gobierno comunicación de las instrucciones dadas a Ministros diplomáticos, o informes sobre negociaciones que tengan carácter reservado.
- 5º. Decretar a favor de ninguna persona o entidad gratificaciones, indemnizaciones, pensiones, ni otra erogación que no esté destinada a satisfacer créditos o derechos reconocidos con arreglo a ley preexistente, salvo lo dispuesto en el artículo 76, inciso 18.
- 6º. Decretar actos de proscripción o persecución contra personas o corporaciones.

TÍTULO VII

DE LA FORMACION DE LAS LEYES

Art. 79. Las leyes pueden tener origen en cualquiera de las dos Cámaras, a propuesta de sus respectivos miembros o de los Ministros del

Despacho.

Art. 80. Exceptúanse de lo dispuesto en el artículo anterior:

1°. Aquellas leyes que deben tener origen únicamente en la Cámara de Representantes. (8)

2°. Las leyes sobre materia civil y procedimiento judicial, que no podrán ser modificadas sino en virtud de proyectos presentados por las comisiones permanentes especiales de una y otra Cámara, o por los Ministros del Despacho.

Art. 81. Ningún acto legislativo será ley sin los requisitos siguientes:

1°. Haber ~~ya~~ sido aprobado en cada Cámara en tres debates, en distintos días, por mayoría absoluta de votos.

2°. Haber obtenido la sanción del Gobierno.

Art. 82. No podrá cerrarse en segundo debate ni ser votada una ley en tercero, sin la asistencia de la mayoría absoluta de los individuos que componen la Cámara.

Art. 83. El Gobierno puede tomar parte en la discusión de las leyes por medio de los Ministros.

Art. 84. Los Magistrados de la Corte Suprema tienen voz en el debate de las leyes sobre materia civil y procedimiento judicial.

Art. 85. Aprobado un proyecto de ley por ambas Cámaras, pasará al Gobierno, y si éste lo aprobare también, dispondrá que se promulgue como ley.

Si no lo aprobare, lo devolverá con objeciones a la Cámara en que tuvo origen.

Art. 86. El Presidente de la República dispone del término de seis días para devolver con objeciones cualquier proyecto, cuando éste no conste de más de cincuenta artículos; de diez días, cuando el proyecto

(8) V. A. L. N°. 1, 1910, art. 20.

contenga de cincuenta y uno a doscientos artículos, y hasta de quince días cuando los artículos sean más de doscientos.

Si el Presidente, una vez transcurridos los indicados términos, según el caso, no hubiere ^{decretado} el acto legislativo con objeciones, no podrá dejar de sancionarlo y promulgarlo. Pero si las Cámaras se pusieren en receso dentro de dichos términos, el Presidente tendrá el deber de publicar el proyecto sancionado u objetado, dentro de los diez días siguientes a aquel en que el Congreso haya cerrado sus sesiones.

Art. 87. El proyecto de ley objetado en su conjunto por el Presidente, volverá en las Cámaras a tercer debate. El que fuere objetado sólo en parte, será reconsiderado en segundo debate con el único objeto de tomar en cuenta las observaciones del Gobierno.

Art. 88. El Presidente de la República sancionará, sin poder presentar nuevas objeciones, todo proyecto que, reconsiderado, fuere adoptado por dos tercios de los votos en una y otra Cámara.

Art. 89. Si el Gobierno no cumpliera el deber que se le impone de sancionar las leyes en los términos y según las condiciones que este Título establece, las sancionará y promulgará el Presidente del Congreso.

Art. 90. Exceptúase de lo dispuesto en el artículo 88 el caso en que el proyecto fuere objetado por inconstitucional. En este caso, si las Cámaras insistieren, el proyecto pasará a la Corte Suprema, para que ella, dentro de seis días, decida sobre su exequibilidad. El fallo afirmativo de la Corte obliga al Presidente a sancionar la ley. Si fuere negativo se archivará el proyecto. (9)

Art. 91. Los proyectos de ley que queden pendientes en las sesiones de un año no podrán ser considerados sino como proyectos nuevos, en otra Legislatura.

Art. 92. Al texto de las leyes precederá esta fórmula:

El Congreso de Colombia

DECRETA

(9) V. A. L. N° 2, 1910, art. 41.

TITULO VIII

DEL SENADO.

Art. 9°. Substituído ~.

"Art. 11, A.L.N° ", 1910. El Senado se compondrá de tantos miembros cuantos correspondan a la población de la República, a razón de uno por cada 120.000 habitantes y uno más por toda fracción no menor de 50.000. Por cada Senador se elegirán dos suplentes.

"Art. 12, ibídem. Los Senadores serán elegidos por Consejos Electorales.

"Art. 1°, ibídem. Corresponde a las Asambleas Departamentales elegir los miembros de los Consejos Electorales en la proporción de uno por cada 20.000 habitantes del respectivo Departamento.

"Art. 14, ibídem. La ley dividirá el territorio nacional en Circunscripciones senatoriales de uno o más Departamentos, de manera que puedan tener representación las minorías.

"Art. 15, A.L.N° ", 1910. La elección de Senadores no podrá recaer en individuos que pertenezcan al respectivo Consejo Electoral.

Art. 94. Para ser Senador se requiere ser colombiano de nacimiento y ciudadano no suspendido, tener más de treinta años de edad, y disfrutar de mil doscientos pesos, por lo menos, de renta anual, como rendimiento de propiedades o fruto de honrada ocupación.

Art. 95. Substituído.~

"Art. 16, A.L.N° ", 1910. Los Senadores durarán cuatro años en el ejercicio de sus funciones y son reelegibles indefinidamente.

~~Artículo~~

Art. 96. Corresponde al Senado conocer de las acusaciones que intente la Cámara de Representantes contra los funcionarios de que trata el artículo 102, inciso 4° (10)

Art. 97. En los juicios que se sigan ante el Senado, se observarán estas reglas:

1ª Siempre que una acusación sea públicamente admitida, el acusado quedará de hecho suspenso de su empleo.

2ª Si la acusación se refiere a delitos cometidos en ejercicio de funciones, o a indignidad por mala conducta, el Senado no podrá imponer otra pena que la de destitución del empleo, o la privación temporal o pérdida absoluta de los derechos políticos; pero se le seguirá juicio criminal al reo ante la Corte Suprema, si los hechos le constituyen responsable de infracción que merezca otra pena.

3ª. Si la acusación se refiere a delitos comunes, el Senado se limitará a declarar si hay o no lugar a seguimiento de causa, y en caso afirmativo pondrá al acusado a disposición de la Corte Suprema.

4ª. El Senado podrá cometer la instrucción de los procesos a una Diputación de su seno, reservándose el juicio y sentencia definitiva, que será pronunciada en sesión pública, por los dos tercios, a lo menos, de los votos de los Senadores que concurren al acto.

Art. 98. Son también atribuciones del Senado:

1ª Rehabilitar a los que hubieran perdido la ciudadanía. Esta gracia, según el caso, y circunstancias del que la solicite, podrá referirse únicamente al derecho electoral, o también a la capacidad para desempeñar determinados puestos públicos, o conjuntamente al ejercicio de todos los derechos políticos.

2ª. ~~Suprimir~~ (11)

(11) A. L. N° 10, 1906.- (Hoy corresponde al Senado nombrar tres Consejeros de Estado, Ley 60 de 1914).

3º Admitir o no las renunciaciones que hagan de sus empleos el Presidente y Vicepresidente de la República y el Designado.

4º Substituídas. (12)

5º Aprobar o desaprobado los grados militares que confiera el Gobierno desde Teniente-Coronel hasta el más alto grado en el Ejército o Armada.

6º Conceder licencia al Presidente de la República para separarse temporalmente, no siendo caso de enfermedad, o para ejercer el poder fuera de la capital.

7º Permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República.

8º Nombrar las comisiones demarcadoras de que trata el artículo 4º (1º)

9º Autorizar al Gobierno para declarar la guerra a otra Nación

"Art. 17, A.L. N° 3, 1910. Es atribución del Senado, además de las que le señala el art. 98 de la Constitución, elegir cuatro Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y sus suplentes, de ternas presentadas por el Presidente de la República.

TITULO IX

DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES

Art. 99. Substituídas. 4

"Art. 18, A.L. N° 3, 1910. La Cámara de Representantes se compondrá de tantos individuos cuantos correspondan a la población de la República, a razón de uno por cada 50.000 habitantes.

Por cada representante se elegirán dos suplentes.

Art. 100. Para ser elegido Representante se requiere ser ciudadano en ejercicio, no haber sido condenado por delito que merezca pena corporal, y tener más de veinticinco años de edad.

Art. 101 y 102. Substituídas.

"Art. 19, A.L. N° 3, 1910. Los Representantes durarán en el ejer-

(12) Art. 17, A. L. N° 3, 1910.

(13) V. A. L. N° 3, art. 2º

ciclo de sus funciones dos años, y serán reelegibles indefinidamente.

"Art. 20, A. L. N° 5, 1910. Son atribuciones de la Cámara de Representantes:

1° Examinar y fenecer definitivamente la cuenta general del Tesoro;
2° Iniciar la formación de las leyes que establezcan contribuciones u organicen el Ministerio público.

3° Elegir cinco Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y sus suplentes, de ternas que presente el Presidente de la República.

4° Acusar ante el Senado cuando hubiere justas causas, al Presidente de la República, a los Ministros del Despacho, al Procurador General de la Nación y a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y

5° Conocer de los denuncios y quejas que ante ella se presenten por el Procurador general de la Nación o por particulares contra los expresados funcionarios, y si puestan mérito, fundar en ellos acusación ante el Senado.

TITULO X

DISPOSICIONES COMUNES A AMBAS CAMARAS Y A LOS MIEMBROS DE ELLAS.

Art. 10°. Son facultades de cada Cámara:

1° Dictar su propio reglamento y establecer los medios preventivos y coercitivos necesarios para asegurar la concurrencia de los miembros de la Corporación;

2° Crear y proveer los empleos necesarios para el despacho de sus trabajos.

3° Organizar, en caso necesario, la policía interior del edificio en que celebra sus sesiones.

4° Examinar si las credenciales que cada miembro ha de presentar al tomar posesión del puesto, están en la forma prescrita por la ley.

5° Contestar, o abstenerse de hacerlo, a los mensajes del Gobierno.

6° Pedir a los Ministros los informes escritos o verbales que necesite, para el mejor desempeño de sus trabajos o para conocer los actos de

la Administración, salvo lo dispuesto en el artículo 78 (inciso 4°).

7° Nombrar comisiones que la representen en actos oficiales.

8° Designar oradores ante la otra Cámara en caso de desacuerdo de opiniones en la formación de una ley.

9° Aprobar todas las resoluciones que estime convenientes dentro de los límites señalados en el artículo 78.

Art. 104. Las sesiones de las Cámaras serán públicas, con las limitaciones a que haya lugar conforme a sus reglamentos.

Art. 105. Los individuos de una y otra Cámara representan a la Nación entera, y deberán votar consultando únicamente la justicia y el bien ~~del~~ común.

Art. 106. Los Senadores y los Representantes son inviolables por sus opiniones y votos en el ejercicio de su cargo. En el uso de la palabra sólo serán responsables ante la Cámara a que pertenezcan; podrán ser llamados al orden por el que presida la sesión y penados conforme al reglamento por las faltas que cometan.

Art. 107 a 109. Substituidos.

Art. 21, A. L. N° 1, 1910. Ningún miembro del Congreso podrá ser aprehendido ni llamado a juicio civil o criminal sin permiso de la Cámara a que pertenezca durante el período de las sesiones, cuarenta días ~~antes~~ ~~antes~~ antes y veinte días después de éstas. En caso de flagrante delito podrá ser detenido el delincuente y será puesto inmediatamente a disposición de la Cámara respectiva.

Art. 22, A. L. N° 1, 1910. El Presidente de la República, los Ministros del Despacho, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Procurador general de la Nación y los Gobernadores no podrán ser elegidos miembros del Congreso sino tres meses después de haber cesado en el ejercicio de sus funciones.

Tampoco podrá ser Senador o Representante ningún individuo por Departamento o Circunscripción electoral donde tres meses antes de las elecciones haya ejercido jurisdicción o autoridad civil, política o militar.

"Art. 23, A.L.Nº 3, 1910. El Presidente de la República no podrá conferir empleo a los Senadores y Representantes que hubieren ejercido el cargo durante el período de sus funciones, con excepción de los de Ministro del Despacho, Gobernador, Agente Diplomático y Jefe militar en tiempo de guerra.

La infracción de este precepto vicia de nulidad el nombramiento.

La aceptación de cualquiera de aquellos empleos por un miembro del Congreso produce vacante absoluta en la respectiva Cámara, excepto la del cargo de Ministro del Despacho que no la produce sino transitoria, durante el tiempo en que desempeñe el empleo.

Art. 110. Los Senadores y Representantes no pueden hacer por sí, ni por interpuesta persona, contrato alguno con la administración, ni admitir de nadie poder para gestionar negocios que tengan relación con el Gobierno de Colombia.

Art. 111. Cuando algún Senador o Representante se retire de las sesiones y fuere reemplazado por un suplente, corresponderán al primero los viáticos de marcha a la capital y al segundo los de regreso a su domicilio.

Art. 112. Ningún aumento de dietas ni de viáticos decretado por el Congreso, se hará efectivo sino después que hayan cesado en sus funciones los miembros de la Legislatura en que hubiere sido votado.

Art. 113. Substituído.

"Art. 24, A. L. N.º 3, 1910. En caso de falta de un miembro del Congreso, sea temporal o absoluta, le substituirá el respectivo suplente.

TITULO XI.

DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.

Art. 114. Substituído.

"Art. 25, A. L. N.º 4, 1910. El Presidente de la República será

elegido en un mismo día por el voto directo de los ciudadanos que tienen derecho a sufragar para Representantes, y para un período de cuatro años en la forma que determine la ley.

Art. 115. Para ser Presidente de la República se requieren las mismas calidades que para ser Senador.

Art. 116. El Presidente de la República electo tomará posesión de su destino ante el Presidente del Congreso, y prestará juramento en estos términos: "Juro a Dios cumplir fielmente la Constitución y leyes de Colombia".

Art. 117. Si por cualquier motivo el Presidente no pudiere tomar posesión ante el Presidente del Congreso, lo verificará ante el Presidente de la Corte Suprema y en defecto de ésta, ante dos testigos.

Art. 118. Corresponde al Presidente de la República en relación con el Poder Legislativo:

- 1°. Abrir y cerrar las sesiones ordinarias del Congreso.
- 2°. Convocarlo a sesiones extraordinarias por graves motivos de conveniencia pública y previo dictamen del Consejo de Estado.
- 3°. Presentar al Congreso al principio de cada Legislatura un mensaje sobre los actos de la Administración.
- 4°. Enviar por el mismo tiempo a la Cámara de Representantes el Presupuesto de rentas y gastos y la cuenta general del Presupuesto y del Tesoro.
- 5°. Dar a las Cámaras legislativas los informes que soliciten sobre negocios que no demanden reserva.
- 6°. Prestar eficaz apoyo a las Cámaras cuando ellas lo soliciten, poniendo a su disposición, si fuere necesario, la fuerza pública.
- 7°. Concurrir a la formación de las leyes, presentando proyectos por medio de los Ministros, ejerciendo el derecho de objetar los actos legislativos, y cumpliendo el deber de sancionarlos, con arreglo a esta Constitución.
- 8°. Dictar en los casos y con las formalidades prescritas en el ar-

título. 121, decretos que tengan fuerza legislativa. (14)

Art. 119. Corresponde al Presidente de la República en relación con el Poder Judicial.

1° y 2° Derogados. (15)

3°. Nombrar y remover los funcionarios del Ministerio Público. (16)

4°. Velar porque en toda la República se administre pronta y cumplida justicia, prestando a los funcionarios judiciales, con arreglo a las leyes, los auxilios necesarios para hacer efectivas sus providencias.

5°. Mandar acusar ante el Tribunal competente, por medio del respectivo Agente del Ministerio Público, o de un abogado fiscal nombrado al efecto, a los Gobernadores del Departamento y a cualesquiera otros funcionarios nacionales o municipales del orden administrativo o judicial, por infracción de la Constitución o las leyes, o por otros delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.

6°. Conmutar, previo dictamen del Consejo de Estado, la pena de muerte, por la inmediatamente inferior en la escala penal, y conceder indultos por delitos políticos y rebajas de penas por los comunes, con arreglo a la ley que regule el ejercicio de esta facultad. En ningún caso los indultos ni las rebajas de pena podrán comprender la responsabilidad que tengan los favorecidos respecto de particulares, según las leyes.

No podrá ejercer esta última atribución respecto de los Ministros del Despacho, sino mediante petición de una de las Cámaras Legislativas. (17)

Art. 120. Corresponde al Presidente de la República como suprema autoridad administrativa:

1°. Nombrar y separar libremente los Ministros del Despacho.

2°. Promulgar las leyes sancionadas, decretarlas y velar por su exacto

(14) V.A.L. N° 3, 1910, art. 33.

(15) Art. E. A.L. N° 3, 1910.-V. arts. 17 y 20 de dicho Acto.

(16) V. A.L. N° 3, 1910.-Arts. 54, ord. 3° y 62.

(17) V. A.L. N° 3, 1910, art. 3°.

cumplimiento.

3°. Ejercer la potestad reglamentaria expidiendo las Órdenes, decretos y resoluciones necesarias para la cumplida ejecución de las leyes.

4°. Nombrar y separar libremente los Gobernadores.

5°. Decogado (18)

6°. Nombrar las personas que ~~deban~~^{deban} desempeñar cualesquiera empleos nacionales cuya provisión no corresponda a otros funcionarios o corporaciones, según esta Constitución o leyes posteriores.

En todo caso el Presidente tiene la facultad de nombrar y remover libremente sus agentes.

7°. Disponer de la fuerza pública y conferir grados militares con las restricciones estatuidas en el inciso 5° del artículo 98, y con las formalidades de la ley que regule el ejercicio de esta facultad.

8°. Conservar en todo el territorio el orden público, y restablecerlo donde fuere perturbado.

9°. Dirigir cuando estime conveniente, las operaciones de la guerra como Jefe de los ejércitos de la República. Si ejerciere el mando militar fuera de la capital, quedará el Vicepresidente encargado de los otros ramos de la administración (19)

10°. Substituido. (20)

11°. Proveer a la seguridad exterior de la República, defendiendo la independencia y la honra de la Nación y la inviolabilidad del territorio; declarar la guerra con permiso del Senado, o hacerla sin tal autorización cuando urgiere repeler una agresión extranjera; y ajustar y ratificar tratados de paz, habiendo de dar después cuenta documentada a la próxima Legislatura.

12°. Permitir, en receso del Senado, y previo dictamen del Consejo de

(18) A.L. N° 10, 1905.

(19) V. A.L. N° 3, 1910, art. 26.

(20) Art. 34, A.L. N° 3, 1910.

Estado, el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República.

13°. Permitir con el dictamen del Consejo de Estado, la estación de buques de guerra extranjeros en aguas de la Nación.

14°. Cuidar de la exacta recaudación y administración de las rentas y caudales públicos, y decretar su inversión con arreglo a las leyes.

15°. Reglamentar, dirigir e inspeccionar la instrucción pública nacional.

16°. Celebrar contratos administrativos para la prestación de servicios y ejecución de obras públicas, con arreglo a las leyes fiscales y con la obligación de dar cuenta al Congreso en sus sesiones ordinarias.

17°. Organizar el Banco Nacional, y ejercer la inspección necesaria sobre los bancos de emisión y demás establecimientos de crédito, conforme a las leyes.

18°. Dar permiso a los empleados nacionales que lo soliciten, para admitir cargos o mercedes de Gobiernos extranjeros.

19°. Expedir cartas de ciudadanía conforme a las leyes.

20°. Conceder patentes de privilegio temporal a los autores de invenciones o perfeccionamientos útiles, con arreglo a las leyes.

21°. Ejercer el derecho de Inspección y vigilancia sobre instituciones de utilidad común, para que sus rentas se conserven y sean debidamente aplicadas, y que en todo lo esencial se cumpla con la voluntad de los fundadores.

"Art. 34. A. L. N° 3, 1910. Corresponde al Presidente de la República, como suprema autoridad administrativa, dirigir las relaciones diplomáticas y comerciales con las demás potencias o soberanos; nombrar los Agentes diplomáticos, recibir los Agentes respectivos y celebrar con potencias extranjeras Tratados y Convenios que se someterán a la aprobación del Congreso.

Art. 121. Substituido.

"Art. 33, A. L. N° 3, 1910. En caso de guerra exterior o de con-

comoción interior podrá el Presidente, con la firma de todos los Ministros, declarar turbado el orden público y en estado de sitio toda la República, y parte de ella. Mediante tal declaración el Gobierno tendrá, además de las facultades legales, las que, conforme a las reglas aceptadas por el Derecho de Gentes, rigen para la guerra entre naciones.

Los decretos que dentro de estos límites dicte el Presidente tendrán carácter obligatorio, siempre que lleven la firma de todos los Ministros.

El Gobierno no puede derogar las leyes por medio de los expresados decretos. Sus facultades se limitan a la suspensión de las que sean incompatibles con el estado de sitio.

El Gobierno declarará restablecido el orden público tan pronto como haya cesado la guerra exterior o se haya reprimido el alzamiento; y dejarán de regir los decretos de carácter extraordinario que haya dictado.

Serán responsables el Presidente y los Ministros cuando declaren turbado el orden público sin haber ocurrido el caso de guerra exterior o de conmoción interior; y lo serán también, lo mismo que los demás funcionarios, por cualquier abuso que hubieren cometido en el ejercicio de las facultades concedidas en el presente artículo.

Restablecido el orden público, el Gobierno convocará el Congreso y le pasará una exposición motivada de sus providencias.

En el caso de guerra exterior, el Gobierno convocará el Congreso en el decreto ~~que~~ en que declare turbado el orden público y en estado de sitio la República, para que se reúna dentro de los sesenta días siguientes, y si no lo convocare, podrá el Congreso reunirse por derecho propio.

Art. 122. Substituido.

"Art. 29. A.L. N° 3, 1910. El Presidente de la República, o quien haga sus veces, será responsable por sus actos y omisiones que violen la Constitución o las leyes.

"Art. 30. ibídem. Ningún acto del Presidente, excepto el de nombramiento y remoción de Ministros, tendrá valor ni fuerza alguna mientras no sea refrendado y comunicado por el Ministro del ramo respectivo, quien

por el mismo hecho se constituye responsable.

"Art. 31, A.L. N° 3, 1910. El Presidente de la República durante el período para que sea elegido, y el que se halle encargado del Poder Ejecutivo, mientras lo ejerza, no podrán ser perseguidos ni juzgados por delitos, sino en virtud de acusación de la Cámara de Representantes y cuando el Senado haya declarado que hay lugar a formación de causa.

"Art. 32, ibídem. El Presidente de la República, o quien haga sus veces, no podrá salir del territorio de la Nación durante el ejercicio de su cargo y un año después, sin permiso del Senado. La infracción de esta disposición, estando alguno de aquéllos en el ejercicio de su cargo, implica abandono del puesto.

Art. 123. El Senado concede licencia temporal al Presidente para dejar de ejercer el Poder Ejecutivo.

Por motivo de enfermedad el Presidente puede, por el tiempo necesario, dejar de ejercer el Poder Ejecutivo dando previo aviso al Senado, o, en receso de éste, a la Corte Suprema.

Arts. 124 y 125 Substituidos.

"Art. 26, A.L. N° 3, 1910. En caso de falta temporal del Presidente de la República, y en caso de falta absoluta mientras se verifica nueva elección, ejercerá el Poder Ejecutivo, por su orden, el primero o el segundo Designado que el Congreso elegirá cada año.

Cuando por cualquier causa no hubiere hecho el Congreso elección de Designados, conservarán el carácter de tales los anteriormente elegidos. A falta de Designados entrarán a ejercer el Poder Ejecutivo los Ministros, en el orden que establezca la ley, y en su defecto, los Gobernadores, siguiendo éstos el orden de proximidad de su residencia a la capital de la República.

Son faltas absolutas del Presidente:

Su muerte, su renuncia aceptada, la destitución decretada por sentencia, la incapacidad física permanente, y el abandono del puesto, declarados estos dos últimos por el Senado.

"Art. 27, A.L. N° 3, 1910. En caso de falta absoluta del Presidente de la República, el encargado del Poder Ejecutivo convocará a elecciones para dentro de los sesenta días siguientes.

El encargado del Poder Ejecutivo continuará ejerciéndolo cuando falte un año o menos para terminar el período, sin convocar a nuevas elecciones.

Art. 126. El encargado del Poder Ejecutivo tendrá misma preeminencia y ejercerá las mismas atribuciones que el Presidente, cuyas veces desempeña.

Art. 127. Substituido.

"Art. 28, ibidem. El Presidente de la República no es reelegible en ningún caso para el período inmediato.

No podrá tampoco ser elegido Presidente de la República ni Designado el ciudadano que a cualquier título hubiere ejercido el Poder Ejecutivo dentro del año inmediatamente anterior a la elección.

Arts. 128 a 131. ~~Derogados~~ Derogados. (21)

TITULO XII

DE LOS MINISTROS DEL DESPACHO.

Art. 132. El número, nomenclatura y precedencia de los distintos Ministerios o departamentos administrativos, serán determinados por la ley.

La distribución de los negocios, según sus afinidades, corresponden al Presidente de la República.

Art. 133. Para ser Ministro se requieren las mismas calidades que para ser Representante.

Art. 134. Los Ministros son órgano de comunicación del Gobierno con el Congreso; presentan a las Cámaras proyectos de ley; toman parte en los debates, y aconsejan al Presidente la sanción u objeción de los actos le-

(21) Art. 68, A. L. N° 5, 1905).

gislativos.

Cada Ministro presentará al Congreso, dentro de los primeros quince días de cada Legislatura, un informe sobre el estado de los negocios adscritos a su departamento, y sobre las reformas que la experiencia aconseje que se introduzcan.

Las Cámaras pueden requerir la asistencia de los Ministros.

Art. 135. Los Ministros, como Jefes superiores de Administración, pueden ejercer en ciertos casos la autoridad presidencial, según lo disponga el Presidente. Bajo su propia responsabilidad anulan, reforman o suspenden las providencias de los agentes inferiores.

TITULO XIII

DEL CONSEJO DE ESTADO

Arts. 136 a 141. Derogados. (22)

Art. 1º. A. L. N° 18, 1914. Habrá un Consejo de Estado compuesto de siete individuos, a saber: el primer Designado para ejercer el Poder Ejecutivo, que lo preside, y seis Vocales nombrados como lo determine la ley.

Los Ministros del Despacho tienen voz y no voto en el Consejo.

Art. 2º. Para ser Consejero de Estado se requieren las mismas condiciones que para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

Art. 3º. El cargo de Consejero es incompatible con cualquiera otro empleo público efectivo y con el ejercicio de la abogacía.

Art. 4º. Los Consejeros de Estado durarán cuatro años y se renovarán por mitad cada dos.

Art. 5º. La ley determinará el número de suplentes que deben tener los Consejeros, y las reglas relativas a su nombramiento, servicio y responsabilidad.

"Art. 6°. Son atribuciones del Consejo de Estado:

1°. Actuar como Cuerpo supremo consultivo del Gobierno, en asuntos de administración, debiendo ser necesariamente oído en todos aquellos que la Constitución y las leyes determinen.

Los dictámenes del Consejo no son obligatorios para el Gobierno.

2°. Preparar los proyectos de ley y de códigos que deban presentarse a las Cámaras Legislativas, y proponer las reformas convenientes en todos los ramos de la legislación.

3°. Desempeñar las funciones de Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo conforme a las reglas que señale la ley.

4°. Darse su propio reglamento, con la obligación de celebrar por lo menos tres sesiones en cada semana, y las demás que le señalen las leyes.

"Art. 7°. En los casos de que tratan el artículo 28 de la Constitución y el 33 del Acto Legislativo número 3 de 1910, el Gobierno debe oír previamente al Consejo de Estado para dictar las providencias de que tratan dichos artículos.

"Art. 8°. Quedan derogadas todas las disposiciones contrarias a las que preceden.

TITULO XIV

DEL MINISTERIO PUBLICO.

Art. 142. El Ministerio Público será ejercido, bajo la suprema dirección del Gobierno, por un Procurador General de la Nación, por los Fiscales de los Tribunales superiores de Distrito y por los demás funcionarios que designe la ley.

La Cámara de Representantes ejerce determinadas funciones fiscales.

Art. 143. Corresponde a los funcionarios del Ministerio Público de-

fender los intereses de la Nación, promover la ejecución de las leyes, sentencias judiciales y disposiciones administrativas; supervigilar la conducta oficial de los empleados públicos, y perseguir los delitos y contravenciones que turben el orden social.

Art. 144. El período de duración del Procurador General de la Nación será de tres años.

Art. 145. Son funciones especiales del Procurador General de la Nación:

1^a. Cuidar de que todos los funcionarios públicos al servicio de la Nación desempeñen cumplidamente sus deberes.

2^a. Acusar ante la Corte Suprema a los funcionarios cuyo juzgamiento corresponda ~~estar~~ a esta Corporación.

3^a. Cuidar de que los demás funcionarios del Ministerio Público desempeñen fielmente su encargo, y promover que se les exija la responsabilidad por los faltas que cometan.

4^a. Nombrar y remover libremente a los empleados de su inmediata dependencia.

Y las demás que le atribuya la ley.

TITULO XV.

DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.

Art. 146. Substituido.

"Art. 35, A. L. N^o. 3, 1910. La Corte Suprema de Justicia se compondrá de nueve Magistrados. La ley la dividirá en Salas, señalando a cada una de ellas los asuntos de que debe conocer separadamente, y determinará aquellos en que deba intervenir toda la Corte.

Art. 147. El empleo de Magistrado de la Corte Suprema será vitalicio, a menos que ocurra el caso de destitución por mala conducta. La ley definirá los casos de mala conducta, y los trámites y formalidades que deban

observarse para declararlos por sentencia judicial.

El Magistrado que capture empleo del Gobierno, dejará vacante su puesto. (23)

"Art. 36, A. L. N° 3, 1910. El período de los Magistrados de la Corte Suprema será de cinco años, y de cuatro el de los Magistrados de los Tribunales Superiores. Unos y otros podrán ser reelegidos indefinidamente."

Art. 148. Substituido.

"Art. 37, A.L.N° 3, 1910. El Presidente de la Corte Suprema será elegido cada año por la misma Corte.

Art. 149. Habrá siete suplentes que llenarán las faltas temporales de los Magistrados principales de la Corte. Cuando ocurra falta absoluta de alguno, por muerte, renuncia aceptada, vacante constitucional o destitución judicial, se procederá a nuevo nombramiento. (24)

Art. 150. Para ser Magistrado de la Corte Suprema se requiere ser colombiano de nacimiento y en ejercicio de la ciudadanía, haber cumplido treinta y cinco años de edad y haber sido Magistrado de alguno de los Tribunales Superiores de Distrito o de los antiguos Estados, o haber ejercido con buen crédito, por cinco años o lo menos, la profesión de abogado o el profesorado en Jurisprudencia en algún establecimiento público.

Art. 151. Son atribuciones de la Corte Suprema.

1ª. Conocer de los recursos de casación, conforme a las leyes.

2ª. Dirimir las competencias que se susciten entre dos o más Tribunales de Distrito.

3ª. Conocer de los negocios contenciosos en que tenga parte la Nación o que constituyan litigio entre dos o más Departamentos.

4ª. Substituida. (25)

(23) V. A. L. N° 3, 1910, art. 36.

(24) V. A. L. N° 3, 1910, arts. 17 y 20

(25) Art. 41, A.L. N° 3, 1910,

5°. Decidir, de conformidad con las leyes, sobre la validez o nulidad de las ordenanzas departamentales que hubieren sido suspendidas por el Gobierno, o denunciadas ante los Tribunales por los interesados como lesivas de los derechos civiles. (26)

6°. Juzgar a los altos funcionarios nacionales que hubieren sido acusados ante el Senado, por el tanto de culpa que corresponda, cuando haya lugar conforme al art. 97.

7°. Conocer de las causas que por motivos de responsabilidad, por infracción de la Constitución o leyes, o por mal desempeño de sus funciones, se promuevan contra los Agentes diplomáticos y consulares de la República, los Gobernadores, los Registrados de los Tribunales de Justicia, los Comandantes o Generales en Jefe de las fuerzas nacionales, y los Jefes superiores de las Oficinas principales de Hacienda de la Nación.

8°. Conocer de todos los negocios contenciosos de los Agentes diplomáticos acreditados ante el Gobierno de la Nación, en los casos previstos por el Derecho Internacional.

9°. Conocer de las causas relativas a navegación marítima o de ríos navegables que bañen el territorio de la Nación.

Y las demás que le señalen las leyes.

"Art. 41, A.L. N° 3, 1910. A la Corte Suprema de Justicia se le confía la guarda de la integridad de la Constitución. En consecuencia, además de las facultades que le confieren ésta y las leyes, tendrá la siguiente:

Decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los actos legislativos que hayan sido objetados como inconstitucionales por el Gobierno, o sobre todas las leyes o decretos acusados ante ella por cualquier ciudadano como inconstitucionales, previa audiencia del Procurador General de la Nación.

Art. 152. La Corte nombra y remueve libremente sus empleados subalternos.

Art. 153. Para facilitar a los pueblos la pronta administración de justicia, se dividirá el territorio nacional en Distritos Judiciales, y en cada Distrito habrá un Tribunal Superior, cuya composición y atribuciones determinará la ley.

Art. 154. Para ser Magistrado de los Tribunales Superiores se requiere ser ciudadano en ejercicio, tener treinta años de edad y haber, durante tres años por los menos, desempeñado funciones judiciales o ejercido la abogacía con buen crédito, o enseñado derecho en un establecimiento público.

Art. 38, A.L. N° 3, 1910. Los Magistrados de los Tribunales Superiores y los suplentes respectivos serán nombrados por la Corte Suprema, de ternas que presenten las respectivas Asambleas Departamentales.

Art. 39, ibidem. El Gobierno nombrará los Magistrados interinos de la Corte Suprema de Justicia, y los Gobernadores respectivos nombrarán los de los Tribunales Superiores, cuando las faltas de los principales no puedan ser llenadas por los suplentes.

Art. 155. Son comunes a los Magistrados de los Tribunales Superiores las disposiciones del art. 147. Dichos Magistrados serán responsables ante la Corte Suprema, en la forma que determine la ley, por el mal desempeño de sus funciones y por las faltas que comprometen la dignidad de su puesto.

Art. 156. La ley organizará los Juzgados inferiores y determinará sus atribuciones y la duración de los Jueces.

Art. 157. Para ser Juez se requiere ser ciudadano en ejercicio, estar versado en la ciencia del Derecho y gozar de buena reputación.

La segunda de estas calidades no es indispensable respecto de los Jueces municipales.

Art. 158. La responsabilidad de los Jueces inferiores se hará efectiva ante el respectivo Superior.

Art. 159. Los cargos del orden judicial no son acumulables; y son incompatibles con el ejercicio de cualquiera otro cargo retribuido, y con toda participación en el ejercicio de la abogacía.

Art. 160. Los Magistrados y los Jueces no podrán ser suspendidos en el ejercicio de sus destinos sino en los casos y con las formalidades que determinen las leyes, ni depuestos sino a virtud de sentencia judicial. Tampoco podrán ser trasladados a otros empleos sin dejar vacante su puesto.

No podrán suprimirse ni disminuirse los sueldos de los Magistrados y Jueces, de manera que la supresión o disminución perjudique a los que estén ejerciendo dichos empleos.

Art. 161. Toda sentencia deberá ser motivada.

Art. 162. La ley podrá instituir jurados para causas criminales.

Art. 163. Podrán crearse Tribunales de comercio.

Art. 164. Substituido.

Art. 42, A. L. N° 3, 1910. La ley establecerá la jurisdicción contencioso-administrativa.

TITULO XVI

DE LA FUERZA PUBLICA

Art. 165. Todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan, para defender la independencia nacional y las instituciones patrias.

La ley determinará las condiciones en que en todo tiempo eximen del servicio militar.

Art. 166. La Nación tendrá para su defensa un Ejército permanente. La ley determinará el sistema de reemplazos del Ejército, así como los ascensos, derechos y obligaciones de los militares.

Art. 167. Cuando no se fijare por ley expresa el pie de fuerza, subsistirá la base acordada por el Congreso para el precedente bienio.

Art. 168. La fuerza armada no es deliberante. No podrá reunirse sino

por orden de la autoridad legítima; ni dirigir peticiones, sino sobre asuntos que se relacionen con el buen servicio y la moralidad del ejército y con arreglo a las leyes de su instituto.

Art. 169. Los militares no pueden ser privados de sus grados, honores y pensiones, sino en los casos y del modo que determine la ley.

Art. 170. De los delitos cometidos por los militares en servicio activo y en relación con el mismo servicio, conocerán las Cortes marciales o Tribunales militares, con arreglo a las prescripciones del Código penal militar.

Art. 171 La ley podrá organizar y establecer una milicia nacional.

TITULO XVII

DE LAS ELECCIONES.

Arts. 172 y 173. Substituídos.

"Art. 43, A.L. N°. 3, 1910. Todos los ~~ciudadanos~~ ~~ciudadanos~~ eligen directamente Concejeros Municipales y Diputados a las Asambleas Departamentales.

"Art. 44, ibídem. Los ciudadanos que sepan leer y escribir o tengan una renta anual de trescientos pesos, o propiedad raíz de valor de mil pesos, elegirán directamente Presidente de la República y Representantes.

"Art. 45, ibídem. En toda elección en que se vote por más de dos individuos, aquélla se hará por el sistema del voto incompleto, o del suociente electoral, o del voto acumulativo, u otro cualquiera que asegure la representación proporcional de los partidos. La ley determinará la manera de hacer efectivo este derecho.

"Art. 46, ibídem. Compete a la ley hacer la demarcación de Distritos Electorales para la elección de Representantes, y a las Asambleas Departamentales hacer la demarcación de Distritos Electorales para la elección de Diputados, si el sistema electoral que se adopte exige la for-

nación de Distritos Electorales. En tal caso ninguno de éstos podrá elegir menos de tres Representantes o Diputados.

Arts. 174 a 178. Derogados (27)

Art. 179. El sufragio se ejerce como función constitucional. El que sufraga o elige no impone obligaciones al candidato, ni confiere mandato al funcionario electo.

Art. 180. Derogado (28)

Art. 181. La ley determinará lo demás concerniente a elecciones y escrutinios, asegurando la independencia de unas y otras funciones; definirá los delitos que menoscaban la verdad y libertad del sufragio y establecerá la competente sanción penal.

TITULO XVIII

DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL.

Arts. 182 a 201. Substituidos.

"Art. 47, A.L. N° 3, 1910. El territorio de la República se divide para la Administración Pública en Departamentos. Cada uno de éstos será regido por un Gobernador, que será a un mismo tiempo agente del Poder Ejecutivo y Jefe de la Administración Seccional.

"Art. 48, ibídem. Los Departamentos tendrán independencia para la administración de los asuntos seccionales, con las limitaciones que establece la Constitución.

"Art. 49, ibídem. Los Departamentos se dividen en Distritos Municipales. Para el mejor servicio administrativo la ley puede establecer divisiones provinciales u otras.

"Art. 50, ibídem. Los bienes y rentas de los Departamentos, así como los de los Municipios, son propiedad exclusiva, respectivamente, de cada uno de ellos, y gozan de las mismas garantías que las propiedades y

(27) Art. 58, A.L. N° 8, 1905.

(28) Art. D., A.L. N° 8, 1910.

rentas particulares. No podrán ser ocupadas estas propiedades sino en los mismos términos en que lo sea la propiedad privada. El Gobierno Nacional no podrá conceder exenciones de derechos departamentales ni municipales.

"Art. 51, A.L. N° 3, 1910. Los bienes, derechos, valores y acciones que por leyes o por decretos del Gobierno Nacional, o por cualquier otro título pertenecieron a los extinguidos Estados Soberanos, continuarán siendo propiedad de los respectivos Departamentos. Exceptúase los inmuebles que se especifican en el art. 202 de la Constitución.

"Art. 52 ibidem. Habrá en cada Departamento una corporación administrativa denominada Asamblea Departamental, que se reunirá cada año en la capital del Departamento.

"Art. 53, ibidem. Las Asambleas Departamentales serán de elección popular y se compondrán de los Diputados que correspondan a la población de los Departamentos, a razón de uno por cada 12.000 habitantes y uno por cada fracción que pase de 6.000. La ley podrá variar esta base de elección y fijar la época y duración de las sesiones.

"Art. 54, ibidem. Corresponde a las Asambleas:

1°. Reglamentar por medio de ordenanzas y de acuerdo con los preceptos constitucionales los establecimientos de instrucción primaria y secundaria y los de beneficencia, cuando fueren costeados con fondos del Departamento.

2°. Dirigir y fomentar por medio de ordenanzas y con los recursos propios del Departamento, las industrias establecidas y la introducción de otras nuevas, la importación de capitales extranjeros, la colonización de tierras pertenecientes al Departamento, la apertura de caminos y canales navegables, la construcción de vías férreas, la explotación de bosques de ~~la~~ propiedad del Departamento, la canalización de ríos, lo relativo a la policía local, la fiscalización de las rentas y gastos de los Distritos y cuanto se refiriera a los intereses seccionales

y al adelantamiento interno;

3°. Organizar las Contadurías o Tribunales de cuentas de los Departamentos, nombrar los Contadores o Magistrados correspondientes y presentar sendas ternas para el nombramiento de los Fiscales de los Tribunales y Juzgados Superiores y de sus respectivos suplentes;

4°. Crear y suprimir Municipios con arreglo a la base de la población que determine la ley, y segregar o agregar términos municipales, consultando los intereses locales. Si de un acto de agregación o segregación se quejare algún vecindario interesado en el asunto, la resolución definitiva corresponderá al Congreso;

5°. La creación y supresión de Circuitos de Notaría y de Registro y la fijación del número de empleados departamentales, sus atribuciones y sueldos; y

6°. Llenar las demás funciones que les señalen la Constitución y las leyes.

"Art. 55, A.L.N° 3, 1910. Las Asambleas votarán anualmente el Presupuesto de Rentas y Gastos del respectivo Departamento.

"Art. 56, ibídem. Las Asambleas Departamentales, para cubrir los gastos de administración que les correspondan, podrán establecer contribuciones con las condiciones y dentro de los límites que fije la ley.

"Art. 57, ibídem. Las ordenanzas de las Asambleas son obligatorias mientras no sean anuladas por la autoridad judicial en la forma que prescribe la ley.

"Art. 58, ibídem. Los particulares agraviados por actos de las Asambleas pueden recurrir al Tribunal competente, y éste, por pronta providencia, cuando se trate de un grave perjuicio, podrá suspender el acto denunciado.

"Art. 59, ibídem. Son atribuciones del Gobernador:

1°. Cumplir y hacer que se cumplan en el Departamento las órdenes del

Gobierno:

2°. Dirigir la acción administrativa en el Departamento, nombrando y separando sus agentes, reformando o revocando los actos de éstos y dictando las providencias necesarias en todos los ramos de la administración;

3°. Llevar la voz del Departamento y representarlo en asuntos políticos y administrativos;

4°. Auxiliar a la justicia como lo determine la ley.

5°. Ejercer el derecho de vigilancia y protección sobre las corporaciones oficiales y establecimientos públicos;

6°. Sancionar en la forma legal las ordenanzas que expidan las Asambleas Departamentales;

7°. Revisar los actos de las Municipalidades y los de los Alcaldes por motivos de inconstitucionalidad o ilegalidad, revocar los últimos y pasar los primeros a la autoridad judicial, para que ésta decida sobre su exequibilidad;

8°. Las demás atribuciones que por la ley le competan.

"Art. 60, A.L. N° 5, 1910. El Gobernador podrá requerir el auxilio de la fuerza armada, y el Jefe militar obedecerá sus instrucciones, salvo las disposiciones especiales que diere el Gobierno.

"Art. 61, ibídem. En cada Distrito Municipal habrá una Corporación de elección popular, que se designará con el nombre de Concejo Municipal.

"Art. 62, ibídem. Corresponde a los Concejos Municipales ordenar lo conveniente, por medio de acuerdos o reglamentos interiores, para la administración del Distrito; votar en conformidad con la Constitución, la ley y las ordenanzas expedidas por las Asambleas, las contribuciones y gastos locales; llevar el movimiento anual de la población; formar el censo civil cuando lo determine la ley; nombrar Jueces, Personeros y Tesoreros Municipales y ejercer las demás funciones que les sean señaladas.,

"Art. 63, A.L. N° 3, 1910. Los acuerdos de los Concejos Municipales son obligatorios mientras no sean anulados por la autoridad judicial.

"Art. 64, ibidem. Los particulares agraviados por actos de los Concejos Municipales podrán ocurrir al Juez, y éste por pronta providencia, suspenderá el acto denunciado por causa de inconstitucionalidad o ilegalidad.

"Art. 65, ibidem. En todo Municipio habrá un Alcalde que ejercerá las funciones de agente del Gobernador y que será Jefe de la Administración municipal.

TITULO XIX

DE LA HACIENDA

Art. 202. Pertenecen a la República de Colombia:

1° Los bienes, rentas, fincas, valores, derechos y acciones que pertenecían a la Unión Colombiana el 15 de abril de 1886.

2° Los baldíos, minas y salinas que pertenecían a los Estados, cuyo dominio recobra la Nación, sin perjuicio de los derechos constituidos a favor de terceros por dichos Estados, o a favor de éstos por la Nación a título de indemnización.

3° Las minas de oro, de plata, de platino y de piedras preciosas que existan en el territorio nacional, sin perjuicio de los derechos que por leyes anteriores hayan adquirido los descubridores y explotadores sobre algunas de ellas.

Art. 203. Son de cargo de la República las deudas exterior e interior, reconocidas ya, o que en lo sucesivo se reconozcan, y los gastos del servicio público nacional.

La ley determinará el orden y modo de satisfacer estas obligaciones.

Art. 204. Substituido.

"Art. 69, A.L. N° 3, 1910. Ninguna contribución indirecta ni anmen

to de impuesto de esta clase empezará a cobrarse sino seis meses después de promulgada la ley que establezca la contribución o el aumento.

Art. 205. Substituido.

"Ley 24 de 1898. Toda variación en la Tarifa de Aduanas que tenga por objeto disminuir los derechos de importación, comenzará a ser ejecutada noventa días después de sancionada la ley que la establezca y la rebaja se hará por décimas partes en los diez meses subsiguientes. Si la variación tiene por objeto el alza de los derechos, ésta se verificará por terceras partes en los tres meses siguientes a la sanción de la ley.

Esta disposición y la del artículo 204 de la Constitución, no limitan las facultades extraordinarias del Gobierno cuando de ellas esté revestido.

Art. 206. Cada Ministerio formará cada dos años el Presupuesto de gastos de su servicio, y lo pasará al del Tesoro, por el cual será redactado el general de la Nación, y sometido a la aprobación del Congreso, junto con el de rentas en que se propondrán los medios necesarios para cubrir las obligaciones.

Cuando el Congreso no vote la ley de Presupuestos para el correspondiente bienio económico, continuará vigente el Presupuesto del bienio anterior.

"Art. 66, A.L. N° 3, 1910. El Poder Ejecutivo formará anualmente el Presupuesto de Rentas y Gastos y lo presentará al Congreso en los primeros diez días de sus sesiones anuales.

"Art. 67. ibídem. En tiempo de paz no se podrá establecer contribución o impuesto que no figure en el Presupuesto de Rentas, ni hacer erogación del Tesoro que no se halle incluida en el de Gastos.

Art. 207. No podrá hacerse ningún gasto público que no haya sido decretado por el Congreso, por las Asambleas Departamentales, o las municipalidades; ni transferirse ningún crédito a un objeto no previsto en el respectivo Presupuesto.

Art. 208. Cuando haya necesidad de hacer un gasto imprescindible,

a juicio del Gobierno, estando en receso las Cámaras, y no habiendo partida votada o siendo ésta insuficiente, podrá abrirse al respectivo Ministerio un crédito suplemental o extraordinario.

Estos créditos se abrirán por el Consejo de Ministros, instruyendo para ello expediente y previo dictamen del Consejo de Estado.

Corresponde al Congreso legalizar estos créditos.

El Gobierno puede solicitar del Congreso créditos adicionales al Presupuesto de Gastos.

"Art. 68, A.L. n.º 3, 1910. El Poder Ejecutivo no podrá abrir los créditos suplementales y extraordinarios de que trata el artículo 208 de la Constitución, ni hacer traslaciones dentro del Presupuesto, sino en las condiciones y por los trámites que la ley establezca.

TITULO XX.

DE LA REFORMA DE ESTA CONSTITUCION Y ABROGACION DE LA ANTERIOR.

Art. 209. Substituído.

"Art. 70, A. L. N.º 3, 1910. La Constitución sólo podrá ser reformada por un Acto Legislativo discutido primeramente y aprobado por el Congreso en la forma ordinaria; y de igual modo considerado en la reunión anual subsiguiente, y aprobado en ésta, por ambas Cámaras, en segundo y tercer debates, por la mayoría absoluta de los individuos que componen cada una de ellas.

Art. 210. La Constitución de 8 de mayo de 1863, que cesó de regir por razón de hechos consumados, queda abolida; e igualmente derogadas todas las disposiciones de carácter legislativo contrarias a la presente Constitución.

TITULO XXI (Adicional.)

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

"Ar. A), A.L. N.º 3, 1910. Las fechas iniciales de los próximos

periodos de las corporaciones y funcionarios de que tratan la Constitución y el presente Acto reformativo de ella serán las siguientes:

La del Congreso Nacional, el 20 de julio de 1911;

La del Presidente de la República, el 7 de agosto de 1914.

La de las Asambleas Departamentales, el 1° de marzo de 1911;

La de la Corte Suprema de Justicia, el 1° de mayo de 1915. La presente Asamblea elegirá los dos Magistrados que completan el número de nueve, señalado por este Acto, y el periodo de todos terminará el 30 de abril de 1915;

La de los Tribunales Superiores, el 1° de mayo de 1911.

"Art. B), A.L. N°. 3, 1910. Los delitos castigados con pena de muerte en el Código Penal, lo serán en adelante con veinte años de presidio, mientras la ley dispone otra cosa.

"Art. C), ibidem. Mientras el Congreso y las Asambleas no hayan dictado las leyes y ordenanzas correspondientes, el Gobierno proveerá lo necesario en materia de división territorial electoral.

"Art. D), ibidem. Derógase el art. 180 de la Constitución, que establece Jueces de Escrutinio.

"Art. E), ibidem. Quedan derogadas las disposiciones de la Constitución Nacional de 5 de agosto de 1886, que sean contrarias al presente Acto Legislativo, y todos los Actos legislativos expedidos por la Asamblea Nacional anteriores al presente.

"Art. F), ibidem. Mientras se reúne el próximo Congreso, de acuerdo con el presente Acto reformativo de la Constitución, la actual Asamblea Nacional continuará en ejercicio de sus funciones, para el caso de que el Gobierno juzgue necesario convocarla.

"Art. G), ibidem. El presente Acto legislativo regirá desde su sanción para los altos poderes nacionales, y para la Nación después de treinta días de publicado en el "Diario Oficial".

-----ooo-----

A P É N D I C E N Ú M E R O 6. -----

**TRATADO DE 6 DE ABRIL DE 1914 entre Colombia y los Estados Unidos,
por el cual se reconoce y sanciona la independencia de Panamá (a)**

de Colombia

(a) La extraordinaria importancia que para la vida constitucional de Colombia tiene el Tratado incluído en este Apéndice, aconseja que forme parte de esta monografía, sobre todo si se tiene en cuenta que dicho Tratado afecta al territorio nacional.- Entre las distintas versiones que de este documento se han publicado, se reproduce aquí la que ofrece mayor garantía de autenticidad, e sea la incluída en el folleto titulado "Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, sobre el Proyecto de ley que aprueba las modificaciones introducidas por el Senado norteamericano al Tratado de 6 de abril de 1914, entre Colombia y los Estados Unidos de América.-Edición ordenada por el Senado.- Bogotá. Imprenta Nacional. 1921."

LEY 14 DE 1914.

(Junio 9)

per la cual se aprueba un Tratado.

El Congreso de Colombia

DECRETA :

Artículo único.- Apruébase el Tratado suscrito en esta Capital el día 6 de abril del corriente año, entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América:

"TRATADO

ENTRE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, PARA EL ARREGLO DE SUS DIFERENCIAS PROVENIENTES DE LOS ACONTECIMIENTOS REALIZADOS EN EL ISTMO DE PANAMA EN NOVIEMBRE DE 1903.

"La República de Colombia y los Estados Unidos de América, desean de remover todas las divergencias provenientes de los acontecimientos políticos ocurridos en Panamá en noviembre de 1903; restaur la cordial amistad que anteriormente caracterizó las relaciones entre los dos países y también definir y regularizar sus derechos e intereses respecto del Canal interoceánico que el Gobierno de los Estados Unidos está construyendo a través del Istmo de Panamá, han resuelto con tal propósito celebrar un Tratado, y en consecuencia han nombrado Plenipoten-

ciarios suyos:

"Su excelencia el Presidente de la República de Colombia, a Francisco José Urrutia, Ministro de Relaciones Exteriores; Marco Fidel Suárez, Primer Designado para ejercer el Poder Ejecutivo; Nicolás Esguerra, ex-Ministro de Estado; José María González Valencia, Senador; Rafael Uribe Uribe, Senador; y Antonio José Uribe, Presidente de la Cámara de Representantes; y Su Excelencia el Presidente de los Estados Unidos de América a Thaddeus Austin Thomson, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de los Estados Unidos de América ante el Gobierno de la República de Colombia.

"Quiénes después de haberse comunicado sus planes poderes respectivos, que fueron hallados en buena y debida forma, han convenido en lo siguiente:

"ARTICULO I

"El Gobierno de los Estados Unidos de América, deseoso de poner término a todas las controversias y diferencias con la República de Colombia provenientes de los acontecimientos que originaron la actual situación del Istmo de Panamá, en su propio nombre y en nombre del pueblo de los Estados Unidos, expresa sincero sentimiento por cualquier cosa que haya ocurrido ocasionada a interrumpir o a alterar las relaciones de cordial amistad que por tan largo tiempo existieron entre las dos naciones.

"El Gobierno de la República de Colombia, en su propio nombre y en nombre del Pueblo colombiano, acepta esta declaración en la plena seguridad de que así desaparecerá todo obstáculo para el restablecimiento de una completa armonía entre los dos países.

"ARTICULO II

"La República de Colombia gozará de los siguientes derechos respecto al Canal interoceánico y al ferrocarril de Panamá:

"1. La República de Colombia podrá transportar en todo tiempo por el Canal interoceánico sus tropas, materiales de guerra y buques de guerra, aun en caso de guerra entre Colombia y otro país, sin pagar

ningún derecho a los Estados Unidos.

"2. Los productos del suelo y de la industria colombiana que pasen por el Canal, así como los correos colombianos, estarán exentos de todo gravamen o derechos distintos de aquellos a que puedan estar sometidos los productos y correos de los Estados Unidos. Los productos del suelo y de la industria colombiana, tales como ganado, sal y víveres, serán admitidos en la Zona del Canal, así como en las islas y tierra firme ocupadas o que se ocupen por los Estados Unidos como auxiliares y accesorias de la empresa, sin pagar otros derechos o impuestos que los que deban pagarse por productos similares de los Estados Unidos.

"3. Los ciudadanos colombianos que atraviesen la zona del Canal quedarán exentos de todo peaje, impuesto o derecho a que no estén sujetos los ciudadanos de los Estados Unidos, con la condición de que presenten la prueba competente de su nacionalidad.

"4. Durante la construcción del Canal interoceánico y después siempre que esté interrumpido el tráfico por el Canal, o que por cualquiera otra causa sea necesario hacer uso del ferrocarril, las tropas, materiales de guerra, productos y correos de la República de Colombia arriba mencionados serán transportados, aun en caso de guerra entre Colombia y otro país, por el ferrocarril entre Ancon y Cristóbal, o por cualquiera otro ferrocarril que lo sustituya, pagando solamente los mismos impuestos y derechos a que estén sujetos las tropas, materiales de guerra, productos y correos de los Estados Unidos. Los oficiales, agentes y empleados del Gobierno de Colombia, mediante la comprobación de su carácter oficial o de su empleo, tendrán también derecho a ser transportados por dicho ferrocarril en las mismas condiciones de los oficiales, agentes y empleados del Gobierno de los Estados Unidos. Las disposiciones de este parágrafo no serán aplicables, sin embargo, en caso de guerra entre Colombia y Panamá.

"5. El carbón, el petróleo y la sal marina que se produzcan en Colombia y pasen de la costa atlántica de Colombia a cualquier puerto colombiano en la costa del Pacífico, y viceversa, se transportarán en

el dicho ferrocarril, libres de todo gravamen, excepte el coste efectivo del transporte y descarga y descarga en los trenes, coste que en ningún caso podrá ser superior a la mitad del plete ordinario que se cobre por productos similares de los Estados Unidos, que pasen por el ferrocarril en tránsito de un puerto a otro de los Estados Unidos.

"ARTICULO III.

"Los Estados Unidos de América convienen en pagar a la República de Colombia, dentro de los seis meses siguientes al canje de las ratificaciones de este Tratado, la suma de veinticinco millones de pesos (25. 000.000) oro, en moneda de los Estados Unidos.

"ARTICULO IV.

"La República de Colombia reconoce a Panamá como nación independiente y conviene en que los límites entre los dos Estados sean, tomando por base la Ley colombiana de 9 de junio de 1855, los siguientes: del Cabo Tiburón a las Cabeceras del Río de la Miel, siguiendo la cordillera por el cerro de Gandí a la sierra de Chugargán y de Malí, a bajar por los cerros de Nigue a los altos de Aspave, y de allí a un punto sobre el Pacífico, equidistante de Cocalito y la Ardita.

"En consideración de este reconocimiento, el Gobierno de los Estados Unidos, tan pronto como sean canjeadas las ratificaciones de este tratado, dará los pasos necesarios para obtener del Gobierno de Panamá el envío de un Agente, debidamente acreditado, que negocie y concluya con el Gobierno de Colombia un Tratado de paz y amistad, que tenga por objeto tanto el establecimiento de relaciones diplomáticas regulares entre Colombia y Panamá, como el arreglo de todo lo relativo a obligaciones pecuniarias entre los dos países, de acuerdo con precedentes y principios jurídicos reconocidos.

"ARTICULO V.

"Este Tratado se aprobará y ratificará por las Altas Partes Contratantes, de conformidad con sus respectivas leyes, y las ratificaciones se canjearán en la ciudad de Bogotá, lo más pronto que fuere posible."

"En fe de lo cual, los dichos Plenipotenciarios han firmado en doble ejemplar el presente Tratado y le han puesto sus respectivos sellos."

"Hecho en la ciudad de Bogotá el día seis de abril del año de Nuestro Señor de mil novecientos catorce."

"(L.S.). Firmado: FRANCISCO JOSE URRUTIA.
 "(L.S.). Firmado: MARCOS FID L SUAREZ.
 "(L.S.). Firmado: NICOLAS ESGUERRA.
 "(L.S.). Firmado: JOSE M. GONZALEZ VALENCIA.
 "(L.S.). Firmado: RAFAEL URIBE URIBE.
 "(L.S.). Firmado: ANTONIO JOSE URIBE.
 "(L.S.). Firmado: THADDEUS AUSTIN THOMSON."

"Poder Ejecutivo - Bogotá, abril 6 de 1914."

"Aprobado.- Sométase a la consideración del Congreso para los fines constitucionales."

"(Firmado) CARLOS B. RESTREPO."

"El Ministro de Relaciones Exteriores."

"(Firmado) FRANCISCO JOSE URRUTIA."

"Dada en Bogotá a nueve de junio de mil novecientos catorce."

"El Presidente del Senado,"

"PEDRO ANTONIO MOLINA."

El Presidente de la Cámara de Representantes,
 ANTONIO JOSE URIBE.

El Secretario del Senado,
 CARLOS TAMAYO.

El Secretario de la Cámara de Representantes,
 FERNANDO RESTREPO BRICEÑO.

338

Poder Ejecutivo.- Bogotá junio 9 de 1914.

Publiquese y ejecútese,

CARLOS M. RESTREPO.

El Ministro de Relaciones Exteriores,

FRANCISCO JOSE URRUTIA.

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN EL PRECEDENTE TRATADO.

El Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia presentó al Senado de la República, en sesión del día 20 de agosto de 1921 un Proyecto de Ley por virtud del cual se modifica la Ley 14 de 1914 en el sentido de aprobar las modificaciones introducidas por el Senador norteamericano al Tratado de 6 de abril del mismo año, celebrado entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América.

Dicho Proyecto de Ley fué aprobado en primer debate el día 22 del mismo mes de agosto, y pasó a la Comisión de Relaciones Exteriores, la cual formuló su propuesta, para segundo debate, en la sesión del día 6 de octubre de 1921, en los siguientes términos:

"PLIEGO DE MODIFICACIONES.

"PROYECTO DE LEY

por la cual se modifica la número 14 de 1914.

"El Congreso de Colombia

vistas las modificaciones introducidas por el Senado de los Estados

Unidos de América al Tratado que se celebró el día 6 de abril de 1914, entre la República de Colombia y la de los Estados Unidos de América, modificaciones que a la letra dicen:

"El Senado de los Estados Unidos
"RESUELVE:

"Que el Senado recomienda y consiente en que se ratifique el Tratado firmado en Bogotá el ~~12~~ 6 de abril de 1914, entre los Estados Unidos y la República de Colombia, para el arreglo de sus diferencias provenientes de los acontecimientos realizados en el Istmo de Panamá en noviembre de 1903, con las modificaciones siguientes:

"1°. En el preámbulo se suprimirán las palabras "está construyendo," y en su lugar se insertarán las palabras "ha construido."

"2°. Suprímase todo el Artículo I, que dice:

"El Gobierno de los Estados Unidos, de América, deseoso de poner término a todas las controversias y diferencias con la República de Colombia provenientes de los acontecimientos que originaron la actual situación del Istmo de Panamá, en su propio nombre y en nombre del pueblo de los Estados Unidos, expresa sincero sentimiento por cualquier cosa que haya ocurrido ocasionada a interrumpir o alterar las relaciones de cordial amistad que por tan largo tiempo existieron entre las dos naciones.

"El Gobierno de la República de Colombia, en su propio nombre y en nombre del Pueblo colombiano, acepta esta declaración en la plena seguridad de que así desaparecerá todo obstáculo para el restablecimiento de una completa armonía entre los dos países."

"3°. El Artículo II quedará como Artículo I.

"4°. En el párrafo primero del Artículo II del texto original se suprimirá el punto y coma después de las palabras "ferrocarril de

Panamá," y en su lugar se insertará una coma y las palabras siguientes: "cuyo título adquieren ahora entera y absolutamente los Estados Unidos de América sin gravamen o indemnización alguna."

"5ª. En la cláusula primera del Artículo II del Tratado se suprimirá la frase "aun en caso de guerra entre Colombia y otro país,".

"6ª. En la cláusula cuarta del Artículo II del texto original del Tratado, se suprimirán las palabras "Durante la construcción del Canal interoceánico y después siempre que," y en su lugar se insertará, "siempre que". Después de la locución "serán transportados" se suprimirá lo siguiente: "aun en caso de guerra entre Colombia y otro país"; y se suprimirá la última frase, concebida así: "Las disposiciones de este párrafo no serán aplicables, sin embargo, en caso de guerra entre Colombia y Panamá".

"7ª. En la cláusula quinta del Artículo II del texto original del Tratado, después de las palabras "que se produzca en Colombia", se insertarán "para el consumo colombiano"; después de las palabras, "viceversa se transportarán," se pondrá una coma y lo siguiente: "siempre que el tráfico por el Canal esté interrumpido."

"8ª. El Artículo III quedará como Artículo II.

"9ª. En el Artículo III del texto original del Tratado, antes de las palabras "Estados Unidos de América," deben insertarse las de "el Gobierno de"; después de la palabra "pagar", debe insertarse "en la Ciudad de Washington"; se suprimirán, después de la palabra "Colombia" las palabras "dentro de los seis meses siguientes al canje de las ratificaciones de este Tratado" y el punto después de la palabra "oro", y se insertará una coma y lo siguiente: "La suma de cinco millones de dólares se pagará dentro de los seis meses subsiguientes al canje de las ratificaciones del presente Tratado, y a contar de la fecha de este pago se pagarán los veinte millones de dólares restantes en cuatro cuotas anuales de cinco millones de dólares cada uno."

"10. El Artículo IV quedará como Artículo III.

"11. El Artículo V quedará como Artículo IV.

"Resuelto además: que el Senado recomienda y consiente en que se

ratifique el tratado firmado por los Plenipotenciarios de los Estados Unidos y la República de Colombia el 6 de abril de 1914 para el arreglo de las diferencias entre los Estados Unidos y la República de Colombia, con tal de que haga parte de dicho Tratado y de su ratificación el que la estipulación contenida en la cláusula primera del Artículo I del Tratado, por la cual se concede a la República de Colombia libre paso por el Canal de Panamá para sus tropas, materiales de guerra y buques de guerra, no se aplicará en caso de guerra entre Colombia y otro país.

D E C R E T A :

Artículo 1°. Apruébanse las preinsertas modificaciones. En consecuencia el Tratado quedará así:

"TRATADO
ENTRE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
PARA EL ARREGLO DE SUS DIFERENCIAS PROVENIENTES DE LOS ACONTECIMIENTOS
REALIZADOS EN EL ISTMO DE PANAMA EN NOVIEMBRE DE 1903"

"La República de Colombia y los Estados Unidos de América, deseando remover todas las divergencias provenientes de los acontecimientos políticos ocurridos en Panamá en noviembre de 1903; restaurar la cordial amistad que anteriormente caracterizó las relaciones entre los dos países y también definir y regularizar sus derechos e intereses respecto del Canal interoceánico que el Gobierno de los Estados Unidos ha construido a través del Istmo de Panamá, han resuelto con tal propósito celebrar un Tratado, y en consecuencia han nombrado plenipotenciarios su-

yos:

"Su Excelencia el Presidente de la República de Colombia, a Francisco José Urrutia, Ministro de Relaciones Exteriores; Marco Fidel Suárez, Primer Designado para ejercer el Poder Ejecutivo; Nicolás Esguerra, ex-Ministro de Estado; José María González Valencia, Senador; Rafael Uribe Uribe, Senador; Antonio José Uribe, Presidente de la Cámara de Representantes; y

"Su Excelencia el Presidente de los Estados Unidos de América a Thaddeus Austin Thomson, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de los Estados Unidos de América ante el Gobierno de la República de Colombia:

"Quisnes, después de haberse comunicado sus plenos poderes respectivos, que fueron hallados en buena y debida forma, han convenido lo siguiente:

"ARTICULO I

"La República de Colombia gozará de los siguientes derechos respecto al Canal interoceánico y al ferrocarril del Panamá, cuyo título adquirirá ahora entera y absolutamente los Estados Unidos de América sin gravamen o indemnización alguna.

"1. La República de Colombia podrá transportar en todo tiempo por el Canal interoceánico sus tropas, materiales de guerra y buques de guerra sin pagar ningún derecho a los Estados Unidos.

"2.-Los productos del suelo y de la industria colombiana que pasen por el Canal, así como los correos colombianos, estarán exentos de todo gravamen o derechos distintos de aquellos a que puedan estar sometidos los productos y correos de los Estados Unidos. Los productos del suelo y de la industria colombiana, tales como ganado, sal y víveres, serán admitidos en la zona del Canal, así como en las islas o tierra firme ocupadas o que se ocupen por los Estados Unidos como auxiliares o accesorios de la empresa, sin pagar otros derechos por impuestos que los que deban pagarse por productos similares de los Estados Unidos.

"3. Los ciudadanos colombianos que atraviesen la zona del Canal que-

darán exentos de todo peaje, impuesto o derecho a que no estén sujetos los ciudadanos de los Estados Unidos, con la condición de que presenten la prueba competente de su nacionalidad.

"4. Siempre que esté interrumpido el tráfico por el Canal o que por cualquiera otra causa sea necesario hacer uso del ferrocarril, las tropas, materiales de guerra, productos y correos de la República de Colombia arriba mencionados, serán transportados por el ferrocarril entre el Ancón y Cristóbal, o por cualquier otro ferrocarril que lo sustituya, pagando solamente los mismos impuestos y derechos a que están sujetas las tropas, materiales de guerra, productos y correos de los Estados Unidos. Los oficiales, agentes y empleados del Gobierno de Colombia, mediante la comprobación de su carácter oficial o de su empleo, tendrán también derecho a ser transportados por dicho ferrocarril en las mismas condiciones de los oficiales, agentes y empleados de los Estados Unidos.

"El carbón, el petróleo y la sal marina que se produzcan en Colombia para el consumo colombiano, y pasen de la costa atlántica de Colombia a cualquier puerto colombiano en la costa del Pacífico, y viceversa, siempre que el tráfico por el Canal esté interrumpido, se transportarán en dicho ferrocarril, libres de todo gravamen, excepto el coste efectivo del transporte y de carga y descarga en los trenes, coste que en ningún caso podrá ser superior a la mitad del plete ordinario que se cobre por productos similares de los Estados Unidos, que pasen por el ferrocarril en tránsito de un puerto a otro de los Estados Unidos.

"ARTICULO II

"El Gobierno de los Estados Unidos de América conviene en pagar en la Ciudad de Washington a la República de Colombia la suma de veinticinco millones de dólares, oro, en moneda de los Estados Unidos, así: la suma de cinco millones de dólares se pagará dentro de los seis meses subsiguientes al canje de las ratificaciones del presente Tratado, y a contar de la fecha de este pago, se pagarán los veinte millones restan-

tes de dólares en cuatro contados anuales de cinco millones de dólares cada uno.

"ARTICULO III.

"La República de Colombia reconoce a Panamá como nación independiente y conviene en que los límites entre los dos Estados sean, tomando por base la Ley colombiana de 9 de junio de 1855, los siguientes: del Cabo Tiburón a las Cabeceras del Rio de la Miel, y siguiendo la cordillera por el cerro de Gandi a la sierra de Ohugargán y de Mali, a bajar por los cerros de Nigue a los Altos de Aspave, y de allí una línea recta a un punto sobre el Pacífico, equidistante entre Cocalito y la Ardita.

"En consideración de este reconocimiento, el Gobierno de los Estados Unidos, tan pronto como sean canjeadas las ratificaciones de este Tratado, dará los pasos necesarios para obtener del Gobierno de Panamá el envío de un Agente, debidamente acreditado, que negocie y concluya con el Gobierno de Colombia un Tratado de paz y amistad, que tenga por objeto tanto el establecimiento de relaciones diplomáticas regulares entre Colombia y Panamá, como el arreglo de todo lo relativo a obligaciones pecuniarias entre los dos países, de acuerdo con precedentes y principios jurídicos reconocidos.

"ARTICULO IV.

"Este Tratado se aprobará y ratificará por las Altas Partes Contratantes, de conformidad con sus respectivas leyes, y las ratificaciones se canjearán en la ciudad de Bogotá, lo más pronto posible."

Artículo 2º. Es bien entendido que al adoptar la modificación introducida a la cláusula 1ª del Artículo I del Tratado de 6 de abril de 1914, y la resolución final del Senado de los Estados Unidos que a

ella se refiere, el Congreso de Colombia lo hace en la inteligencia de que dicha modificación no priva a Colombia el derecho de pasar por el Canal interoceánico sus tropas, materiales de guerra y buques de guerra, en caso de guerra con otro país, siempre que pague al Gobierno de los Estados Unidos de América los impuestos que por derecho de tránsito se establezcan, conforme a la tarifa general prefijada al efecto, todo lo cual armoniza con la explícita declaración hecha por el Departamento de Estado, en nota de 3 del mes de octubre de 1921, dirigida a la Legación colombiana de Washington, nota que deberá mencionarse en el canje de las ratificaciones del Tratado.

Dada, etc.

Propuesto por los infrascritos miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República, en la sesión del día 6 de octubre de 1921.

ANTONIO JOSE URIBE.- ENRIQUE OLAYA HERRERA.- MIGUEL ARROYO DIEZ.- JORGE VELEZ.- LUIS SAMPER SORDO.- MIGUEL JIMENEZ LOPEZ.- ALEJANDRO GARCIA.

Señalar

noticia publicada en la página 24, del número 114 de la revista "España y América", de Cádiz, correspondiente a febrero de 1922, el Senado de Colombia aprobó ya las modificaciones del Tratado.

-----0000-----

A P É N D I C E N Ú M E R O 7.

REPERTORIO BIBLIOGRÁFICO.-

I.- Obras generales.

- A. - Sobre derecho constitucional. (Teoría.- Doctrinas políticas.)
- B. - Sobre Colombia. (Geografía, Geología, Historia, Industria, etc., comprendiendo, no sólo los libros que tratan ~~de~~ exclusivamente de Colombia, sino también aquellos en que Colombia constituye una parte importante, o un capítulo interesante para el conocimiento del país.)

II.- Obras especiales.

Sobre Derecho constitucional de Colombia. (Textos legales y documentos interesantes de carácter político, comprendiendo en esta parte, como en el apartado B.) de la anterior, no sólo los libros que tratan exclusivamente de Colombia, sino también aquellas colecciones de textos legales en que se insertan o reproducen íntegramente alguna o algunas constituciones políticas colombianas, entre las de otros países.)

I.- Obras generales.A.- Sobre derecho constitucional.

(Teoría.- Doctrinas políticas.)

---ooo---

- AMRENS.- "Dottrina generale delle State."
 ALCAIA GALIANO (A.).- "Lecciones de Derecho politico constitucional". (Paris, 1843.)
 ANCIILLON.- "De l'esprit des constitutions politiques". (Paris, 1850)
 ARISTOTELES.- "Politica".
 ARTUR (E.).- "De la separation des pouvoirs et de la separation des fonctions de juger et d'administrer". (Paris, 1905.)
 ARROYO DE ALDAMA.- "El sistema constitucional en las diferentes formas de gobierno". (Madrid, 1901.)
 AUERY (D.).- "Institutions politiques et sociales." (Paris, 1905.)
 AZCARATE (Sumersindo.).- "El régimen parlamentario". (Madrid, 1892.)
 AZCARATE (G. de).- "Tratados de politica.- Resúmenes y juicios criticos". (Madrid, 1892.)
 BACON.- "Maxims politiques."
 BARR (O.).- "Lo State guiridice".
 BALICKI (S.).- "L'Etat comme organisation coercitive de la société politique."
 BARTHELEMY (Joseph).- "Democratie et politique étrangère". (Paris, 1917.)
 BAUMANN (A.).- "Le programme politique du positivisme". (Paris, 1904.)
 BEIHEL (J.).- "Geschichte der Staatswissenschaft". (Stuttgart, 1882.)
 BIELEFELD.- "Institutions politiques".
 BLUNTSCHLI (J. K.).- "Geschichte der neuen Staatswissenschaften. Allgemeines Staatsrecht und Politik". (München, 1881.)
 BORGEAUD.- "Etablissement et revision des constitutions en Amérique et en Europe" (Paris, 1893.)
 BOUSQUET.- "Revisions des Constitutions". (Paris, 1891).

- BOUTURY (Emile).-- "Études politiques". (Paris, 1907.)
- BORNHAKE (Conrad).-- "Allgemeine Staatslehre". (Berlin, 1909.)
- BROOKS (Robert G.).-- "Corruption in American politics and life". (New York, 1910.)
- BROUGHAM.-- "Political Philosophy".
- BRUNIALTI.-- "El Diritto costituzionale e la politica nella scienza e nelle istituzioni."
- BRUNIALTI (A.).-- "Formazione e revisione delle Costituzioni moderne".
- BRYCE (James).-- "La République Américaine". (Paris, 1901.)
- BUGHEZ (P. Y. B.).-- "Traité de politique et science sociale". (Paris, 1886.)
- BURGESS (J.W.).-- "Ciencia política y derecho constitucional comparado." (Madrid, 1898.)
- CASANOVA.-- "Del Diritto costituzionale". (Firenze, 1878.)
- CONSTANT.-- "Cours de politique constitutionnelle". (Bruxelles, 1837.)
- COSTA (Joaquín).-- "Estudios jurídicos y políticos." (Madrid, 1884.)
- QUESTA.-- "Elementos de derecho político". (Salamanca, 1887.)
- DEALEY (James Quayle).-- "The development of the State". (New York, 1909.)
- DICEY (A.V.).-- "Law of the Constitution." (London, 1915.)
- DODD (W.F.).-- "The revision and Amendment of State constitutions." (Baltimore, 1910.)
- DONOSO CORTÉS (J.).-- "Lecciones de Derecho político". (Madrid, 1837.)
- DUGUIT (Léon).-- "Manuel de Droit Constitutionnel". (Paris, 1918.)
- DUGUIT (Léon).-- "L'Etat, le droit objectif et la loi positive, les gouvernants et les agents." (Paris, 1901-1903.)
- DUGUIT (Léon).-- "Les transformations du Droit public." (Paris, 1913.)
- DUNNING (W.A.).-- "A History of political theories.- Ancient and medieval." (New-York, 1903.)
- ELORRIETA (T.).-- "Tratado elemental de derecho político comparado.- Teoría general del Estado moderno y su Derecho constitucional". (Madrid, 1916.)
- ESMEIN (A.).-- "Éléments de droit constitutionnel français et comparé." (Paris, 1909.)

- PAGUET (Emile).-- "Politiques et moralistes du dix-neuvième siècle." (Paris, 1899-1900.)
- FAIRFISH DODD (Walter).-- "Modern Constitutions," (Chicago, 1909.)
- FELLINCH (George).-- "La déclaration des droits de l'homme et du citoyen.-- Contribution à l'histoire du droit constitutionnel moderne". (Paris, 1902.)
- FELLINCH (G.) "Teoría general del Estado". (Traducción y prólogo de F. de los Ríos Urruti.) (Madrid, 1914.)
- FREEMAN.-- "Le State Federale."
- FULLER (R.H.).-- "Government by the People". (New-York, 1908.)
- GALEOT (A.L.).-- "Les systèmes sociaux et l'organisation des nations modernes." (Paris, 1920.)
- GARCIA CALDERON (F.) "Democratías latinas de l'Amérique". (Paris, 1912.)
- GAWRILOVITCH (M.) "L'Etat et le Droit." (Paris, 1911.)
- GETTLE (Raymond Garfield).-- "Introduction to political sciences".
- GIL Y ROBLES.-- "Tratado de derecho político". (Salamanca, 1902.)
- GINER DE LOS RIOS (Francisco).-- "Estudios jurídicos y políticos."
- GNEIST (Rodolfo).-- "Lo State secondo il Diritto."
- GODIN (A.) "Du respect des puissances établies." (Paris, 1854.)
- GRAND (GUY).-- "Le procès de la démocratie." (Paris, 1911.)
- GRASSERIE (R. de la).-- "Du Fédéralisme." (Paris, 1907.)
- GRASSERIE (R. de la).-- "Les principes sociologiques du droit public." (Paris, 1911.)
- GRIMKE.-- "Ciencia y derecho constitucional." Trad. del inglés por Florentino González. (Paris, 1870.)
- GUMPLOWICZ (L.).-- "Il concetto sociologico dello Stato." (Torino, 1904.)
- GUMPLOWICZ (Luis) "Derecho político filosófico". (Traducción, prólogo y notas de P. Dorado." (Madrid).
- HALL (J. Parker.) "Constitutional Law." (Chicago.)
- HATSCHEL (J.) "Allgemeines Staatsrecht." (Sammlung Geschen.) Leipzig, 1909)
- HAURIOU (M.).-- "Principes de droit public." (Paris, 1910.)

- HELLO.- "Du régime constitutionnel dans ses rapports avec l'état actuel de la Science sociale et politique." (Paris, 1848.)
- HINNEBERG (Paul).- "Die Kultur der Gegenwart Systematische Rechtswissenschaft." (Leipzig, 1849.)
- HINRICHS (H.L.W.) "Geschichte der Rechts und Staatsprincipien." (Leipzig, 1849.)
- HOTOS.- "Lecciones de derecho constitucional". (Paris, 1907.)
- HUMBOLDT (G.) "Saggio sui limiti dell'azione dello Stato."
- HYSLOP (JAMES H.) "Democracy a study of Government".- (New-York, 1889.)
- JANET (Paul).- "Historia de la ciencia politica en sus relaciones con la moral." (Madrid, 1919.)
- KEISEN (Hans).- "Hauptprobleme der Staatsrechtslehre." (Tübingen, 1911)
- ~~XX~~
- KRICKEN (A.) "Della cosiddetta teoria organica dello Stato."
- LABAND (Paul.) "Staatsrecht."
- LABAND (P.), WACH (A.), WAGNER (A.), FELLINCK (G.), LANPRECHT (K.), LISSE (F. von), SCHMIDT (G. von) y BROCKHEIMER (F.).- "HANDBUCH DER POLITIK." (Berlin, und Leipzig, 1912, 13.)
- LABOULAYE.- "Lo Stato e i suoi limiti."
- LABRA (Rafael Maria de).- "Estudios de Derecho público".- (Madrid, 1907)
- LAFFERRIERE (J.).- "Les colonies americaines et la constitution".
- LAFFOND.- "De l'Etat.- Essai de critique sociale."
- LAPIE (Paul).- "La justice par l'Etat.- Etude de morale sociale." (Paris, 1899.)
- LAVERGNE (E. de).- "Le forme di governo nelle società moderne."
- LEROY -BEAULIER.- "Lo Stato moderno e i suoi uffici."
- LETOURNEAU (Ch.).- "L'Evolution politique dans les diverses races humaines." (Paris, 1870.)
- LEURET (Henry).- "Le Gouvernement et le parlement." (Paris, 1919.)
- LIEBER (F.).- "La libertà civile e l'autogoverno."
- MACAULAY.- "Estudios políticos." (Madrid, 1907.)
- MAGGI (Francesco).- "Le basi organiche dello Stato e della democrazia." (Livorno, 1904.)

- MACPHERSON (HECTOR).-- "A century of political Development." (London, 1908.)
- MAJORANA.-- "Teoria sociologica della costituzione politica." (Torino, 1894.)
- MAUROTH (K.).-- "Geyverblicher Konstitutionalismus." (Jena, 1911.)
- MEINHOKE (F.).-- "Weltbürgertum und Nationalstaat." (Oldenburg, 1908.)
- MELLADO (F.).-- "Tratado elemental de derecho politico." (Madrid, 1891.)
- MEYER (Anton).-- "Neue Staatslehre." (Jena, 1908.)
- MEYER (Georg).-- "Begriff und Gliederung der Staatswissenschaften." (Tübingen, 1908.)
- MEYER (Georg).-- "Das parlamentarische Wahlrecht." (Berlin, 1901.)
- MICHELIS (R.).-- "La Sociologia del Partito politico nella democrazia moderna." (Torino, 1919.)
- MOHL (Robert von).-- "Die Geschichte und Literatur der Staatswissenschaften.-- In Monographien dargestellt." (Erlangen, 1885.)
- MOLINIER.-- "Cours élémentaire de Droit Constitutionnel." (Paris, 1887.)
- MONTESQUIEU.-- "De l'esprit des lois."
- MORGAN (J.V.).-- "A Study in Nationality." (London, 1911.)
- NEWMAN (G.).-- "The health of the State." (London, 1907.)
- NOELL (H.).-- "Les ministères.-- Leur organisation.-- Leur rôle." (Paris, 1911.)
- PAJMA.-- "Corso di Diritto Costituzionale." (Firenze, 1883.)
- PARODI (D.).-- "Traditionalisme et Démocratie." (Paris, 1909.)
- PETERSON (Samuel).-- "Democracy and government." (New-York, 1919.)
- PI Y MARGALL (F.).-- "Las Nacionalidades." (Madrid, 1882.)
- PIERANTONI.-- "Trattato di Diritto Costituzionale." (Naples, 1878.)
- PLATCH.-- "La République"--
- POLLARD (A. F.).-- "The Evolution of Parliament." (London, 1920.)
- POLLOCK (F.).-- "History of the science of politics." (London, 1906.)
- POSADA (Adolfo).-- "El sufragio según las teorías filosóficas y las principales legislaciones"
- POSADA (A.).-- "Tratado de derecho politico." (Madrid, 1898.)
- POUDRA (G.) e PIERRE (E.).-- "Trattato di Diritto parlamentare."
- PRINS (Adolphe).-- "De l'esprit du gouvernement démocratique." (Brussels y Leipzig, 1906.)

- RATENHOFFER (G.).-- "Wesen und Zweck der Politik." (Leipzig, 1893.)
- REED (A. S.).-- "The territorial basis of Government under the State Constitutions." (New-York, 1911.)
- RIO URRUTÍ (F.).-- "La filosofía política en Platón." (Madrid, 1911.)
- ROBERTSON.-- "The Evolution of States." (London, 1912.)
- ROMAGNOSI.-- "La Scienza delle Istituzioni." (Turin, 1847.)
- ROYO VILLANOVA.-- "Ciencia Política." (Barcelona, 1905.)
- RUCK (Erwin).-- "Die Leibnissche Staatsidee."-- "Aus den Quellen her dargestellt." (Tübingen, 1909.)
- RUSSELL (Bertrand).-- "Political Ideals." (New York, 1917.)
- SAMPER (MIGUEL).-- "Escritos político-económicos." (Bogotá 1898.)
- SANSONETTI (V.).-- "Derecho constitucional."
- SANTAMARIA DE PAREDES (VICENTE).-- "Curso de derecho político según la filosofía política moderna, la historia general de España y la legislación vigente." (Madrid, 1905.)
- SANZ ESCARTIN.-- "De la autoridad política en la sociedad contemporánea."
- SCHARP. W. MEEHNIK (William).-- "The state and the individual.-- An introduction to political science, with special reference to socialistic and individualistic theories." (Glasgow, 1896.)
- SCHAW (ALBERT).-- "Political problems of American development." (New-York, 1907.)
- SCHMOLLER (G.).-- "Zur Literaturgeschichte der Staats und Sozialwissenschaften." (Leipzig, 1888.)
- SCHOMMEESTERS (Hermann).-- "La Mission de l'Etat." (Bruxelles, 1907.)
- SEIDLER (G.).-- "Das juristische Kriterium des Staates." (Tübingen, 1905.)
- SISMONDE DE SISMONDI.-- "Etudes sur les Constitutions des peuples libres." (Bruxelles, 1843.)
- SPENCER (HERBERT).-- "Instituciones políticas."
- STANDINGER.-- "Ethik und Politik." (Berlin, 1899.)
- STIER SOMLO (F.).-- "Politik." (Leipzig, 1907.)
- STUART MILL.-- "La Libertad."

- TAPARELLI (R.P. Imis.).- "Examen critico del Gobierno representativo en la sociedad moderna".
- TOCQUEVILLE (A. de) "De la democratie en Amérique". (Paris, 1864.)
- FREITSCHKE (H. von) "Politik." (Leipzig 1899.)
- TRONCO.- "Elementi di Diritto Costituzionale."
- TUFTS (James H.) "Our Democracy.- Its Origins and Its Tasks." (New-York, 1917.)
- VACCARO (M.A.) "Las bases sociológicas del Derecho y del Estado."
- VIERKANDT (A.), WENGER (L.), HARTMANN (M.), FRANCKE (O.), RATHGEN (H.), RITTER LUSCHIN (A.), NEBENREUTH, NITZE (O.) --"Allgemeine Verfassungen und Verwaltungs geschichte." (Leipzig und Berlin, 1911.)
- WENDELL (Bariet.).- "Liberty Union and Democracy." (New -York, 1907.)
- WESTEL WOODRURYWILLONGBY.- "The American constitutional System.- An introduction to the study of the american State." (New York.)
- WOODROW WILSON.- "El Estado.- Elementos de politica histórica y práctica". Traducción española por Adolfo Posada. (Madrid. 1904.)
- WOOLSEY (T.D.).- "Political Science." (New York, 1900.)
- ZEILLER (J.) "L'idée de l' Etat dans St. Thomas d' Aquin." (Paris, 1910)

I.- Obras generales.B.- Sobre Colombia.-

(Geografía, Geología, Historia, Industria, Comercio, etc.)

-----ooooo-----

- ACOSTA.- "Compendio histórico del descubrimiento y colonización de Nueva Granada en el siglo XVI". (París, 1848).
- ACOSTA DE SAMPER (Soledad).- "Compendio de Historia patria". (1907).
"Algunas observaciones sobre la expedición del General Flores". (Panamá, 1847).
- ALSEDO.- "Diccionario Histórico de América".
- ANCIZAR (Manuel).- "Peregrinación de Alpha por las provincias de Nueva Granada en 1850-51". (Bogotá, 1853.)
- ANDRE (Eduardo).- "L'Amérique équinoxiale: Colombie, Equateur, Perou". (París, 1877-79).
- "Apelación al pueblo Colombiano y a los demás de América". (Bogotá, 1827.)
- ARIZA (Andrés de).- "Comentarios de la rica y fertilísima provincia del Darién". (1774).
- APRALIA Y HENAO.- "Historia de Colombia". (Bogotá, 1912).
- "Atlas de la República de Colombia". (París, 1899).
- BARAYA (José María).- "Biografías militares". (Bogotá, 1875).
- BARROT (A.).- "Piezas oficiales relativas a los acontecimientos de Cartagena". (Bogotá, 1833.)
- BERGT (W.).- "Beitrag zur Petrographie der Sierra Nevada de Santa Marta und der Sierra de Perijá".- (Viena, 1888).
- BOEDA (José Joaquín).- "Historia de Colombia contada a los niños".- (Zipaquirá, 1880).
- BOUSSINGAULT (M.) y ROULIN (J.).- "Viajes científicos en los Andes ecuatoriales o colección de memorias sobre física, química e historia natural de la Nueva Granada, Ecuador y Venezuela". (París, 1849.)

- "Bosquejo político y literario del Doctor José Fernández Madrid".. (Cartagena, 1830).
- BRIGHAM (Hiram).-- "The Journal of an Expedition across Venezuela and Colombia 1906-1907". (Londres, 1909).
- BRISSON (J.).-- "Viajes por Colombia". (Bogotá, 1899).
- BRISSON (J.).-- "Exploración en el Alto Chocó y Casanare". (Bogotá, 1895-96).
- BRUYCKER (Polidoro de).-- "Les mines d'or et d'argent de la Colombie". (Amberes, 1888).
- BRICEÑO (Manuel).-- "Los Comuneros, historia de la insurrección de 1781". (Bogotá, 1881).
- BUEGER (O.).-- "Reisen eines Naturforschers in tropischen Südamerika". (Leipzig, 1900).
- CAIDAS (Francisco José de).-- "Secundario de la Nueva Granada, miscelánea de ciencias, literatura, artes e industria". (Bogotá, 1807-09).
- CAMACHO (Joaquín).-- "Descripción de la provincia de Pamplona". (París, 1849).
- CAMACHO R. (Salvador).-- "Notas de Viaje". (1891).
- CAMPANO (L.) "Bolívar". (París).
- CANDELIER (H.) "Rio Mocha et les Guajires". (París, 1895.)
- CANE (MIGUEL). (Ministro de la República Argentina en Colombia.) "En viaje".
- CARULLA (J.A.) "Breve examen del cuaderno publicado en Popayán con el título de "Opinión de un Granadino sobre la división de la Deuda", etc." (Bogotá, 1856.)
- CASSANI (P. José).-- "Historia de la provincia de Santa Fé de la Compañía de Jesús y vidas de sus varones ilustres". (Madrid, 1741).
- CASTELLANOS (Juan de).-- "Historia del Nuevo Reino de Granada".
- "Catálogo del Museo del Sr. Leonadio María Arango de Meisellín". (Medellín, 1906).
- CAULIN (P. Antonio).-- "Historia Corográfica, natural y evangélica de la Nueva Andalucía, provincia de Cusaná, Guyán y vertiente del Orinoco" (Madrid, 1779.)

- CODAZZI (A.).--Geografía física y política de los Estados Unidos de Colombia.
 CONCELA (José Vicente).-- "Derecho Penal Colombiano". (París, 1910).
 CREVAUX (J.).-- "Voyage d'exploration a travers la nouvelle Grénade et le
 Venezuela".--(París, 1882).
 CUERVO (Rufino José).-- "Apuntaciones críticas sobre el lenguaje bogotano".
 CUERVO (Angel y Rufino José).-- "Vida de Rufino Cuervo y Noticias de su
 tiempo" (París, dos tomos).
 DEMANGEON (M. A.).-- "L'industrie aurifère en Colombie". (París, 1907).
 DEPSIS.-- "Voyage à la partie orientale de la terre ferme". (París, 1806).
 ESPAGNAC.-- "Voyage à la Nouvelle Grénade", publicada en la "Revue des
 Deux Mondes". (París, 1905.)
 DIKSON (M.). "Industrias en Colombia" (1902).
 "Documentos y piezas justificativas para servir a la historia de la Cons-
 piración del 25 de septiembre de 1828" (Bogotá, 1828).
 DUCOUDRAY HOLSTEIN (H.L.V.). "Memoire of Simón Bolívar president liberator
 of Colombia; comprised a secret history of the revolution on the events
 from 1807" (Londres, 1830).
~~"El Repertorio Colombiano" (Revista de ciencias y literatura argumentada
 1844-1845, Colombia de la época Bogotá, 1891-1894)~~
 ESCOBAR (J.). "Diccionario geográfico de los Estados Unidos de Colombia"
 (Bogotá, 1879.)
 ESPINOSA (Jose María).-- "Memorias de un abanderado 1810-1819" (Bogotá, 1876).
 EMMIN (G.).-- "Columbien und Guyana" (Stuttgart, 1840.)
 FLOREZ DE OCARIZ (Juan).-- "Genealogía del Nuevo Reino de Granada" (Madrid,
 1874).
 GAIBROIS (José T.).-- "Colombia Ilustrada" (revista mensual con grabados, de
 literatura, Bogotá, 1896-97.)
 GALINDO (ANIBAL).-- "Historia económica y estadística de la Hacienda nacio-
 nal". (Bogotá, 1874.)
 GARZON DE TAUSTE (Fray Alonso).-- "Arte y vocabulario de la lengua de los
 indios de la provincia de Cumaná o Nueva Andalucía" (Madrid, 1680)
 "Geognostische Bemerkungen uber die Moraküste Neu-Granadas". (Berlin, 1852)

- GERARDI (F.).-- "Intorno alla Statua di Bolivar opera del professore Pietro Tenerani" (Liona, 1845).
- GROOT (J. Manuel).-- "Dios y Patria", artículos de historia y costumbres de Colombia (Bogotá, 1897).
- GROOT (J. Manuel).-- "Historia eclesiástica y civil de Nueva Granada". (Bogotá, 1868. Segunda edición en 1887, con cinco volúmenes).
- GUMILLA (P. José).-- "El Orinoco ilustrado, historia natural, civil y geográfica de este gran río y de sus caudalosas vertientes" (Madrid, 1741).
- HALL.-- "Present State of Colombia." (Londres, 1825).
- HETTER (A.).-- "Reisen in den Columbischen Anden". (Leipzig, 1888).
- HETTER (A.).-- "Die Anden des westlichen Columbiens". (Berlin, 1888.)
- HETTER (A.) y LINK (G.).-- "Beiträge zur Geologie und Petrographie der Columbianischen Anden".-- (Berlin, 1893.)
- HETTER (A.).-- "Die Cordillere von Bogotá". (Berlin, 1892.)
- HUMBOLDT (BARON DE).-- "Viaje a Nueva España".
- HUMBOLDT (A. de).-- "Atlas geográfico de las regiones equinocciales". (París, 1814.)
- JALHAÏ (Enrique).-- "Etude sur les mines d'or et d'argent de la Colombie".-- (Bruselas, 1908.)
- JALHAÏ (Enrique).-- "La République de Colombie". (Bruselas, 1909).
- JULIAN (Antonio).-- "La Perla de América, provincia de Santamarta". Madrid, 1888.
- KARSTEN (Hermann).-- "Die geognostische Verhältnisse Neu-Granadas". (Viena, 1856).
- KARSTEN (Hermann).-- "Géologie de l'ancienne Colombie bolivarienne, Vénézuéla, Nouvelle Grenade et Ecuador, avec planches". (Berlin, 1886.)
- KNOX (W.).-- "Die vulkanischen Gesteine Colombias". (Berlin, 1892.)
- LALLAMANT.-- "Histoire de la Colombie". (Paris, 1827.)
- LARRAZABAL (F.).-- "La vida y correspondencia general del Libertador Simón Bolívar" (Nueva York, 1883).
- LAVERDE AMAYA (Isidoro).-- "Bibliografía Colombiana".

- LEWIS (A. M. D.).- "Compendio de Geografía de la República de Colombia". (Medellín, 1887.)
- LÓPEZ (Manuel Antonio).- "Recuerdos históricos 1819-1826" (Bogotá, 1878.)
- LÓPEZ GOMARA (Francisco).- "Historia de las Indias y Crónica de la Nueva España". (Madrid, 1.600).
- LUGO (B. de) Gramática de la lengua nativa del nuevo reyno llamada Mosca". (Madrid, 1619).
- "Memoire sur l'Origine japonaise, arabe et basque de la civilisation des peuples du plateau de Bogotá" (Paris, 1855.)
- MESA JARAMILLO (J.).- "Minas de Antioquia". (Medellín, 1906).
- MOLLIEN (M. G.).- "Voyage dans la République de Colombie en 1823". (Paris, 1825.)
- MOSQUERA (T. Cipriano de).- "Memorias sobre la Geografía física y política de la Nueva Granada". (Nueva York, 1852.)
- MOSQUERA (T. G. de).- "Compendio de Geografía General, política, física y especial de los Estados Unidos de Colombia". (Londres, 1866).
- MOSQUERA (T. G. de).- "Diccionario Geográfico de los Estados Unidos de Colombia". (Bogotá, 1868.)
- NIETO (Juan José).- "Geografía histórica, estadística y local de la provincia de Cartagena". (Cartagena, 1839.)
- OBANDO.- "Apuntamientos para la Historia, o sea Manifestación que el General José María Obando hace a sus contemporáneos del origen de la persecución que ha sufrido y de los consiguientes trastornos políticos de Nueva Granada". (Lima, 1842)
- "Ojeada sobre los primeros catorce meses de la Administración del siete de Marzo dedicada a los hombres imparciales y justos". (Bogotá, 1850.)
- OLIV.- "Vida de Bolívar".
- "Opinión de un granadino sobre la división de la Deuda Colombiana entre los tres Estados de Nueva Granada, Venezuela y Ecuador". (Pepayán, 1822.)
- PAREZ (José Antonio).- "Autobiografía". (Nueva York, 1867.)
- PAJAU (L.).- "Colombia en la mano". (Bogotá, 1906.)

- PEREIRA GAMBA (Fortunato).-- "Riqueza mineral de la República de Colombia". (Bogotá, 1901).
- PEREIRA (R. S.). "Les États Unis de Colombia". (Paris, 1883).
- PÉREZ (Felipe) -- "Anales de la revolución de 1861".--
- PÉREZ (Felipe).-- "Geografía física y política de los Estados Unidos de Colombia". (Bogotá, 1862.)
- PÉREZ TRIANA (G. S.).-- "De Bogotá al Atlántico". (Paris, 1897).
- PIASA (José Antonio de).-- "Memorias para la Historia de Nueva Granada desde su descubrimiento hasta 20 de Julio de 1810". (Bogotá, 1850.)
- PONCE DE LEÓN (Manuel).-- "Atlas de los Estados Unidos de Colombia con arreglo a los trabajos corográficos del general A. Cedazzi y otros documentos". (Paris, 1864.)
- POSADA GUTIÉRREZ (Joaquín).-- "Memorias (Bogotá, 1872-80).
- POTRE (L.).-- "The republic of Columbia". (Londres, 1906).
- "Powles New Granada, its international resources". (Londres, 1863.)
- QUIJANO (M/ M.).-- "Memoria sobre el beneficio de la seda trabajada a explotación del Poder ejecutivo para aprovechar la seda indígena descubierta en Nueva Granada". (Bogotá, 1834).
- QUIJANO OTERO.-- "Compendio sobre la historia de Colombia" (1882).
- RECLUS (Armando).-- "Panamá et Darien".-- (Paris, 1881).
- RECLUS (E.).-- "Voyage à la Sierra Nevada de Sainte Martha". (Paris, 1881.)
- "Recollections of a Services in Venezuela and Colombia".-- (Londres, 1825)
- REIS (W.) y STUBEL (A.).-- "Alturas tomadas en la República de Colombia en los años 1868 y 1869". (Quito, 1872).
- REIS (W.) y STUBEL (A.).-- "A. Geologische Studien in der Republik Colombia".
- "Repertorio Colombiano ("El) (revista de ciencias y literatura, órgano de la Academia Colombiana de la Lengua, (Bogotá, 1881-96).
- RESTREPO.-- "Historia de Colombia".
- RESTREPO (Ernesto).-- "Ensayo etnográfico y arqueológico de la Provincia de los Quimbayas". (Bogotá, 1892).
- RESTREPO (J.M.).-- "Historia de la Revolución de la República de Colombia". (Bogotá, 1858.)

- RESTREPO (Vicente).-- "Apuntaciones sobre los filones auríferos de Tolima", en la "Revista literaria de Bogotá".
- RESTREPO (Vicente).-- "Crítica de los trabajos arqueológicos del Dr. Duquenne". (Bogotá, 1892)
- RESTREPO (Vicente).-- "Las minas de oro y plata de Colombia". (Bogotá, 1879.)
- RIVAS (Medardo).-- "Obras". (Bogotá, 1885, 2 tomos.)
- RIVAS (Medardo).-- "Viajes por Colombia, Francia y Alemania".-- (Bogotá, 1887.)
- RIVAS GROOT (José María).-- "Páginas de la Historia de Colombia (Bogotá, 1907.)
- ROSA (Nicolás de la Rosa).-- "Floresta de la Santa Iglesia catedral de la ciudad de Santa Marta". (Valencia, 1835.)
- RÖHLISBERGER.-- "El Derado: Reise und Kulturbilder aus dem Südamerikanischen Columbien". (Bern, 1897.)
- SAFFRAY (CH.).-- "Voyage à la Nouvelle Grenade" (1869.)
- SAMPER (José María).-- "Ensayo sobre las revoluciones políticas y la condición de las Repúblicas colombianas". (París, 1861).
- SAMPER (J.M.) "Galería nacional de hombres ilustres o notables". (Bogotá, 1879.)
- SANTANDER.-- "Apuntamientos para las Memorias de Colombia y Nueva Granada, y aclaraciones a la obra anterior". (Bogotá, 1837.)
- SCARPETTA (Leonidas) y VERCARA (Saturnino).-- "Diccionario biográfico de los campeones de la libertad de Nueva Granada, Venezuela, Ecuador y Perú" (Bogotá, 1879.)
- SCHUGGS.-- "The Colombian and Venezuelan Republics" (Boston, 1905.)
- SCHUNCK (F. de).-- "Reisen in Kolumbien". (Berlin, 1880-85).
- SIEVERS (W.).-- "Die Arhuaco-Indianer in der Sierra Nevada de Santa Marta". (Berlin, 1888).
- SIEVERS (W.) "Reise in der Sierra Nevada de Santa Marta". (Leipzig, 1888)
- SIEVERS (W.) "Die Sierra Nevada de Santa Marta und die Sierra de Perijá". (Berlin, 1888).

- SIMON (FRAY PEDRO).-- "Historia general del Nuevo Reino de Granada". (Madrid, 1666.)
- SIMONS (F.).-- "Notes on the topography of the Sierra Nevada de Santa Marta". (Londres, 1879).
- SIMONS (F.).-- "On the Sierra Nevada of Santa Marta and its Watershed". (Londres, 1881).
- STEWART (J.). "Bogotá in 1836-37 Being a narrative of an expedition to the capital of New Grenada and a residence there of 11 months". (Nueva York, 1838.)
- TERMAUS-COMPANS.-- "Essai sur l'ancien Cundinamarca" (Paris, 1842.)
- URIBE (Angel M.).-- "Geografía general y compendio histórico del Estado de Antioquia". (Paris, 1885.)
- URRUTIA (F.J.).-- "Colombia y el arbitraje en América". (1907.)
- VALDES (Ramón A.).-- "Geografía del istmo de Panamá". (Bogotá, 1898.)
- VERGARA Y VELASCO (Francisco Javier).-- "Nueva Geografía de Colombia".-- I-II (Bogotá, 1901-02.)
- VERGARA Y VELASCO (Francisco Javier).-- "Atlas completo de Geografía de Colombia". (Bogotá, 1905-1911, con 100 mapas).
- VERGARA Y VELASCO (Francisco Javier).-- "Novísimo texto de historia de Colombia". (Bogotá, 1910).
- VILLANUEVA.-- "Vida de Bolívar".
- WHEELER. "The Agricultural Condition of Colombia". (Londres, 1897.)
- WHITHE (M.).-- "Relación sobre los ríos San Juan Sipi y Tamaná". (Julio de 1883.)
- ZANGRA (Fray Alonso).-- "Historia de la Provincia de San Antonio del Nuevo Reino de Granada". (Barcelona, 1701.)
- ZANGRA (M.).-- "Guía de la República de Colombia". (Bogotá, 1907.)
- ZARDA (L.).-- "El Dorado". Estudio histórico, etnográfico y arqueológico de los Chibchas habitantes de la antigua Cundinamarca y de otras tribus", con 27 grabados (Bogotá, 1883).

II.- Obras especiales.Sobre Derecho constitucional de Colombia.

(Incluyendo colecciones en que se citan, comentan o reproducen, entre otras, las Constituciones colombianas, así como también obras que versan sobre cuestiones de límites y demás de carácter internacional que afectan a aquella República.)

-----00000-----

- AROSEMENA.- "Colección de Constituciones americanas".
 BALBO.- "Constitutions republicaines du globe". (París, 1848.)
 BRICEÑO.- "Límites del Brasil con Venezuela, Nueva Granada, Ecuador y Perú". (Caracas, 1884).
 GADENA (Pedro Ignacio).- "Anales diplomáticos de Colombia". (Bogotá, 1878).
 GONZALEZ Y ORTIZ (Rafael) y Abad y Aparicio (Hilario).- "Constituciones vigentes de los principales Estados de Europa y América". (Madrid, 1863).
 DUFFAU, Duvergier y Guadet.- ^{Darcel (H.) - "Les Constitutions modernes" - (Paris, 1891.)} "Collection des Constitutions, Chartes et lois fondamentales des peuples de l'Europe et des deux Amériques". (París, 1830).
 GONGORA.- "Colección de Constituciones españolas y extranjeras".
 GUERRA (José Joaquín).- "Constituciones de Colombia". (Bogotá, 1912.)
 HEREDIA.- "Recopilación de las Constituciones vigentes en Europa y América". (Madrid, 1893.)
 LAFERRIERE et Bathie.- "Les Constitutions d'Europe et d'Amérique" (París, 1869).
 MADRID (Pedro F.).- "Informe del Senado de Nueva Granada sobre el tratado de límites entre dicha República y el Brasil" (Bogotá, 1855.)

- MONCAYO (Pedro).-- "Colombia y el Brasil. (Valparaíso, 1862).
- MONCAYO (P.).-- "Colombia y el Perú. (Valparaíso, 1862.)
- OVALLE.-- "Código de Constituciones vigentes de todas las naciones civilizadas." (Sevilla, 1897-98.)
- POMBO (Manuel Antonio) y GUERRA (José Joaquín).-- "Constituciones de Colombia".-- Segunda edición.-- Bogotá, 1911.
- POSADA (A.).-- "Instituciones políticas de los pueblos hispano-americanos".
- QUIJANO OTERO (José M.).-- "Memoria histórica sobre límites entre la República de Colombia y el Imperio del Brasil". (Bogotá, 1869.)
- RIVAS GROOT (J.M.).-- "Asuntos constitucionales". (Bogotá, 1907.)
- RODRIGUEZ PINERES (Eduardo).-- "Constituciones y leyes usuales de Colombia." (Bogotá, 1917.) Segunda edición.
- ROMERO (M.).-- "Legislación política europea y americana".
- ROMERO GIRON (Vicente) y GARCIA MORENO (Alejo).-- "Compendio de las instituciones políticas y jurídicas de los pueblos modernos". Tomo I. Repúblicas americanas.
- ~~ROMERO GIRON (Vicente).~~
- SAMPER (José María).-- "Ensayo sobre las revoluciones políticas y la condición social de las Repúblicas colombianas." (Paris 1861.)
- SAMPER (J.M.).-- "Derecho Público en Colombia". (Bogotá, 1889.)
- SCHUMACHER.-- "Geschichte der Verfassung der Vereinigten Staaten von Kolumbien". (Sybels "Historische Zeitschrift", 1873, Heft 2).
- VEGA (José de la).-- "La Federación en Colombia". ~~1889~~
- ZAGERS (L.) "Documentos encontrados: Guijos y Canelos: límites entre el Perú y Colombia". (Lima, 1860.)